

# **A mitad de camino**

***Felipe Ortiz de Zevallos***

## ÍNDICE

El pensamiento liberal.....	5
El intervencionismo estatal.....	7
Ética empresarial.....	9
La economía social del mercado.....	12
El riesgo de la recaída.....	14
Paul Samuelson en Lima.....	16
Talento y nobleza.....	18
La industria que se requiere.....	20
Orden o desorden.....	23
Rol civil de la Iglesia.....	24
La prudencia política.....	26
Poder, autoridad y fuerza.....	29
Los economistas y su mundo.....	30
El desafío energético.....	33
Ideas e ideologías.....	36
Los deseos privados y las necesidades públicas.....	38
Tres desafíos.....	45
Por qué me voy.....	47
El rol empresarial del Estado.....	49
El ordenamiento externo no basta.....	58
Las empresas estatales.....	60
Carta abierta al nuevo al nuevo presidente.....	62
Compás de Espera.....	65
El futuro gobierno aprista.....	68
La historia y la quincena.....	70
Entre el túnel y el laberinto.....	72
Los empresarios y el presidente.....	74
Un diagnóstico de la crisis.....	76
Qué es un empresario.....	81
Reflexiones a mitad de régimen.....	83
Un huachito.....	85

En defensa del sistema democrático .....	87
La libertad ¿para qué?.....	90
Crisis y futuro .....	95
La cultura de APOYO .....	97
La resaca que se viene.....	99
Como no cortarle la cola al perro.....	101
Lo que se juega el gobierno .....	103
Ajuste o hiperinflación .....	105
Otro 28 incierto .....	107
Tiempo suplementario .....	109
Pirómanos y bomberos .....	111
Un decálogo para el futuro .....	113
El comienzo del final .....	115
Asesoría empresarial.....	117
Sobre bicicletas y revoluciones .....	119
Los errores del socialismo .....	121
La privatización.....	123
Un programa para el próximo gobierno .....	126
Volando lento y bajo .....	128
La anti-lección de economía .....	130
La esencia del pensamiento liberal .....	132
Después del 1'000,000% de inflación .....	137
El desafío de la nueva década .....	139
Un programa que no debe fracasar .....	141
El peligro de bajar la guardia.....	143
La empresa moderna y sus retos .....	145
Atonía de una economía en trance.....	147
A mitad de camino .....	149
La privatización por hacer .....	154
La nueva gerencia.....	156
La agenda de 1992 .....	158
Población, economía y ecología.....	160
Sobre el 5 de abril .....	162

En busca del derecho perdido.....	164
Diferencias culturales.....	166
La afirmación democrática en este siglo.....	168

## El pensamiento liberal

---

En el Perú presente, el pensamiento liberal que iluminó la fundación de la República parece haber perdido vigencia histórica. No hay partido que se autotitule liberal. Y si bien la libertad política, la democracia representativa y la economía de mercado son proclamadas por más de un grupo, no hay quien defienda el porqué de su necesaria indivisibilidad.

El pensamiento liberal tiene como base la exigencia de una plena libertad individual. Este planteamiento se origina en la esperanza y el convencimiento de que esa libertad, por sí sola, es capaz de producir un orden social más justo que el que se trate de imponer coactivamente desde el poder político, económico o religioso. Debido a esta premisa, el liberalismo suele ser acusado de incoherente por quienes creen que el orden social exige la autoridad de un tercero que diga lo que se puede y no pensar, decir y hacer. El pensamiento liberal no reconoce defensores ni salvadores mesiánicos de la sociedad. Cree, más bien, que es la propia sociedad la que puede y debe crear sus mecanismos de defensa en base a la libertad. Una libertad que ciertamente está condicionada por muchas circunstancias históricas: por una estructura social en muchos casos injusta, por unos mecanismos jurídicos a veces ineficientes y lentos. Una libertad que es hoy, en países como el Perú, clasista y burguesa, pero que puede y debe ir ampliando el efecto benéfico de su ejercicio. Una libertad parcial, pero que es, a la vez, un punto de partida para ampliar su espacio. Una libertad que, en otros países más avanzados del orbe, ha sido el motor más poderoso de su desarrollo.

¿Cuáles deben ser los objetivos de un verdadero liberal? En primer lugar, defender la libertad en todas sus manifestaciones, a todo nivel y en todo tipo de circunstancias. En segundo lugar, luchar incansablemente contra la prepotencia estatal. Por último, defender la iniciativa individual y la propiedad privada.

¿Qué se debe entender por prepotencia estatal? ¿Cuál debe ser el rol del estado en la economía? El pensamiento liberal moderno reconoce la conveniencia de la intervención del estado en aspectos como, por ejemplo, la promoción de una política educativa, científica y tecnológica; el establecimiento de reglas de equilibrio entre el capital y el trabajo; la legislación para impedir prácticas nocivas para el consumidor; y cierta planificación indicativa respecto de objetivos nacionales que elija el consenso político.

Así planteado, el pensamiento liberal puede tener mayor relevancia y vigencia que las que usualmente se cree. Serían liberales aquéllos que habiendo accedido -o pudiendo acceder con su esfuerzo y trabajo- a la propiedad urbana, rural o de cualquier medio de producción, desean depender de su propio esfuerzo e iniciativa, evitando que el estado se convierta en un padre poderoso que distribuye sus favores y privilegios en razón de decisiones burocráticas. Serían liberales aquéllos que aspiran a progresar en un medio competitivo, donde se respete la propiedad privada y donde las reglas de juego sean conocidas y respetadas por todos.

El pensamiento liberal plantea no sólo la conveniencia sino la indivisibilidad de las libertades políticas y económicas como condición para el progreso. Si peligrosas son las oligarquías plutocráticas, cuya existencia es casi siempre la consecuencia de patrocinios benevolentes del estado, mucho más alarmante es una situación en la que el estado concentre todos los poderes políticos y económicos.

Por cierto, que, por el hecho de declararse liberal, una sociedad no va a dejar de ser injusta. No porque proclame la existencia de libertades políticas y económicas, una sociedad va a evitar el incumplimiento repetido del principio de la igualdad de oportunidades; ni va a dejar de lesionar, muchas veces al amparo de la ley, los intereses de los más débiles. La bandera de la libertad política y económica, que en el fondo es una sola, no garantiza la igualdad social ni elimina la pobreza. Con la dialéctica de la libertad se han cometido, y se pueden cometer, infinidad de atropellos. Al defender estos principios, el verdadero liberal no niega la evidencia de los abusos, desigualdades e injusticias, pero si afirma su convicción de que es la libertad la mejor manera, o la menos mala, de lograr la reducción y eliminación gradual de los privilegios de grupo y de promover la integración social para alcanzar el progreso.

## El intervencionismo estatal

---

Los indicadores que usualmente utilizan los economistas para medir el proceso de estatización de una economía -como son el porcentaje de la producción o de la fuerza laboral que corresponden al sector público, o la parte del ingreso nacional que se recauda en impuestos- no registran algunas otras formas de intervencionismo estatal. Si bien éstas no son fácilmente cuantificables, sus efectos pueden ser significativos y perjudiciales. Así, por ejemplo, los persistentes y abultados déficits en el sector público impiden el desarrollo de un mercado de capitales; las numerosas y cambiantes regulaciones gubernamentales obligan muchas veces a las empresas a escoger sistemas de producción ineficientes; los cambios continuos en las reglas de juego y en las interpretaciones de disposiciones arbitrarias recortan la libertad y afectan la eficiencia, aumentando los costos y distraendo recursos humanos escasos y valiosos de actividades productivas. En vez de producir, estas personas se dedican a la negociación y discusión con los representantes de oficinas del gobierno sobre interpretaciones reglamentarias o su aplicabilidad específica.

El crecimiento del estado genera un rebalse de regulaciones detalladas y arbitrarias, disminuye la productividad laboral y aumenta la incertidumbre sobre el futuro. Ello ocasiona que las inversiones a largo plazo se posterguen o suspendan y que el crecimiento de la economía se atenúe. Una sociedad como la peruana, donde resulta más importante saber negociar que ser eficiente produciendo, se encuentra enferma de intervención estatal.

No es válido, por tanto, suponer que es indiferente que las actividades estén en manos del sector privado o del sector público. La mayor participación controlista del estado en la economía puede reducir significativamente el potencial de crecimiento económico en una sociedad. Ejemplos representativos de este fenómeno son los casos recientes de Uruguay y el Reino Unido. En éstos, como en la mayoría de los países, los presupuestos muestran una estructura inapropiada: exceso de consumo, poca inversión en proyectos productivos, préstamos o subsidios a empresas que no generan utilidades o que se encuentran al borde de la quiebra. En todos estos casos, el ahorro se destina a gastos o proyectos que no logran una rentabilidad suficiente para cubrir el costo de los recursos que el gobierno utiliza para financiar esos déficits.

El proceso de absorción de la fuerza laboral del sector privado por el estado puede afectar severamente el potencial del crecimiento de la economía. El estudio de reglas complejas y la aplicación de controles arbitrarios absorben muchas veces un tiempo exagerado de la burocracia y aumentan innecesariamente la demanda en el sector privado por abogados, contadores, tramitadores y conserjes. Ese personal se torna luego indispensable para entender todo el conjunto de reglas, nadar en la vorágine burocrática, llenar los formularios y aspirar perversamente a interpretaciones más favorables que las que logren empresas con las que supuestamente se compete.

En este proceso se genera algo de empleo, es cierto, pero la mayor parte de la producción generada por esta mayor fuerza laboral tiene muy poco valor para la sociedad. En vez de más alimentos, energía, vestimenta o vivienda, se construye y llena de edificios y oficinas con archivadores repletos de papeles. Todo ello sustrae más de lo que agrega a la riqueza y al bienestar de la sociedad.

Al estado, en una sociedad ideal, le debería corresponder orientar, legislar y vigilar. Para ellos la administración pública tiene que ser esencialmente proba -y, actualmente, la peruana no lo es. La iniciativa privada debería, en cambio, imaginar y crear, innovar y arriesgar, producir y competir. Para esto se requiere ambición, entusiasmo y libertad -y, actualmente, en el Perú, ello falta.



## Ética empresarial

---

Algunos idealistas de extrema izquierda consideran que la raíz principal de todos los males de la sociedad capitalista es el afán de lucro. En el otro extremo, hay materialistas chatos que consideran al mismo como el principal motor del progreso. No reconocen ambos que, como el apetito sexual, el afán de lucro no puede *per se* ensalzarse y condenarse. Como el deseo, el amor propio y el miedo, es un factor permanente de la condición humana; un componente de lo que la teología cristiana conoce como el pecado original. Las almas más perfectas, los ángeles, por ejemplo, no tienen afán de lucro ni apetitos sexuales. Es lógico suponer que, en la otra vida, las actividades económicas y sexuales se desarrollen de manera distinta a las de ésta. Lo mismo se puede decir de la política, otra función vital de la humanidad no redimida. Sería de lamentar que estas formas superiores de actuar resulten más aburridas que las de este mundo.

Tal como está constituida la humanidad, las intenciones y acciones virtuosas no generan, necesariamente, la felicidad y el progreso. El apetito sexual es una precondición de la familia, y en ella los hombres y mujeres gozan de cierta felicidad temporal. El pecado de orgullo y la ambición del poder contribuyen a generar los estados, y estos permiten la vida del hombre en sociedad superando el aislamiento primitivo. El afán de lucro y el sentido de la propiedad condicionan el establecimiento de un orden económico, y éste permite que cada vez más hombres y mujeres puedan utilizar mejor los dones de la Creación.

Debido a la concepción de un supuesto orden en el cual todos los individuos abandonarían su egoísmo para preocuparse solamente por el bien social, el socialismo utópico ha sido, hasta la fecha, imposible de lograr. Es un ideal atractivo, por cierto, especialmente para jóvenes con poca experiencia en el mundo real. Pero, ese nuevo orden no ha existido nunca ni podrá existir, a menos que se dé una transformación radical de la condición humana, lo que suele inducir a propuestas mesiánicas. De ahí la trágica paradoja de muchos regímenes socialistas, mesiánicos en sus pretensiones, que terminan siendo trágicamente crueles en la realidad.

Adam Smith, el primer y todavía mejor apologista del sistema capitalista, no consideraba el afán de lucro ni la libre empresa como cosas buenas *per se*. Las virtudes que él elogió fueron las mismas de la tradición judeo-cristiana: la bondad, la integridad, la simpatía, la compasión, la generosidad, el interés por los demás. Su gran contribución consistió en establecer que la suma de acciones económicas, individuales y egoístas, podía mutarse en una institución -la economía de mercado- que era moral en cuanto que permitía a todos mejorar su bienestar, incluso cuando cada uno fuera buscando sólo su propio interés personal. La economía de mercado, al promover el crecimiento económico y el uso más eficaz de los recursos, ha impulsado así una notable evolución de la sociedad. Además, lo ha hecho de manera tal que estimula el espíritu de autoconfianza y la responsabilidad del individuo, formando personas capaces de autogobernarse y de constituirse, potencialmente, en ciudadanos de una sociedad libre.

Adam Smith le otorgó *status* moral a una economía de mercado, pero nunca tuvo la menor simpatía por una sociedad de consumo. Es decir, por aquella en la cual el afán de figuración fuera considerado como un valor en sí.

No pocos empresarios consideran, equivocadamente, que la conducta en los negocios es una actividad que sólo debe ser juzgada con criterios de beneficio-costos y que las tradiciones de la religión o la moral pertenecen a un mundo aparte. Muy por el contrario, no solo debe existir, sino que de hecho existe una ética empresarial, porque los negocios obligan a una confrontación frecuente con dilemas morales.

En el Perú hasta ahora, los empresarios han hecho poco por desarrollar y divulgar esta ética. Prefieren, muchas veces, sacudirse de este tipo de problemas, disponiendo el traslado de los mismos a sus abogados, quienes no son los más indicados para resolverlos porque, por desviación profesional, tienden a identificar lo ético con lo legal. Como consecuencia, no existe una tradición de ética empresarial y ésta es una de las principales razones por las cuales los políticos y los burócratas sienten continuamente la tentación de reglamentar mucho de lo concerniente al mundo de los negocios.

La ética -hasta los mafiosos eficaces son conscientes de esta gran verdad- debe definirse en función de las tradiciones morales, e inclusive religiosas de una sociedad.

Los empresarios que creen estar autorizados para hacer todo lo que la ley explícitamente no prohíbe resultan la escoria de su clase y actúan como enemigos de la economía social de mercado, ya que permiten que los defensores del controlismo tengan una justificación para pretender reglamentar al detalle todo lo que se puede y no hacer.

Los negocios no son una actividad descubierta recientemente. Como el sexo y la política son, desde hace siglos, un aspecto fundamental de la actividad humana. A través del tiempo, los hombres han desarrollado tradiciones éticas en todas las sociedades del mundo. El valor e importancia de estas tradiciones, hoy tan descuidadas y manoseadas, reside en su sutileza y complejidad.

La ética determina reglas generales de conducta moral, pero lo hace en el contexto de circunstancias siempre cambiantes. No puede, por tanto, dar respuestas simples, porque la praxis moral -a diferencia de la ética teórica- plantea siempre preguntas complejas. Todos podemos estar de acuerdo en que los empresarios deben ser íntegros y cumplidores de su palabra. En la vida real, sin embargo, y en países con una administración pública corrupta, como es el caso del Perú, se presentan a veces problemas morales complejos que no son fáciles de solucionar.

Ello no autoriza, sin embargo, la excusa fácil de arrojar la ética por la borda en el esfuerzo por ganar dinero o acumular poder. Esta actitud induce a que el estado pretenda burocratizar la ética mediante reglamentos detallistas. Estos pretenden, infructuosamente, que se haga el bien y se evite el mal. Pero, por el contrario, terminan por estrangular la libertad de acción que necesita el aparato productivo para producir mejores bienes y servicios.

Se debe reconocer, por lo mismo, que exceso de poder va a darse siempre que surja un vacío moral. No debe nunca olvidarse que si bien las empresas son personas jurídicas de duración indefinida, que valen para sus activos, por el volumen de sus ventas y por la calidad de sus

productos; los empresarios son seres de carne y hueso, y como tales, valen por lo que son, no por lo que tienen.

La libertad que no sin razón exigen para promover un mayor bienestar para su sociedad debe llevar consigo la responsabilidad moral de actuar con una conciencia ética.

## La economía social del mercado

---

La nueva Constitución define el sistema de ordenamiento económico de la sociedad como el de una *economía social de mercado*.

Ello significa que el libre juego de la oferta y la demanda debe ser el instrumento principal de asignación de recursos, que la propiedad e iniciativa individuales han de ser respetadas y promovidas, que el estado debe intervenir cuando el accionar individual o su omisión contradigan los objetivos sociales y que, por último, éstos deben quedar determinados como consecuencia de un proceso político democrático y participatorio.

Por lo tanto, en el Perú deberían aplicarse, tan rigurosamente como fuese posible, los mecanismos del mercado como principal instrumento ordenador de la economía. El mercado, sin embargo, no constituye la panacea universal. A través del mismo no se puede aspirar a resolver todos los problemas humanos, ni siquiera todos los problemas económicos. Sus alcances no van más allá de constituir un método conocido y adecuado para el ordenamiento económico, lo cual, sin embargo, reviste fundamental importancia, ya que contribuye a resolver el problema de la asignación de los recursos, uno de los más complejos de la sociedad moderna. La aplicación de los mecanismos del mercado no excluye que, cuando tales mecanismos no puedan establecerse, o resulten impracticables, se utilicen otros métodos de acción más directa. Solo que dichos métodos deben tener el carácter de subsidiarios, no debiéndose emplear cuando el mercado pueda efectivamente funcionar.

El mercado constituye una entidad invisible, impersonal, no sujeta a las presiones políticas ni a las debilidades humanas y es, como el sistema nervioso del ser humano, un instrumento capaz de coordinar, en muchos casos de manera efectiva, las casi infinitas variables que se presentan incluso en las más simples opciones que cotidianamente enfrentan los individuos de una sociedad.

No hay computadora que pueda reemplazar al mercado. Y si éste no existiera, los actos individuales de los seres humanos tendrían que coordinarse de alguna otra manera. La alternativa que existe al mercado es la de poner en manos de una autoridad suprema la planificación centralizada y compulsiva de dichos actos. Esto, aparte de lo ineficiente que resulta, conduce a restringir las libertades del individuo.

A diferencia de las fórmulas liberales absolutas, la *economía social de mercado* acepta la intervención del estado para identificar objetivos generales, para fijar el marco normativo y las reglas de juego de la actividad económica, para asegurar la libre competencia y, finalmente, para resolver los casos críticos que escapan a las reacciones espontáneas del sistema. El estado no tiene que ser espectador impávido frente a algunos problemas. Puede en muchos casos intervenir de manera efectiva y rápida. Pero esa intervención estatal no debe estar dirigida en contra de las leyes

del mercado. No se trata, por ello, del *quántum* de intervención aceptable o recomendable, sino de la naturaleza de dicha intervención.

De las fórmulas y tendencias conservadoras, la *economía social de mercado* se diferencia en dos aspectos fundamentales. El conservadurismo tiende a mantener el *status* existente, consolidando privilegios que favorecen la consolidación de monopolios, en algunos casos privados. Asimismo, el conservadurismo tiene un sentido de clase que es contrario a la movilización social. La *economía social de mercado*, en cambio, como sistema liberal, no admite esa estratificación y, además, como instrumento social, se preocupa precisamente por los individuos que componen las capas menos favorecidas de la sociedad facilitando el acceso de los mismos a mejores oportunidades.

## El riesgo de la recaída

---

Por qué los precios suben ha sido materia de interminables discusiones académicas entre economistas. En un extremo, los monetaristas puros -que parten aceptando sin mucha discusión el *statu quo*- consideran que los precios suben, fundamentalmente, porque la emisión de dinero crece más rápido que el aumento de la producción y el consumo. Consideran, asimismo, que la inflación es un fenómeno nefasto y la emisión de dinero un procedimiento injustificable para intentar cualquier mejoría en la asignación de recursos.

Los estructuralistas, en cambio no le dan tanta importancia al factor monetario y consideran que existen otras causas, tanto o más importantes, que explican el alza en los precios: la presencia de oligopolios, la insuficiencia del aparato productivo, la inoperancia del mercado de capitales, las presiones salariales, los patrones de consumo, la dependencia externa, las expectativas psicológicas, los intermediarios, la devaluación, los costos financieros. Creen también que estos defectos pueden ser corregidos con una intervención estatal adecuada y que el gasto fiscal en que se incurra como consecuencia de la misma puede beneficiar más de lo que perjudica al aumentar el circulante.

La mayoría de los políticos, por cierto, prefiere oír las teorías de los estructuralistas, ya que la inflación es la manera más solapada de aumentar automáticamente los impuestos y ampliar, con ello, su margen de acción para "cambiar las caducas estructuras".

Ello a su vez, les permite soslayar la tarea -política por excelencia- de escoger, cotidianamente, para poder arbitrar y conciliar las pugnas entre los distintos sectores que conforman una sociedad. Cada grupo de poder -empresarios, profesionales, sindicatos, consumidores- pretende que la inflación -vía menores impuestos, o más obras públicas, o mayores sueldos, o crecientes subsidios- lo favorezca a costa de los restantes. Así puede llegarse a la perversión de un gobierno populista, uno que promete todo a todos y que no sabe dar, a cada quien, lo que en justicia le corresponde, alimentando una inflación galopante.

Hay coincidencias en que, si se desea detener drásticamente una inflación desatada, el problema no es técnico es político. Como quedó demostrado recientemente en Chile, parar la maquineta reduce el alza de los precios, pero a la vez obliga al gobierno a cortar indiscriminadamente el gasto público y a crear impuestos para aumentar los ingresos fiscales. Ambas medidas resultan impopulares.

Asimismo, un esfuerzo tal conlleva, inevitablemente, el efecto traumático de la recesión transitoria, mientras el sistema económico se reacomoda a la nueva situación, con la caída consecuente -temporal pero inmediata- en los niveles reales de la producción y el empleo. No es fácil ganar un concurso de popularidad en el esfuerzo por detener la inflación.

Por ello, cuando el alza de precios empieza a evidenciarse, surge la tentación del gobernante de disfrazarla. Para ello, siempre es posible contar con recursos y cómplices: se trastocan las cifras

estadísticas, se establecen controles en los precios, se aumentan los subsidios, se fijan intereses y tasas de cambio a niveles artificialmente bajos, se recurre a importaciones para satisfacer una demanda de bienes que supera, cada vez más a la producción nacional.

Todas estas medidas atenúan y postergan, multiplicándolo, el proceso inflacionario. Se empieza a dopar la economía y ella termina drogadicta. Cuando se acaban los recursos, porque se agotan las reservas internacionales y se copa el endeudamiento externo posible, se tiene que despertar a una dolorosa realidad: hay que reconocer el alza de los precios, ajustar los salarios por debajo de los mismos, eliminar los subsidios, devaluar, elevar las tasas de interés. En pocas palabras, hay que pagar la cuenta.

En esos momentos, cuando se pretende curar a la economía de la drogadicción, surgen voces que reclaman por los trágicos efectos que resultan del choque abrupto con la realidad: la malnutrición de los niños, el desempleo de los jóvenes, el desamparo de los mayores. Pero son muy pocos los que protestan cuando, como hoy, se empieza a dopar la economía para evitar el reconocimiento de los problemas. El efímero beneficio que se consigue resulta mínimo comparado con la pérdida irrecuperable de bienestar resultante de que el gobierno, para ganar favor político, aplique artificios que reprimen la inflación inmediata a cambio de un desequilibrio mayor en el futuro.

Así, cuando se fijan temporalmente tasas de interés bajas, no solo se merma el ahorro nacional, sino que se beneficia a los proyectos intensivos en capital por sobre aquellos generadores de mano de obra. También se impulsa a que los ahorristas se vuelvan inversionistas a la fuerza, para evitar perder el valor real de sus ahorros, con lo que la economía nacional pierde los beneficios de optimizar un sistema financiero eficaz. Los ahorristas medianos, al no poder obtener una renta atractiva en el sistema bancario, prefieren opciones menos óptimas -como adquirir bienes raíces, por ejemplo- con lo cual los bancos se quedan sin poder prestar fondos a los empresarios que sí tienen imaginación y habilidad para darles un uso mejor. Todo ello afecta la capacidad de la economía para crecer, producir y generar empleo; por lo cual el costo social de reprimir la inflación -en el mercado de capitales, como en cualquier otro- resulta significativo, aunque a veces se oculte.

Después de la dura experiencia vivida durante la última década en este sentido, con un régimen de salida que quiere comprar apoyo popular con los recursos fiscales que hoy le sobran, con un nuevo gobierno que puede sentir la necesidad de gastar aún más para prestigiar el sistema democrático, ¿podrá el Perú, en la década de los ochenta, aprender la difícil lección de la templanza?

## Paul Samuelson en Lima

---

Por feliz iniciativa del Banco Continental, nos visita esta semana Paul Samuelson, principal pionero en la tarea de estructurar la economía burguesa como una disciplina social coherente y ordenada.

Los aportes a la teoría económica durante las últimas décadas -y el de Samuelson en particular- han sido fundamentales para lograr una mayor eficacia y racionalidad en el sistema de asignación de recursos y permite -a pesar de todos los graves problemas pendientes y los que se pronostican para el futuro a nivel planetario- alimentar la esperanza de que las sociedades libres puedan sobrevivir y resolver los grandes desafíos de esta nueva era.

De estudiante, Samuelson fue un joven prodigio *eméritus*. Desde entonces no hay campo de la ciencia económica en el cual no haya contribuido con teorías y aportes valiosos de investigación. Su libro de texto ha sido un auténtico *best seller*. Con más de diez ediciones y cinco millones de ejemplares, le ha permitido acumular fortuna. Premio Nobel de Economía, columnista en periódicos y revistas, fue asesor de los presidentes Kennedy y Johnson.

Su talento y capacidad de trabajo le han dado fama y respetabilidad a quien, en sus años mozos, fue considerado un peligroso radical. Paradójicamente, hoy representa, como nadie, el establishment en la ciencia económica contemporánea.

Samuelson estudió en la Universidad de Chicago, que ya desde entonces era un reducto de economistas liberales, y fue compañero de Stigler y Friedman. En 1935, ganó una beca con la cual se trasladó a Harvard, donde fue alumno de Leontief y compañero de Galbraith, Musgrave, Metzler y Tobin. "Harvard nos hizo, -comento un día, para agregar no sin un dejo de arrogancia- pero también nosotros hicimos Harvard".

Desde entonces, Samuelson demostró una habilidad conciliadora para integrar esquemáticamente el individualismo con la acción social. Adquirió fama mundial con un artículo en el cual transformó un análisis estático de Keynes sobre la recesión en una descripción dinámica de los factores que causaban las crisis periódicas del capitalismo.

En 1940, el Massachusetts Institute of Technology (MIT) lo contrató como profesor y allí se ha quedado desde entonces, a pesar de que Chicago y Harvard lo han tratado de recapturar varias veces. Su constante esfuerzo y preocupación por las matemáticas aplicadas han contribuido para darle al MIT una de las mejores facultades de economía en el mundo. Fue allí donde, al final de la Segunda Guerra, publicó su celebrado libro de texto, que adquirió resonancia mundial por ser la primera vez que, en forma didáctica, se desarrollaban los principios planteados en forma tan brillante pero desordenada por Keynes. A muchos les sonó a herejía entonces la afirmación de que el desempleo podría ser aliviado ampliando el rol estatal o reduciendo los impuestos; y que, por el contrario, la inflación podía reducirse aumentando la presión tributaria o disminuyendo el gasto público.



Nunca le ha gustado a Samuelson que lo clasifiquen en una posición ideológica. En esencia, su filosofía económica, política y social ha sido conciliadora, optimista, pragmática. Considera la vida como un proceso continuo de resolución de conflictos. Investigador escrupuloso de la economía mixta, considera que el libre accionar individual sólo posibilita el bienestar social en condiciones de competencia perfecta que son difíciles de alcanzar. Cree, por ello, tanto en el mercado como en la planificación, en las libertades individuales como en las responsabilidades sociales, en el interés personal como en el bienestar comunal.

El éxito económico consiste para él en lograr -por compromiso cuando esto es posible- un máximo de bienestar y un mínimo de miseria, preservando al máximo la libertad individual, pero sin desconsiderar el uso de la coerción política. Considera también que el desarrollo de una sociedad libre -es decir, una en la cual los individuos tengan la opción de sostener ideas conflictivas y buscar la satisfacción de sus propios intereses- solo será estable si, de alguna manera, se desarrollan valores éticos comunes entre los individuos que conforman la sociedad.

Pocos en la historia de la ciencia han efectuado un aporte mayor al de Samuelson en el intento por entender un fenómeno misterioso y vital -como es la economía- y por recetar remedios para combatir sus males, reales y complejos. A través de la docencia, su mensaje ha contribuido a enseñar la verdad a las sociedades y sus políticos. Su libro de texto, por sí solo, ha permitido que el curso de eventos en muchas sociedades sea más razonable, promoviendo así un avance eficaz hacia un mayor bienestar.

Criterios esenciales de la economía, bosquejados por Keynes y Samuelson, son hoy materia de revisiones desde varios frentes, pero incluso quienes difieren de los análisis de Samuelson empiezan rindiéndole el honor que implica el tener que fijar posición respecto de la suya.

Hay, entre ellos, desde conservadores reaccionarios hasta nuevas voces que exigen criterios morales y éticos a una ciencia que es dura y fría. Están los libertarios, quienes, como Milton Friedman, han rescatado la defensa de las bondades del mercado y advertido de los costos que una sociedad paga cuando recurre al voluntarismo estatal y deja de ser realista en política monetaria. Otros, por el contrario, defienden una intervención estatal en la búsqueda un mayor bienestar social. Por últimos, quedan aún marxistas, viejos y nuevos que insisten en la necesidad de evaluar el rol que juegan las clases sociales y su relación con el poder en el sistema económico.

Pero todos ellos -y la ciencia económica en general- no habrían llegado a donde están si en 1937 un muchacho judío de 22 años, con un don sorprendente para la lógica, no hubiera escrito en Harvard sus *Fundamentos de Análisis Económico*.

Es un verdadero honor tenerlo hoy de huésped en Lima.

## Talento y nobleza

---

Creía, y lo demostró con su actuar, que la política internacional puede convertirse en agente modelador de la historia en un país aún adolescente como el nuestro. Por ello, frente a la visión tradicional de una diplomacia de conservación -acostumbrada a actuar aceptando una realidad resultante del esfuerzo, la voluntad, y el interés de extraños- planteó la concepción de una diplomacia creadora y activa en el esfuerzo por intentar la modificación gradual y efectiva del orden internacional establecido.

Observador analítico de su tiempo, consideraba que la realidad que le tocó vivir estuvo marcada, a partir de la Segunda Guerra Mundial, por la polarización ideológica, la descolonización, la conciencia del subdesarrollo y la explosión científica y tecnológica.

Consideraba que estos desafíos obligaban a una toma de conciencia por el Perú de su propia ubicación y significado en la vida internacional, sin que ello implicara el abandono de las líneas rectoras que -en otros tiempos y frente a problemas distintos- supieron perfilar en Torre Tagle maestros como Alberto Ulloa y Raúl Porras.

Pero frente a la cambiante realidad mundial, consideraba no sólo inconveniente sino imprudente por antihistórico concebir la política exterior -especialmente en un país en desarrollo como el nuestro- en función del criterio único de la buena vecindad, sin antes ubicar al país en el mundo y en su tiempo y desde allí enfocar la rica y variedad gama de sus intereses internacionales para asegurar mejor su defensa y promoción.

Creía que el Perú tiene -en la frase de Basadre- “una historia con mañana” y que, por su ubicación geopolítica, debe ejercer una presencia significativa en la sociedad internacional que le permita contribuir a su consolidación interna como nación que aún se va haciendo en el tiempo.

Esta concepción creativa y audaz, introducida por una nueva generación de diplomáticos de la que él formó parte, superando una perspectiva excesivamente legalista en el análisis de los problemas internacionales, constituyó un avance cualitativo sobre la etapa anterior que se agotaba en la defensa del territorio como el objetivo primordial y en las buenas relaciones con los EE.UU. como el mecanismo principal para la defensa de los intereses peruanos.

Fue no sólo espectador privilegiado de la realidad contemporánea sino también actor dinámico y responsable en los distintos y fundamentales roles que le toco desempeñar. Supo, en muchos casos, plantear con nitidez y precisión los objetivos nacionales en función de las convergencias o compromisos con otros estados, así como aprovechar los escasos mecanismos con los que contaba para obtener el mayor beneficio para el Perú de la competencia e interacción entre los distintos países en un mundo como el actual, variable y complejo cargado de imponderables e incertidumbres.

Su prestigio cuando represento al Perú en Washington fue tal que un día lo invitaron a dictar el discurso de clausura de la academia diplomática norteamericana. Su charla sobre la realidad y proyección de las relaciones hemisféricas fue ampliamente comentada en los círculos gubernativos y académicos de la capital norteamericana.

En diez meses como Canciller y enfermo, como recién hoy sabíamos que estaba, pudo superar una difícil crisis derivada de actos ofensivos provenientes del gobierno chileno. Para lo cual, consciente de la conveniencia de potenciar el trípode geopolítico que caracteriza al Perú -Pacífico Sur, Grupo Andino, Región Amazónica- estimuló la cooperación latinoamericana, consiguiendo la elección unánime de un peruano para la dirección del SELA; consolidó las relaciones de buena amistad con el Brasil y la Argentina; reafirmó una posición de no-alineamiento auténtico; y, fundamentalmente, activó el fortalecimiento reciente de la integración andina, actuando como artífice de la coordinación manifestada en la aproximación al problema de Nicaragua y contribuyendo a la creación del Parlamento, Tribunal y Consejo de Cancilleres Andinos, cuya constitución presidió en Lima como último acto de su destacada gestión.

Carlos García Bedoya tuvo, pues, en los actos de su vida y frente a la enfermedad que lo llevó a la muerte, el coraje de ser.

En el ejercicio del servicio público, recreó patrones de excelencia para una profesión como la suya, trascendente pero con frecuencia despreciada por el personalismo y la frivolidad.

Fue también un gran amigo.

El mundo seguirá su curso sin él. La elite nacional continuará avanzando con vacilaciones en el angustiante esfuerzo por dotarle a la promesa de la vida peruana de un sentido y una proyección. Pero para quienes lo admiramos y quisimos, el camino será más difícil y solitario sin el concurso del pensamiento lúcido y creador, la acción oportuna y eficaz, y la entrega entusiasta y generosa de Carlos García Bedoya.

## La industria que se requiere

---

Durante los últimos veinte años, el Perú ha experimentado un crecimiento sin precedentes en su industria manufacturera. Esta evaluación correspondió con la opinión predominante en 1959 - madura ya la concepción cepalina y en los albores de la Alianza para el Progreso y el Banco Interamericano de Desarrollo- de que la industrialización acelerada era un buen atajo en la senda del desarrollo y para el logro del pleno empleo. Frente a la dramática realidad de pagar cada vez más sacos de café para comprar el mismo tractor, se despertó una inquietud en toda la región por iniciar la producción propia de tractores.

El Perú se integró tarde a los demás países latinoamericanos en elevar los aranceles para sustituir importaciones con manufacturera locales destinadas a satisfacer la demanda del mercado interno, caracterizada por una distribución en el ingreso personal muy dispareja. La ALALC inició, coincidentemente y por esa fecha, sus esfuerzos por lograr una integración comercial de los estados desunidos de América del Sur.

Poca atención se prestó en el Perú, durante la década del sesenta, a algunas importantes observaciones de la Misión Little, la cual recomendó al gobierno del presidente Manuel Prado la conveniencia de aprovechar algunas ventajas comparativas en el comercio internacional y de promover las manufacturas con potencial de exportaciones. Este fue, precisamente, el camino seguido por Japón y los países del Sudeste Asiático, los cuales estructuraron su sector industrial sobre la base del aprovechamiento de una mano de obra habilidosa, abundante y de menor costo alcanzando tasas de crecimiento productivo muy significativas.

Es difícil saber -mirando para atrás y teniendo en cuenta las limitaciones geográficas, políticas, sociales y culturales de nuestra sociedad- si hubiera sido posible una estrategia alternativa a la sustitución de importaciones, y si los criterios rectores fueron o no los más convenientes para lograr un desarrollo industrial como el que registra hoy el Perú.

Lo que sí es indudable es que, en la práctica, el camino recorrido estuvo salpicado por irrealismos absurdos e ineficacias obvias por parte de todos: gobernantes, tanto civiles como militares, empresarios y trabajadores. Basta mencionar el intento por manejar arbitrariamente el precio de la divisa y el costo del dinero, lo inadecuado de los criterios básicos de la Ley de Industrias vigente desde 1970, el elevado y arbitrario nivel arancelario y paraarancelario, la protección infinita creada por el Registro Nacional de Manufactura, los complejos sistemas de prioridades y exoneraciones, la planificación impuesta y las restricciones burocráticas, los controles y trámites inútiles que pusieron el sector de cabeza, convirtiendo a muchos empresarios creativos en infractores de reglamentos y a no pocos tramitadores eficaces en aprovechados rentistas.

Por ello es necesario hacer hoy un alto en el camino. Reconocer que los resultados no han sido satisfactorios. Que el crecimiento industrial se ha logrado en parte, como consecuencia de una

disminución del ahorro en la agricultura, la pesca y la minería. Que lo que se ha producido no ha sido necesariamente lo más conveniente. Que depender de la importación de productos terminados se ha pasado a la dependencia de equipos, insumos y tecnología extranjeros. Que han salido divisas al exterior como consecuencia del abultamiento de facturas. Que los precios se han elevado por encima de la calidad. Que los salarios han aumentado por encima de la productividad. Que el Fisco ha agobiado con tributos y limitaciones a quienes honestamente han contribuido a su sustento, mientras se ha hecho de la vista gorda frente a un creciente sector gris y marginal. Que el Estado ha reservado para sí lo que después no ha sido capaz desarrollar. Que no se ha generado suficiente empleo como consecuencia de una legislación social que beneficia al empleado en perjuicio de quien no tiene trabajo- Que el aparato productivo no se ha descentralizado, sino que más bien se ha concentrado. Que se han formado grupos oligopólicos hegemónicos. Que el desarrollo tecnológico ha sido pobre. Que la productividad real de la inversión ha sido reducida. Que las demandas sindicales han sido muchas veces absurdas y han estado cargadas con un denso contenido de política partidaria.

Todo ello no desdibuja algunos éxitos reales alcanzados, durante estas dos últimas décadas, por empresas creadas sobre la base de ahorro de capitales escasos y del esfuerzo de mentes y brazos entusiastas.

Pero lo que se necesita hoy no es identificar, *a posteriori*, cuál hubiera sido el mejor curso de evolución para el sector manufacturero durante los últimos veinte años, sino plantear, *a priori*, cuáles deberían ser los criterios para asegurar un desarrollo industrial eficaz en lo que queda del siglo.

Hay, en este sentido, realidades fundamentales que considerar en la formulación de la anunciada nueva Ley de Industrias.

En primer lugar, si bien es reconocido que el desarrollo implica industrialización, no es hoy tanto que la industrialización forzada sea la vía más eficaz para el desarrollo. Será preciso en el futuro un mayor equilibrio intersectorial, para que la industria no se beneficie a expensas de la agricultura o la minería.

En los próximos años, por ejemplo, los precios del petróleo y los alimentos van a aumentar por encima de la inflación promedio teniendo en cuenta la disponibilidad de oferta futura de estos bienes esenciales. Ello sólo será posible, sin caer en un proceso inflacionario galopante, si los precios en el sector manufacturero aumentan por debajo de la inflación, para lo cual es imprescindible un aumento sustantivo en la productividad industrial para poder mantener, por lo menos estables, las remuneraciones reales y las tasas de ganancias.

En segundo lugar, el mundo será en el futuro más interdependiente y conflictivo que en el pasado reciente. El intercambio comercial será como siempre beneficioso, pero puede ser también más azaroso. El conflicto entre Irán e Irak no es sino una expresión de este fenómeno.

Por último, el Perú tiene, en 1980, una planta industrial significativa. Su modernización y conversión -donde ésta sea posible-constituyen una tarea ineludible.

La nueva Ley de Industrias debe, entonces, garantizar en el tiempo un arancel uniforme, prudente y decreciente. Ello, aunado a una política cambiaria realista, permitiría una base por la

concertación de esfuerzos que es necesario efectuar para avanzar en lo que debería ser un objetivo fundamental en las próximas dos décadas: el aumento sustantivo de la productividad industrial y de los volúmenes de exportación de manufactureras peruanas.

## Orden o desorden

---

Con la aprobación de su primer presupuesto fiscal, el gobierno de Fernando Belaunde afronta una opción crítica de política económica que tendrá consecuencias a lo largo del próximo lustro. Tiene para escoger entre un esquema de desarrollo futurista -la alternativa del orden- o el regreso hacia un modelo populista pasadista -la alternativa del desorden-.

La primera implica sacrificar el consumismo de corto plazo por el crecimiento de largo plazo, combatir agresivamente la inflación en una economía que gradualmente se liberalice y en la cual los precios resulten realistas, donde el esfuerzo se centre principalmente en el crecimiento de los sectores productivos críticos -agricultura y energía- y en la cual se promueva el desarrollo rural y provinciano y se destine el gasto público a proyectos con rentabilidad financiera efectiva y a programas que atenúan los efectos de la pobreza en las menos favorecidos de la población.

Alternativamente, el gobierno puede estimular el consumo inmediato a costa de limitar el crecimiento futuro, relajar la disciplina y desencadenar una inflación reprimida en una economía cubierta y con precios arbitrarios, donde el esfuerzo se centre principalmente en la construcción de la administración de un estado benefactor cuyos beneficios no alcanzan a los más pobres y en el cual el gasto público se invierta en iniciativas, tal vez bien intencionadas, pero sin una adecuada rentabilidad financiera.

Esta es la opción por el desorden

Resulta imprescindible escoger. No cabe, en el marco conceptual, transacción posible, ya que el orden no se debe mezclar ni promediar con el desorden.

La alternativa del orden permitiría el desarrollo de la libertad y la gradual satisfacción del anhelo de igualdad. La alternativa del desorden fomentaría, más temprano que tarde, una pugna de intereses en el manejo de un estado quebrado.

Es por ello que en el Perú -donde se debe reconstituir un sistema democrático que sea representativo de su cambiante realidad- se necesita, este momento crucial, de una gran virtud política: la prudencia.

La prudencia en el campo económico consiste en aceptar la realidad de la escasez en y la existencia de los límites. No es posible hacerlo todo. Por ello, es imprescindible fijar prioridades. Los alimentos y el petróleo, por ejemplo, son más importantes que las viviendas y las carreteras, como los pobres del campo requieren de más ayuda que la clase media de la ciudad. Y el gasto público debe realizarse teniendo en cuenta que generar empleo a costa de inflación es una acción suicida, porque el alza desenfrenada de los precios destruye las bases económicas, sociales, políticas y morales sobre las que una sociedad se sustenta.

Por algo prudencia viene de providencia que implica, a la vez, prever y proveer.

## Rol civil de la Iglesia

---

El debate sobre el rol de la Iglesia es uno antiguo. Para unos, la Iglesia debería inhibirse de toda incursión en actividades cívicas. Los marxistas, por ejemplo, han pretendido una reducción exclusiva de la Iglesia del dominio del culto divino y la interioridad de la conciencia personal de sus fieles. Los que comparten esta opinión, inclusive desde posiciones conservadoras, consideran que la Iglesia debería estar limitada en todo desarrollo externo y posibilidad de aporte para la configuración del orden público, económico y social de la sociedad civil.

En países como el Perú, sin embargo, no sólo sería injusta sino inútil la pretensión de frenar el desarrollo integral de la fe católica, la cual tiene derecho a pronunciarse sobre materias que contengan un fondo ético-religioso. Si el pueblo peruano es, en parte, heredero de la civilización occidental y el gobierno hace expresa profesión de principios de humanismo cristiano, es justo reconocer a la Iglesia y a su jerarquía el derecho de pronunciarse sobre asuntos cívicos que afectan, de algún modo, su misión moral y espiritual sobre la Tierra.

La Iglesia dispone, por lo demás, de una sólida ética aplicable a la conducta humana, que proviene del propio Evangelio y que se configura a través de varios siglos de desarrollo intelectual y de práctica activa. Sería tonto prescindir de esta rica herencia que puede contribuir significativamente a orientar a la sociedad peruana. Es natural, por tanto, que la Iglesia se pronuncie dondequiera que, a su parecer, haya en juego valores morales, ya que de ellos es depositaria secular.

Pero, por otra parte, es necesario reconocer que los problemas económicos, sociales y políticos no se identifican, necesariamente y en forma integral, con los problemas éticos, ya que son casos morales puros. Por mucho que impliquen dimensiones morales, estos problemas -dada su complejidad- envuelven dimensiones estrictamente científicas y técnicas que, como tales, escapan a la jurisdicción de la jerarquía eclesiástica. Existe una ciencia económica, existen las disciplinas sociales, existe un arte político, dedicados al descubrimiento y formulación de ciertas leyes particulares, que la Iglesia misma reconoce como relativamente autónomas de las leyes ético-religiosas.

Los axiomas, argumentos y desarrollo de estas actividades se refieren muchas veces a hechos intrínsecos que no pueden ser torcidos ni tergiversados, ni siquiera por disciplinas superiores.

Es en este orden de cosas donde la Iglesia no tiene competencia. Ella misma lo ha reconocido, desde su fundación hasta los más recientes documentos del Papa Juan Pablo II. La prescindencia eclesiástica con respecto a este tipo de problemas evita las desgraciadas secuelas de todo clericalismo o intento de teocracia que, cuando se ha producido históricamente, ha dañado a la Iglesia misma tanto como a la sociedad civil.



Más allá de sus respectivas experiencias espirituales, la Iglesia enseña que los papas en comunión con los obispos, son depositarios de la revelación divina y poseen -para las cuestiones de su propia jurisdicción- las luces inspiradoras del Espíritu Santo. Pero esta iluminación no concede a los obispos ningún conocimiento científico o técnico de carácter económico, social o político. No son expertos en estas materias, no poseen la receta ideal para bajar la inflación, reactivar la economía, eliminar la pobreza, ni definir el régimen político ideal. No tienen tampoco, en estas disciplinas, una cualidad de prudencia o de arte. No son gobernantes civiles, ni deben aspirar serlo.

Los fieles católicos, ellos sí, pueden y deben lanzarse de lleno -como ciudadanos auténticos- a la búsqueda de soluciones para estos problemas. Pero deben hacerlo laicamente, es decir, cada uno por su cuenta y riesgo, sin implicar a la Iglesia misma. Nunca en masa, como partido único como bloque confesional. Los fieles están, sin duda, unidos por los mismos principios generales de la doctrina social de la Iglesia; pero saben que de estos principios se derivan múltiples aplicaciones prácticas -distintas o incluso opuestas- por cuanto entre los principios y la realidad política contingente median tendencias naturales distintas, juicios de hecho y numerosos factores de interpretación personal. Esta pluralidad se debe a la relatividad de los hechos políticos, susceptibles de ser vistos e interpretados de diversas maneras, incluso partiendo de una teología moral común. La Iglesia debe respetar este pluralismo, siempre que se mantenga dentro del cuadro general de su doctrina. Y la jerarquía eclesiástica, oficialmente y de hecho, no puede tomar partido, ni participar en las contiendas de la política, ni inmiscuirse en el ámbito de lo opinable y relativo.

Es, tal vez, en el campo de los derechos humanos dentro del cual es más justa y válida, la intervención de la Iglesia. No en vano son ellos una máxima ética por excelencia. La Iglesia no sólo tiene el derecho sino el deber de denunciar las acciones que constituyan claramente una violación de los derechos humanos, especialmente aquellos actos que no respetan la integridad física y la libertad y dignidad de la persona humana.

Sin duda la Iglesia Católica puede y debe contribuir a orientar a la sociedad peruana ante problemas como éstos, tan difíciles y angustiantes. Sería una posición fácil negar, dogmáticamente, que pudiera existir en algún grado un conflicto entre los distintos derechos humanos. Si así no fuera, qué fácil sería gobernar y elegir. Hay, sin embargo, suficientes señales de lo contrario. Pero, en ningún caso el fin justifica los medios, y la Iglesia -por su autoridad moral- tiene el derecho y el deber de recordarlo siempre a quienes, por ser frágiles y humanos, caen muchas veces en la tentación de olvidarlo.

## La prudencia política

---

El desarrollo de una sociedad es sólo posible cuando la prudencia constituye una virtud rectora de su vida política.

¿Qué es la prudencia? Según el diccionario, prudencia significa lo mismo que “providencia”, es decir, algo en lo que se integran un elemento teórico, el “prever”, con otro práctico, el “proveer”. Prever cualquier posibilidad y proveer los medios para conseguir lo necesario en dichas circunstancias constituyen los elementos esenciales de prudencia, virtud concordante con el realismo y la racionalidad en la conducta humana.

¿Qué es el realismo? Para responder a esta pregunta, hay que recordar que la conducta del hombre se inscribe en un doble plano: por una parte, el de las necesidades absolutas, el de los valores morales (recordando que entre ellos se encuentra la atención de las necesidades materiales mínimas) y, por otra parte, el de las necesidades relativas, que es el de los medios apropiados, según la oportunidad o la ocasión, para satisfacer las exigencias que resultan de esos valores. Por consiguiente, ser realista en la conducta humana implica una virtud doble y simultánea: atenerse a unos principios de valor objetivo en su carácter moral -y que por absolutos deben vivirse como permanentes- y escoger adecuadamente los medios más convenientes, en función de las circunstancias, para la debida rectitud en el modo de obrar.

La prudencia, por tanto, no obedece sólo a una razón utópica y abstracta, que sólo considere los principios, sino a una razón abierta al dinamismo y la responsabilidad respecto de las situaciones plurales de la vida, irreductibles a un puro esquema matemático o a un único modelo funcional.

El prudente, asimismo, tiene en cuenta las lecciones de ese saber que es la “experiencia de la vida”, un saber que desborda lo que está escrito en los libros, aunque se sirva de ellos, y que se adquiere como resultado de los fracasos y de los aciertos de la propia existencia.

Finalmente, como la vida no constituye una repetición, la prudencia tampoco puede reducirse a un recetario, por muy amplia extensión que éste tuviese, sino que implica también, a su manera, una cierta capacidad inventiva y creadora.

La prudencia política se preocupa del bien común. Para ser eficaz, la justicia social requiere conciliarse con la prudencia política. No se trata, en modo alguno, de atenuar la importancia de la justicia social, sino de reconocer que, para que ésta se logre efectivamente, es indispensable administrarla con prudencia política. De lo contrario, la actitud de los gobernantes, en vez de lógica y realista, se vuelve utópica y patológica, con lo que en vez de avanzar hacia la justicia se genera una conmoción en la cual terminan más perjudicados efectivamente quienes, por ser más débiles, son los que el estado debería favorecer con su acción.

La prudencia política requiere que lo que se llama el bien común no sea objeto de una interpretación de signo *igualitarista* en el sentido más craso de esta palabra. Las capacidades y aptitudes de las personas no son iguales u homogéneas. Para lograr la justicia social es indispensable, bajo la óptica de la prudencia, que se tome conciencia de que las personas -aunque tienen en comuna la misma esencia que les hace ser *humanos*- poseen también diferencias efectivas entre sí que les hacen ser *seres distintos*. Por lo tanto, resulta injusto la pretensión de uniformar su vivencia.

Cierto es que entre estas mismas diferencias existen algunas artificiales, que pueden ser eliminadas con beneficio para el bien común. Pero las diferencias reales no deben desconocerse, por la misma razón por la que no se puede sostener que el ideal de la justicia y la prudencia consista en la miopía o en la ceguera ante el pluralismo natural de los seres humanos y de sus capacidades y aptitudes diversas.

Es necesario, asimismo, recordar que la prudencia política no se limita exclusivamente a los atributos peculiares de las personas a cuyo cargo corre la gestión estatal del bien común. La prudencia política no es una virtud que sólo debe ser exigible a los que ejercen la función de gobernar. En rigor, todos los miembros de la sociedad deben practicar, a su manera, esta misma virtud. Incluso hay una clase -los intelectuales- especialmente obligada a procurar para sí, y promover también para los demás, esta forma de sensatez y de cordura. Porque son ellos los que forjan y suministran -de manera directa o indirecta- las ideas de las cuales deriva la concepción de lo que debe ser la convivencia social.

Mucho se ha hablado de la “función social del intelectual”, y aunque ella no es directiva en el mismo sentido en que la del gobernante sí lo es, no es menos cierto que, a su modo y manera, ejerce una rectoría sobre la vida de las sociedades, y que, en virtud de ello, debe cargar con el peso de la responsabilidad que le compete.

La mayor parte de los ingredientes demagógicos latentes en ideologías destructoras del buen orden social ha provenido de la irresponsabilidad y frívola actitud de intelectuales imprudentes que no han sopesado a tiempo las consecuencias posibles de ideas que a veces han alzado como puros castillos en el aire sin base en la realidad, olvidando que los delirios quijotescos tienen a veces como consecuencia un grave infortunio para la vida de los crédulos Sanchos.

Asimismo, la prudencia política requiere una concepción del bien común que se articule, en provecho de éste, con la agilidad y la capacidad creadora de la iniciativa individual, tanto en sus manifestaciones económicas como en dimensión educativa, científica y cultural.

El desarrollo social resulta estimulado por la libertad de iniciativa por ser ésta una de las tendencias naturales del espíritu humano. De ello resulta que la prudencia política no puede referirse al bien común, ni a la justicia social, sin reconocer esta inclinación natural, ya que el libre albedrío no es un añadido a la índole racional del ser humano, sino que constituye uno de sus aspectos sustantivos.

Todo ello explica la necesidad de corregir la *visión macroscópica* de la sociedad, a la manera de un organismo superior y previo a las personas individuales que lo integran. La prudencia política no excluye la visión de la sociedad como conjunto, pero rectifica esta visión con la óptica del realismo que advierte cómo ese conjunto, en sentido estricto, no es un ser sino un sistema de seres,

cada uno de los cuales, ni más ni menos que por ser persona, trascienda la condición de simple miembro de la sociedad en la que vive.

No deja de resultar comprensible, hasta cierto punto, la tentación de considerar a la sociedad como un todo constituido por unos elementos enlazados como piezas integrantes de una entidad superior. Este ángulo de visión panorámico no es malo en sí mismo, como tampoco lo es que quien esté en la cumbre de una montaña pueda contemplar el panorama en su conjunto. Pero sería erróneo que, por tener acceso a esta visión global, se viniese a pensar que cada una de las entidades singulares ofrecidas en conjunto a la mirada existiese únicamente con el fin de hacer posible el todo. Este irrealismo absurdo tratándose de cosas, lo es mucho más si se refiere a personas.

La prudencia política requiere, por último, que el desarrollo económico no sea tomado como un fin en sí mismo. El que sea un medio indispensable para lograr la abundancia, y el que se precise de ésta para satisfacer necesidades esenciales de la población, no implica que el desarrollo deba considerarse como un fin absoluto y prioritario. El desarrollo debe ordenarse, precisamente a través de la prudencia política, a un objetivo más alto, por la razón de que el hombre no es solamente un sujeto de necesidades materiales, sino un ser en el que éstas constituyen una mediación imprescindible -pero sólo una mediación- para el cumplimiento final de las formas más nobles de la libertad: aquéllas que se realizan en fusión con los valores de espíritu.

## Poder, autoridad y fuerza

---

Se puede definir el poder como la capacidad para lograr obediencia, la cual se puede lograr de muy diversas formas. Poder ejercen hoy en el mundo personas muy distintas. Son poderosos tanto Juan Pablo II por su autoridad espiritual como varios dictadores de turno debido a su fuerza concreta y disciplinaria. Poder también acumulan, por ejemplo, la tecnocracia cuando administra con habilidad, o los intelectuales y políticos cuando son capaces de asumir e interpretar racionalmente las demandas o emociones subyacentes de sus pueblos.

Constituye un error que crea confusión llamar autoritarios a los gobiernos de fuerza, porque autoridad es un poder que se basa en un sustento espiritual y no en la opresión física. Incluso una buena manera de apreciar el desarrollo de una sociedad -desarrollo entendido en su concepción más integral- sería medir la combinación de autoridad y fuerza con que gobierna su estado. Un pueblo gozará de mayor bienestar real cuando sus gobernantes disponen de mucha autoridad y requieren de poca fuerza.

La autoridad resulta de una síntesis armoniosa entre una personalidad y un grupo, al margen de criterios ideológicos y éticos. Tuvieron autoridad, en su lugar y tiempo, Washington y Lincoln, Bismarck y Disraeli, Churchill y De Gaulle; y en el Perú, Castilla, Piérola y Leguía. El gobernante procura ser el prototipo de sus connacionales, para poder lograr así obediencia de sus gobernados quienes, al seguirlo, se autoperciben como obedeciendo un mandato natural.

A diferencia de la autoridad, que consigue obediencia basándose en la libre voluntad, la fuerza implica una imposición arbitraria. Como la obediencia es siempre indispensable para aspirar a los ideales de orden, libertad y justicia; los gobiernos tienen que utilizar una combinación de autoridad y fuerza. En un país como el Perú -pobre, en proceso de maduración, con una realidad mestiza y conflictiva, carente aún de lazos integradores suficientes- es necesaria, lamentablemente, la aplicación de la fuerza. Debería constituir un objetivo social el que ella sea gradualmente reemplazada por la autoridad.

Un avance significativo para ello se logró en 1980 con el restablecimiento de la democracia. Con todas sus limitaciones y lacras, el sistema actual de gobierno es superior al que pretendieron implantar los que aspiraban a la permanencia de un caudillo omnipotente que supuestamente recibía su autoridad de masas inflamadas por pancartas y griterío que se le entregaban como una multitud-hembra a un líder-macho. La democracia- es decir, el gobierno del pueblo- no quiere decir como creen muchos, el gobierno de la multitud. Por pueblo no debe entenderse la parte de la población que no pertenece a la clase alta ni a la media. Lo que pueblo realmente significa es el contenido humano que conforma una nación. No es la masa en sí, sino cómo ésta se integra en instituciones. La interrelación entre éstas, y su permanencia y adecuación en el tiempo, es lo que otorga a la nación su continuidad y, por tanto, su identidad esencial.

## Los economistas y su mundo

---

En los últimos años, la toma de conciencia sobre la creciente escasez de los recursos y el proceso inflacionario a nivel mundial han despertado un interés generalizado por la ciencia económica. Actualmente, por ejemplo, hay en el Perú quince mil universitarios estudiando economía. Cada universidad ha creado su propio departamento. Las empresas y los bancos refuerzan continuamente sus equipos de analistas. Los libros de economistas se vuelven *best sellers*. La jerga de los “estructuralistas” y “monetaristas” se proyecta para describir situaciones de naturaleza ajena a dicha profesión. Los institutos de investigación y fundaciones le dan prioridad a los proyectos sobre la materia. Los economistas, y los que como yo fungen como tales, adquieren una influencia y prominencia desacostumbrada y muchas veces injustificada.

En mi caso, estudié ingeniería no sólo por contraponerme a una tradición familiar de diplomáticos y jueces, sino también porque me atraía el título: no por nada *ingenium* es la facultad de espíritu humano que permite discurrir e inventar. Por ello, a diferencia de aquellos economistas que provienen de ciencias sociales, soy más pragmático que teórico. Si los científicos estudian finalmente lo que es, los ingenieros pueden aspirar a crear, en la vida diaria, lo que nunca ha sido.

En el ejercicio de la profesión, los ingenieros tienen un motivo fundamental para envidiar a los abogados y médicos. Los varios siglos de tradición les dan, a estos, instituciones y procedimientos estables, formas y sistemas precisos, normas de ética claras. En cierta medida, el subdesarrollo peruano se refleja en que nuestras universidades graduaron abogados por trescientos cincuenta años antes que empezaran a formar ingenieros. El orden eficaz hubiera sido el inverso. Primero debió crearse riqueza y sólo después litigar respecto de su más justa distribución.

En cambio, con respecto a los economistas, los ingenieros se pueden permitir cierta condescendencia. La economía es una disciplina profesional muy reciente y sus fundamentos teóricos no permiten muchas veces interpretar adecuadamente la realidad. Esta es una primera razón por la cual su ejercicio es tan turbulento. Los ingenieros pueden asistir a un congreso internacional e intercambiar conocimientos de manera civilizada sobre la mejor fórmula para calcular una estructura o para medir la productividad de un proceso. En cambio, reúna usted a un grupo de profesores de economía alrededor de una mesa y al cabo de un tiempo tendrá una batalla de conceptos ideológicos y de formulismos teóricos, muchas veces inaplicables a la realidad que se pretende mejorar. Se sorprenderá el senador Alva Orlandini cuando interrogue a su recientemente formado panel de expertos sobre lo que conviene hacer con los intereses o la tasa de cambio. Recibirá tantas respuestas como expertos consiga, muchas de las cuales serán, a su vez, contradictorias y conflictivas. Establecer una adecuada política cambiaria o crediticia parecería ser un problema mucho más complejo y difícil que, por ejemplo, calcular un puente, curar una hepatitis, o reglamentar una norma legal.

Esta inmadurez de la economía y los economistas respecto a otras disciplinas y profesiones es resultante de su adolescencia y coincidente con una gran vitalidad en su desarrollo. Los economistas se sienten hoy forzados a analizar y proyectar en medio de una crisis que hace muy difícil la tarea de evaluar y pronosticar. El desafío es por tanto enorme, salvo para aquéllos que, escudados en dogmas ideológicos, se parapetan en torres de cristal a esperar su “gran revolución”.

En la última década, superando el iluso optimismo de los que creyeron que las computadoras iban a permitir el milagro de sintonizar perfectamente la actividad productiva, la teoría económica ha sido sometida a una revisión severa, especialmente en lo que se refiere a la macroeconomía. En esta área, los economistas tienen que basar su aporte en relaciones que se suponen estables y predecibles entre las distintas variables que interactúan entre sí.

Muchas de estas formulaciones han sido cuestionadas durante los últimos años, no solamente en cuanto a magnitud y velocidad, sino inclusive en cuanto a la dirección esperada en la evolución de una variable frente a un estímulo dado. Es evidente que hoy no se conoce aún con precisión la relación entre las tasas de impuesto y la recaudación tributaria, el déficit fiscal y la inflación, la inflación y el desempleo, el crecimiento monetario y las tasas de interés. Estas variables, además son muchas veces alteradas significativamente por las expectativas cambiantes que pueden existir sobre inflación o la tendencia futura de cualquier otra variable entre la población.

Un beneficio resultante de esta continua revisión es la fijación de un nuevo sentido de realismo sobre lo que se puede o no pedir a los economistas. Sin embargo, si se suman las preguntas sin respuestas al grado creciente de complejidad e incertidumbre sobre el comportamiento final de las variables, los economistas deben reconocer con honestidad lo difícil que es anticipar acertadamente los efectos de las propuestas que formula. Los políticos sólo deberían confiar de aquellos economistas que saben dudar, y recelar profundamente de aquellos con fórmulas mágicas y únicas para la solución de problemas diversos y complejos.

Pero esta conciencia de los límites no es razón para que los economistas no puedan efectuar contribuciones significativas a los políticos y empresarios. El entrenamiento académico que reciben, especialmente en lo que se refiere al razonamiento lógico y al manejo de la información estadística, convierte a los economistas en asesores valiosos para la toma adecuada de decisiones, si es que su consejo y pronóstico se reciben con conocimiento apropiado de los límites de su confiabilidad y certeza.

Como dijo Keynes, la teoría económica no establece un conjunto de conclusiones fijas aplicables a cualquier realidad. Más que una doctrina, es un método lógico, una actitud mental, una manera de pensar que contribuye a racionalizar conclusiones acertadas.

Esta disposición se basa en una premisa fundamental de la ciencia económica, la que establece que los individuos, cuando efectúan selecciones racionales, aspiran a lograr el máximo de beneficio, entendiendo este concepto en su acepción más amplia, es decir, comprendiendo la ventaja material, el bienestar, la riqueza, el amor, el poder, la influencia, la seguridad, el altruismo o, inclusive, la paz mental. Armados con una estructura ordenada que se apoya en esta premisa, los economistas pueden contribuir en gran medida a que los recursos disponibles tengan el uso más eficaz para lograr así el resultado más deseable.

Como la marcha económica estará siempre sujeta a variables imprevisibles de todo tipo - desgracias naturales, conflictos diversos, cambios en la situación internacional, etc., -, no es razonable esperar precisión en las proyecciones precisas de sus variables para un momento específico. Sin embargo, el que esto no sea posible, no es razón para que los políticos dejen de contar con los economistas en el proceso de toma de decisiones respecto de temas tales como la política cambiaria, el sistema arancelario y financiero, la estructura tributaria y el gasto fiscal. Regresar a planteamientos intuitivos, utópicos e irreales en una crisis como la actual, ocasionaría un daño irreparable a una economía como la nuestra, aún desintegrada y convaleciente de un agudo proceso inflacionario.



## El desafío energético

---

El desafío energético planetario se explica por una simple relación matemática implícita en toda curva exponencial. Cuando una cantidad cualquiera -como el consumo energético, por ejemplo- se dobla a intervalos regulares -digamos cada década- la magnitud del último valor de la sucesión es superior a la suma total de los valores anteriores. Así, en la sucesión 1;2;4;8; el 8 es superior a la suma de 1+2+4.

Recién en estos últimos años, la humanidad, entre sorprendida y angustiada, empieza a tomar conciencia del previsible agotamiento del petróleo, su recurso energético más flexible y utilizado. La importancia de esta limitación radica en que, sin él, o una fuente alternativa abundante y segura, no solo no se podrá continuar con el actual ritmo de crecimiento en el consumo industrial, sino que será imposible evitar un retroceso en el nivel de bienestar material del que se goza en el mundo.

Los recursos energéticos de la Tierra provienen de la energía solar corriente y almacenada, de las mareas, el calor, los combustibles de fisión y los posibles combustibles de fusión.

La mayor parte de la energía solar que cae sobre la Tierra calienta la superficie o es radiada de nuevo al espacio. Solo una porción infinitesimal -el 0.05 por ciento- es absorbida por la fotosíntesis de las plantas y es la que mantiene a toda la materia viva.

El hombre primitivo, como cazador y recolector, dejaba intacto el equilibrio entre lo absorbido y lo expulsado: fotosíntesis y respiración. Al domesticar las plantas y los animales, empieza a aprovechar mejor sus recursos energéticos para poder sobrevivir.

Hay una relación fundamental entre la energía, la productividad agrícola y el crecimiento de la población. Por ejemplo, si se regresara -con los actuales límites geográficos- al estado de desarrollo tecnológico que tuvo el Tahuantinsuyo, se podría uno preguntarse ¿cuánta población podría sobrevivir en territorio peruano basándose en el horizonte agrícola del que se dispone? Sobre la base de un cálculo simplista, se puede concluir que, para alimentar a un adulto con una energía de 2,000 kilocalorías diarias, haría falta un campo de algo más de media hectárea. En tal caso, el máximo nivel de población que el Perú podría soportar, si se igualara para abajo a toda su población al nivel mínimo de sobrevivencia que el pueblo tenía en la época de los Incas, sería del orden de 20 a 30 millones de habitantes. La proyección de la población peruana para el año 2000, a la tasa de crecimiento vigente, resulta de 35 millones de habitantes.

Es por ello que John K. Galbraith, cuando revisa la historia de la economía mundial, reafirma la importancia de la relación tierra cultivable *per cápita* para explicar los distintos grados de desarrollo que han alcanzado las distintas sociedades. Cuando ésta ha sido suficiente, la energía se ha podido acumular y, donde ha habido avance tecnológico, se ha generado la civilización industrial,

la cual ha alterado el balance corriente de fotosíntesis y respiración al utilizar el flujo energético acumulado en los combustibles fósiles: el petróleo y el carbón.

A partir de ellos, el bienestar material de la población se ha elevado en forma significativa. Hoy, el peruano promedio, aún en medio de la crisis en la que creemos vivir, consume cinco veces más energía de la que aprovechaba en tiempos de incanato,

Este aumento en el nivel de bienestar que la humanidad ha logrado durante el siglo XX está, sin embargo, desigualmente distribuido. EE. UU. con el 5 por ciento de la población mundial, utiliza un tercio de la energía que se consume en el planeta. Por tanto, el norteamericano promedio goza de un nivel de bienestar diez veces superior al del promedio del resto de la población mundial.

La primera conclusión que es importante resaltar es que, con el nivel de conocimiento tecnológico disponible a la fecha, no existen los suficientes recursos energéticos para que todos los pueblos del planeta puedan disfrutar del nivel de vida de los países industrializados. La tierra simplemente no lo soportaría.

Debido al agotamiento previsible de los combustibles fósiles y a que, al día de hoy, las fuentes convencionales de donde la Tierra puede obtener una energía sin fin -radiación solar, vientos, corrientes de agua, mareas y recursos geotermales- son insuficientes o técnicamente aún inaccesibles, la humanidad tiene, en el futuro inmediato, el desafío de desarrollar una fuente casi inagotable de energía. Los avances en la energía nuclear permiten vislumbrar esta posibilidad. La fisión del uranio -proceso de tecnología ya madura, pero de uso finito por la escasez del mineral- podría servir de puente hasta que se logre el control de la fusión del deuterio; proceso que, de resolverse en forma segura, permitiría una fuente casi infinita de energía por la cantidad de este elemento en el mar. La única limitación técnica al consumo energético, y por tanto al bienestar material, sería entonces el que hacer con el calor residual presente en toda alteración del equilibrio atómico.

Pero, aunque el progreso de la ciencia permita resolver todos los problemas tecnológicos, habrá siempre una limitación política: las fuerzas de persistencia frente a la realidad de la evolución. Si en el futuro se nombraran las etapas de la historia de la humanidad no por el régimen político vigente, sino por la principal fuente de energía usada, la actual era de petróleo está por concluir. En el breve plazo de treinta años, su consumo tendrá que limitarse o reemplazarse. ¿Estamos mentalmente preparados para lo que significa esta evolución?

La humanidad requiere modificar la estructura de su sistema productivo, así como el de su hábitat. Las máquinas y equipos ahora existentes están en peligro de convertirse en obsoletos en plazo breve. Habrá poco tiempo para lograr una readaptación a nuevos materiales, distintos sistemas de transporte, comunicación y suministro; métodos mejorados de producción y construcción. Tendrán que producirse grandes innovaciones técnicas para reducir la contaminación y controlar los productos residuales de la energía nuclear, así como para mejorar el rendimiento global del sistema y para superar la limitación de los recursos disponibles.

Facilitar esta evolución requerirá de importantes decisiones políticas. Las necesidades energéticas tendrán que sopesarse con los costos sociales y ambientales. Las decisiones de establecer límites a la contaminación o de financiar el desarrollo de la energía nuclear pueden tener consecuencias políticas y económicas insospechadas.

El futuro, desde luego, no puede ser tratado como un producto de consumo al momento de efectuar proyecciones. La historia no es sino una sucesión de errores de los que la sociedad a veces aprende. Proyectar solamente los errores nos llevaría a un derrotismo fatalista, pero también proyectar el potencial teórico, libre de limitaciones prácticas, puede resultar tan engañoso como una ilusión futurista. Hay que proyectar de ambos para obtener la gama compleja e incierta de lo que podría pasar en la vida real.

El desafío energético va a desencadenar en el Perú, como en el resto del mundo, crisis de una magnitud sin precedentes, que sacudirán de manera traumática los sistemas productivos, urbanos y políticos. Ello obligará a identificar nuevos sistemas de equilibrio y armonía. Para ello será necesario que la sociedad sepa alejarse del dogmatismo y la intolerancia con los que muchos pretenden dar respuestas definitivas a problemas triviales, para encontrar, con lucidez e imaginación, soluciones tentativas a problemas que sí son fundamentales.

## Ideas e ideologías

---

En un debate, hace algunos años, Daniel Bell -profesor de la Universidad de Harvard- escandalizó a más de un marxista al autodefinirse de manera aparentemente paradójica. “Yo soy -dijo Bell entonces- socialista en economía, liberal en política y conservador en cultura.” En una sociedad tan cambiante y compleja, esta concepción plural y pragmática frente al mundo encierra una respuesta más creativa y valiosa que una estrictamente unidimensional y teórica, tan común entre fanáticos e intransigentes.

Bell no confunde el socialismo con el estatismo o la propiedad colectiva de los medios de producción. El socialismo sería, para él, un juicio sobre las prioridades económicas. Bell, como muchos pensadores modernos, critica la excesiva concentración actual de la ciencia económica en sus mecanismos instrumentales -la reciente selección del Premio Nobel de Economía resulta representativa de esta tendencia- con descuido de los objetivos éticos a los cuales la ciencia debería servir. La política económica puede ser eficiente en cuanto a los medios que utiliza, pero solo podrá ser justa si, además, interactúa virtuosamente con el sistema de valores culturales de la sociedad a la cual sirve.

En este sentido, socialista en economía sería quien considera que la satisfacción de las necesidades comunes mínimas precede, en la formulación de los objetivos económicos, a la de los deseos privados. Los recursos de una sociedad, según esta concepción, deberían utilizarse, en primera prioridad, para asegurar el mínimo social necesario que permita a cada individuo considerarse miembro integrante de la comunidad. Este mínimo corresponde, por cierto, a una definición cultural y es, por tanto, cambiante en el tiempo.

No habría contradicciones, en tal caso, en ser a la vez socialista en economía y liberal en política. La política debe, en primer lugar, distinguir con prudencia entre lo público y lo privado. Ser liberal implica que, en lo político, el actor principal debe ser el individuo y no el grupo, sea éste familiar, religioso, político o empresarial. Implica también que lo público debe operar bajo el imperio de la ley, la cual debe ser universalmente aplicada. La ley debe, por tanto, tratar a los individuos como iguales, no necesariamente procurar que sean iguales. Una vez cubierto un contrato social mínimo, resulta moralmente legítimo premiar, en forma diferencial, el talento y el esfuerzo de cada quien.

Lo privado -en lo moral y lo económico- debe comprender toda acción libremente consentida entre individuos, en la cual no haya efectos secundarios -la pornografía o la contaminación ambiental, por ejemplo- que afecten lo público.

Ser conservador en cultura -entendida como el esfuerzo colectivo por suministrar un conjunto de respuestas coherentes a las demandas existenciales que confrontan los seres humanos- consiste en respetar la tradición, en exigir juicios no solo emocionales sino razonados sobre lo que

constituye, por ejemplo, una buena o mala obra de arte; y en considerar necesaria la participación de opiniones autorizadas en el debate político de temas trascendentes, como son, por ejemplo, la educación escolar y universitaria.

Puede haber, entonces, unidad y consistencia en posiciones aparentemente conflictivas sobre temas parciales. El mundo de las recetas simples y las ideologías únicas ya resulta obsoleto.

## Los deseos privados y las necesidades públicas

---

Uno de los desafíos más importantes de la década de los ochenta, tan compleja e incierta como se presenta por las inmensas expectativas y difíciles riesgos que va a generar la transformación tecnológica, lo constituye la administración política del conflicto entre los deseos privados y las necesidades públicas

El hombre de hoy carece de fe. Hay poca confianza en líderes, ideas e instituciones. Se ha perdido, en las últimas décadas lo que los griegos denominaron *civitas*, es decir, la disposición espontánea para obedecer la ley, respetar el derecho de terceros y rechazar la tentación de enriquecimiento privado a costa de los demás.

Las principales sociedades de Occidente confrontan un conflicto que resulta de una compleja combinación de factores: apetitos que a veces se resisten a límites morales, un sistema político que, de manera creciente, demanda como derechos servicios sociales masivos, y un sentido ético incompleto que, si bien defiende la libertad individual, no siempre acepta los necesarios sacrificios y responsabilidades que demanda vivir en una sociedad democrática. Como consecuencia, muchos burgueses de hoy han dejado de actuar como verdaderos ciudadanos.

Esta realidad va a verse afectada adicionalmente por la restricción resultante de la escasez en algunos recursos, limitación de la cual recién se va a adquirir plena conciencia a nivel planetario en esta década. Por ello, para superar estos problemas, la acción pública en los próximos años tiene que estar enmarcada dentro de una filosofía que plantee nuevas definiciones para la acción política y un equilibrio pragmático entre los derechos y deseos privados de los diversos individuos y grupos.

La tarea no es fácil. Por ejemplo, la urbanización y la masificación -dos fenómenos recientes- van a demandar crecientemente bienes y servicios de uso colectivo. Por lo general, los individuos no suelen valorizar adecuadamente estos servicios -como los sistemas de transporte masivo o la seguridad pública, por ejemplo- porque son uniformes, difícilmente adaptables al gusto individual y consumidos necesariamente, aunque no en la misma medida por todos. Sin embargo, la expansión de los bienes y servicios colectivos requerirá en el futuro de mayores tributos o tarifas más altas para los mismos. El mundo moderno se ha acostumbrado mal al considerar los impuestos no como el costo de bienes o servicios colectivos, sino como una reducción del ingreso disponible. Asimismo, el consumo privado resulta de una selección individual, mientras que el consumo colectivo depende de una concertación impuesta. Ello, agregado a la poca eficiencia de las burocracias gubernamentales vienen ocasionando un aumento significativo en la inestabilidad política, el resurgimiento del terrorismo, el debilitamiento del sistema parlamentario, un creciente rechazo por parte de las clases medias para participar en la acción pública y la fragmentación de los partidos tradicionales. Por todo ello, la acción pública ya no se esmera en la búsqueda de un concierto de voluntades, sino que resulta el producto desigual de una lucha, muchas veces cínica, entre grupos con intereses privados. Y cuando los intereses minoritarios legítimos dejan de recibir el

reconocimiento que merecen, se genera una situación peligrosamente explosiva. Como muchos individuos no están acostumbrados a resistir mucha incertidumbre en sus vidas, y las instituciones tradicionales y los procedimientos democráticos entran en crisis al no poder resolver los problemas cotidianos, la política queda entonces a merced de los temores irracionales, de los revanchismos emocionales o de las ilusiones por un salvador mesiánico. Una obsolescencia rápida de los sistemas políticos puede generar una peligrosa tendencia hacia posiciones extremas, e incluso místicas. Esta polarización constituye, quizá, la amenaza más grave en las últimas dos décadas de este siglo.

Cualquier sociedad no es, finalmente, sino un orden moral que primero, justifica y legitima principios de asignación y distribución de recursos; y, segundo, establece un balance de coerción y libertad para permitir la aplicación de estos principios. Cuando se carece de una filosofía pública, claramente establecida, se pierde la condición fundamental para que una política moderna pueda darse en forma concertada y justa. En tales casos, queda sólo el poder bruto. Y aunque el pueblo obedece al poder, sólo respeta y acuerda voluntariamente en el derecho.

El modelo de la unidad social para los filósofos clásicos fue la familia. A diferencia del sistema ético actual, la concepción aristotélica consideraba la adquisición ilimitada de bienes privados como peligrosa. Un objetivo de acción pública era la restricción del deseo privado. La principal limitación sociológica para usar la familia como modelo de unidad social resulta siendo la escala. Para que los individuos de una sociedad acepten ayudarse y compartir su bienestar y penurias sobre la base de ciertos principios comunes, se requiere que se conozcan lo bastante bien, como en una familia, para poder expresar sus intereses propios libremente y buscar los comunes por concertación voluntaria.

En contraste con esta ética comunitaria, surgieron los tres fundamentos de la sociedad liberal: el derecho a la propiedad privada, planteado por Locke; el mercado libre como mecanismo fundamental para la asignación de recursos, planteado por Adam Smith; y el principio kantiano de que la ley debería ser procesal y normativa.

La doctrina clásica dio énfasis a la moderación en las necesidades y a la limitación de riquezas como virtudes cívicas. La libertad fue considerada en ella como un valor subordinado. La sociedad liberal, en cambio, le dio prioridad a la libertad, así como a la aspiración a la felicidad.

La libertad para vivir como uno desea se basa en un conjunto de razones económicas y éticas. El respeto y la promoción de la iniciativa individual han permitido, en primer lugar, un progreso y creación intelectual muy significativos. Pero esta misma libertad ha generado excesos, así como negligencia en algunos servicios sociales y poca eficacia en la satisfacción de algunas necesidades comunes.

El liberalismo clásico planteó la necesidad de cambiar el imperio de los hombres, entonces existente, por el imperio de la ley. La ley, según los revolucionarios de la época, debía establecer reglas de juego aplicables a todos por igual. Dentro de estas reglas, los individuos quedaban libres para concertar, optar y actuar. Bajo el imperio de los hombres, en cambio, un gobernador o un juez podía establecer discreciones que obligaban a unos más que a otros. Aunque esto se solía plantear por razones de justicia y equidad, ello no disminuía la arbitrariedad ni la coerción.

La sociedad liberal ha tenido una tendencia hacia optar por el imperio de la ley, incluso a costa de una creciente desigualdad en el resultado, porque considera como principal valor la

reducción de la coerción. La intervención del estado, en cambio, ha tenido una tendencia hacia la transformación impuesta en el nombre de la igualdad.

¿Qué es igualdad? ¿Que todos sean considerados iguales ante la ley, o constituye una necesidad pública el que las personas sean menos desiguales? Cuando dos personas cometen una infracción de tránsito, la sociedad tiende a castigarlos por igual, Cuando les cobra impuestos, en cambio, se considera justo que se les trate en forma desigual, exigiendo más de quien más tiene. En estas áreas hay poca discusión. Pero ¿cuál es un tratamiento justo respecto al servicio militar, por ejemplo? ¿Que todos sirvan por igual? ¿Que sea rentado y que vaya el que quiera? ¿Exonerar del mismo a los estudiantes universitarios que estudian una carrera? La regla de lo justo no es en este caso clara. Un ejemplo curioso de este conflicto es que una buena parte de las sociedades burguesas y clasistas -según la concepción marxista- exigen el servicio militar por igual. En cambio, la mayoría de las sociedades comunistas -y supuestamente igualitarias- establecen discriminaciones entre sus jóvenes en función de su talento supuesto, lo cual significa, en buen castellano, el tratamiento desigual en función del poder relativo.

La esencia del argumento liberal lo constituye la premisa de que el hombre es, por naturaleza, distinto en capacidad, necesidades, aptitudes y talento, y que, si bien se debe procurar un trato por igual a las personas, no se debe intentar convertirlas necesariamente en iguales, porque este esfuerzo obliga a determinaciones burocráticas y arbitrarias sobre los grados de diferencia permisibles y de cambio o coerción necesarios. La principal conclusión de este aparente conflicto es que ningún valor debe ser tomado en un sentido absoluto. No existe una regla precisa y explícita que permita alcanzar una distribución óptima entre objetivos muchas veces en conflicto como lo son la libertad y la igualdad. Lo que deber quedar siempre claro, por tanto, es lo que se está logrando y sacrificando de cada valor en el esfuerzo por resolver estas incompatibilidades.

Existe entre los seres humanos, una igualdad de condición referida principalmente al derecho a la vida, a la igualdad ante la ley, a la libertad de conciencia y movimiento, al principio de que a cada ciudadano le corresponde un voto y al conjunto de otras libertades que constituyen los derechos humanos. El principio rector en este caso para la sociedad es el tratamiento por igual. Cuando los individuos en estas instancias son desiguales, debido a una discriminación arbitraria y heredada, la acción pública debe intentar homogeneizarlos para que puedan ser tratados como iguales y para que cada persona pueda ejercitar, plenamente, sus derechos políticos como ciudadanos.

La igualdad de oportunidades, por su parte, constituye la posibilidad, en principio abierta para todos, de acceder a una situación que pueda luego permitir un resultado desigual como consecuencia de la competencia. Este concepto ha sido la definición característica de la igualdad en las sociedades liberales de Occidente, donde la movilidad individual, geográfica y social es considerada como un valor fundamental.

Los resultados de la competencia entre individuos de igual condición y con iguales oportunidades generan, por cierto, grados diferentes de *status*, ingreso y autoridad. El resultado disparaje resulta legítimo en estos casos, porque es el resultado del esfuerzo y el talento de cada quien. Una sociedad puede conciliar la libertad y la igualdad ofreciendo igualdad de condición y oportunidades y permitiendo resultados desiguales en función de la competencia libre.



Ahora bien, como es probable que los individuos más favorecidos pretendan extender ilimitadamente las ventajas de sus logros, existe un campo adicional para la acción pública en impedir que aquéllos en la cima de la sociedad puedan convertir sus posiciones privilegiadas legítimas en ventajas injustas. El principio aplicable para conciliar la libertad con la igualdad debería ser, por tanto, darle a cada uno según su propio esfuerzo, y reducir la influencia ilegítima e indebida del dinero y el poder en la asignación de los recursos. El rol del gobierno en una sociedad es, por tanto, reducir gradualmente las disparidades de condición y oportunidades entre los individuos y contener la influencia indebida de los privilegios ganados en una competencia libre.

Ahora bien, como es probable que los individuos más favorecidos pretendan extender ilimitadamente las ventajas de sus logros, existe un campo adicional para la acción pública en impedir que aquéllos en la cima de la sociedad puedan convertir sus posiciones privilegiadas legítimas en ventajas injustas. El principio aplicable para conciliar la libertad con la igualdad debería ser, por tanto, darle a cada uno según su propio esfuerzo, y reducir la influencia ilegítima e indebida del dinero y el poder en la asignación de los recursos. El rol del gobierno en una sociedad es, por tanto, reducir gradualmente las disparidades de condición y oportunidades entre los individuos y contener la influencia indebida de los privilegios ganados en una competencia libre.

Si los conceptos de igualdad y libertad se refieren al conflicto entre las personas y grupos, la cuestión de la equidad vis a vis la eficiencia se refiere al balance entre el esfuerzo por aumentar la producción de bienes y servicios al mínimo costo monetario y el criterio social de los valores económicos. Se debe ser consciente también que es una cuestión de balance ente el presente y el futuro, ya que, para asegurar una mayor tasa de acumulación de capital, que permita a las generaciones futuras un mayor bienestar, la generación actual debe restringir su consumo.

El mercado cumple una eficiente función ordenadora de la producción, pero también generó, en el pasado, algunos costos sociales importantes. Por ejemplo, el tratamiento de las personas como cosas dentro de la esfera de la producción. O la utilización del medio ambiente como un bien libre, sin costo alguno. Ya se tiene más conciencia de que la satisfacción del hombre en el trabajo, donde gasta la mayor parte de su tiempo y pretende realizar sus capacidades, constituye no sólo un reclamo válido, sino una buena inversión. El medio ambiente, por su parte ya no es considerado como un bien gratuito. Los productores y consumidores son ya conscientes del costo social de la contaminación, que puede ser incluso superior al de reponer activos que, por esta razón hayan quedado obsoletos.

Lamentablemente, en todas estas decisiones de fundamental importancia entre la equidad y la eficiencia, no existe un criterio claro que permita enmarcar la acción pública y ésta es el resultado de un *laissez-faire* absoluto o de negociaciones circunstanciales. Pero ¿bajo qué principios? ¿Siempre para apoyar a los menos favorecidos, o con un criterio de beneficio y costo social? ¿Existe una regla general que permita tomar decisiones acertadas sobre la equidad?

El problema no puede evaluarse solamente con una visión estática, sino que debe incluir un análisis de su proyección futura. La distribución del ingreso influye en la tasa de crecimiento de una economía, así como la tasa de crecimiento influye en la capacidad de distribución futura. Cualquier reparto masivo de excedentes aumenta inevitablemente el consumo a costa de la inversión, sacrificando así el bienestar de las siguientes generaciones.

Por lo tanto, el criterio de beneficiar al máximo a los menos favorecidos de hoy no es necesariamente apropiado para determinar una tasa de ahorro conveniente. ¿Cuál debería ser la tasa de crecimiento económico en una sociedad? ¿Cómo debe financiarse este crecimiento? ¿Cómo habrán de distribuirse sus frutos?

Si queremos legar a nuestros hijos un bienestar mayor al nuestro, ¿cuánto debemos ahorrar para transmitir una capacidad económica mayor a la que hemos heredado? La relación entre el presente y el futuro es más significativa de lo que uno está acostumbrado a pensar.

La selección de una tasa de interés social para el análisis es, en efecto, una decisión política entre la distribución intergeneracional del ingreso y el bienestar. La tasa de descuento del futuro debe ser un indicador que, respetando el principio de equidad, induzca al aumento de la capacidad productiva de una sociedad. Todo ello lleva al tema central de este artículo: el balance entre lo público y lo privado.

El concepto de la ley como un instrumento procesal deriva de la emergencia de la sociedad burguesa, en la cual la satisfacción de los deseos personales fue considerada prioritaria al bienestar del estado. En esta concepción se planteó la conveniencia de una igualdad básica entre competidores y se descartó la interferencia en los resultados como inadecuada. Las restricciones en la libertad y en la propiedad deben, en todo caso, ser generales, computables y aplicables a todos en forma igualitaria. En esta concepción, lo esencial de la ley es su racionalidad formal y no su carácter moralista. Este cambio se debió no sólo al criterio filosófico de considerar la voluntad humana como autónoma y autodeterminante, sino a la terrible experiencia histórica de las guerras religiosas de siglo XVII que condujo a aceptar que ningún grupo debía imponer a otros sus creencias privadas a través de las armas y el estado. La sociedad liberal reconoció, por primera vez en la historia, que la sociedad debe castigar el crimen pero no el pecado, que se pueden imponer los derechos pero no la virtud.

La era victoriana en Inglaterra y los años de la prohibición en los EE. UU. funcionaron, en cambio, con el doble estándar de la libertad económica irrestricta y la regulación moral. Hoy día, muchos postulan, equivocadamente también, el doble estándar inverso: la regulación económica estricta y la irrestricta libertad moral. Hay quienes proclaman la activa participación estatal en todos los asuntos económicos, pero critican también cualquier interferencia con la moral bajo las banderas de la privacidad individual. ¿Cuáles son pues los campos de acción de los sectores público y privado en la economía y la moralidad? ¿No son ambas partes de un mismo todo?

Si existen variaciones significativas de deseos, gustos y juicios, solamente el mercado es lo suficientemente flexible como para responder a estas diferencias. Esto, sin embargo, no niega el hecho de que existe la necesidad de ciertos mecanismos de decisión social para suministrar servicios colectivos adecuados para todos, y para establecer un mínimo de bienes y servicios para cada individuo. Sin competencia, uno queda a merced del monopolio privado o de la indiferencia de la agencia burocrática. Sin la separación de los poderes, uno queda a merced de un poder singular, sea éste una corporación privada o el estado. Sin mecanismos públicos para la transferencia de pagos, o el establecimiento de objetivos sociales, uno no puede lograr satisfacer los mismos. Lo que se requiere entonces es un balance entre las esferas pública y privada, y un cuidado político por las necesidades privadas que satisfaga el equilibrio entre la libertad y la igualdad.

Existió en el pasado una tendencia equivocada al extender los límites de la moral pública hasta incluir lo que es, incuestionablemente, libertad legítima del individuo. Sin embargo, las grandes religiones históricas de Occidente comparten un juicio común sobre la naturaleza del hombre. Consideran que, donde no existen restricciones morales, cuando todo está permitido en público, el impulso por explorar todas las sensaciones, inclusive lo que es aberrante en términos éticos y estéticos, pueden llegar a los excesos de la violencia y la concupiscencia que conducen a la degradación del ser humano. Todas estas religiones plantean que la comunidad debe tener un sentido de lo que es públicamente vergonzoso, porque si no se hunde en una crisis de valores.

¿Qué es lo vergonzoso? No es posible perfilar una línea exacta. Pero lo que sí debe existir es una clara diferencia entre lo público y lo privado. Puede, por tanto, regularse la exhibición pública de la pornografía, o de otros elementos que puedan considerarse degradantes de la personalidad humana. Pero en el marco de las relaciones privadas, las personas deben ser libres para actuar como quieran.

El desafío en estas próximas décadas consiste en la superación del hedonismo, con el énfasis utilitario en el apetito económico, y la retención perfeccionada del liberalismo político, con su preocupación por la libertad y el respeto por las diferencias intrínsecas entre los individuos.

Históricamente, el liberalismo político ha estado vinculado con la sociedad burguesa. La doctrina liberal clásica consideró que la libertad en lo económico era una precondition para el desarrollo humano. Esta condición es necesaria pero no suficiente. Los mercados libres no generan, automáticamente, hombres libres. El liberalismo en su estructura corporativa ha devenido, a veces, en un oligopolio económico; y la búsqueda de la satisfacción de los deseos privados en un hedonismo egoísta que causa a veces trastornos en el tejido social. Ambos requieren ser corregidos. Hay que superar la actitud de una búsqueda ilimitada por la satisfacción de deseos carentes de fundamento moral para la sociedad y hay que reconocer la demanda cada vez más creciente de bienes de consumo colectivo; pero, a la vez, se necesita perfeccionar el liberalismo político para asegurar la libertad del individuo y protegerlo de los poderes de la coerción, sin dejar de otorgarle recompensas diferentes en función de sus méritos y esfuerzos relativos. El árbitro de tal sistema no puede ser el mercado, que es un mecanismo neutro, sino una filosofía pública.

Lo necesario de esta filosofía pública también descansa en la importancia de reestablecer el concepto de legitimidad en una sociedad, lo cual es un requisito fundamental para la continuidad de las instituciones en el campo de lo político y para la dotación de una base social al conjunto de individuos. Se requiere redefinir y establecer objetivos sociales, a la vez que reconocer la distinción entre fines y medios, como condiciones para lograr una política pública. ¿Cómo adoptar decisiones conscientes, que se debatan públicamente, y que tengan una justificación filosófica, en la formación de direcciones para una sociedad? La filosofía burguesa separó lo económico de lo político. Una nueva filosofía debe volverlos a unir, no por una fusión de poderes, sino para una necesaria coordinación de efectos. El sector público requiere de un nuevo marco rector que defina, para el futuro, las necesidades sociales que la acción pública puede intentar satisfacer; mecanismos presupuestales eficaces que le permitan al gobierno cumplir sus funciones sin generar inflación; y criterios específicos de calificación, porque no existe una regla general que sirva para darle a un derecho precedencia sobre cualquier otro.

Ha sido común en la historia, especialmente en momentos de crisis como los actuales, el escapismo de creer que deben existir respuestas finales y objetivas a todas las preguntas normativas, de que se puede un día descubrir, como por encanto, un patrón armonioso, donde todos los valores se reconcilien y encuentren su lugar, de que un día surgirá un líder o una doctrina que le dará forma a esta visión y que gobernará las vidas de los miembros de una comunidad determinada. Esta creencia, alrededor de la cual tanto pensamiento tradicional y doctrina filosófica descansa, es ciertamente inválida. Ha conducido en el pasado, y puede aún conducir en el futuro, a teorías absurdas con consecuencias bárbaras en la práctica.

Lo que se requiere en el futuro es una tensión permanente y creativa entre los campos público y privado, entre los deseos de las personas y las responsabilidades de los ciudadanos. El principal desafío del mundo de hoy es cómo identificar propósitos comunes y mantener, sin perjuicios de ello, el sentido individual del logro; cómo definir las necesidades del individuo y los grupos y encontrar mecanismos para alcanzarlos; cómo lograr transformar, para ello, sociedades como las de hoy, donde la acción pública está muchas veces determinada por la lucha descarnada entre intereses privados

Una filosofía pública requiere también de una condición previa: la necesidad de un lazo trascendental que integre a los individuos de manera tal que, cuando sea necesario, estén dispuestos, voluntariamente, a los sacrificios en su propio interés por el de la comunidad en la que viven y se proyectan.

Lo que en el pasado ha unido a un pueblo ha sido una tradición común o un destino manifiesto. Este lazo resulta muchas veces facilitado por gobernantes carismáticos que le ofrecen al pueblo un sentido psicológico de identificación y la satisfacción de una eventual necesidad de sumisión. Las tradiciones, por su parte, suministran un conjunto de explicaciones y justificaciones del lugar que ocupa un pueblo en el mundo. Un destino manifiesto otorga una sensación de poder y autoconfianza que afirma el lazo de pertenencia.

Las décadas futuras serán tan complejas que no podrán ser interpretadas por líderes carismáticos ni explicadas por doctrinas ideológicas. Las nuevas generaciones, como dice el verso de Machado, tendrán que *hacer camino al andar*. Para no caer en la apatía burocrática, deberán reforzar la autonomía del individuo y afirmar la confianza en la sabiduría de la persona humana como la base sobre la cual puede la sociedad sobrevivir, en un entorno avalado por el consenso y la justicia. Esta base debe afirmarse por la conjunción de tres factores: primero, la continuidad con el pasado, porque sólo en la medida que se entienda mejor la herencia histórica, se es más consciente de lo que se puede proyectar para el futuro; segundo, la conciencia de los límites a los recursos y la conveniencia, por tanto, de otorgar prioridad a las necesidades individuales y sociales sobre los apetitos y deseos ilimitados; y, por último, un acuerdo sobre una concepción de sociedad que le dé a todas las personas un sentido de buen trato y pertenencia y que promueva un progreso mediante el cual las personas se conviertan gradualmente en más iguales, para que puedan ser luego tratadas en forma igual.

### Tres desafíos

---

Las tareas que enfrenta el Perú para alcanzar en el transcurso de la década de los ochenta un desarrollo más dinámico y abierto no serán fáciles. En efecto, la política económica deberá lidiar con complejas y difíciles circunstancias.

El primero de los desafíos lo constituye la conciliación que se debe intentar lograr entre la eficiencia económica y la irradiación social. En este aspecto, la experiencia de muchos países hermanos ha demostrado, suficientemente, tanto la necesidad de avanzar al mismo tiempo en estos dos campos, como los riesgos que surgen sí, al pretender progresar rápidamente en uno de ellos, se descuida demasiado el otro.

La eficiencia económica constituye un imperativo urgente ante las difíciles circunstancias que prevalecen en la actualidad. De hecho, ningún país puede escapar hoy al imperativo de asignar y utilizar adecuadamente sus recursos humanos y productivos ante un cambio tan vertiginoso en los mercados y tecnologías en el mundo.

Pero no basta con asegurar la asignación y el uso eficiente de los recursos económicos. No menos imprescindibles es que ellos contribuyan a satisfacer las necesidades sociales más apremiantes. De allí que se necesita complementar el avance por la senda de la eficiencia económica con el progreso en el campo de la irradiación social.

Ambos requisitos son esenciales. Así, una política que favoreciera sólo la irradiación social, sin tener en consideración la eficiencia económica, generaría medidas distributivas cuyos efectos no sólo no alterarían las causas profundas de la desigualdad y las carencias sociales, sino que serían transitorios y fácilmente reversibles. Del mismo modo, una política que se preocupara sólo en elevar la eficiencia económica, sin la menor atención por la irradiación social de este crecimiento, podría acumular tensiones y frustraciones que, al cabo de un tiempo, pondrían en jaque la vigencia y perdurabilidad del avance logrado.

En síntesis, pues, la conciliación entre el crecimiento económico y el eficiente uso de los recursos por un lado, y la distribución más justa de sus frutos por el otro, constituye uno de los desafíos, a la vez complejo y prioritario, que debe afrontar la política económica del gobierno.

Un segundo y fundamental desafío de la política es contribuir a la modernización de sus agentes económicos: es decir, del Estado y las empresas productivas.

Esta tarea de modernización es esencial. En primer lugar, para lograr la conciliación de la eficiencia económica y la irradiación social a la que se ha hecho referencia. Pero ella tiene, además, otro sentido y otro fundamento igualmente urgente: el de colocar a la actividad productiva a la altura de las transformaciones notables que se han iniciado y que seguirán teniendo lugar en el mundo, especialmente en los campos tecnológicos y energéticos.

Actualmente se enfrenta un proceso de inflexión en el ámbito tecnológico que tiene raíces y proyecciones múltiples y que se empieza a manifestar en las formas más variadas. Cabe sólo mencionar los cambios que se derivarán con el uso generalizado de los miniprocesadores y con la robotización de ciertas actividades industriales.

Las empresas peruanas deben enfrentar los efectos de este acelerado proceso de cambio tecnológico y para ello resulta imprescindible que realicen un vigoroso y constante esfuerzo de modernización de sus formas organizativas y métodos de producción.

Pero no sólo deben de modernizarse las empresas. No menos indispensable es la modernización del Estado, el cual debe reconstituir sus medios e instrumentos de acción a fin de satisfacer en mejor forma los objetivos de asegurar un desarrollo más justo e integrado.

En tal sentido, conviene señalar que no son necesariamente sinónimos la ampliación del tamaño del Estado con la eficacia de su acción. Es preciso insistir que en un régimen de economía mixta, como es el peruano, se deben buscar las formas más eficaces de lograr los objetivos nacionales y de procurar que ellas promuevan, en lugar de que debiliten, el dinamismo de la iniciativa privada. Ello es, por otra parte, tanto más necesario si se tiene en cuenta las limitaciones propias del mercado para resolver algunos de los problemas sociales más apremiantes, cuya solución requiere, imprescindiblemente, de promoción estatal.

Finalmente, el tercer desafío a superar es la formulación de una visión de futuro a largo plazo que sea integral y balanceada. Ningún sector productivo debe beneficiarse a expensas de otro y todo esfuerzo de crecimiento debe orientarse, en última instancia, hacia el logro de una base social suficiente que permita la plena realización espiritual y material del hombre. Es por ello que en este periodo de cambios profundos y de notoria y generalizada incertidumbre, se debe con frecuencia replantear las prioridades y objetivos últimos de la sociedad que se pretende construir para el futuro.

Por qué me voy

---

Héctor Velarde, en un último *Debate* en el cual fuera entrevistado, recordaba a un refinado caballero limeño, muy conocedor del medio, que cuando oía decir que se iba a hacer algo, exclamaba con cierta sorna, antes de saber siquiera de lo que se trataba: “Y para qué se meten!...”

Recordando esa anécdota es que me siento en la obligación de explicar por qué dejo temporalmente esta columna para asumir, en el curso de la próxima semana, la presidencia de la Corporación Nacional de Desarrollo -Conade-.

Creo, en primer lugar, que vivimos un momento muy difícil. Nuestra experiencia histórica - durante la depresión económica en la década de los años treinta y como consecuencia luego de la caída en los precios internacionales de las materias primas al terminar la Segunda Guerra Mundial- confirma que nuestras instituciones y sistemas civiles son todavía escasos y débiles y que tenemos que demostrar que la democracia y las libertades públicas son posibles en nuestro medio durante épocas de escasez.

Lo serán los próximos dos años. La baja en los precios de nuestras exportaciones, que pueden no recuperarse plenamente en ese lapso, ha generado dos brechas: una en el equilibrio externo y otra en las cuentas fiscales. Para saldarlas se requiere, inevitablemente, de austeridad y un estricto orden de prioridades en el gasto del sector público. También resulta posible, si se logra sin perder autonomía, recurrir al financiamiento internacional de agencias multilaterales, las cuales podrían estar, en mayor medida que en el pasado, dispuestas a prestar recursos para proyectos específicos que contribuyan efectivamente al desarrollo nacional.

Lo que no debería hacer el Estado es ampliar significativamente sus niveles de endeudamiento comercial y oneroso, ni dilapidar desordenadamente sus activos, en la previsión idealizada de que, en un futuro, las regalías de una reserva petrolera, todavía por confirmar, permitirían pagar los estragos de cualquier exceso inmediato.

Durante el gobierno militar, en parte para contrarrestar la retracción de la inversión privada, la actividad empresarial del Estado, creció de manera desordenada e hipertrófica. Después del esfuerzo por reducir la inflación manteniendo un respeto pleno por las libertades democráticas, el desafío de ordenar y mejorar la eficacia del aparato estatal es el más difícil e importante. No para restaurar un supuesto orden prerrevolucionario, que nunca existió, sino para garantizar que, si se van a invertir recursos en empresas estatales, ellos generen igual o mayor beneficio que el que se obtendría de dotar de agua y energía a los villorrios olvidados de las serranías, de educar y velar por la salud de la niñez, o de establecer infraestructura para la colonización de la Selva. Esta es, por encima de todas, la principal responsabilidad de Conade.

Hasta ahora, he ejercitado mi vocación de servicio público principalmente a través del periodismo, la docencia y el consejo desinteresado y libre. Ello porque creo que, como dijera

Basadre, los dos males principales del Perú son el abismo social y el empirismo estatal y, por tanto, los cargos públicos suelen ser ocupados más por quienes quieren ser alguien que por quienes pretenden hacer algo. El zambullirse en las marañas del país legal también nubla, por la misma razón, la perspectiva del país real. Por todo ello, cierro con nostalgia una etapa de mi vida, en la cual he hecho algunas cosas sin ser alguien, y en la cual me he sentido libre y puro acumulando autoridad al margen del poder estatal. Pero concuerdo con lo que Sartre dijo: la pureza es una idea de faquires y monjes que los intelectuales muchas veces utilizan a la defensiva como pretexto para no hacer cosas y llevar los guantes puestos. Asumo pues el cargo con legítimo temor, porque el poder corrompe y porque es iluso pensar que se pueda gobernar en el Perú sin mancharse las manos de barro, pero también con genuina esperanza porque creo que es posible, en esta generación, hacer realidad la promesa de la vida peruana.

Sólo espero que cuando regrese nuevamente a meditar, escribir y enseñar, que son en realidad mis vocaciones principales, mantenga la mente limpia, el espíritu abierto y la conciencia tranquila.



Intercampus, febrero 1982

## El rol empresarial del Estado

---

Agradezco la invitación cursada para exponer en Intercampus, un foro calificado y plural, algunas reflexiones sobre un tema de tanta importancia y actualidad como es el del rol empresarial del Estado.

Aprovecho ésta, mi primera exposición pública como Presidente de la Corporación Nacional de Desarrollo, para ratificar en mi nombre, y en el de todo el equipo directivo del Grupo Conade, la expresión de reconocimiento a las más altas autoridades del gobierno por la confianza expresada y la disposición resuelta a ofrecer lo mejor de nosotros para contribuir, en lo posible, a lograr la consolidación del sistema democrático y el cumplimiento de algunos requisitos para avanzar hacia un mayor desarrollo.

¿Qué es el desarrollo? Este término recién se generalizó como un concepto económico hace 30 años, cuando se le empezó a usar indistintamente como sinónimo de crecimiento o progreso. Hoy día es con largueza, la expresión dominante en el lenguaje de la economía política. Por ejemplo, en el mundo de hoy, pocos propondrían la denominación Corporación Nacional de Crecimiento o Corporación Nacional de Progreso para el Grupo Conade.

El significado del término desarrollo no es, sin embargo, muy preciso. Desarrollo ¿con respecto a qué? ¿A sociedades que gozan de un mayor bienestar material, casi imposible de lograr para nuestros pueblos? ¿A lo que fuimos históricamente? ¿A lo que hubiéramos podido ser, si de veras hubiéramos aprovechado efectivamente las oportunidades que tuvimos en el pasado?

Desarrollo implica ciertamente crecimiento, es decir un aumento global y *per cápita* en la producción de bienes y servicios, pero comprende también un proceso de cambios que afecta, parcial o íntegramente, la estructura del sistema social. Sociedad desarrollada es aquella que no tiene miedo al futuro, que participa en el proceso de transformaciones tecnológicas, y que sabe adecuarse en forma ordenada y sistemática a fenómeno permanente del cambio sin perder su identidad. Sociedad desarrollada es aquella que ha logrado incorporar un ordenamiento jurídico como valor fundamental de sus individuos y que cuenta con criterios eficaces y consensuales para la distribución de la riqueza y las oportunidades entre sus grupos, sectores y regiones.

El Perú, en cambio, es todavía un país inmaduro, una nación que aún se va haciendo en su historia, con instituciones y sistemas débiles e inestables, cuya realidad económica es pobre, con poco capital y escasa capacidad de ahorro, pero cuya rica pluralidad geográfica, social y cultural permite aspirar a cumplir, algún día, la promesa de la vida peruana de la cual nos habló Basadre.

Aunque por debajo de lo que el desborde reciente en las expectativas de su población demanda, el Perú, a pesar de todo, ha venido progresando. En las últimas décadas, su economía ha

evolucionado de agraria a minera, pesquera e industrial. Aunque la población se ha duplicado, su ingreso *per cápita* es hoy el doble de lo que era hace 30 años. La esperanza de vida al nacer ha aumentado de 40 a 56 años. El número *per cápita* de médicos se ha quintuplicado, el de maestros se ha triplicado.

Pero a pesar de ello, aún carecemos de una visión común de destino colectivo, de internalización lúcida de lo que representa nuestro mestizaje -con todos sus valores y lastres-, del diagnóstico realista del potencial de nuestros recursos. Un proyecto que defina qué podemos ser y, dentro de lo que podemos, qué queremos ser; una visión de largo plazo que fije objetivos y determine metas.

La Constitución de 1979 plantea el ideal de una sociedad justa, libre y culta; con instituciones democráticas representativas que promuevan la participación popular; basada en el trabajo en el marco de la economía social de mercado; sustentada en la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresas; y donde el Estado se obliga a una función planificadora para promover el desarrollo económico y social del país mediante el incremento de la producción y la productividad, la distribución justa del excedente y el empleo racional de los recursos.

La economía social de mercado considera la intervención estatal. Primero, para contribuir a crear una visión de futuro y, luego, para el ordenamiento sistemático de medios y recursos para alcanzar objetivos. No debe entenderse por este proceso la imposición de reglas concretas por parte del gobierno, sino la búsqueda flexible y participatoria de un orden armónico que se dé como resultado de un conjunto de acciones que una sociedad realiza de manera deliberada, sistemática y congruente.

Además de participar en la creación de un futuro y de cumplir eficazmente con su función de normar y asegurar el orden, el Estado puede intervenir en aquellos casos críticos en los cuales su acción puede generar un mayor bienestar neto para la sociedad que el que se lograría como consecuencia del libre juego de la oferta y la demanda. El Estado no tiene por qué ser un espectador impasible frente a muchos problemas. Puede intervenir en muchos casos, pero dicha intervención debe tener el carácter de subsidiaria, cuando el accionar individual, o su omisión, entre en conflicto con los objetivos sociales y cuando el efecto de dicha intervención, a pesar de sus costos y posibles deficiencias, corrige los resultados inconvenientes de un mecanismo eficiente pero ciego como es el mercado.

¿Cuándo es que funciona bien el mercado y la iniciativa privada? Escojamos un ejemplo sencillo: los restaurantes en Lima. Son bastantes variados, con costos comparativos aceptables, y satisfacen adecuadamente el deseo de comer fuera de casa de personas como nosotros. ¿Cuáles son las características intrínsecas que permiten, en este caso, la eficacia del mercado? En primer lugar, el hecho de que el bien producido, o el servicio que se presta, es divisible y consumible en forma individual. En segundo lugar, la diversidad de restaurantes y el número potencial de parroquianos es suficiente como para que nadie pueda arbitrariamente imponer un precio. Luego, existe información suficiente y movilidad de recursos. Por ejemplo, cualquiera de nosotros podría rápidamente nombrar un restaurante en Lima, dado un tipo y calidad de comida que se desea consumir y un precio que se está dispuesto a pagar. Por último, los ingresos que el restaurante recibe y los desembolsos que paga a sus empleados y proveedores constituyen un estimado aceptable de los beneficios que genera y de los esfuerzos que demanda su operación. Por tanto, las

decisiones referentes a la asignación de recursos que adopte el dueño o administrador del restaurante, en la búsqueda de su legítimo beneficio, no tienen que contraponerse a la buena marcha de la comunidad.

¿Cuándo entonces, funciona mal el mercado? En primer lugar, cuando el bien o el servicio no es individual sino colectivo. Si alguien consume una manzana, ésta ya no debe satisfacer el hambre de otra persona. En cambio, cuando alguien se beneficia de un buen servicio colectivo -un parque o el alumbrado público- éste no se agota porque uno lo aproveche, sino que a la vez sirve a todos, incluso a quienes no están dispuestos a pagar por este bien o servicio. El mercado de estos bienes colectivos -aquéllos que no se agotan porque uno los consume- requiere de algún tipo de intervención estatal porque el mercado no alcanza, por sí solo, una asignación de recursos eficaz.

Un segundo motivo para la intervención reguladora del estado se genera con la aparición de un poder monopólico, que dejado a su libre albedrío, podría elevar arbitrariamente el precio en su propio provecho. Este caso, común en economías cerradas y pequeñas, también se da en aquellas grandes y abiertas para aquellas industrias o servicios con costos marginales decrecientes en la medida que aumenta la producción. A diferencia de los restaurantes, donde la demanda es atendida mejor por un número grande de pequeñas y medianas empresas, el servicio telefónico, por ejemplo, es un caso en que resulta más económico atender una demanda de 200,000 líneas con un solo sistema que con varios que sumen dicho total. Los monopolios naturales son un segundo caso que justifica una legítima intervención estatal.

Un tercer caso se presenta cuando la información que se requiere para tomar decisiones apropiadas es inapropiada. Imaginemos un turista extranjero, recién llegado a Lima, que no entiende castellano ni puede movilizarse con facilidad. Lo más probable es que termine pagando un precio caro por comer mal. Por ello es que, en países con un significativo turismo receptivo, el estado interviene para mejorar el acceso y la calidad de la información sobre los servicios turísticos con el fin de lograr una asignación más eficaz de los recursos. Ejemplo similar de intervención legítima se da cuando la movilización de los recursos es escasa, o cuando el costo de las transacciones es muy elevado.

En cuarto lugar, una actividad puede generar perjuicios sociales cuyo costo real no está incluido en los desembolsos en que se incurren, así como beneficios que tampoco se registran como ingresos. Un restaurante puede ser un foco de infección o de contaminación ambiental. Estos perjuicios no son penalizados por el mercado. Por otro lado, hay restaurantes -como el de Pachía en Tacna, o algunas picanterías en Arequipa- que les dan a sus ciudades un beneficio mayor al que terminan cobrando por los sabrosos platos que sirven. En estos casos, también puede haber razón para la intervención estatal, bien sea para controlar los perjuicios o para promover aquellos beneficios que el mercado no alcanza a registrar bien.

Por último, existen proyectos o unidades productivas que por su trascendencia o importancia pueden requerir de una intervención estatal para asegurar que las decisiones que se adopten referentes a la asignación de recursos en las mismas no contradigan objetivos nacionales. Un ejemplo típico de intervención estatal en este caso se da cuando, por ejemplo, se reserva para nacionales las actividades productivas de cierta significación en las zonas de frontera.

Son cinco, pues, los casos teóricos para plantear la posibilidad y conveniencia de una intervención estatal legítima: bienes o servicios colectivos; monopolios naturales o resultantes de una escasa demanda; mercados ineficientes por la insuficiencia de la información, la poca movilidad de los recursos, o el elevado costo de las transacciones; y finalmente aquellas actividades con economías o perjuicios externos a la unidad productiva, o que son esenciales para el cumplimiento de los objetivos nacionales.

Que el mercado no garantice una solución óptima, no es, sin embargo, razón suficiente para justificar la intervención estatal. Es necesario, además, que los beneficios esperados de dicha intervención sean superiores a los costos de la misma, que muchas veces son subestimados. Hay que evitar siempre que el remedio resulte peor que la enfermedad.

Si el estado decide finalmente intervenir, puede hacerlo de una de estas tres maneras:

Primero, mediante la dación de un marco normativo especial que permita que el resultado de la gestión privada sea congruente con los objetivos sociales.

En segundo lugar, mediante el establecimiento de impuestos o subsidios específicos que consideren los perjuicios o beneficios sociales que el mercado no registra.

Y, por último, mediante la administración directa de la producción de un bien o de la prestación de un servicio.

Las dos primeras funciones -normar y transferir recursos- son inherentes al estado y en ellas es él insustituible. Algunos bienes o servicios colectivos, monopolios, o actividades estratégicas, por ejemplo, pueden ser debidamente controladas por el estado con la dación de leyes o la suscripción de contratos especiales. Otras actividades con economías o perjuicios externos pueden ser reguladas mediante impuestos o subsidios específicos. Sólo si se considera que estos mecanismos resultan insuficientes o inadecuados para interpretar la voluntad social se puede considerar la posibilidad de que el estado intervenga directamente en la producción o prestación de un bien o servicio.

El estado, por su naturaleza misma, debe ser estable. La función de su estructura orgánica es perseverar. Por ello si se analiza con criterios privados, resulta muchas veces poco eficiente y dinámico. Ello se debe a que los principales objetivos de su acción, tan genéricos como necesarios, impiden establecer estándares específicos para asignar recursos y evaluar resultados.

¿Cuántos recursos, por ejemplo, debería invertir el Estado en estudiar y dictar una nueva ley de industrias? Es imposible responder. Si la ley resulta efectiva en estimular una mayor generación de riqueza, cualquier costo procesal sería poco. Si, en cambio, no favorece la misma, cualquier gasto es inútil.

El Estado puede entonces intervenir, inclusive en la administración directa, siempre que, a pesar de sus diversas y reconocidas deficiencias intrínsecas, pueda lograr un resultado neto más eficaz para la sociedad que dejando al libre albedrío la iniciativa individual. De poco sirve, por ejemplo, la eficiencia supuesta de una imprenta privada que produce material pornográfico. De mucho sirve, en cambio, por burocráticas que sean, la educación obligatoria, la vacunación masiva y los proyectos de infraestructura básica.

Este tipo de servicios -educación, salud, infraestructura- no pueden muchos casos librarse a las fuerzas del mercado, porque los ingresos que recibirían las unidades promotoras o productivas no representarían adecuadamente los beneficios que le generan a la sociedad y serían insuficientes para su operación rentable. Estos beneficios, a su vez, aunque obvios, son, repito, difíciles de estimar con precisión. Cualquier estudiante de economía puede demostrar, sin embargo, que la inversión en educar, vacunar, o reparar carreteras, genera una rentabilidad social mayor que la que obtienen muchas empresas privadas en su actividad productiva. Por lo tanto, si aumenta la recaudación tributaria, el gobierno debería dudar en transferir los mayores fondos para estos fines. Existe sin embargo la necesidad de lograr un balance entre los diversos objetivos. Si se elevan los impuestos no sólo se limita la inversión privada, y con ella las posibilidades de crecimiento global de la economía, sino que inclusive puede disminuir la recaudación tributaria en el plazo inmediato. Existe, pues, un límite máximo para el gasto gubernamental, que en el Perú bordea el 20 por ciento del PBI, para no desbarrancarse por el despeñadero inflacionario. Este gasto se debe distribuir entre la estructura normativa del gobierno -administración central y poderes públicos-, la justicia, la seguridad externa e interna, los subsidios específicos y los gastos correspondientes a aquellos servicios cuya conveniencia es socialmente reconocida.

Todo buen gobierno requiere, en este proceso, de la interacción fecunda entre técnicos y políticos, relación tan compleja como necesaria en la sociedad moderna. El político suele desconfiar de la independencia y de la precisión fría y parcial del técnico; el técnico de la espontaneidad impulsiva y globalista del político, difícil de aprehender en términos racionales, pero imprescindible para el arte del buen gobierno. En el marco del Gobierno Central, donde la elección entre alternativas necesarias pero excluyentes obliga a efectuar cotidianamente juicios de valor, corresponde al político, como mandatario de la voluntad popular, la supervigilancia y el control directo de la gestión. Por ello, la burocracia central debe ser leal, incluso antes de ser eficiente. Antes que administrar bien, la tarea de un gobernante es gobernar, es decir, escoger. La obligación del técnico, en el Gobierno Central, es proponer cursos diversos de acción viable para la autoridad, bajo su responsabilidad política, pueda elegir.

Cuando un estado decide intervenir en la producción de bienes y servicios específicos, que se pueden comercializar a un precio que guarda referencia con el beneficio social que generan, lo adecuado es la constitución de una empresa estatal para ese fin. A diferencia de la gestión correspondiente al Gobierno Central, donde los objetivos son genéricos y donde, por lo limitado de los recursos, se requiere decidir continuamente basándose en juicios de valor para escoger entre alternativas que se excluyen mutuamente, en las empresas estatales -a semejanza de las privadas- se requiere, en primer lugar, de una estructura económica autosuficiente, así como de objetivos precisos, medibles y controlables, los cuales exigen, por su naturaleza, una gestión especializada y autónoma para que ésta sea, a la vez, plenamente responsable. En la empresa estatal se modifican los términos de la relación que rige para el Gobierno Central entre técnicos y políticos. Como la autoridad política es capaz de establecer objetivos con precisión, y éstos pueden ser alcanzados con una estructura financiera autónoma, ya no requiere ejercitar un control operativo continuo. Corresponde a la autoridad política en las empresas estatales la tarea suprema de fijar objetivos, la de los técnicos es lograr resultados. Cada quien debe lo suyo sin interferencias ni imposiciones dañinas que subvierten profundamente las sutiles relaciones de las que depende el eficaz desarrollo de una actividad empresarial.

Hubo quienes, en el pasado, creyeron ingenuamente que la estatización de la economía constituía la solución mágica a muchos de los problemas económicos. Que los servicios administrados por el Estado iban a ser más baratos que los administrados por la empresa privada, que la intervención estatal permitiría mejorar la distribución del ingreso y que en el sector público los conflictos resultantes de intereses privados contrapuestos se sublimarían en aras del bienestar social. Estas premisas resultaron falsas. Por eso, conviene ahora analizar con realismo las características y posibilidades de la actividad empresarial del Estado para proyectar su desarrollo sobre bases más firmes y sanas.

La eficiencia relativa de una empresa estatal depende de cuán autónomamente pueda funcionar del poder del Gobierno Central. Toda empresa debe contar con objetivos claros y precisos, una alta dirección capacitada, autonomía de gestión suficiente, una estructura financiera apropiada y, por último, la posibilidad de cometer errores en su operación cotidiana.

Recuerdo haberle oído a Don Julián Bustamante, un empresario que no terminó la secundaria por haber tenido que empezar a trabajar desde niño, una regla llena de sabiduría popular: "En mi fábrica -me dijo- le doy un premio al trabajador que en el año haya cometido el mayor número de errores; al que comete el mismo error tres veces lo despidó."

En los años que estuve estudiando ciencias de la administración en el extranjero, nadie me dio un consejo tan simple y a la vez tan valioso para el difícil arte de gerenciar.

El ejecutivo debe poder errar en su gestión cotidiana, porque su función es tomar decisiones urgentes con información insuficiente. El costo de dilatar una decisión en la actividad empresarial es muchas veces más elevada que el de tomar un curso equivocado. Al ejecutivo de una empresa privada se le permite errar con tal de que, en conjunto, su gestión genere más beneficios que costos. Si se equivoca mucho lo remueven del cargo o la empresa quiebra.

El ejecutivo público, en cambio, sabe que su empresa no va a quebrar. Por lo tanto, termina dilatando al máximo sus decisiones. También actúa así porque sabe que al primer error que le comprueben lo pueden destituir del cargo.

Por ello las empresas estatales resultan subgerenciadas y sobreadministradas. El ejecutivo estatal termina siendo evaluado no en función de si produce más o mejor, sino de su capacidad para poder convencer a todos de que sólo resulta posible producir menos.

Todo ello hace que, mientras en las empresas privadas se suelen tomar decisiones oportunas y con el criterio de maximizar las ganancias, en las estatales es común que se dilaten las mismas y, cuando éstas finalmente se adoptan, el criterio más común es el de minimizar pérdidas. Esta aversión al riesgo, elemento esencial en toda empresa, resulta en extremo ineficiente. Por ejemplo, entre invertir uno, a cara o sello, para intentar ganar dos esta audiencia se dividiría: algunos arriesgarían, otros no. Si la opción fuera invertir uno contra la posibilidad de ganar veinte, todos nosotros aceptaríamos la apuesta sin pensarlo dos veces. Más de un ejecutivo público la rechazaría por el miedo legítimo a terminar preso en el caso de perderla.

Por otro lado, en la empresa privada, como la actividad que desarrolla es específica y los objetivos que se propone son claros, hasta el trabajador de menos rango puede contribuir con su

esfuerzo imaginativo para plantear sugerencias que permitan aumentar la producción y mejorar la productividad.

En el Gobierno Central, en cambio, como los objetivos son genéricos y abstractos, es más difícil que un funcionario de tercer nivel pueda efectuar una contribución sustantiva a las muchas decisiones fundamentales que un ministro tiene que adoptar. Esto hace que los ministerios sean, por naturaleza, centralistas.

Por innecesaria dependencia, las empresas estatales también lo son, sin que exista razón para ello. Es común que sólo en su alta dirección se promueve y estimule el pensamiento creativo, cuando en toda actividad empresarial es de fundamental importancia el aprovechamiento pleno del talento humano en cada uno de sus niveles productivos. La falta de descentralización en las decisiones, más justificable en el Gobierno Central que en las empresas estatales, traba la capacidad inventiva del trabajador que es, finalmente, la verdadera fuente de riqueza de una nación.

Si hubiera que resumir en una frase la solución a las deficiencias que existen en la empresa estatal ésta sería: mayor autonomía. Mayor autonomía no significa, por cierto, menor responsabilidad de la alta dirección de la empresa. Por el contrario, debería significar más. Pero estas responsabilidades no deberían referirse a los métodos, a los procedimientos, al llenado de formularios, a las actuaciones individuales, sino a los resultados alcanzados en el cumplimiento de los objetivos planteados y reconocidos por el equipo gerencial que en conjunto la dirige.

El Perú, desde 1968, sufrió las consecuencias de una expansión acelerada inorgánica de empresas estatales, inspirada principalmente por motivos políticos, carente de criterios técnicos racionales y definidos, sin estudios ni cuadros humanos suficientes. El Estado, en ese lapso, creció numéricamente, cuando lo que requería era fortalecerse orgánicamente. En apenas una década, su cuerpo se hinchó de manera hipertrófica, mientras que sus sistemas nervioso y motor se mantuvieron precarios. El empirismo estatal generó continuamente la subvención de grupos privilegiados, en perjuicio de las necesidades de equipamiento colectivo. Ahora, el Estado es un aparato complejo, confuso y burocrático, del cual el individuo desconfía no sin razón.

Por ello, es necesario enfrentar resueltamente el complejo problema de la codificación de la intervención estatal en el sistema económico. Objetivo difícil de alcanzar en un medio acostumbrado a intentar la solución de cualquier problema duplicando personal y presupuesto, pero impostergable para permitirle al gobierno centrar sus energías políticas en las difíciles decisiones que requiere adoptar para el buen manejo de una sociedad como la nuestra y para asegurarle, al sector privado, reglas de juego claras que permitan proyectar su desarrollo con confianza.

El Estado, según el Art. 113 de la Constitución, "ejerce su actividad empresarial con el fin de promover la economía del país, prestar servicios públicos y alcanzar los objetivos del desarrollo". Asimismo, según reza el Art. 114, "Por causa de interés social o seguridad nacional, la ley puede reservar para el Estado actividades productivas o de servicios. Por iguales causas puede también el Estado establecer reserva de dichas actividades a favor de los peruanos". Contribuir a la definición específica del campo de acción, así como plantear los mecanismos de operaciones apropiados para las empresas estatales, constituye, creemos nosotros la primera gran responsabilidad del Grupo

Conade en su esfuerzo por plasmar, gradualmente, una filosofía sana para el buen accionar del sector público.

En este sentido, quisiera agregar a todo lo ya mencionado, un criterio rector de política. Ninguna inversión de una empresa estatal debería generar una tasa interna de retorno inferior a aproximadamente 12 por ciento anual. Ello no significa que el gobierno no pueda subsidiar lo que así decida -bien sea el precio del arroz o de los servicios de transporte- pero en tal caso, el directorio de la empresa afectada debe tramitar, ante el ministerio correspondiente, la transferencia de este subsidio directo para que sea considerado como ingreso de operación de la empresa y poder así cumplir con el objetivo de generar suficientes utilidades como para asegurar la expansión continua de sus operaciones. De esta manera, no solo se lograría orden y claridad en las cuentas operativas sino que se tendría, permanentemente, el registro del costo real del subsidio, lo que permitiría que la autoridad política, con pleno conocimiento de causa, adopte las decisiones que considere convenientes con respecto al mismo.

Si hubiera que definir un único patrón de medida para evaluar la marcha de una empresa estatal productora de bienes y servicios, ésta sería la capacidad de la misma para autofinanciar su propia expansión. En el Perú, durante el último lustro, ésta ha sido nula o muy limitada para la mayoría de las empresas que pertenecieron al sector público.

Ello se ha debido a dos razones fundamentales: una estructura tarifaria muchas veces insuficiente y escasez de personal calificado. Al Perú le faltan cuadros humanos capacitados y con tradición en el servicio público. Actualmente, el Estado administra un gasto cercano a 6,000 millones de dólares anuales y cuenta, para ello, con una cantidad insuficiente de expertos capaces y honestos y con trayectoria en el servicio público. En este sentido, la contribución temporal de profesionales del sector privado -en busca de experiencia, prestigio y poder- sirve de poco. Ningún conglomerado privado que administre 6,000 millones de dólares al año operaría con personal prestado. El Estado debe formar sus propios cuadros y no depender de la buena intención de los intereses temporales de personal prestado. Tarea de largo plazo y difícil, pero no por ello postergable ni menos necesaria. Consiste básicamente en formar 20 jóvenes anualmente, asegurándoles una retribución apropiada a lo largo de los treinta años que duraría su servicio público, lapso en el cual, más que dedicarse a ascender en una rígida escalera burocrática, deberían cumplir funciones *ad hoc* diversas en distintos sectores, regiones y organismos. Ello permitiría crear, en quince años, un cuerpo civil de 300 administradores públicos, con mística, un código ético y sentido de compañerismo. Conade pretende plantear al gobierno una recomendación en este sentido y podría constituirse en el Alma Mater que contribuya a su capacitación permanente y en la cual haya lugar para el debate creativo y la investigación aplicada en estrecha interacción con el sistema de la universidad peruana.

¿Qué va a hacer Conade en el futuro inmediato? En primer lugar, va a presentar próximamente al Congreso un proyecto de ley para que, en función, de los criterios que hemos expuesto esta noche, el Poder Legislativo pueda discutir y aprobar el marco normativo conceptual que defina los alcances y límites de la intervención estatal en el marco de la actividad empresarial.

La búsqueda de un acuerdo nacional en este sentido no es solo una aspiración de Conade, sino un mandato contenido en el Plan de Gobierno de Acción Popular, así como en el del principal partido de oposición.



Seguidamente, Conade va a proponer una clasificación de las empresas que actualmente cuentan con participación estatal, en función de las categorías que se planteen en el proyecto de ley. Para aquéllas que no correspondan dentro del marco de acción del Estado, Conade solicitará la autorización para proceder, en cada caso, a una acción congruente con lo que debe ser su estructura futura de propiedad.

Este análisis se efectuará tomando en consideración, con sentido pragmático, que las empresas son entes vivientes, así como el hecho de que, si el Estado participó injustificadamente en una actividad empresarial, ello no significa automáticamente, que convenga proceder a una privatización inmediata.

Permítaseme concluir con una invocación personal. Todos nosotros, cada quien desde su respectiva función, somos dirigentes de este Perú, dulce y cruel.

El liderazgo responsable en un país como el nuestro -con tan rica tradición mitológica y un sentido mágico de las cosas- obliga a la ingrata tarea de ejercitar, cotidianamente, la dura realidad del desengaño.

Pero este realismo, tan necesario, debe ser divulgado con esperanza, con la convicción de que el momento actual corresponde no a un caos insoluble sino a una crisis superable, la cual debe abordarse con inteligencia y voluntad colectivas. Es cuestión de razonar ante los problemas, de diagnosticarlos con acierto, y de arremangarse la camisa para trabajar en su solución. Situaciones como la actual son muy difíciles de superar sin una conciencia cabal de los problemas, la movilización de las voluntades y el esfuerzo persistente en el trabajo diario.

Esto es lo que, en el campo de la actividad empresarial del Estado, el Grupo Conade pretende emprender en el futuro inmediato, con espíritu de generosa entrega, sin falsa modestia, pero con humildad.

## El ordenamiento externo no basta

---

Cuando Carlos Rodríguez Pastor asumió la cartera ministerial, su concepción global de la posición de la economía peruana en el marco de la situación financiera internacional era más optimista que la actual. Desde entonces, ha tenido que concentrar sus esfuerzos y limitados recursos humanos en el diseño y la ejecución exitosa de un programa de reprogramación de pagos con el exterior, condición necesaria pero no suficiente para superar los agudos problemas que la economía peruana actualmente enfrenta.

No es poca cosa el reordenamiento financiero logrado, aún a costa de la desatención temporal del sistema productivo interno, castigado, adicionalmente, por una secuela de desastres naturales. Cada vez son más los que reconocen que después de una década con abundante crédito externo, fácil y barato, las economías de América Latina van a sufrir las dramáticas consecuencias futuras de un crédito externo escaso, difícil y caro.

El crédito abundante, fácil y barato facilitó en el Perú la importación de alimentos, lo cual generó una despreocupación general por la caída en la productividad relativa del sector agropecuario; permitió la implementación acelerada de varios megaproyectos, para los cuales no se calculó nunca bien cuánto era la rentabilidad financiera; estimuló el crecimiento desmedido de las empresas estatales y el gasto público, con lo cual se intensificó un proceso inflacionario aún no controlado; y soltó amarras a la imaginación de las Fuerzas Armadas latinoamericanas para iniciar una costosa carrera armamentista durante la última década. Los *Mirage* adquiridos recientemente por la Fuerza Aérea Peruana, por ejemplo, cuestan tanto como todo lo perdido en el Norte y Sur este año como consecuencia de los desastres naturales. Finalmente, para colmo del absurdo, se recurrió muchas veces a crédito externo para subsidiar el consumo -gasolina a nueve soles el galón- sin la mayor preocupación por saber cómo se iba a generar los recursos para devolver la deuda contraída.

El crédito escaso, difícil y caro requiere, sin duda, de una revisión integral de esquemas y prioridades, proceso que va ser difícil asimilar en términos sociales y políticos. Requiere, en primer lugar, un dólar caro; para que muchos lo quieran generar vía exportaciones, y pocos lo quieran utilizar vía importaciones. Requiere de un salto cualitativo en la productividad agropecuaria, para la cual se tendrá que adoptar medidas drásticas, como establecer un impuesto a la tierra y al agua. Requiere de una represión de las expectativas de consumo interno para generar el ahorro suficiente que compense la escasez de flujo externos. Requiere un Estado fuerte, pero no necesariamente grande. Requiere rescatar, como ventaja comparativa, la inventiva y la habilidad artesanal innata del peruano, hoy día más orientadas a la economía informal. Requiere del potenciamiento efectivo del proceso de integración regional, mediante una efectiva liberalización del comercio interandino. Requiere de una desconcentración acelerada del poder central en beneficio de órganos de decisión regionales y municipales, más autónomos y representativos. Requiere del propósito común para

abandonar un costoso armamentismo e invertir los limitados recursos fiscales en educación y salud. Requiere, por último, de una actitud pragmática, dialogante, concertadora y participatoria, para hacer de la democracia no una farsa formal sino un proceso vital de búsqueda de consenso y objetivos comunes.

## Las empresas estatales

---

En la década del cincuenta, el gasto del sector público peruano fue de 8 a 10 por ciento del PBI y, a excepción de los bancos de fomento, muy pocas otras instituciones del Estado merecían el nombre de empresas.

En la década del sesenta, si bien el gasto del sector público aumentó, la participación de las empresas estatales en la economía se mantuvo en términos relativos. La Empresa Petrolera Fiscal puso en marcha la refinería de La Pampilla. Pero fuera de esta inversión, de algunos servicios públicos y los tradicionales estancos de coca, sal, alcohol y tabaco, las instalaciones industriales del sector público se reducían a los astilleros de la Marina, la planta siderúrgica de Chimbote construida por la Corporación Peruana del Santa, las plantas de fertilizantes de Cachimayo, de cemento en Yura y la deshidratadora de alimentos en Arequipa, todas estas implantadas en programas de reconstrucción después de los terremotos que afectaron a Cusco y Arequipa en los años cincuenta.

El gobierno militar careció de una filosofía pública que delinea la acción de las empresas estatales. El crecimiento de las mismas entre 1968 y 1975 fue consecuencia de algunos objetivos vagamente delineados en un horizonte incierto y con un marco de restricciones desconocido. Los ideólogos de la revolución postulaban que una "propiedad social"-nunca bien definida- iba a ser el sector que finalmente predominaría en la economía.

Fue por ello que, durante la década del setenta, el gobierno se mostró incapaz de aprobar una ley normativa de empresas estatales, a pesar de que borradores para ésta circularon por varias oficinas del gobierno desde 1971.

Por lo tanto, no sólo la actividad empresarial del estado creció significativamente -de 18 empresas en 1968, ó 40 si se toma en cuenta aquellas agencias de Gobierno Central convertidas después en empresas, al nivel máximo de 174 registrado en 1977- sino que lo hizo en desorden descoordinadamente y sin objetivos claros. Para los ideólogos de la Primera Fase del gobierno militar, las empresas estatales no eran sino una etapa transicional hacia la nebulosa propiedad social.

La abundante disponibilidad de recursos en los mercados internacionales de capitales facilitó este crecimiento acelerado y desmedido. Durante la década del setenta, del costo de inversión total de los proyectos iniciados por empresas estatales, sólo un octavo fue financiado con recursos propios de las empresas e incluso una parte significativa de las transferencias del Gobierno Central fue financiada por el Estado mediante endeudamiento.

En la Segunda Fase del gobierno militar, dos comisiones multisectoriales -la segunda con participación activa de representantes del sector privado- examinaron los problemas básicos de las empresas estatales y propusieron recomendaciones sobre cómo resolverlos. La necesidad de dotarlas con objetivos claros, una estructura realista de precios y una mayor autonomía fueron

identificados desde entonces. Las normas que obligaban la transferencia de utilidades al Gobierno Central fueron criticadas por confundir a éstas con las disponibilidades de caja de las empresas. Ambas comisiones opinaron que los sistemas de Contraloría General “asfixiaban, inmovilizaban y estrangulaban a las empresas estatales”. Los controles se aplicaron de manera tal que constituían un “abuso de autoridad que ocasionaba una ruptura de la autoridad institucional y gerencial”. La conveniencia de privatizar parte de la cartera, así como de contar con directorios y gerencias profesionales y estables en aquellas empresas que se mantuvieran en propiedad del Estado, fueron ratificadas ya desde 1976. Hasta ahora, sin embargo, se ha avanzado poco en este sentido. Siendo un tema de largo plazo, muy pocos en el gobierno, en el de entonces como en el de ahora, están dispuestos a enfrentarse a la crítica política defendiendo una posición integral y coherente en un tema tan complejo y del cual pocos beneficios electorales se pueden lograr en el corto plazo.

Hay, para empezar, mucha ignorancia sobre el tema la mayoría de la opinión pública, y los políticos, por cierto, no consideran a las empresas estatales como pertenecientes al Estado pero distintas al Gobierno. Una empresa, para ser considerada como tal, debe ser creación deliberada para el logro racional de objetivos específicos en el tiempo. Como la producción implica un proceso tecnológico para la transformación de insumos en productos, una empresa requiere de una organización adecuada y una jerarquía con un mínimo de estabilidad para el proceso de toma de decisiones Su finalidad última es alcanzar una optimización microeconómica a través de la asignación eficiente de recursos escasos a fines alternativos.

Legislación reciente, por ejemplo, obliga a las empresas estatales a solicitar autorización específica del gobierno para contratar personal, elevar remuneraciones, alquilar o comprar inmuebles y gastar más en gasolina, publicidad o sobretiempo. Es evidente que una empresa debería ser evaluada en función de los resultados que obtiene en el cumplimiento de sus objetivos más que respecto de cuánto gasta y en qué. También es cierto, sin embargo, que se carece aún de un sistema de planeamiento y control que permita precisar bien estos objetivos y evaluar así la *performance* de las empresas del Estado.

En el tema de las empresas estatales, queda por completar un marco normativo que -más allá de precisar las empresas que conviene privatizar- establezca procedimientos para la definición de objetivos, el respeto a una autonomía operativa, la evaluación de la gerencia por resultados, la disminución de exceso de personal y activos, el saneamiento financiero y una revisión realista de los programas de inversión.

Mientras ello no se logre, las empresas estatales seguirán actuando en el Perú como equipos de fútbol que juegan en una cancha sin arcos. Resulta absurdo entonces que se les exija que anoten goles.

## Carta abierta al nuevo al nuevo presidente

---

País de demasiadas oportunidades perdidas llamó Basadre al Perú. País dispar, desigual, en formación y ebullición, país de choques y mezclas, de riqueza muchas veces malgastadas, de grandes esperanzas súbitas y largos silencios, de exaltaciones desaforadas y rápidos olvidos.

País por traducir, llama Macera al Perú, donde todos quieren ser algo distinto de lo que son. País de logreros que es, a la vez, y por fortuna, un país por lograr. País que merece mucho más de lo que consigue. País interrumpido y cíclico, sin renuncia e irrevocable, atrapado hoy día en un clima de incertidumbre, violencia y miedo.

La realidad política en cualquier sociedad, pero sobre todo en el Perú de hoy, está preñada de agudas contradicciones. Una primera se origina porque cada ser humano, independiente en su destino y voluntad, depende de los demás para su vida social. El afán de independencia, la legítima aspiración por la libertad, resulta muchas veces incompatible con la dependencia efectiva que cada quien tiene en su relación con los demás.

La intuición natural de la justicia que el hombre trae al mundo con su alma constituye una segunda causa de conflicto cuando ésta es crudamente contradicha por la dificultad de satisfacerla. Los peruanos nacen desiguales aunque muchos sintamos que debieran ser más iguales.

Para su realización plena, estas aspiraciones de libertad y justicia requieren de un orden, es decir, de un poder. Una tercera contradicción se genera porque muchos seres humanos tienen una tendencia al abuso. Resulta que sin poder no hay orden ni, por lo tanto, la posibilidad de conciliar la libertad con la justicia. Con poder, sin embargo, se genera el abuso de poder, que a su vez corroe la libertad y la justicia.

Gobernar consiste, debiera consistir creo yo, en hallar a este misterio respuestas razonables y humanas que se ajustan a tiempo y lugar. Para ello en el Perú de hoy es necesario en primer lugar, asumir y afrontar lo que somos: un país pobre, plural, inmaduro, que no sabe lo que puede ser, que no sabe lo que quiere ser, que para afrontar una de las crisis más agudas de su historia republicana requiere de un ordenamiento coherente y sistemático de objetivos, recursos y medios, proceso tan ajeno a su carácter y cultura.

Para progresar el próximo lustro, Señor Presidente, no requiere de enmiendas constitucionales sustantivas, ni de cataratas de nuevas y avanzadas leyes, ni del diseño elaborado de novedosos proyectos. Necesita sí, y mucho, de una mejoría sustancial en la eficacia de sus actuales instituciones y empresas, hoy tan débiles y maltratadas, a través de un proceso en el cual ellas mismas sepan cuestionarse sus direcciones, objetivos y propósitos, en el marco de una perspectiva que el gobierno debe perfilar para la percepción realista pero visionaria de nuestras posibilidades futuras, por encima de la carga pesada de los problemas cotidianos y del justificado temor por las limitaciones existentes.

“Nosotros los españoles -leemos en una novela ya centenaria en la cual los peruanos nos podemos ver retratados- conscientes del triunfo instantáneo posible de una idea sobre otra, creemos absurdamente que con igual rapidez puede triunfar la idea sobre las costumbres. Cambiamos de leyes, pero no de realidad. Y las costumbres las ha hecho el tiempo con tanta paciencia y lentitud como ha hecho las montañas. Sólo el tiempo, trabajando un día y otro, las puede transformar.”

En dicho cambio, resulta necesario mantener dos logros indiscutibles del actual gobierno: la plena libertad de prensa e información y la alternancia democrática de autoridades a través de elecciones intachables. Si la democracia es el gobierno por la opinión pública, no hay democracia real donde no exista plena libertad de expresión. Porque las elecciones presuponen un cuerpo electoral libre de escoger qué opinión va a elegir, y si hay opiniones prohibidas no hay elección, y si no hay elección no hay elecciones.

“Qué sistema político tienen ustedes aquí?”, cuenta un filósofo español que le preguntó a un uruguayo que con él iba a bordo entrando hace años en el puerto de Montevideo. Este le contestó: “Aquí hay dos partidos: uno integrado por todas las personas decentes, activas y patrióticas del país; y el otro por todos los holgazanes y sinvergüenzas”. Para agregar con mucha sabiduría: “Nuestro problema es que no sabemos cuál es cual”.

Y es que la Fe en algo, no importa bien en qué, impulsa siempre a crear por acción colectiva una Iglesia y toda Iglesia termina necesitando una Sacristía. Y tan pronto uno se descuida, como le pasó a Acción Popular en el último lustro, los fieles se encuentran con que la Iglesia termina siendo más grande que la Fe y la Sacristía mucho más importante que la Iglesia.

Registre con cuidado el inventario que recibe, Señor Presidente, pero no haga leña del caído. Los tribunales de sanción terminan por despertar compasión y simpatía por los acusados. La opinión pública sabe quién ha sido honrado y quién no. Que caiga sobre los últimos el peso de la ley pero aplicada según los procedimientos regulares de un Poder Judicial independiente. Persiga sí con todo rigor a aquellos partidarios suyos -no van a faltar- que cometan delito y diga “me equivoqué” cada vez que sienta haber cometido un error, pero especialmente cuando alguien traicione su confianza. El pueblo no lo va a juzgar por las demandas que interponga desde el poder contra sus adversarios, sino por la virtud que exija de sus amigos. La política, decía Platón, es el arte de cuidar rebaños de animales bípedos. Tan necesario como ligar con ataduras espirituales la parte inmortal de sus almas, es amarrar fuertemente y con lazos humanos su parte animal.

Su tarea esencial es escoger: objetivos, prioridades, personas, sistemas; no dispersarse en el desarrollo de los detalles ni en su análisis. Si para proyectar una nueva imagen o para impresionar a algunos ingenuos quiere reemplazar las maquetas palaciegas de Fernando Belaunde por pantallas multicolores de computadoras sofisticadas, en buena hora y que de ellas goce; pero, para gobernar, mejor le serviría una antigua moneda de a sol que le permita decidir, cara o sello, todas aquellas disyuntivas en las que su juicio termine en conflicto con su instinto. Porque, en momentos como el actual, el peor error sería dejar de optar.

Y que tenga Usted suerte. A sus adversarios que durante la campaña electoral se empeñaron en describir con esfuerzo digno de mejor causa las fantasmagóricas desgracias que se cernían sobre el Perú en el caso de su anunciado triunfo, no habría que exigirles mucha imaginación

para pintar el panorama negro de nuestro país en el caso de su fracaso. El supuesto salto al vacío que según ellos constituía su elección no dejó

de generar angustia entre los que por usted votaron. Pero ella fue superada por el instinto telúrico y aluvional de un pueblo que, al nominar presidente para el próximo lustro, abriga la secreta esperanza de haber iniciado la formación de un estadista para los próximos cuarenta años. No traicione usted esa ilusión presidente García.



## Compás de Espera

---

Durante las vacaciones que tomará el presidente electo Alan García en Egipto y Grecia, después de su visita oficial a Italia, deberá adoptar dos decisiones esenciales: su estrategia personal frente al Congreso del APRA que ha convocado para el próximo mes y las precisiones económicas del programa de gobierno que empezará a aplicar desde su inauguración el 28 de julio.

En el Congreso del APRA tiene todas las de ganar. Político desde hace veinte años, su juvenil apariencia cubre una habilidad que no sólo proviene de su agudo instinto sino de una larga experiencia partidaria. Va a lograr, a pesar de eventuales discrepancias de carácter anecdótico, un control férreo del partido. Posiblemente se apruebe la tesis recomendada por sus asesores: ser aclamado como Presidente y constituir una Secretaría Colegiada en la cual se dé cabida a todas las tendencias al interior del mismo. Ello no haría sino formalizar un poder que García ya ejerce de facto sobre sus correligionarios.

La precisión específica de un programa de gobierno, en cambio, le va a ser más complicada. No sólo porque la administración de un aparato burocrático hipertrófico y quebrado es una tarea distinta al manejo del juego del poder partidario, sino porque -quizás- sus reconocidas virtudes para esto último pueden resultar defectos cuando se trate de definir objetivos, delegar funciones, conformar equipos y obtener resultados. El Partido Aprista, en su larga y accidentada historia, ha sido de todo menos una escuela de ejecutores. Bien lo sabía Haya de la Torre que procuró primero educar antes que gobernar. Para tener éxito en la administración de una crisis como la actual, García va a requerir definición clara de objetivos viables, un programa integral y consistente para alcanzarlos, y el reclutamiento de un equipo calificado para ejecutarlo.

Para el gobierno, los apristas tienen algunas ventajas y no pocas limitaciones. Ventajas en su organización nacional y pluriclasista, la inusual tradición de honradez de algunos líderes históricos y la disciplina y mística colectiva de la militancia. Desventajas son la poca experiencia operativa con la que cuentan en sectores como finanzas, petróleo, organización empresarial y diplomacia. Hay sectores -como salud, trabajo, vivienda, seguridad social, etc.,- donde profesionales apristas compiten bien a nivel nacional. Sin embargo, completar un gabinete y gobierno con personas igualmente capacitadas y experimentadas en cada sector requeriría necesariamente de la convocatoria de independientes.

¿A quién o quiénes convocará el presidente García? Se puede identificar hasta cuatro canteras de las que podrá escoger: sus amigos personales, entre quienes destacan personas como Luis Gonzales Posada, Héctor Delgado Parker y Manuel Romero; los miembros de los grupos -el Sode y la Democracia Cristiana- que lo apoyaron en su candidatura, el equipo de independientes que colaboró en la Conaplan, y el grupo vinculado al Cedep, cuya figura más visible es el politólogo Carlos Franco.

La Democracia Cristiana puede aportar técnicos en diversas disciplinas, pero estas son esencialmente las mismas en las cuales el APRA puede bailar con su propio pañuelo. El nombramiento de demócratas-cristianos obedecería, por tanto, más a una decisión política que a una necesidad real de reforzamiento del equipo de gobierno aprista.

No se puede decir lo mismo del Sode, donde Javier Silva Ruete y Manuel Moreyra sí tienen experiencia que aportar en diversas áreas del manejo de la política económica. Ambos tienen, además, la capacidad de convocar a un cuadro de tecnócratas calificados. Los problemas para ello son de diversos tipos. Primero, una resistencia de los dirigentes apristas a tratar con el Sode en conjunto. Luego, una diferencia de actitud entre Silva Ruete y Moreyra. El último, por ejemplo, le entregó el año pasado un informe a Alan García respecto de su posición -o la de Sode- sobre “lo que es posible” hacer en el periodo 1985-90. Con una visión integral, el documento plantea cinco programas: de estabilización a corto plazo, con metas fiscales, externas, monetarias, de precios y remuneraciones; de recuperación económica, con énfasis en el agro, la exportación no tradicional, el empleo y la industrialización; de renegociación de la deuda externa; de generación y mejor uso de las divisas; y, por último, de apoyo social. Moreyra es consciente en su propuesta del estrecho margen de maniobra existente, de la ineficacia relativa del aparato estatal y del peligro de aplicar en este momento propuestas heterodoxas que, aunque imaginativas en el papel, resultarían inconsistentes en la práctica. Su lema parece ser “despacio, que tengo prisa”. Ciertamente que a más de uno, entre los apristas y asesores personales de García que han revisado el documento, su pragmatismo no les suena suficientemente “nacional, democrático ni popular”.

A Javier Silva Ruete, en cambio, más que una coincidencia en el diagnóstico de la situación, le parece esencial que se le otorgue, en caso de ser llamado, un liderazgo claro, incluso para manejar una propuesta algo más arriesgada que la de Moreyra. Sin embargo, su condición de senador que completa la mayoría aprista en el Senado limita su capacidad de participar en el Ejecutivo. De otro lado, para alguien de su experiencia, la presidencia de la Comisión Bicameral de Presupuesto, o la de Economía en la Cámara Alta, le otorgaría un poder casi tan grande, más permanente y menos riesgoso que asumir la cartera de la Av. Abancay.

La Conaplan debería ser la cantera natural de recursos humanos para el próximo gobierno. El programa elaborado por ella, como es lógico, ha sido más específico y sectorial pero menos integral que el de Moreyra en el sentido de que no ha logrado “cuadrar” los deseos con las posibilidades. Algunos ministros ya designados provienen de la Conaplan -aunque no de su comisión central- y Luis Alva Castro probablemente sea Premier, no se sabe aún si sin cartera, o en Economía, Agricultura o la Cancillería que es donde él preferiría estar en caso tuviera que aceptar un ministerio. El programa económico a corto plazo de la Conaplan viene siendo coordinado actualmente por José Palomino quien rechazó la presidencia de Petroperú con la expectativa de obtener la presidencia de Conade. La precisión de un programa monetario concreto, sin embargo, todavía está por lograrse. Y a Juan Candela, funcionario aprista del BCR, lo tildan de “monetarista” cada vez que menciona la necesidad de ajustar las demandas sectoriales a las posibilidades de la aguda crisis fiscal.

Las propuestas más imaginativas, pero también más riesgosas, las recibe Alan García de Carlos Franco. Siendo ambos esencialmente políticos, la tentación de “lo deseable” supera en su diálogo a la conciencia de los límites. Daniel Carbonetto, también del Cedep, preparó en marzo del año pasado un documento titulado “Para una Nueva Estrategia Económica”, publicado en la revista

Socialismo y Participación. En él se plantea “la reactivación del mercado interno, el consumo masivo y la demanda efectiva teniendo como eje fundamental el incremento del salario real, el desestrangulamiento de la oferta potencial industrial y agrícola y el uso planificado y controlado de las divisas”. Todo ello en el marco de una concertación alrededor de un predominio estatal. Los instrumentos planteados para alcanzar algunos de estos objetivos no dejan de ser sugestivos y estimulantes para una discusión académica, pero resultan todavía insuficientes para basar sobre ellos una política económica integral en una crisis como la actual. Los exiliados chilenos que deambulan por el mundo podrían dar testimonio de los riesgos de otorgar aumentos irresponsables en los salarios que no vengán acompañados de aumentos efectivos en la productividad. Respecto de la deuda externa, la propuesta planteaba, entre otras cosas, “no pagar más del 20 por ciento de las exportaciones”, lo cual implicaría en la actualidad un ajuste, porque un año después de escrito el documento apenas se paga 10 por ciento; así como “la superación de toda condicionalidad del FMI”, frase que más parece extraída de un discurso político que de un trabajo técnico; y “una activa coordinación con los estados latinoamericanos, especialmente Argentina y Venezuela”, cuando es a todas luces evidente que tan loable propósito no tiene, por ahora, mayor eco en la región. Los presidentes Alfonsín y Lusinchi no van a saltar al vacío por un programa basado en sustentos tan frágiles.

Tal vez lo que le convenga al Perú y lo que finalmente promueva Alan García sea una integración apretada de todas estas propuestas, en las que es posible encontrar algunas coincidencias. Sin embargo, hasta la fecha, poco es lo que se ha logrado en tal sentido y el ambiente entre los distintos grupos es más de recelo mutuo que de discusión franca. Es que son muchos los interesados en el *juego de sillas* político y en el manejo de las influencias que acompaña a toda definición. Alan García tendrá que optar por uno de los caminos antes del 28 de julio, o forzar una aproximación entre las distintas posiciones, o -lo que sería peligroso- embarcar a todos los tripulantes en la nave para que resuelvan sus discrepancias en alta mar. En tal caso, los más serios entre sus potenciales asesores podrían no querer subir a bordo, de hacerlo, la navegación podría resultar un *pandemónium* por querer juntar agua con aceite en medio de la tormenta.

Dividir para reinar dice el refrán. Ello, sin embargo, servirá más para obtener el apoyo partidario a una gestión que se inicia que para definir y poner en marcha un programa de gobierno eficaz. La travesía que se avecina va a ser muy difícil para que la tripulación pierda el tiempo en plena marcha discutiendo sobre nortes y velocidades. El capitán al mando, antes de embarcar, debe definir un rumbo preciso y reglas claras para organizar una tripulación con un mínimo de eficiencia.

## El futuro gobierno aprista

---

A dos semanas de asumir el poder, el primer gobierno aprista parece colmado de buenas intenciones pero carente aún de un programa económico integral y consistente que permita superar los actuales y agudos desequilibrios financieros, negociar la deuda pública externa sobre bases reales y mutuamente aceptables, y establecer el conjunto de condiciones mínimas que permitan aumentar la eficacia del sistema productivo y peruano, así como promover una acumulación de capital que sea más austera y eficiente.

La primera ilusión en la que seguramente va a caer el próximo gobierno es suponer que el ajuste necesario para alcanzar un mayor equilibrio externo y fiscal es evitable a través de una mayor intervención del Estado en la asignación de los recursos económicos. Muchos de sus asesores creen que la insuficiencia crónica de moneda extranjera es manejable a través de un control más estricto de su flujo y uso y que el déficit fiscal puede reducirse a través de la mayor recaudación que se pretendería generar con la aplicación de políticas reactivadoras en los sectores agrícola e industrial.

Lamentablemente, ambos remedios pueden resultar totalmente inoperantes y hasta contraproducentes para combatir desequilibrios de las magnitudes de los vigentes. Incluso sin cumplir con el pago de los intereses de la deuda pública externa, las cuentas del sector público proyectan un déficit para 1985 de 8 por ciento de Producto Bruto, en momentos en que el ahorro nacional declina. Este es, y no el de la deuda externa, el problema más importante de la economía peruana. Si se lograra poner la casa en orden, los problemas financieros se resolverían con facilidad; si no, por más negociaciones de la deuda externa que se hagan, éstas sólo contribuirán a hacer cada vez más grande la bola de nieve para el momento del inevitable ajuste.

Una segunda ilusión que puede estar nublando a las autoridades del próximo gobierno es el creer que una crisis tan grave como la actual tiene al menos de bueno el que, no importa que se haga en materia económica, es difícil que la situación se ponga peor. La historia universal, sin embargo, confirma que el vacío por el cual a veces insisten algunas sociedades en despeñarse no tiene límites. Grave como es la inflación actual de 12 por ciento mensual, peor sería una de 1,000 por ciento anual. Y en ella caerá irremediabilmente la economía peruana si el próximo gobierno intenta que se consuma más allá de lo que se produce, que se importe más de lo que se exporta, que se gaste más de lo que se ahorra.

El APRA, durante el próximo quinquenio, tiene una responsabilidad histórica: demostrar que es posible en el Perú tanto la democracia política como el desarrollo económico. Una sociedad logra una democracia política cuando las autoridades elegidas aceptan resignar su esperanza de vencer a sus opositores mediante el uso de la fuerza. Una sociedad logra un desarrollo económico cuando genera un excedente suficiente como para invertir eficazmente en su aparato productivo de manera de atender mercados crecientemente en expansión. Para ello, se requiere posponer consumo para invertirlo bien. Quienes en aras de la justicia social promueven una distribución total cometen, a

veces sin reconocerlo, la más grave de las injusticias, ya que una sociedad que distribuyera todo para satisfacer las demandas de sus miembros lo hace negando herencia a los que vendrán. Y el estado resulta siempre un mal *Robin Hood*. Cuando cobra a los más ricos para darle a los más pobres, lo suele hacer en sacos descosidos por los que se cuelan los beneficios que se pretenden repartir y éstos se quedan muchas veces en manos de quienes tramitan y especulan.

La tarea económica inmediata del próximo gobierno es disminuir la inflación. Si ello no se consigue, todos los demás logros pesarán poco contra la acentuación de este cáncer social. En el último quinquenio, por ejemplo, las remuneraciones reales de los peruanos cayeron en más de un tercio por el alza continua en los precios resultante del desorden fiscal. Conviene reflexionar, en este sentido, que los mismos sindicatos argentinos que al inicio de su gobierno le exigieron al presidente Alfonsín un aumento nominal en sus salarios, vienen aceptando ahora, en el borde mismo del caos social, la desindexación de los mismos. ¿Tendrá el Perú que pasar por la misma experiencia para aprender?

Quienes creen que el alza de los precios puede detenerse con una extensión de los controles y una ampliación de la burocracia están totalmente equivocados. Lo que necesita el Perú de hoy es un mínimo de orden y no un máximo de órdenes. Todo control de precios al final restringe la producción y estimula la demanda. Y *pichicatear* el sistema, como intentó el gobierno de Salvador Allende en Chile, solo conduciría a un alivio temporal que, en las circunstancias actuales, sería muy breve. Al final, la producción terminaría estancándose y la demanda, mantenida artificialmente, sólo podría atenderse con un racionamiento creciente en el marco de mercados negros que no sólo arrasarían con los controles impuestos, sino también con todos los valores éticos y morales de nuestra golpeada sociedad.

## La historia y la quincena

---

Desde los inicios del actual gobierno, algunos de sus principales asesores económicos postularon, con mucha ingenuidad y no poca soberbia, que podían transformar -como quien da la vuelta a un calcetín- la combinación viciosa de inflación con recesión, vigente entonces en la economía peruana, por una nueva alborada de estabilidad y desarrollo.

¿Cómo crecer? Ante el adverso entorno internacional, se consideró prioritario estimular el uso de la capacidad instalada ociosa en el sector industrial -incluso a riesgo de ineficiencias evidentes- a través del aumento en la demanda, léase aumento en las remuneraciones nominales y un mayor gasto del sector público. Ello debería permitir, según estimados oficiales impresos en documentos cuya tinta está aún fresca, un *salto histórico* con tasas de crecimiento anual de entre 5 y 7 por ciento durante los próximos años.

¿Cómo detener el alza incesante de los precios? La historia de la aplicación de controles en las distintas economías ha sido frustrante desde su introducción por primera vez en el Imperio Romano. En la canasta promedio de la familia peruana, sólo la mitad de los bienes y servicios son actualmente sujetos posibles de un control efectivo. Quienes en la teoría de los pizarrones postularon que a mayor demanda por alimentos -que inevitablemente se habría de generar como consecuencia de los aumentos nominales en remuneraciones- podía satisfacerse con importaciones crecientes, recién comprenden, con la dura realidad de las alzas (durante el primer trimestre de 1986 los precios de la cebolla, los frijoles y el pallar subieron en más de 100 por ciento), que la ley de la oferta y la demanda no puede derogarse por decreto. En el primer semestre de 1985 -los últimos seis meses del gobierno de Belaunde- la tasa de inflación fue sin duda excesiva: 10 por ciento mensual; pero casi todos los precios subían al mismo ritmo. Ahora, la variación promedio de los precios es 5 por ciento al mes, lo que se proclama como un logro, cuando en realidad lo que sucede es que un conjunto de productos -los fáciles de controlar o importar- no suben de precio por los controles, mientras que los de otros productos aumentan sin orden ni límite. Cuando por razones arbitrarias algunos pueden subir sus precios y otros no, cada quien cuanto pueda, se genera distorsión, confusión y desorden. En poco tiempo, cada quien procurará defenderse del otro, ganarle al vecino, lo que, como el combustible al fuego, terminará por avivar nuevamente la inflación.

Un precio que ya se ha quedado atrasado, por ejemplo, es el de la divisa extranjera. En términos relativos -y tomando en cuenta las variaciones de los precios internacionales- el exportador minero recibe hoy las tres cuartas partes de lo que recibía el 28 de julio de 1985; Petroperú, menos de la mitad; y el exportador no tradicional, 5 a 10 por ciento menos. La palabra del presidente García, apoyada en proyecciones poco realistas como las que circulaban hasta hace semanas en el equipo de gobierno, fue que la tasa MUC no iba a sufrir modificaciones en el transcurso del año. Para no incumplir con esta premisa, y frente a una inflación anual que se

proyecta en 85 por ciento, actualmente se proponen fórmulas alternativas de devaluación disfrazada. ¿Es que se supone que Alan García carece de la capacidad de rectificarse en caso de error? ¿Es que con el petróleo a US\$10 el barril se va a actuar como si por éste se recibiera el doble?

Ello para no insistir en que, para su desarrollo a largo plazo, al Perú le conviene un dólar más caro que barato. Ello fue, por ejemplo, entre otras cosas, lo que le permitió a Corea del Sur -país que hace 20 años exportaba US\$120 millones anuales, cuando el Perú exportaba US\$685 millones- exportar el año pasado doce veces más que el Perú y, basándose en este proceso, aumentar el porcentaje del Producto Bruto que dedica a ahorro interno así como su ingreso per cápita, al triple de los promedios peruanos, cuando hace veinte años estábamos a la par. Un dólar artificialmente barato, en cambio, puede ocasionar la reversión de la desdolarización (el éxito más significativo del programa económico), para no hablar de la presión sobre las frágiles reservas internacionales que -por contabilizar acreencias de Bolivia y Nicaragua como si fuesen depósitos- difícilmente alcanzarían para ocho meses de importaciones en el caso que, durante las próximas semanas, se intensificara un inútil enfrentamiento con el sistema financiero internacional.

No se debe cambiar la historia por la quincena, afirma el senador Javier Valle Riestra. La frase es impactante pero no por ello deja de ser engañosa. La historia no se hace con gestos, alardes ni promesas, sino con obras, hechos y resultados, con logros que se conforman lentamente a lo largo de sucesivas y, en muchos casos, tediosas quincenas. Y le faltan más de cien de éstas a la gestión del presidente García. Sólo después la historia emitirá su juicio.

## Entre el túnel y el laberinto

---

Durante los últimos quince años, el Perú ha sufrido de manera simultánea y conflictiva los procesos de urbanización centralizada, industrialización ineficaz, hipertrofia estatal y ajuste traumático frente a fenómenos externos de gran impacto. La tecnoburocracia sofocante del gobierno militar fue reemplazada por una mezcla ineficaz de populismo asistencialista -propenso a dilapidar los escasos recursos públicos- con un liberalismo económico apenas preocupado en atenuar las desigualdades históricas. Ante esta situación y teniendo en cuenta las bases ideológicas del Partido Aprista, era iluso suponer que el gobierno del presidente García iba a aplicar una política clara, de avance a campo traviesa, en materia de liberalización productiva, comercial y financiera.

Sus primeros doce meses han estado asignados, como era de esperar, por un clima de voluntarismo político y creciente intervencionismo estatal, expresado en materia económica por imposiciones y controles respecto de los principales precios y variables productivas. El programa de emergencia aplicado tuvo efectos estimulantes inmediatos. Sus costos, sin embargo, empezaban ya a aparecer cuando fueron reprimidos nuevamente con dosis adicionales y preocupantes de controles e intervención como si el voluntarismo fuese, en sí mismo, una nueva doctrina económica.

El mensaje presidencial -que fue serio y coherente dentro de la perspectiva ideológica de Alan García- y el torrente desordenado de normas con el cual se pretende aplicar esta política no permiten elucidar aún si el Perú, el último 28 de julio, ha entrado a un túnel o a un laberinto.

La crisis económica que el Perú actualmente enfrenta podría atenuarse en lo que queda de esta década, si se aplicara un programa coherente de estabilización, se negociara concertadamente la deuda externa, se priorizara el desarrollo agrícola y rural, se promoviera eficazmente las exportaciones menos tradicionales. Sin embargo, la poca estabilidad institucional y la falta de valores socialmente reconocidos que promuevan la eficiencia y el ahorro, la inversión y el éxito, inducen a que la política económica pueda quedar determinada por movimientos pendulares y espasmódicos que entorpecen el desarrollo sostenido y que conducen a un empobrecimiento creciente. La pérdida de confianza en instituciones y sistemas que no funcionan puede derivar en una crisis política global. No es tanto el hambre como la frustración lo que ha generado el surgimiento de Sendero Luminoso.

En la estrechez económica que vive América Latina, el costo ineludible de la solución económica -una mayor producción aparejada con un menor consumo interno- tendrá efectos sociales adversos, cuyo manejo político es imprevisible en un medio donde los conceptos de poder y mercado no se han afirmado con claridad y donde no existe un orden normativo y eficiente entre ellos.

En la estrechez económica que vive América Latina, el costo ineludible de la solución económica -una mayor producción aparejada con un menor consumo interno- tendrá efectos sociales adversos, cuyo manejo político es imprevisible en un medio donde los conceptos de poder y mercado no se han afirmado con claridad y donde no existe un orden normativo y eficiente entre ellos.



La fragilidad inherente de las instituciones y sistemas políticos limita la capacidad de éstos de consolidar su propia legitimidad en una época en la que la ilusión de la mayor intervención estatal como supuesta panacea no convence ya a nadie. En situaciones como ésta surge, por ejemplo, la amenaza de un neofeudalismo como mecanismo desesperado de defensa. Algunas naciones latinoamericanas, ciertamente el Perú, pueden terminar desintegrándose en un conjunto de ghettos empobrecidos, no importa mucho si protegidos por rondas campesinas o servicios privados de vigilancia, en una convivencia inerte y estéril.

¿Qué hacer, entonces, para evitar otros cien años de soledad? La primera respuesta es visceral, el carnaval de odios que propician los grupos extremistas como absurda receta contra los males, destruir todo el engranaje de acumulación económica y legitimación política, no importa cuál sea el costo de la eventual reconstrucción. La vida humana no tiene valor. El objetivo final sería convertir el Perú en Albania o, peor aún, en una sociedad a la vez más revolucionaria y reaccionaria.

La segunda respuesta es ideológica. Basada en concepciones que pecan de librescas sobre la división internacional del trabajo y sin conciencia plena de la red de transacciones de bienes, servicios, capital e información del mundo en la actualidad, aboga por la desvinculación y el aislamiento internacional. En circunstancias como las actuales en que los centros ganan más de su interconexión directa que de su vinculación con sus respectivas periferias, el desenganche puede lograrse más rápido de lo que sus defensores suponen y con perjuicios que éstos, engolosinados por el gesto gallardo de la denuncia por la autonomía, muchas veces no se han dado siquiera el trabajo de evaluar. De seguir esta política, que es recomendada por un grupo de influyentes asesores presidenciales, una cortina aislante se cerraría entre el Perú y el resto del mundo. Sin estímulos externos todo podría ocurrir. Los que sustentan esta posición pronostican ingenuamente el surgimiento posterior de una nueva economía más autónoma y pujante. Por el contrario, lo más probable es que el aislamiento conduzca a un laberinto sin salida, donde la pugna salvaje que se generaría para la acumulación primitiva de los menores recursos existentes obligaría a una creciente represión que, en el largo plazo, sólo podría sostenerse con el apoyo externo de una potencia extranjera.

La respuesta madura a la actual crisis debiera incluir el estímulo a una interdependencia creciente con el exterior. En tal sentido, es saludable la autocrítica que hace el presidente García de la responsabilidad de los propios peruanos por la situación existente. Si ella se debiera principalmente a un imperialismo de cuyos ataques nos tuviéramos que defender, como de los derrumbes de un terremoto, poco quedaría por hacer más allá de rezar para que éstos no se produzcan. Pero afortunadamente ello no es así. El futuro depende más de nosotros mismos que de la acción de otros. Y, en tal sentido, siempre es mejor penetrar un túnel, por oscuro que sea, que perderse en un laberinto. En este no hay otra salida que regresar al lugar por donde se entró. En el túnel, en cambio, la situación de privación evidente puede ser transitoria y la impaciencia de los que permanecen estancados puede ser enfrentada con la esperanza de quienes marchan trabajosamente en las tinieblas, porque intuyen una tenue luz al final de la ruta.

Si Alan García ha metido al Perú en un túnel o un laberinto, sólo el futuro lo dirá.

## Los empresarios y el presidente

---

El presidente Alan García ha iniciado un trato directo con cabezas de grupos empresariales nacionales a fin de que las utilidades logradas en función de la reactivación inducida de la demanda interna se reinviertan efectivamente en el Perú y en proyectos que sean de interés del gobierno.

La decisión de impulsar una concertación de este tipo en el momento actual no es gratuito. Obedece a la conciencia del gobierno respecto del agotamiento de los efectos benéficos del programa económico si es que la inversión productiva no aumenta; a la creencia de los principales asesores presidenciales en que el dirigismo y la concertación constituyen mecanismos más eficaces que el mercado y la libre elección para orientar los programas de inversión de un sector privado al cual por ahora reconocen, aunque a regañadientes, una mayor eficiencia que el sector público; y a la convicción del propio Presidente de que su talento político puede hacer caminar sobre el agua a hombres que han mostrado, hasta ahora, poca fe.

Para crecer adecuadamente, la economía peruana requiere que se inviertan, bien, US\$ 2,000 millones al año. El Estado ejecuta, a menudo mal, cerca de la mitad de este total. En los últimos quince años, el sector privado no ha cubierto bien el resto, en parte por una escasa tradición empresarial; en parte por un clima recientemente adverso a la inversión reproductiva; en parte por legítimo miedo.

Cuando el Presidente entre en confianza durante sus cumbres empresariales, descubrirá, no sin asombro, cuán pobres se han vuelto, como todos, los ricos del Perú. Si motivados patrióticamente por su llamado, los grupos convocados vuelcan el íntegro de sus talegas, apenas habría para cubrir un décimo de lo que el sector privado debe invertir a fin de generar los 200,000 puestos de trabajo que se necesitan gradualmente para ganarle la guerra al senderismo. Y si bien ello puede contribuir a señalar una huella a seguir, el futuro económico del Perú no está en las manos del Presidente ni de su lista de convidados especiales, por honestos que sean los esfuerzos que ambos realicen, sino en las de decenas de miles de pequeños y medianos propietarios que necesitan recuperar una motivación para trabajar mejor, una razón para ahorrar más, una esperanza para arriesgar e invertir en el futuro.

Ello no podrá lograrse solamente con la defensa por legítima que sea, de intereses menudos y privilegios particulares ni, menos aún, con la velada amenaza de la expropiación en caso de que no exista reinversión. Requiere, esencialmente, de la promoción de sanos principios generales que estimulen la eficacia y el progreso, así como de la creación futura de lo que ahora no hay. Esta tarea de todos debe, en el caso de los empresarios, desarrollarse a través de sus instituciones gremiales representativas cuya labor, a pesar de los esfuerzos de algunos de sus dirigentes, deja todavía mucho que desear.

La Confiep, por ejemplo, apenas se ha consolidado y su constitución tiene vicios estatutarios que, de no ser modificados oportunamente van a impedir el cumplimiento cabal de una representación tan necesaria. Los resultados de una encuesta reciente efectuada por APOYO revelan que la opinión pública califica de excesivo el poder los funcionarios públicos y de escaso el de los empresarios. La Confiep, por ser estrictamente una cámara de cámaras, carece actualmente del aporte que le podría ofrecer, adicionalmente, un contingente masivo de asociados individuales. De otro lado, al rotar su presidencia entre las asociaciones participantes, en vez de elegir para dicho cargo a un representante multisectorial, la opinión pública no distingue con facilidad los planteamientos generales de política de aquellas otras reivindicaciones gremiales. Y, por último, el presupuesto con que se maneja es tan exiguo que constituye un gran mérito de sus autoridades el que hasta ahora no haya muerto de inanición.

Lo cual puede ser, tal vez, el deseo secreto de más de un asesor presidencial, para quienes la Confiep no pasa de ser un sindicato molesto de dueños, mal organizado por añadidura, al no contar en su estructura -como consejo consultivo, por ejemplo- con una lista de empresarios del peso específico de los convocados por el Presidente. Se podría así pretender la sustitución de esporádicos *pliegos de reclamos públicos*, que a veces pecan de quejosos y desafinados, por una tertulia privada concertadora de los intereses específicos para los grupos empresariales dominantes y en función de las necesidades inmediatas del gobierno.

Si la Confiep no tiene la representatividad que debiera no es ciertamente por culpa de sus dirigentes. En gran medida ello se debe a que la mayoría de los empresarios peruanos ha tenido una visión sectorial y de corto plazo respecto de los problemas nacionales, para no mencionar el trauma originado por el clima de arbitrariedad y despojo que se vivió durante el régimen militar. El actual, en cambio, si bien tiene una política económica que, como entonces, no se basa lo suficiente en el mercado y la libre iniciativa privada, fue elegido legítimamente por mandato popular y es -debe mantenerse así- un gobierno democrático. Frente a él, los empresarios que sí creen en las bondades de la libertad y la competencia deben primero decidir si, ante la crisis global existente, se convierten en cómodos rentistas desde el extranjero o se compran el pleito por el Perú, con todo lo que ello conlleva de inseguridad y angustia. En este último caso deben hacer oír su voz y planteamientos, con el debido respeto a través de la Confiep, como en privado, en sus contactos con el Presidente y comisiones correspondientes. Aunque a muchos empresarios les puede parecer sorprendente, no son sólo los grupos de secuestradores chantajistas los que desean saber más sobre lo que piensan y hacen los que contribuyen a crear riqueza y empleo en el Perú. Y su bajo perfil, que de paso sirve de poco para evitar los secuestros, ha hecho mucho daño en una sociedad carente de rumbo y hambrienta de ejemplos.

Los empresarios que no estén hoy a la altura del papel que les corresponde desempeñar y se contenten, a cambio de la atención privada de sus demandas específicas, con el espacio que el gobierno les imponga o tenga a bien asignarles, mal podrán quejarse cuando en el futuro, por la ausencia de un marco estimulante para la inversión privada en general, otros asesores, tal vez de este mismo gobierno, levanten las banderas de la planificación compulsiva y la estatización general como únicas vías para garantizar el cumplimiento de sus futuros objetivos.

## Un diagnóstico de la crisis

---

El desarrollo de las comunicaciones y la cibernética en el último cuarto de siglo ha permitido a los países industrializados un avance notable en el camino hacia un sistema económico globalizado, cuyo núcleo dominante -la interacción entre Estados Unidos, Europa Occidental y el Japón- se ha consolidado en los últimos años como ordenador principal de la actividad económica general.

Una interrogante crucial para proyectar el desarrollo de la misma es evaluar en qué medida la solución que la economía norteamericana tendrá que encontrar para atender los enormes déficits incurridos, tanto en su comercio exterior como en sus finanzas públicas, puede deliberar de manera significativa su liderazgo circunstancial y afectar también la recuperación tambaleante de las economías de América Latina. En el presente año (1986), los EE. UU. se convertirán en el país con el mayor endeudamiento externo. De su capacidad efectiva para recuperar un mínimo de equilibrio en sus cuentas externas y fiscales, sin perder su liderazgo empresarial, va a depender el que EE. UU mantenga o no la hegemonía tecnológica y militar que hoy tiene sobre Japón y Europa.

Pero, en cualquier caso, la dinámica de la economía mundial se encuentra, a partir de ahora, centrada en el eje EE. UU.-Europa-Japón. La política económica en los EE. UU y las naciones industrializadas viene privilegiando la articulación entre ellas y propugnando un sistema de regulación global coordinado al cual tendrían forzosamente que ajustarse los países en desarrollo que pretendan integrarse en la economía mundial. En los últimos años ha quedado demostrado que el crecimiento económico en los países industrializados ya no es una "locomotora" que resulta jalando automáticamente las actividades y el comercio con los países del Sur. La importancia del intercambio comercial financiero, tecnológico y de inversión extranjera directa entre EE. UU., Europa y Japón ha aumentado en detrimento de sus relaciones con el tercer mundo y América Latina, con excepción de algunos pocos países como Brasil.

Un segundo aspecto a considerar es el aumento continuo de la participación de las grandes empresas transnacionales en la actividad productiva, comercial, financiera y tecnológica. Estas transnacionales ya no muestran, en los últimos años, mayor interés en la inversión extranjera para la explotación de recursos naturales en países como el Perú. La oleada de adquisiciones que se ha desatado en los EE. UU., y que en los últimos meses se ha hecho extensiva a Europa y Japón, involucra a empresas de gran tamaño, especialmente en sectores de alta tecnología. De acuerdo con la dinámica económica mundial, las empresas transnacionales se han volcado a las relaciones Norte-Norte y a las tecnologías de punta, cambiando la versión tradicional que, al menos en América Latina, se tenía de los intereses de estas empresas. Las líderes entre éstas se han convertido en empresas globalistas que perciben el mundo como mercado y que generan su ventaja comparativa en el conocimiento y el consecuente desarrollo tecnológico. En su estructura organizativa, mantienen centralizadas las tareas de definición de objetivos y procesamiento de la información, pero han descentralizado los procesos de toma de decisiones para alcanzar objetivos. Sus organizaciones se han vuelto flexibles, adaptables y funcionales. Sus culturas empresariales incluyen

los valores de entrenamiento permanente y la convivencia con el error, ampliando así su actitud hacia el riesgo.

Para esta nueva visión empresarial, las relaciones Norte-Sur y el procesamiento de materias primas a través de tecnologías convencionales han perdido importancia relativa. Y en su relación con el Sur estas empresas transnacionales vienen prefiriendo vincularse con países del Asia en detrimento de América Latina. Más aún, en los últimos años, se advierte en estas empresas una tendencia a la incorporación de nuevas modalidades de inversión. Incluso hoy se habla de “inversión extranjera sin inversión”, aludiendo al desarrollo de actividades, como subcontratación y articulación de procesos productivos, que no implican un aporte real de capital. Para promover estas actividades, los países industrializados van a establecer, como recientemente se ha planteado en el GATT, normas que liberalicen el comercio de servicios y que permitan, a la vez, una mayor protección de la propiedad intelectual y de las patentes.

Otro desarrollo reciente es la reversión de la tendencia a nivel mundial hacia un mayor control gubernamental de la economía. La toma de conciencia respecto de los límites existentes a la explotación de los recursos naturales hizo que el control estatal de la producción mundial alcanzara un pico máximo en los años setenta, cuando el planeamiento centralista por parte del estado constituía el modelo a seguir para más de la mitad del mundo. En los últimos tres lustros, sin embargo, el mercado, con todas sus imperfecciones, ha resultado siendo un instrumento más eficaz que el planeamiento y control burocráticos. Así, en este lapso, la productividad agrícola disminuyó en casi todos los países de economía centralmente planificada, a la vez que aumentó en las economías estimuladas por el mercado. El consumo de energía por unidad de producto es hoy más elevado en las economías centralizadas, y sigue aumentando en la URSS, mientras que ya disminuye en Europa Occidental, Japón y los EE. UU.

En la actualidad, la mayor parte de los países han revertido la tendencia hacia el control estatista y prefieren orientar sus economías en un uso más intenso del mercado como asignador de recursos. Entre las veinte naciones más pobladas del mundo, diecisiete están actualmente adoptando medidas que implican una mayor competencia, menores controles de precios y una creciente privatización de la actividad productiva. La China, entre 1978 y 1986, aumentó su producción de granos en 30 por ciento, en contraste con tendencias declinantes en la URSS. Hay incluso modelos, como el húngaro, que demuestran que la economía de mercado puede funcionar en ausencia de la propiedad privada, siempre y cuando los agricultores tengan un control efectivo sobre lo que producen. Las economías occidentales han logrado, en este lapso, avances significativos en términos de conservación de los recursos naturales que paradójicamente, siguen malgastándose en las economías centralizadas ante el descuido de una burocracia indiferente.

Las economías centralizadas sólo superan actualmente a las economías de mercado en el empleo pleno que ofrecen a su población y en la distribución menos desigual del ingreso entre sus ciudadanos, pero ello constituye, cada vez más, una distribución de creciente pobreza relativa en un ambiente de frustración. Si bien las economías de mercado aún no han encontrado la manera más eficaz de atenuar los costos del desempleo y subempleo, presente en el proceso de creación destructiva que constituye el capitalismo, la alternativa del estatismo sólo viene ofreciendo cada vez menos pan, sin libertad.

En el marco general establecido por esta evolución, es inevitable reconocer que América Latina ha perdido importancia a nivel mundial. Del total de la riqueza que se produce en la Tierra, menos de la décima parte se crea en América Latina. En 1960, la cuarta parte de la inversión extranjera directa de origen estadounidense estaba orientada a América Latina; en 1984, este porcentaje bajó a 10 por ciento. Cuando se excluye Brasil, la disminución resulta todavía más marcada. Existe hoy una notable brecha entre la forma en que visualizan a la región los países desarrollados -especialmente los EE. UU.- y la concepción que en ella se tiene de su supuesta importancia dentro del sistema económico internacional. América Latina es considerablemente menos importante de lo que se cree y cualquier sobre estimación que se haga a nivel regional de su posición constituye una insalvable restricción para afirmar su desarrollo futuro sobre bases realistas.

¿Por qué los latinoamericanos no han podido potenciar plenamente sus posibilidades? En parte ello se debe a que el ordenamiento de las sociedades en la región resulta más complejo porque en ellas se yuxtaponen estilos y estructuras de lo más diversos. Lo feudal coexiste con lo moderno; las instituciones, las empresas, los partidos políticos, que deberían cultivar la impersonalidad y la *meritocracia*, prefieren muchas veces afirmarse a través de relaciones de *compadrazgo* o de *patrón-cliente*, *padrino-ahijado*; los analistas se preocupan de conceptos -como “el precio justo”, por ejemplo- que en otras partes corresponden ya a la historia medieval; propuestas como la del cierre indiscriminado de la economía al exterior constituyen parte del debate político cotidiano; y no faltan quienes consideran que la meta para el desarrollo pasa por el rechazo previo a toda la tecnología y el progreso que provengan de ultramar.

En la intelectualidad de América Latina la veta utópica mantiene, lamentablemente, un enorme atractivo. Ello se ha visto reafirmado recientemente en doctrinas como las de la Teología de la Liberación, que plantean una preferencia por el utopismo socialista sobre el realismo del capitalismo democrático. Para la mayor parte de los intelectuales de la región, la visión socialista es tanto más encomiable cuanto más utópica sea. Ven en ellas, muchas veces, una identificación con el cristianismo. Sueñan con una nueva sociedad sin lazos de propiedad que opriman, donde prevalezca la igualdad, la justicia y la hermandad. Sus escritos no plantean lamentablemente, las descripciones específicas de las estructuras institucionales que permitirían llevar a la práctica sueños ilusos.

El fenómeno más importante de la era actual es la muerte del socialismo. No resulta verdad en América Latina, porque la cosmovisión que sus intelectuales tienen del mundo, lejos de permitirles aprender de la historia ajena, les genera usualmente un anhelo generalizado de vivir en un sistema integral, unitario, holístico. Leszek Kolakowski en un libro reciente titulado *La Idea Socialista* afirma: “Hace cien años éramos felices. Sabíamos que existían los explotadores y los explotados, los ricos y los pobres, y teníamos una idea acabada de cómo liberarnos de la injusticia: expropiaríamos a los dueños y entregaríamos la riqueza para el bien común. Pues bien; expropiamos a los dueños y creamos uno de los sistemas más monstruosos y opresivos de la historia mundial. Y seguimos repitiendo que, en principio, todo anduvo bien, sólo que se deslizaron algunos infortunados accidentes que perjudicaron levemente la buena causa. Empecemos ahora de nuevo...”

De acuerdo con la teoría socialista, los ricos se enriquecen a la vez que los pobres se empobrecen, lo cual implica el sofisma de que la pobreza de los pobres es causada por la riqueza de

los ricos. Se deja de tener en cuenta, en esta perspectiva, que son la imaginación, la inventiva, la voluntad y el esfuerzo los que crean la riqueza y que ésta será mayor cuanto más se estimule la libertad para crear y cuanto más se afirmen, en cada sociedad, valores como la eficiencia y el ahorro, la inversión y el trabajo.

A este proceso de creación, muchos intelectuales desean darle, ingenuamente un orden armónico *a priori*, una moral perfecta. Para comprender lo utópico que es esta tarea bastaría reflexionar sobre el proceso evolutivo de la historia: ¡Cuántas naciones han perecido a lo largo de los siglos! ¡Cuántos individuos fueron aniquilados sin justificación alguna! A través del tiempo, los vientos han erosionado tierras fértiles, los mares se han tragado territorios, los terremotos han descargado su furia devastadora sobre poblaciones indefensas. El planeta tiene innumerables cicatrices, algunas incluso anteriores a la aparición del hombre sobre la tierra. Las bestias de la jungla no han sido amables unas con otras. Pero el progreso se ha dado, a pesar de todo, porque los hombres de las cavernas no sólo se mataban entre sí, sino que también se amaban; no con un amor tan elevado como el de los ángeles, pero tampoco tan primario como el instintivo de las bestias.

Un hecho fundamental de la naturaleza del hombre es que, al respetar la libertad, el Creador dio lugar al pecado. Un sistema económico ideal, por tanto, debiera ser aquél que permitiera liberar la creatividad y la productividad humanas enfrentando con realismo su pecaminosidad. No, por cierto, uno en que, al perderse en los laberintos de la Utopía, se asuma que nadie peca, imitando a los inquisidores, cuya piedad por el pueblo los llevaba a prometerles pan, aunque sin libertad.

Por diversas razones, que aún deben ser motivo de investigación y análisis no se ha logrado en América Latina afirmar un sistema así. El rol de la Iglesia, en tal sentido, ha sido y será determinante. El Papa Pio XI dijo que la tragedia del siglo XIX fue la pérdida de la clase trabajadora para la Iglesia. Tal vez se dio una tragedia aún más profunda: el fracaso de la Iglesia para comprender las raíces morales y culturales de la nueva economía capitalista y democrática que surgía. Por permanecer al margen de ella, no pudo infundirle sus valores. Adherida al pasado, la Iglesia no dejó fermentar el nuevo sistema con la misma distancia crítica y esperanza compartida con las que había inspirado el orden feudal y el desarrollo de las ciudades en la Europa liberal.

En tal sentido, a los Teólogos de la Liberación, a quienes hay que agradecerles el rol de conciencia crítica que suelen cumplir en la sociedad, aún les falta mostrar un dominio intelectual de los requisitos institucionales propios para asegurar una economía política libre. Corren, si no, el peligro de promover, tal vez sin quererlo, una nueva tiranía del estado. Si no se preparan defensas contra ella, América Latina puede resultar vulnerable a una nueva conjunción de inteligencias y voluntades entre teólogos y burócratas que, por no comprender bien cómo es que se genera la riqueza, puede acentuar la decadencia económica regional.

En el breve plazo que queda hasta el año 2000, América Latina se juega el papel que desempeñará en la economía mundial durante el siglo XXI. Hay todavía capacidad y posibilidad de elección. La proyección de curvas exponenciales permite aún opciones alternativas. Pero el tiempo también se agota. La brecha tecnológica, la necesidad de una inserción internacional mayor, los límites a la acción de los estados para que sean eficientes, éstos y otros temas ya no admiten la sistemática indefinición ni la cómoda inercia. En resumen, la legitimidad institucional y la viabilidad estructural de América Latina se decidirán en esta próxima década.

El Perú constituye, en este marco regional, uno de los casos más críticos. En la actualidad los peruanos producen menos de lo que consumen. El programa de emergencia del gobierno aprista ha estimulado el gasto y el consumo sin preocuparse por la productividad y el ahorro. De seguir así, la sociedad puede entrar en una espiral de incoherencia y caos, lo que se registra en la preocupación angustiada por la ausencia de una visión de futuro y en el miedo legítimo a un diluvio cruel. Como en el ejemplo bíblico, los que nos vamos a quedar aquí tenemos la obligación de contribuir a la construcción de una barca, y la debemos crear tal como Noé levantó la suya: poniendo cada viga en su sitio. Y la debemos proyectar contra cualquier avance de las aguas y otros azares que la historia pudiera depararnos. Antes de asumir las poses del visionario que pontifica sobre adónde debería orientarse esa barca, o que ilusiona a los que a ella se suben con el paraíso o la salvación, debemos entender nuestro deber como el de humildes carpinteros, cuya responsabilidad esencial es que el sistema finalmente funcione, que la barca flote, que sea capaz de hacerse a la mar, porque tenemos por delante -de ello no nos quepa la menor duda- una larga y difícil travesía.



## Qué es un empresario

---

Hace bien el idioma castellano en distinguir entre negocio- “todo lo que es objeto o materia de una ocupación lucrativa o de interés”- y empresa -“acción ardua y dificultosa que valerosamente se comienza”-.

No faltan hombres de negocios en el Perú. Tal vez hay demasiados entre los que, por los rezagos propios de lo que ha sido una sociedad feudal y paternalista, deben su riqueza a influencias y privilegios. Empresarios verdaderos en cambio, no hay suficientes.

No es fácil distinguir, por sus signos exteriores, entre el hombre de negocios y el verdadero empresario, aunque el primero suele regocijarse en un consumismo insensato o refugiarse en un aislamiento egoísta. El verdadero empresario, en cambio, es aquél que, por más éxitos que logre, sabe que no resulta legítimo recibir sin dar, ganar sin riesgo ni esfuerzo, ser exaltado sin preocuparse por entender a los demás y contribuir así a atender mejor sus necesidades.

La vanidad de políticos y generales, alimentada a su vez por académicos y burócratas, ha hecho creer a muchos que la historia avanza basándose en elecciones, guerras y revoluciones, reuniones de masas y gobiernos acometedores. Estos acontecimientos cobran significado principalmente, en la medida que fomentan o retardan la inversión productiva en una sociedad. Y una economía avanza cuando sus crecientes excedentes se canalizan para ser invertidos no por aventureros que los arriesguen en juegos de azar, ni por burócratas que los dilapiden en elefantes blancos, sino por empresarios que los apliquen a hipótesis comprobables, a parcelas de desierto que intuyen posible transformar en jardines de abundancia. Cuando una sociedad cierra el camino al espíritu empresarial, o complica su evolución con trámites tediosos y controles absurdos, su patrimonio acumulado termina muchas veces disolviéndose en desechos, edificaciones inconclusas, hierros retorcidos, campos sin cultivar. Es que la riqueza de un país no es, como se supone mayoritariamente en las sociedades atrasadas, un concepto material, finito y definible, sujeto a medida e inventario, a entropía y agotamiento. En el pasado, los hombres de negocios creían que la manera de hacerse rico era hallar alguna sustancia preciosa y retenerla. Con el tiempo, asumían que la cantidad disponible de este material declinaría, por lo que subiría irreversiblemente de precio.

Los empresarios de las sociedades más avanzadas comprenden hoy que la mayor riqueza no implica cosas, sino pensamiento, aplicaciones que le dan valor a lo que, hasta entonces, parece inútil a quienes son ignorantes de estas ideas. Cualquier máquina no es sino un conjunto ininteligible de engranajes y cables mientras no se conozca para qué sirve. Su valor no resulta del número de leyes de la física que cumple sino de la imaginación del ingeniero que la ha creado y del empresario que sabe para qué usarla.

Por ello es que dichas sociedades reconocen que su progreso depende, en gran medida, de la voluntad, la imaginación, la creatividad y la perseverancia de sus empresarios. Esta afirmación no

conlleva idealización alguna. Los empresarios no son, por cierto, santos ni héroes; son seres que pecan y que a veces hacen trampas. Tienen cicatrices y han causado más de una, en luchas que muchas veces resultan ásperas e incluso crueles. Pero, a cambio de ello, han creado valor y riqueza, son apasionados que trabajan constantemente, de cinco a nueve, en la búsqueda de nichos de mercado que no resulten de la protección del estado sino consecuencia de su imaginación y audacia, para identificar un nuevo producto, un mejor diseño, un cambio eficaz en la manera de fabricar cualquier cosa. Como el empresario es un rebelde en potencia contra los moldes establecidos, lleva en sí un escepticismo natural hacia los prejuicios. Debido a que tiene que tomar docenas de decisiones sin suficiente información, acepta la incertidumbre como parte esencial de la vida. Como sus decisiones están sometidas a pruebas empíricas sin apelación, es realista y pragmático. Los empresarios inventan capital de la nada, le otorgan valor a la tierra, sentido al trabajo de terceros que, sin su liderazgo, resultaría en muchos casos inútil. Los empresarios no son científicos que triunfan cuando entienden todos los complejos elementos de una situación cualquiera, sino cuando provocan nuevas situaciones que otros después pretenderán interpretar. Su papel esencial, más que satisfacer demandas, consiste en crearlas; inventar recursos; desarrollar oportunidades; generar tecnologías. El verdadero empresario es un continuo creador de sorpresas, un alumno de sus propios fracasos, alguien que actúa atrevidamente en las zonas de la duda, alguien que sabe que, muchas veces, las mejores posibilidades surgen de un consenso de imposibilidades.

Muchos burócratas y académicos no perciben bien esta realidad. Consideran al empresario como un intermediario privilegiado entre el capital y el trabajo, como un manipulador de recursos interesado, a quien hay que dirigir y controlar, con quien hay que concertar y convenir los pasos que pueda dar en el futuro. Prefieren, por ello, a empresarios sumisos que no tengan reparos en ser domesticados, que les recorten las alas o les estrechen las riendas a cambio de la entrega de mercados cautivos; a los que no les molesta que se les sujete con las cadenas tenues o pesadas del intervencionismo estatal a cambio de una mayor seguridad. El peligro de ello es el impacto adverso que este adormecimiento tiene sobre la creatividad futura de la sociedad en su conjunto. La acción de un empresario debe tener, como principal límite, el alcance de su imaginación y su capacidad de persuasión. En sus momentos estelares, el verdadero empresario es un creador que actúa frente a un lienzo limpio como el que usa cualquier pintor, frente a una primera página en blanco como la de cualquier escritor. Al igual que los artistas, contribuye con cosas nuevas en un proceso que muchas veces no controla. Y como trabaja necesariamente con equipos humanos, tiende a ser menos egoísta que otra gente creadora, que con frecuencia exalta la expresión de su individualidad como meta suprema.

Mercados más o menos libres y sistemas monetarios razonablemente estables son requisitos indispensables para el crecimiento económico de una sociedad, así como las reglas y las piezas del ajedrez son indispensables para su juego. Ellos, sin embargo, dicen muy poco sobre la capacidad creativa del mismo. Así como el poeta trabaja con una gramática y un vocabulario y el pintor o el músico usa unos determinados instrumentos, así también el empresario tiene que trabajar dentro de las limitaciones de su medio. Todos necesitan observar las leyes de la economía y de los mercados. Pero la pretensión de encauzar el espíritu de empresa, la fuerza motora en la creación de la riqueza, resulta a la larga tan ilusa como intentar una explicación de la poesía con las reglas de la gramática y el vocabulario, o reducir el arte a la química de la pintura o a la física del sonido.

## Reflexiones a mitad de régimen

---

La cultura política en el Perú como en el resto de la región, tiene raíces que enfatizan la jerarquía, la centralización las relaciones personales y un sistema vertical de organización corporativa. Muchos de estos criterios y conceptos tienen su origen en la cosmovisión medieval planteada por Santo Tomás. Durante el siglo XIX, la oligarquía, el ejército y la iglesia compartieron funciones dominantes en una sociedad tradicional, agraria, y orientada a mantener un *statu quo*.

En el siglo XX, nuevos grupos presionaron para hacerse sitio en el sistema. En este proceso, el estado se ha convertido, en la mayor parte de América Latina, en el gran patrón. Depende de él - y por ende del presidente y del partido gobernante- la creación ilimitada de puestos, dinero, favores y privilegios a costa de un gasto fiscal muchas veces descontrolado. Muchas de las diferencias en una sociedad como la peruana resultan resolviéndose en términos administrativos y burocráticos, antes que mediante la discusión abierta y racional de la posición de cada quien. A medida que avanza la gestión de un gobierno, este, al perder apoyo popular, resuelve menos. Y se genera entonces una espiral de discordia y conflictos. Sin acuerdos sociales mínimos y con el desgaste del caudillismo presidencial, el poder se desarticula y fracciona. Y con divisiones al interior de los grupos de presión, ¿cómo impedir que el proceso de toma de decisiones no resulte una sucesión de marchas y contramarchas, con ineficiencias obvias que no se superan, con consensos naturales que no se logran?

No existe, en la encrucijada actual, otro camino racional para enfrentar este problema que profundizar el sistema democrático. Por ello hay que entender una praxis y no una teoría: hábitos y conductas que hay que promover, pero también instituciones que hay que consolidar, incluso virtudes espirituales que es necesario inculcar.

La interacción fructífera entre instituciones libres es lo que permite que ninguna persona o grupo político tome, autónomamente, decisiones que a todos conciernen sobre la conciencia, la información, las ideas o la economía. El Estado debe separarse de la esfera de la conciencia (la Iglesia y el individuo), de la información (la prensa libre), de las ideas (la universidad, los intelectuales) y, relativamente, del sistema económico. Muchos sectores de la vida deben mantenerse al margen de la política y de las ideologías. Los programas políticos, en vez de globales y metafísicos, deben ser limitados y realistas. Para ello se requiere de la guía y el control de asociaciones e instituciones con prestigio que sean cada vez más abiertas.

Además, deben fomentarse virtudes que promuevan la democracia y el desarrollo. La Iglesia Católica tiene, en este sentido, un rol fundamental que cumplir. La teología tradicional del siglo pasado fue planteada en un mundo en el cual se consideraba a la riqueza como finita y en un orden social que no era democrático. Esta teología concentraba su atención en el otro mundo: predicaba caridad a la oligarquía que gobernaba y paciencia y resignación a los gobernados. La nueva Teología de la Liberación sí se refiere a este mundo, pero lo hace con una insistencia justificable pero

incompleta sobre la justicia, porque no plantea la creación de nueva riqueza como imperativo social, ni promueve las virtudes que se requiere fomentar para generarlas.

¿Cuáles serían éstas? El realismo en vez de la utopía, el pluralismo entendido como respeto por los individuos que discrepan de la posición de uno. En el pensamiento católico, con su énfasis en la ley natural, en lo absoluto, en la sociedad orgánica corporativa, existe una tendencia a dejar de lado las ambigüedades, las ironías, las consecuencias no intencionales de las acciones humanas.

Este cambio valorativo es muy importante porque este mundo no es el de la justicia perfecta, sino el de aproximación de la justicia. Aristóteles decía que en la política hay que contentarse con una pizca de virtud. Quienes exigen mucho de la política la destruyen. El arte más elevado de un político -al que requeriría aspirar Alan García en el resto de su accidentada gestión- reside en aprender a juzgar lo que es prudente y en saber alcanzarlo pacíficamente, incluso cooperando con sus adversarios para lograrlo. En política, lo excelente consiste en lograr lo imperfecto, intentar lo absoluto no sólo es en sí mismo un error, sino que muchas veces resulta en una aberración. De ello pueden dar absurdamente fe tanto Torquemada como Abimael Guzmán.

## Un huachito

---

Audacia, según el diccionario, quiere decir atrevimiento, “determinarse a algo arriesgado”. En el lenguaje diario, de otra parte, suele interpretarse prudencia como sinónimo de cautela, concepto antónimo al de audacia. No debiera ser así. Prudencia es la virtud que consiste en “discernir lo que es bueno o malo, para seguir o huir de ello”. Se puede ser, a la vez, audaz y prudente. Lo que constituye una expresión de nuestra adolescencia como sociedad es que audaz suene mejor que prudente.

*Grupo de los Audaces* es como se ha autodenominado un grupo de asesores presidenciales. En otras latitudes este nombre correspondería más a los ambientes del deporte o del espectáculo que a todos los de la política y economía. Es que lo importante, al fin y al cabo, es que la política económica, audaz o no, sea prudente; y no que la audacia nos conduzca a la imprudencia.

Sería mucho pedirle al presidente Alan García que no fuera audaz. El riesgo no sólo le es afín a su reconocida astucia y natural juventud, sino que le ha generado sucesivos triunfos políticos. Solicitarle cautela -característica que sí tienen otros políticos- sería tan inútil como pedirle a un jugador de póquer que en una noche de suerte deje de tentar a la fortuna. El instinto, en tales ocasiones, suele mandar sobre la razón. Y el instinto, en momentos como hoy, inducen al Presidente a apostar.

Pero hay apuestas prudentes y loterías locas, riesgos calculados y derroches absurdos, premisas válidas e hipótesis sin sentido. Un hombre cauto pretende que el avión en el cual viaje tenga el doble de gasolina necesaria; uno audaz se contentaría tal vez con un margen de 50 por ciento. Hay que ser muy loco para viajar con el tanque justo.

Peor aún que apostar mal sería exigir milagros, pretender que el vuelo se puede realizar sin suficiente gasolina en el tanque o con motores carentes de aceite. Las maquinas se funden y los aviones se caen. No está en las facultades del mejor piloto hacer milagros. Dios mismo se puede indisponer cuando uno no hace su parte.

Cuentan así de un beato flojón que, en vez de trabajar, oraba todos los días en la iglesia por el premio mayor de la lotería. Le explicaba hasta el cansancio a Dios por qué y para qué necesitaba el dinero, cómo había hecho méritos toda su vida para merecer la suerte, cómo otros con menos virtudes se veían beneficiados por la fortuna. Hasta que un día que el fulano rezaba y rezaba en una iglesia vacía, se oyó del cielo una voz molesta que reclamaba: “¡Por lo menos, compra un huachito!”.

Dos indicadores recientes reflejan que la economía peruana carece hoy del huachito mínimo que sí tenía en agosto de 1985: el precio de la divisa en Ocoña y la caída en la presión tributaria. Entre el dólar libre más caro y el dólar controlado más barato hay actualmente una diferencia de 50 por ciento, a todas luces excesiva y provocadora de la especulación y la coima. Este margen demuestra la incertidumbre de los agentes económicos sobre la validez de las propuestas del

gobierno en materia cambiaria. En 1986 se perdieron más de US\$500 millones en reservas internacionales, a pesar de que, el Estado incumplió con gran parte de los pagos por deuda externa, se apropió de buena parte de los dólares ahorrados por residentes y postergó las remesas por utilidades de las empresas extranjeras. La economía está hoy sedienta de dólares.

Y, en paralelo, el estado está sediento de recursos. En el mes de mayo de 1987, la economía puede haber crecido en un 8 por ciento respecto de mayo de 1986. En cambio, la recaudación fiscal debe haber caído en 30 por ciento. ¿Por qué? Varias razones: la congelación del precio del combustible y las tarifas públicas, la erosión de la base tributaria por la mayor inflación, el retraso en los pagos por parte de los contribuyentes para usar los mismos como recurso financiero, la menor eficiencia de la administración tributaria por el desorden político de los últimos meses, y así sucesivamente. El Gobierno Central cierra junio con I/. 8,000 millones de déficit y las proyecciones del faltante para diciembre son escalofriantes: US\$ 1,600 millones a la tasa oficial.

Si el gobierno usa la *maquinita* para financiar un monto de esta magnitud y mantiene el dólar en un precio por debajo de las expectativas generales, todos los intis que artificialmente se fabriquen presionarán sobre los insuficientes dólares que se van a generar. No permita esto, presidente García. A la audacia del gesto agregue, al menos, un huachito de prudencia.

## En defensa del sistema democrático

---

¿Por qué decidió el Presidente, asistido por asesores extra-partidarios, adoptar una medida como la estatificación propuesta para el sistema financiero y de seguros?

La razón fundamental parece haber sido su reacción impulsiva ante la buena acogida que recibió el mensaje televisado del Primer Ministro Guillermo Larco Cox y la derrota sufrida por su candidato a la presidencia de la Cámara de Diputados. El que al interior del Ejecutivo, en el Legislativo y en el partido de gobierno, como parte de un saludable y democrático equilibrio de poderes, se intentara fijar los límites determinados por la propia Constitución a la autoridad presidencial, habría sido el motivo principal para que el Primer Mandatario decidiera, festinando trámites y malogrando severamente su credibilidad, intervenir ilegalmente las empresas afectadas y proponer una medida que -al margen de ser reaccionaria, empobrecedora y antinacionalista- ha tenido el dramático efecto político de partir el país en dos.

Un destacado dirigente de la democracia cristiana chilena -en parte sorprendido por la obsecuencia de sus colegas peruanos- comentó de visita en Lima: "Estatificar bancos en los ochenta, es... como tocar boleros en una discoteca". Y es que los servicios, que ni el marxismo del siglo pasado ni el aprismo de los años treinta analizaron como fenómeno empresarial y económico, constituyen hoy un sector de punta tecnológica en la economía moderna. Y que, a diferencia de los recursos naturales y de los procesos industriales y primarios, no se pueden expropiar fácilmente porque se basan, principalmente, en el talento humano, el cual requiere de libertad creativa para su desarrollo. Si donde había tierra rica las cooperativas agrarias destruyeron el proceso de acumulación de capital; hoy, con mayor razón existe un temor legítimo para creer que la burocratización de la banca será igual o peor que la de la seguridad social, varias veces censurada por el propio Presidente. En la prensa internacional, la medida está siendo recogida más en la sección Amenidades que en el registro de las noticias serias. Alfonso Barrantes, al informar en CADE '84 que Izquierda Unida sólo pretendía estatificar el Banco de Crédito del Perú y la Southern Perú Copper Co. hizo, a más de uno, la confidencia que dichas propuestas obedecían a la necesidad de evitar el desbande de sus partidarios más termocéfalos.

A la improvisación, de la medida, se ha agregado la mentira como instrumento de coacción. Los "setenta banqueros" a los que hace referencia la propaganda oficial es una lista malhecha, no se sabe bien si por ignorancia o mala fe. Los "grupos" se han integrado de manera tal que bastaba que un abogado o asesor cualquiera estuviese en el directorio de dos empresas para que éstas fuesen consideradas parte de un mismo "grupo". Al banco Wiese se le atribuye así, injustificadamente, más de la mitad de la mediana minería peruana. Aún conformados tan arbitrariamente, el crédito que estos "grupos" reciben es proporcional a las ventas que registran, y la banca estatal le ha prestado, a esos mismos "grupos", más de lo que ellos mismos han recibido de los bancos privados. De otro lado, referirse a US\$4,500 millones de utilidades privadas en 1986 -

cifra que ha sacado de la manga el asesor presidencial Carbonetto- constituye, por decir lo menos, un total disparate.

No se trata aquí de defender la pronunciada desigualdad existente entre los peruanos ni de afirmar que nuestros banqueros sean héroes o santos. Los hubo tramposos e imprudentes en el pasado reciente, lo que dio lugar a la intervención de las autoridades correspondientes en defensa de los intereses de los ahorristas. Pero la propuesta de eliminar los “circuitos financieros” no constituye una manera de democratizar o descentralizar el crédito sino, simplemente, de eliminar la “banca”, servicio que consiste precisamente en eso: un circuito que conecta a quienes desean una renta por sus ahorros con los que están dispuestos a pagar, ofreciendo las adecuadas garantías, un precio por el uso de estos recursos.

Si ésta fuera una de un conjunto de medidas demagógicas -para ilusionar al pueblo en el corto plazo, a riesgo de una mayor miseria en el futuro- sería atributo optativo de cualquier gobierno; el régimen constitucional ofrece los mecanismos e instancias correspondientes para hacer valer legalmente sus derechos a los afectados en sus intereses y para que la opinión pública exprese, con su voto en las próximas elecciones, su respaldo o rechazo a las medidas adoptadas por el gobierno.

El problema de fondo, sin embargo, consiste en que hay asesores presidenciales que creen, de buena o mala fe, que el sistema político liberal ha fracasado en el Perú, que el Estado de Derecho resulta incapaz para resolver los agudos problemas de la sociedad peruana, que es más fácil enfrentar al terrorismo y la crisis económica con un caudillo popular apoyado por la Fuerza Armada antes que por un sistema institucional, al cual acusan además de incompetente y corrupto. Que el Perú requiere hoy de transformaciones estructurales históricas que la democracia partidaria impide aplicar bien. Y nuestra historia tiene ejemplos reincidentes de estos procesos: congresos que se autoliquidaron para concentrar el poder en líderes -desde Simón Bolívar hasta el Mariscal Benavides- que gobernaron imponiendo autoridad en el Ejército y temor en sus adversarios.

La crisis económica que se viene en los próximos meses -el déficit fiscal ya escapa a cualquier posibilidad de manejo orgánico- podría haber sido enfrentada políticamente de dos maneras: o con el acuerdo propuesto por el Premier en su discurso televisado, o con la *radicalización* planteada por el Presidente en su Mensaje al Congreso. Que Luis Alberto Sánchez desconociera el proyecto de estatificación, conversado sí con Alfonso Barrantes, revela que el Presidente optó por la segunda opción sin consenso en su propio partido.

El nuevo populismo que resultaría de esta alianza entre el ala radical del APRA y el ala moderada de la IU -“el abrazo histórico” del discurso del diputado Roca- encuentra, para sustentarse, enormes dificultades: un Estado quebrado, una credibilidad mellada, una inflación creciente. Para consolidarse, a través de una mayor distribución de beneficios, tendría que expropiar crecientemente a un sector privado, menos ineficiente que el estatal, los excedentes que éste genera para la inversión, el empleo y el crecimiento futuros.

Es probable que la luna de miel entre el APRA y un sector de la IU sea de corta duración. La podrían liquidar las contradicciones implícitas y el desconcierto que se manifestará en sus líderes cuando la crisis avance. De romperse esa alianza Tácita, al APRA le quedará sólo dos caminos: o



rendirse atemorizada ante las propuestas dictatoriales de algunos asesores presidenciales, o exigirle a su Presidente la promoción de un acuerdo pluripartidario mínimo para salvar la democracia.

## La libertad ¿para qué?

---

Las discrepancias de fondo que en la sociedad occidental de hoy separan a socialistas de liberales se pueden expresar en las definiciones sobre qué deber priorizarse -el bien o el derecho- y sobre cuál debe ser el valor supremo -la justicia o la libertad-.

El debate, hasta la reciente convocatoria de Mario Vargas Llosa, era bastante ajeno a nuestra realidad. En el mundo moderno, fue el protestantismo el que reivindicó la libertad cuando planteó para el hombre una mayor autonomía en su percepción más íntima respecto de Dios. Lutero inició en Europa una revolución religiosa, que recién después -como lo explica Mariano Grondona en su importante libro *Los pensadores de la libertad*- se volvería política (con el aporte principal de John Locke) y luego económica (principalmente con Adam Smith).

Ser libre -en el campo moral y político- es estar sujeto a ley y no al capricho de cualquiera. La libertad es, en esencia, la capacidad que tiene el ser humano para dictar su propia ley. El pensamiento liberal nace cuando la gente se atreve a pensar por sí misma, más allá de lo que diga el Papa, el Rey o el Jefe. En el proceso hacia una independencia creciente en el campo religioso, el protestantismo sustituyó la mística católica por una ascética mundana.

Adam Smith fue un moralista antes que un economista. Su primer y último libro -publicado en 1759 y revisado y vuelto a publicar en 1790- fue la *Teoría de los Sentimientos Morales*. Smith se atrevió a redefinir un precepto clave del cristianismo -ama a tu prójimo como a ti mismo- por uno que consideraba más lógico y natural: No te ames a ti mismo más de lo que pueda amarte el prójimo. Smith considera que el hombre tiene un sentido moral intuitivo y no racional cuya primera característica es la "simpatía", definida como la facultad por la cual podemos "entrar" en los sentimientos del otro.

Smith, para la configuración de la sociedad ideal, distinguió tres virtudes fundamentales: la prudencia -que proviene del amor por uno mismo- que induce a que busquemos nuestro bien y el de nuestra familia; la justicia que, en su esencia, prohíbe dañar al otro, respetar su dignidad; y la benevolencia que es el amor al otro, el deseo de favorecerlo.

Smith sigue el pensamiento de Locke al considerar que, de estas tres virtudes, todas ellas necesarias para el hombre moral, solo una -la justicia- debe estar confiada al estado. Para ello debe existir leyes, reglas, tribunales y policía. El Parlamento, institución que debiera ser representativa de hombres moralmente libres, debería cumplir la tarea de interpretar la ley natural, que fundamentalmente consiste en que nadie dañe a otro. Al estado no le corresponde, según el pensamiento liberal, obligar a nadie a creer en la ley divina, ni a hacer el bien. Ello debe provenir de una ley moral en tal sentido, que cada quien debe asumir ante sí o en función de su creencia. La justicia -en el sentido de la obligación a no hacer daño a otro- resulta así la base política sustantiva de una sociedad liberal pluralista. La benevolencia -el hacer el bien- constituye su adorno moral.

Esta, según el pensamiento liberal, ha de ser *autónoma* -consecuencia de la libertad- y no *heterónoma*- impuesta desde afuera. No debe usarse coerción para el intento de hacer a alguien mejor de lo que es, ni para obligarlo a ayudar a los demás.

La doctrina social de la Iglesia Católica, en cambio, ha inducido muchas veces a que el sistema político fomente la benevolencia. Este pensamiento tradicional se basa en la concepción platónica de dos niveles extremos de comportamiento. Según San Agustín, la Iglesia era la ciudad de Dios y el Imperio Romano la ciudad del César donde dominaba el demonio. No habría, en tal disyuntiva, una ciudad de los hombres; uno estaba con Dios o con el demonio. Con el pensamiento liberal, en cambio, se admite un estado intermedio, que es precisamente donde ocurre el grueso de la vida humana. No se renuncia al ideal del sabio, el santo, o el héroe; pero se plantea dos niveles morales: uno mínimo que debe exigirse jurídicamente; y otro superior, deseable pero no exigible. Según esta interpretación del mundo, el estado debe concentrar su acción en definir y hacer cumplir las leyes y reglas que fomenten la convivencia social, evitando fundamentalmente que cualquier miembro de la sociedad dañe a otro.

Sobre la base de este análisis, los liberales concibieron la premisa por la que en el estado el derecho debe estar por encima del bien. El bien general de por sí es un concepto indefinible. El “bien común” es un término potencialmente totalitario, resulta siendo -como el “interés social”- lo que el poderoso en un momento determinado dice que es. El derecho, en cambio, puede y debe ser preciso y la ley regir por igual para gobernantes y gobernados. Que haya leyes supone incluso que, alguna vez, su aplicación hará daño. Es que si la ley se aplicara sólo cuando no hiciera daño, no habría ley y alguien -un dictador- tendría que establecer cuándo corresponde aplicarla y cuando no.

Asimismo, el pensamiento liberal considera a la sociedad no necesariamente como una comunidad sino como una asociación formada por consenso, una red de lazos voluntariamente aceptada. Para los latinos, patria suele significar la “tierra de nuestros padres”, sin que importe mucho si en ella rige una tiranía o florece una democracia. La relación con ella suele ser telúrica, sentimental, irrenunciable. Para los sajones, en cambio, la patria se confunde con la república, la asociación que uno hace con hombres libres similares a uno, el contrato social del cual cada uno se siente parte. La revolución moral y política de impugnación a las reglas tradicionales de la Iglesia y al concepto telúrico de nación resultó sirviendo de base para el progreso contemporáneo de la sociedad occidental. La humanidad, hasta entonces, había vivido estancada por milenios, con años de vacas gordas y años de vacas flacas. En *La Riqueza de las Naciones*, Smith se pregunta con curiosidad: ¿qué está pasando ahora que algunas naciones registran un proceso continuo de crecimiento? Y llega a la conclusión que ello es resultado de la presencia de tres factores: seguridad jurídica, libre comercio y competencia. Descubre así una fórmula política no concebida en la “teoría del progreso”, si hubo una vez alguna. La pobreza de algunos pueblos no sería, en tal caso, una etapa atrasada en su desarrollo, o una situación transitoria y superable, sino un error en los métodos aplicados, la incapacidad -por razones religiosas, culturales y políticas- de seguir esta fórmula, simple en su esencia pero difícil en su aplicación. La India, culta y vieja, sigue pobre; Australia, en cambio, nueva y sin más tradición que la de ser la tierra lejana a la que exiliaron a muchos ex presidiarios, ya es rica.

Cuando se refiere al intercambio entre la ciudad y el campo, proceso fundamental en una etapa de migración intensa, como la que se dio en la Inglaterra de su época, Smith insiste que el

comercio puede darle ganancias a ambos. Si, como afirma Smith, en cualquier intercambio de bienes y servicios ambas partes pueden ganar, entonces, a más comercio, mayor posibilidad de bienestar para la sociedad. El pensamiento de Marx en cambio es uno de suma cero: a más intercambio, más explotación, el comercio fomentaría, en tal caso, la inevitable formación de un proletariado o, a nivel internacional, de un Tercer o Cuarto Mundo, crecientemente pauperizado.

Si el crecimiento no fuera un proceso posible y el comercio y los servicios no generaran riqueza sino explotación, la sociedad requeriría establecer una justicia *distributiva*: la caridad religiosa de la limosna, los impuestos y subsidios del socialismo estatal, o la aplicación en el campo moral de la Teología de la Liberación. Si no, la sociedad resultaría siendo una estructura de privilegiados en su cúspide que apacigua a sus individuos menos favorecidos.

En cambio, si la libertad permite la creación de la riqueza, si el comercio libre es el punto de partida del progreso económico, la solidaridad social se cumple mejor facilitándole al pobre la capacidad para que éste mejore su situación y no regalándole cosas. La limosna o el subsidio mediatiza al receptor, lo convierte en un medio para la autogratificación moral o social de quien lo otorga.

Si la creación de la riqueza no es automática, pero sí posible, ello obliga a redefinir la concepción que una sociedad tiene sobre la justicia. No se le debe entender sólo como un proceso distributivo -que cada quien reciba lo que merece sin que nadie dañe a otro- sino que debe procurar que el intercambio de bienes sea auténtico, que no implique engaño, para permitir así el beneficio de ambas partes, y contribuir con el proceso de riqueza. Para ello, el instrumento fundamental es un sistema jurídico sencillo, estable, aceptado por todos, que permita el aprovechamiento eficaz de la imaginación y voluntad de personas autónomas que convienen, libremente, en producir, en ahorrar, en invertir.

La creación de riqueza surge de la competencia. Este proceso debe ser visto como una cooperación. Cuando alguien compite con otro le hace el enorme servicio de obligarlo al máximo esfuerzo, a la búsqueda de sus límites. El estímulo recíproco genera así el que la sociedad desarrolle su potencial plenamente. Ello no contradice un clima de colaboración colectiva. Los Estados Unidos, por ejemplo, son una sociedad de competencia libre en el marco de organizaciones colectivas de ayuda, sólo que éstas no se estructuran desde arriba por el gobierno federal sino desde abajo por los ciudadanos.

Este aspecto, el de la libre competencia, puede ser incluso más importante para el proceso de la modalidad de sistemas de propiedad existente en una sociedad, como lo demuestran las transformaciones económicas recientes en algunos países comunistas.

¿Qué opinaría Adam Smith sobre el Perú de hoy? ¿Abogaría por un estado mínimo como algunos dicen, en una sociedad tan traumatizada como la nuestra?

No estoy seguro, Creo que, en primer lugar, propondría un esfuerzo muy grande de la sociedad -con participación estatal- para reformular la educación. La premisa básica de una sociedad liberal es la existencia de individuos que han logrado un desarrollo mínimo a través de la educación. Por "individuos", liberales como Smith entienden "seres humanos que se han vuelto responsables a través de la educación". Una educación que no va a mejorar sólo porque haya más escuelas, sino que requiere de mejores hábitos, costumbres, de un camino en el comportamiento general.

Lincoln dijo: “Educación para que no deseen ser señores, porque no desean ser esclavos”. Resulta más útil a la sociedad de hoy un campesino analfabeto pero interiormente libre que un abogado dependiente del burocratismo estatal. Escribió Smith: “El estado tiene que hacer un esfuerzo enorme para difundir entre la población común escuelas y actividades que lleven, por lo menos, a conocimientos de lectura, escritura y aritmética, estableciendo colegios en todas las parroquias”. Y agregó: “El primero de los remedios que debe procurar el estado es el estudio de la ciencia y la filosofía, que debería ser universal. Pero no mediante salarios a maestros, para convertirlos en burócratas negligentes, sino instituyendo cierta clase de prueba o examen de manera que cualquier persona, para ejercer un oficio, deba dar una prueba de capacidad. El segundo de los remedios es la alegría de las celebraciones públicas. El estado -estimulando a través de una completa libertad todo aquello que sin escándalo e indecencia divierta al público, como la poesía, la pintura, la música y la danza, o mediante todo tipo de representaciones- podría fácilmente disipar la melancolía y el mal humor que son casi siempre el alimento de las supersticiones y desvaríos populares.” Hasta aquí una cita textual de quien mucho sólo recuerdan por lo que dijo del comercio: Dejar hacer, dejar pasar.

En segundo lugar, Smith postularía maneras expeditivas para mejorar la igualdad de oportunidades en la sociedad peruana. Preocupado porque las cortes de su tiempo eran manirrota, frívolas y fastuosas, Smith curiosamente planteó, en su tiempo, un salario máximo -y no uno mínimo- para que los burgueses -de cuya moral hizo un verdadero elogio- no trabajasen demasiado ni se enloqueciesen por subir en la escala social.

En tercer lugar, Smith promovería los esfuerzos de regionalización y descentralización del aparato estatal, recomendando el auspicio y reconocimiento de asociaciones libres intermedias entre los individuos y el Estado.

En cuarto lugar, respaldaría todos los esfuerzos por establecer un sistema jurídico simple, claro, estable, que garantice la propiedad, la competencia y el libre comercio; y en el cual el Estado participe en la promoción de la educación, la administración de justicia, el transporte y las comunicaciones, la defensa, y en otras actividades “sólo cuando graves circunstancias lo aconsejen”.

Finalmente, conviene recalcar que Smith probablemente no ocultaría su frustración y desaliento frente al hedonismo de buena parte de la clase dominante peruana y criticaría el contrabando de algunos al utilizar la dialéctica de la libertad con el objetivo de defender privilegios impropios. Los “sentimientos morales” que exaltó Smith rinden homenaje a la razón como fuente de la moral. En su época se aspiraba a la libertad para ser mejores, no para escoger derroches; se pretendía obtener premios en valores y no siempre en placeres.

Señala Mariano Grondona que Robert Nozick -en el prólogo de su libro *Anarquía, Estado y Utopía*- escribió que cuando era socialista “se vinculó con la mejor gente que conoció en su vida”. Luego, cuando se hizo liberal, se encontró con gente más rígida, estricta y socialmente diferente.

Lo que el Perú de hoy necesitaría es una combinación feliz de la sensibilidad del socialista con la racionalidad del liberal. ¿La libertad, para qué? Sin un contenido ético, el ideal de la libertad especialmente en una sociedad traumatizada como la nuestra, resulta una cáscara vacía o, a lo más, un mecanismo efectivo de asignación interna de recursos. Para que el pueblo responda políticamente a un mensaje como el del Movimiento Libertad, éste tendría que afirmarse como una

manera de querer, promover e impulsar a todos los individuos de la sociedad peruana especialmente a los más pobres.

## Crisis y futuro

---

La iniciación de la XXV CADE, que lleva como título el de este artículo, coincide con el Día de Acción de Gracias en los EE.UU. Cuando un latino vive por primera vez esta fiesta en América del Norte suele sentirse extraño y ajeno. En las demás festividades de los anglosajones -sean cívicas, paganas o religiosas- uno se siente, aunque distinto, parte de una cultura similar. En ésta, en cambio, no; al menos los criollos, desoyendo erradamente el espíritu de nuestra herencia indígena, que tuvo en el Inti Raymi una fiesta parecida.

La primera reacción que dicha celebración le suele generar al latino es que constituye una expresión un tanto exhibicionista- de la abundancia norteamericana. Claro -dice uno en defensa de su posición- como son ricos, tienen por qué agradecer. No hemos recogido la enseñanza de nuestros ancestros que -siendo pobres, según nuestra definición actual- agradecían al Sol las cosechas, magras o abundantes, que la escasa tierra de la que disponían generaba cada año. Y no nos damos cuenta de que la fiesta fue instituida allá cuando los norteamericanos eran más pobres que nosotros. No es necesariamente cierto, entonces, que agradezcan porque sean ricos. Tal vez sea lo inverso, que son ricos porque agradecieron, cuando incluso tenían el vaso lleno a medias, mientras que nosotros somos pobres porque nos hemos quejado siempre de la mitad que encontramos vacía.

España nos trajo, con la iluminación de las letras y el derecho romano, la maldición de la queja. Nadie blasfema mejor que un español. Y del encuentro resultante de esas dos civilizaciones contrapuestas -que Max Hernández, citando a Todorov, las califica como la creyente en la masacre y la creyente en el sacrificio- surgió un mestizaje aún no resuelto, cargado de violencia reprimida, profundamente melancólico. Y desde el trauma de ese cruce, un fin de semana del mes de julio de 1532, los peruanos hemos perdido la costumbre de agradecer.

La dicotomía platónica de la realidad, alimentada por los pensadores católicos en la Edad Media, resulta aún parte de nuestra herencia colonial. Seguimos, nuestros ideólogos políticos más que el resto, dividiendo el mundo entre lo óptimo y lo pésimo, los fieles y los infieles, los puros y los impuros, los amigos y los enemigos. Ello genera expectativas que, tarde o temprano desembocan en el desencanto. Al perder la capacidad ilusa de amar a todos los demás como a uno mismo, mandato extremo que tal vez injustamente impuso Cristo, muchos peruanos prefieren sobrevivir en *ghettos* protegidos del diluvio que intuyen caerá sobre un país que crecientemente, y por diversas razones, consideran maldito. El cinismo de muchos peruanos es, en el fondo, expresión de un idealismo desilusionado.

El Tahuantinsuyo tenía, al parecer, y a pesar de sus continuos conflictos civiles, una visión algo más positiva de la vida. No consideraba el mundo como un valle de lágrimas que había que atravesar. No se quejaba tanto de la mala cosecha de un año, como sí agradecía cuando había una buena, no se preocupaba tanto por lo que pudo ser y no fue, sino que, por el contrario, se regocijaba con humildad en lo que naturalmente era.

A través de los tiempos, se han configurado dos tipos de cultura política: una, de la queja; la otra, de la gratitud. La segunda ha sido, por cierto, más exitosa en la historia que la primera. Nuestro mestizaje lleva implícito, como carga aún por resolver, un complejo social de bastardía que nos incita a la queja cotidiana. El vals criollo es, por ejemplo, en tal sentido, más quejoso que el tango o el corrido mexicano. Descendientes linajudos de incas y virreyes, somos hoy los habitantes pobres y desconcertados de un país en un trance eventual de explotar en pedazos.

Adam Smith expresó muy bien la cultura de la gratitud con la máxima liberal de que no corresponde amarse a uno mismo más de lo que podría amarle el prójimo. Ella permitiría ubicarnos en la realidad y no en la ilusión en la que solemos vivir. Por ejemplo, intelectuales destacados han propuesto la integración de los pensamientos vertidos hace medio siglo por Mariategui y el joven Haya de la Torre, como base doctrinal para un programa de acción que permitiría superar la actual crisis. En el arte de lo posible que constituye la política, una propuesta como ésta sería calificada en cualquier otro sitio de ilusa además de retrógrada. Aquí no. Es que vivimos del pasado y no en el futuro.

Nuestra crisis se ha debido, en muchos casos, a modelos platónicos -el económico heterodoxo es, por cierto, uno de ellos- que después regulan la acción colectiva. Cuando fallan -y *éste sí que va a caer*- la sociedad se queda sin premisa y debe volver atrás, desnuda, al punto de partida. La crisis resulta de no haber enfrentado el futuro con conciencia lúcida de nuestra realidad, de saber siempre explicar con fruición masoquista nuestras quejas, y de no poder entender con optimismo y gratitud nuestras inmensas posibilidades.



## La cultura de APOYO

---

Entendemos la emisión de nuestra empresa como la de actuar, de algún modo, como historiadores del presente. Ello en un país pobre, complejo e inmaduro, que no reconoce aún lo que puede ni lo que aspira a ser y que requiere, para su progreso, de un ordenamiento coherente y sistemático de objetivos, recursos y medios, esfuerzo un tanto ajeno a su carácter y cultura tradicionales.

Desde su fundación, APOYO se ha configurado no tanto en función del mercado para sus servicios o de la inversión requerida para su sustento, sino teniendo en cuenta lo que asume como tarea y sobre la base del agrupamiento de las personas que pudieran hacerla viable. Hemos buscado así la participación de hombres y mujeres lúcidos y dispuestos a dar con generosidad más de lo que reciben, a defender con persistencia el valor de su independencia y a encauzar su inteligencia y energía en el esfuerzo por forjar una cultura empresarial común. Ya cumplida su primera década, la empresa se apoya sobre una red de profesionales multidisciplinarios que se distinguen por tener una amplia curiosidad por el mundo de nuestro tiempo, por estar empeñados en la búsqueda de la verdad respecto al desarrollo del Perú -especialmente en lo que se refiere a su evolución económica- por creer en algunos principios fundamentales.

Los que trabajamos en APOYO creemos que el respeto por la libertad creativa del individuo es una condición ineludible para promover la realización de la justicia. Asimismo, consideramos necesario aumentar la productividad, estimular el ahorro interno e invertir los excedentes con imaginación y eficacia para elevar la calidad de vida de los peruanos, especialmente la de los que menos tienen. Ello debe lograrse -así lo creemos- cumpliendo con la Constitución y la ley y reforzando las instituciones representativas de la sociedad para consolidar la democracia y lograr así, con prudencia y realismo, una integración nacional solidaria que respete y reconozca los valores de las diversas culturas que confluyen en el Perú. Consideramos también necesario proyectar una vocación pacífica en el concierto de las naciones para que sea posible, a través del diálogo, superar diferencias, ampliar la cooperación internacional y promover fraternalmente la integración latinoamericana.

El presente, que es el sujeto de nuestro reportaje cotidiano, está repleto de pasado y preñado de futuro. El hoy no es sino un ensamble entre la memoria y la sangre del ayer, con sus amores, odios y añoranzas; el aliento y la imaginación del mañana, con sus anhelos, ansias y temores. Reconocemos que el Perú cambia cada día que pasa. Y que su verdad cambia con él. Para comprenderla bien, procuramos estar, a la vez, dentro y fuera de los hechos, nadando en el remolino de los acontecimientos y flotando por encima de ellos, comprometidos con el torbellino de los sucesos cotidianos pero libres e independientes de sus efectos y resultados. En este esfuerzo, recogemos con espíritu abierto y simpatía los principios, ideas y opiniones que difieran de los nuestros, porque nos ayudan a formar, informar y reformar esta verdad, cotidiana y permanente.

Somos, en cambio, intolerantes con tres cosas: el amor excesivo por uno mismo, la falta de probidad y la violencia destructiva.

Nuestro trabajo tiene, por ratos, el rigor de una partitura para orquesta y en otros, la informalidad de una reunión de antiguos amigos. Nuestras oficinas -que suelen asemejarse a la sala de emergencia de un hospital, porque no tienen nunca horarios fijos- están siempre listas a servir de escenario a esa rara combinación de talentos que se requieren para aprovechar la experiencia acumulada y adaptarse a una realidad tan cambiante como la peruana. En la búsqueda de la experiencia en nuestra tarea de reportar, evaluar, opinar y asesorar, requerimos de una constante tensión creativa y olfato intelectual. Sólo así resulta posible trabajar con conjeturas y pensar sobre intuiciones, buscando afinar el criterio no sólo para entender las razones de la sinrazón, sino para poder entrever, entre éstas, la sinrazón de una racionalidad que excluya, en su interpretación de las cosas al instinto telúrico y las emociones vitales.

En esta perspectiva, consideramos que la prudencia -la capacidad para prever las posibles contingencias y para proveer los medios para lograr los diversos objetivos- es la virtud política suprema, tanto en la vida de los pueblos como en el desarrollo de sus instituciones y empresas representativas. Y somos optimistas, no porque neguemos las tendencias evidentes del deterioro registrado en nuestra sociedad, sino porque a pesar de ellas sentimos confianza en que el Perú, no obstante sus abismos y desgracias cuenta con suficiente riqueza espiritual como para convertir en realidad su promesa tantas veces postergada. En tal sentido, nos sentimos solidarios con Basadre cuando afirma que “lo que importa, sobre todo, no es lo que fuimos, sino lo que -venciendo inextinguible capacidad nacional para buscar la propia agonía espiritual con el yaraví de la autoflagelación y la autonegación o para soplar en el pututo del encono- pudiéramos ser, si de veras lo quisiéramos”.

## La resaca que se viene

---

La producción nacional en el mes de diciembre fue ligeramente inferior a la del año anterior. Los insumos importados, en cambio, aumentaron a lo largo del año en más de 20 por ciento respecto a 1986. Actualmente, la economía peruana se ha vuelto dólar-adicta: consume en nueve meses las divisas que le demora un año en generar. Una devaluación significativa, como la última registrada, apenas ha reducido de casi US\$100 a 80 millones la pérdida mensual de reservas internacionales. De mantenerse este ritmo, el oro y la plata del Banco Central se agotarán en cuatro meses. El déficit del sector público -incluyendo al del Banco Central- superó en 1987 los 12 puntos del PBI. El financiamiento interno que se requirió el año pasado para que el Estado siguiera funcionando obligó a un aumento en aproximadamente 150 por ciento del crédito del sistema bancario al sector público. Frente a esta explosión, el crédito al sector privado cayó 7 por ciento durante 1987 y la velocidad de circulación del dinero aumentó en 10 por ciento.

Los precios deambulan hoy en el Perú sin orden ni lógica. Cuesta más rellenar un botellón de agua mineral que un balón de gas combustible. Por ello, hay camiones que cruzan la frontera, a veces sin retorno, cargados de productos peruanos que se venden en el exterior a 95 intis por dólar. Los especuladores y contrabandistas, entre ellos los narcotraficantes, hacen pingües negocios sobre la base de una política oficial que supone que los precios -el del dólar entre ellos- pueden fijarse por decreto al margen de las señales del mercado. La tasa de interés sigue usada como un mecanismo de despojo al que ahorra y de premio al que gasta.

Todo ello, supuestamente, para seguir creciendo. Como ya es comprobable que al conjunto de la economía le falta impulso, el gobierno ahora pretende clasificar los bienes y servicios en Sociales y No Esenciales, a fin de forzar un aumento artificial en la producción de los primeros. Como faltan crédito y divisas para el conjunto de la economía, ello implicaría que la producción llamada No Esencial tendría que declinar en la misma proporción relativa en la que se pretenda aumentar la Social. Razón tiene el presidente Alan García al extender las funciones de su nuevo ministro de Justicia para comprender también la moralización. Los mejores negocios del presente año se realizarán, con un sello y un tampón, reclassificando burocráticamente como Sociales aquellos bienes también arbitrariamente calificados previamente como No Esenciales. Pretender la cura de un enfermo de fiebre poniéndole la mitad del cuerpo en agua muy caliente y la otra mitad en agua helada resulta absurdo. La economía, como el organismo humano, es también una e indivisible. Lo más probable es que una fiebre que se intente curar así devenga en una pronta pulmonía.

Experiencias previas de lo que se ha pretendido hacer en el Perú en materia económica de 1985 a la fecha hay pocas, ninguna razonablemente exitosa. En el gobierno de la Unidad Popular en Chile, las remuneraciones fueron aumentadas de entrada en 50 por ciento; al final del segundo año, a pesar de los sucesivos aumentos la inflación las regresó a su nivel inicial. Un año después estaban a la mitad de este valor. A quienes argumentan que todavía nos falta un trecho por recorrer para

llegar a los gruesos desequilibrios que existieron en los gobiernos del presidente Salvador Allende y en la segunda administración de Hernán Siles Suazo en Bolivia, bastaría recordarles que en Chile, entre 1970 y 1973, el déficit del sector público nunca alcanzó 12 por ciento del PBI ni se perdieron en ejercicio alguno US\$1,000 millones de reservas internacionales. En Bolivia, el año previo a la hiperinflación se perdieron casi US\$300 millones de reservas valor equivalente al 40 por ciento de las exportaciones FOB durante ese año, la misma proporción alarmante que mostraron las cuentas externas del Perú en 1987.

¿Puede el Perú entonces terminar 1988 con una inflación de cuatro dígitos? Aunque suene hoy absurdo no resulta posible descartar tan terrible amenaza.

### Como no cortarle la cola al perro

---

Lo primero que un gobierno debe hacer en una crisis como la que vive hoy la economía peruana es contar con un diagnóstico certero e integral de la situación. A fines de febrero de este año, el Perú apenas contaba con la disponibilidad de depósitos en el exterior con las que, con creciente dificultad, opera su comercio exterior. En los dos primeros meses de 1988, las reservas internacionales netas disminuyeron en casi US\$200 millones, mucho más de lo que el Banco Central proyectaba para todo el primer trimestre. A este ritmo, las reservas disponibles se agotan en tres meses.

El déficit fiscal proyectado para el año supera el 10 por ciento del PBI, sin contar 3 a 4 puntos de déficit cambiario originado en el Banco Central por la decisión de comprar los dólares a los exportadores a un precio mayor del que se utiliza para vendérselo a los importadores. La expansión de la emisión resultante alimenta hoy una creciente demanda en momentos en que la capacidad de producción interna se ha copado y no hay dólares para importar.

El ritmo general de aumento de precios durante el primer bimestre del año sirvió para demostrar que la devaluación de diciembre, al no venir acompañada de las correspondientes medidas fiscales, sirvió de poco para corregir precios relativos. Hoy en día, desde el vendedor ambulante hasta el empresario transnacional, todos saben que las cosas se van a poner peor antes que mejor y que, por caro que esté el dólar, comprar moneda extranjera resulta, a pesar de ello, el negocio más seguro y rentable.

Frente a situación tan grave, resulta inadecuado que el gobierno mantenga varios equipos económicos desintegrados -el del Banco Central, el del INP y Palacio, los de los ministerio de Economía y Agricultura, la oficina del Primer Ministro- cada cual opinando distinto sobre cuáles son las urgencias y cuáles deberían ser las prioridades, con un Presidente de la República que cotidianamente otorga y quita poder oyendo o criticando a unos un día y a otros el siguiente.

Esta incertidumbre y los resultados del primer bimestre ya habían catapultado las expectativas inflacionarias por encima de 200 por ciento anual antes del último discurso presidencial. Lo poco convincente que fue el mensaje y el que en marzo la inflación vaya a superar el 20 por ciento -bordeando una tasa actualizada de 1,000 por ciento- puedan terminar de cancelar las escasas esperanzas que tenían algunos peruanos sobre las perspectivas para 1988.

Lo trágico en este sentido es que el gobierno ha pagado toda la cuenta política del ajuste integral alternativo que estuvo evaluando hasta el último día previo al mensaje, sin recibir a cambio los beneficios de restablecer un orden mínimo con la atenuación correspondiente de las expectativas inflacionarias. Las computadoras del Ministerio de Economía pronosticaban una inflación anual del 200 por ciento si se corregía integralmente todos los precios atrasados, incluso con una inflación superior a 40 por ciento en marzo. El gobierno ha preferido que la inflación de

marzo sea la mitad, pero a riesgo de que la inflación para el año sea, comparativamente, más del doble. El déficit fiscal, por ejemplo, no ha sido corregido en lo más mínimo: lo que se recaudará de más por el incremento en el Impuesto General a las Ventas y en los precios de bienes y servicios de empresas estatales, se derrochará con una política cambiaria errada que implica un subsidio general ciego a las importaciones, que deberían, paradójicamente ser desalentadas.

Cuando se decide cortar la cola a un perro -operación que no es tan trascendente ni inevitable como el ajuste que requiere hoy la economía peruana- lo mejor es convocar a tiempo a un buen veterinario y dejarlo hacer. Mal hace uno al convocarlo tarde, pero peor todavía es consultar por separado a cada familiar -y hasta al mismo perro- sobre dónde y cómo se debe cortar la cola. El resultado, en tales casos, no puede ser otro que el logrado por el gobierno: en virtud de la compasión que ciertamente merece el animal, se ha cortado tarde mal y poco. La consecuencia es inevitable: en menos de cuatro meses se tendrá que volver a cortar. La moraleja es también evidente: Dios ayude a los perros con dueños tan compasivos.

## Lo que se juega el gobierno

---

El ajuste de precios oficiales efectuado en marzo puede compararse a una intervención quirúrgica en la que sólo se extrae medio cáncer a una paciente, por el temor de que no resista la operación completa. El error es evidente. Como el cáncer -en este caso la distorsión de precios- se reproduce con rapidez, pronto se necesitará operar de nuevo y el gobierno tendrá entonces -junio- que resolver si vuelve a sacar sólo la mitad del tumor -que será por cierto mayor al que existía en marzo- prolongando, así, una agonía cierta; mayor al que existía en marzo- o decide finalmente hacer de tripas corazón y corrige de raíz el mal, solicitando de toda la población un ajuste drástico en su consumo. De julio 1985 a la fecha, el Estado, vía precios oficiales, ha subsidiado crecientemente a la población en general. Algunos de estos estímulos han sido absurdos. ¿Por qué todos los peruanos subsidian la gasolina que malgastan, en mayor medida, los limeños? los pasajes aéreos que benefician relativamente a los más pudientes? Son misterios del crecimiento no selectivo de los dos últimos años. Lo cierto es que el Estado ha transferido 7 puntos del PBI a los consumidores, que ahora tiene que recuperar -y a prisa- porque la credibilidad durante los primeros años permitió emitir dinero sin freno mientras que la desconfianza de los últimos días vuelve dólar -y a cualquier precio- cuando inti pueda sobrar. Lo más preocupante de la última interpelación ministerial fue que, mientras duró ésta, el dólar Ocoña aumentó de 130 a 160, como si el público mientras más entendiera la situación, más se asustara de sus consecuencias. Por ello, a pesar del rebrote terrorista, las últimas encuestas muestran que la inflación ya superó largamente a la subversión como el problema principal del país y que la aprobación a la gestión de Alan García se ha visto reducida por primera vez, a 36 por ciento. Otro 34 por ciento inclusive ya considera a Fernando Belaunde mejor presidente que García. Y faltan dos años de gestión en los que, además de la amenaza subversiva, se tiene que enfrentar el cáncer creciente de los desequilibrios económicos.

En marzo los precios controlados fueron evaluados en casi 40 por ciento, bastante más de lo que resultó la inflación promedio en dicho mes, pero con este aumento apenas se logró restablecer, parcialmente, los precios relativos vigentes en diciembre del año pasado. Si en junio se volvieran a corregir en una proporción similar, el Estado pretendería seguir subsidiando, indefinidamente, 7 puntos del PBI, sin tener las reservas ni el crédito para hacerlo. La consecuencia inevitable sería una hiperinflación explosiva.

En 1987, el déficit del sector público fue superior al 10 por ciento del PBI, pero la inflación anual pudo ser sólo 115 por ciento porque se perdieron cerca de US\$1,000 millones de reservas internacionales. Así, parte de los intis que el Banco Central emitía regresaban a dicha institución para comprar las reservas en divisas que se perdían. Este año, la caída en reservas internacionales no puede alcanzar ni la mitad de la que se registró el año pasado, por lo que el mismo déficit del sector público -incluyendo por cierto la pérdida, cambiaria del Banco Central- generaría, *grosso modo*, más del doble de inflación. Pero en el primer trimestre, este déficit, se ha duplicado en términos reales respecto al primer trimestre de 1987; a ello obedece, principalmente, el que el ritmo

inflacionario registrado en el primer trimestre sea más de cuatro veces mayor al promedio anual de 1987.

Por ello, para reducir la tendencia de la inflación, apenas a su nivel promedio de 1987, hay que empezar reduciendo el déficit del sector público a la cuarta del proyectado para el año. Ello implica, esencialmente, dos cosas: subir el precio de los productos controlados al doble de lo previsto para junio, y establecer mecanismos de ajuste que aseguren que la recaudación va a aumentar por encima de la inflación promedio y, por cierto, a un ritmo mayor que los gastos del gobierno. Pero, adicionalmente, en el campo monetario, se debe indexar el principal de todos los depósitos y colocaciones. A fines del año pasado, la liquidez total del sistema financiero era de I/.148,000 millones; a fines de marzo último ya había caído, en valores constantes, a I/.121,000 millones. Ello implica que la velocidad de circulación de dinero -léase el impacto inflacionario del déficit- ha aumentado más de 20 por ciento en apenas tres meses. Debido a las bajas tasas de interés, los depósitos en moneda nacional no alcanzan hoy ni al 70 por ciento de lo que eran hace un año.

El gobierno enfrentará en las próximas semanas una decisión dramática; o acepta una grave recesión, con la creciente impopularidad que ello ocasiona; o, en el intento de postergar el ajuste, provoca una hiperinflación galopante. Lo primero es siempre preferible a lo segundo, porque cualquier recesión llega en un momento a tocar fondo, mientras que la inflación, como lo demuestra el caso boliviano, se puede multiplicar al infinito, y sólo es posible detenerla poniendo en marcha un programa de ajuste cuyos efectos serán más adversos mientras más se tarde en adoptar dicha decisión dramática.



## Ajuste o hiperinflación

---

Un reciente e ilustrativo informe de Jurgen Schuldt, profesor de la Universidad del Pacífico, plantea como tesis que a la economía peruana le falta aún recorrer un trecho antes de caer en un proceso hiperinflacionario. De acuerdo al análisis de experiencias históricas, el autor considera que el límite recién estaría marcado por un descalabro en las finanzas públicas (con déficits superiores a 25 por ciento del PBI), una indexación generalizada con plazos de ajuste cada vez más breves (digamos, una vez a la semana), un agudo desequilibrio cambiario (con tasas paralelas por lo menos ocho veces mayores que las oficiales) y una debilidad política crónica en el gobierno que le impida aplicar las traumáticas medidas requeridas para superar desórdenes tan dramáticos, antes de que sus efectos originen un descalabro económico y moral que sirva de estímulo para acentuar posiciones políticas extremas que induzcan a salidas como las de una guerra fratricida o propuestas reñidas con la Constitución del Estado.

Yo no me siento tan optimista. En las pocas semanas que demoró en imprenta la publicación del informe mencionado, la tasa del dólar paralelo, uno de los indicadores más significativos para evaluar el riesgo de un eventual proceso hiperinflacionario, más que se duplicó. Su precio -respecto del dólar oficial más caro- se elevó de 30 a 200 por ciento. Ello, de por sí, muestra cuán frágil es en la actualidad una economía como la peruana que se encuentra tan sobretensada.

Algunos indicadores revelan una pronta e inevitable recesión. Si bien la producción del primer trimestre refleja un crecimiento de 3.6 por ciento respecto al mismo período del año anterior, ello en parte se ha debido a que sectores como la industria farmacéutica han venido atendiendo, además de la demanda local, la de nuevos intermediarios que compran la máxima cantidad posible de medicinas para exportarlas de contrabando a los países vecinos, beneficiándose del subsidio cambiario que el estado peruano absurdamente otorga a los insumos importados de esta industria.

Las remuneraciones del sector formal alcanzaron su cumbre entre agosto y octubre del año pasado; las del sector informal, en algún momento del primer trimestre del presente año. Y suponer que ello puede corregirse elevando nominalmente los sueldos y salarios es como suponer que se puede apagar una hoguera echando combustible al fuego. La demanda interna el próximo mes va a ser menor que la que existió durante el año pasado por esta época. La escasez, sin embargo, no disminuirá debido, principalmente, a la carencia aguda de divisas para importar insumos. Por todo ello, el PBI promedio caerá ligeramente en 1988: el PBI neto -como lo llamaría el exministro Gustavo Saberbein- caerá mucho más.

Ni ello, ni la elevación significativa de la inflación a un ritmo de 15 por ciento mensual, van a favorecer las finanzas públicas en los próximos meses. Los impuestos directos caen cuando disminuyen las ventas y las utilidades, pero caen todavía más cuando ello se da en un proceso inflacionario que utiliza registros pasados para estimar las liquidaciones correspondientes. Por este

motivo, entre 1981 y 1982, el déficit del sector público se elevó en Bolivia de 5.7 a 22.3 por ciento del PBI y en Nicaragua de 13.7 a 30 por ciento entre 1982 y 1983. Aquí y ahora, la política cambiaria está generando una emisión equivalente a 4 puntos del PBI, déficit inexistente hasta fines del año pasado. Duplicar, por tanto, el déficit proyectado para el presente año -14 puntos del PBI- podría demorar apenas unos meses si es que no se aplican medidas correctivas.

Y, en tal caso, el dólar del mercado paralelo se volvería a disparar, porque mientras no se ponga candado a la planta impresora de intis, nadie va a desear mantenerlos. Tan pronto los trabajadores cobren sus remuneraciones las van a convertir en dólares, no porque éstos estén baratos, sino porque el pueblo intuye que se van a poner más caros.

La inflación, a los ritmos vigentes, es en apropiación grosera que el gobierno efectúa de los saldos monetarios de las clases bajas y medias, que son las que supuestamente se pretende favorecer con los crecientes subsidios. Como toda estafa general, la inflación remueve los fundamentos de la sociedad, induce a profesores universitarios a convertirse en cambistas callejeros, acrecienta la corrupción, ahonda la crisis moral y estimula la lucha de clases.

Haya de la Torre concibió al APRA como un frente de trabajadores manuales e intelectuales porque consideraba que la confrontación clasista -entre los pocos que en el Perú tienen algo y los muchos que no tienen nada- conducía inevitablemente al fascismo. En dicha interpretación política fue muy superior a los socialistas y comunistas de su tiempo. Sería trágico que un gobierno elegido para poner en práctica ese mensaje de conciliación y esperanza termine por debilitar la democracia a través del virus corrosivo de la hiperinflación por no saber ejercer, ante un pueblo tan noble y sufrido, la tarea dura e ingrata del desengaño.

## Otro 28 incierto

---

Pocas veces en la historia del Perú un mensaje presidencial al Congreso ha despertado tanta expectativa. No debería, en principio, ser así, ya que el presidente del Consejo de Ministros ha cumplido con “exponer y debatir el programa general del Gobierno y las principales medidas políticas y legislativas que requiere su gestión” (Art. 224 de la Constitución). Y, desde que “los mensajes presidenciales requieren previa aprobación del Consejo de Ministros... (y deben contener) la exposición detallada de la situación de la República y las mejoras y reformas que el Presidente juzga necesarias y convenientes para su consideración por el Congreso” (Art. 211), el del presente año debería, por ello, resultar más previsible que en anteriores oportunidades.

Entre el papel y la realidad, sin embargo, se encuentra el abismo tan usual en el Perú entre el país formal y el país real. Hay en la actualidad serios condicionantes que afectan el entorno del próximo mensaje presidencial: el modelo económico hace agua por varios frentes; se requiere con urgencia recuperar un orden mínimo en la economía, esfuerzo que conlleva un alto costo político; y el Presidente puede sentir la tentación, frente a un entorno tan adverso, de patear el tablero nuevamente como lo hizo el año pasado, especialmente debido a que el próximo Congreso del APRA se juega la dirección que el partido de gobierno tendrá en las elecciones de 1990, con la inconstitucional y tantas veces negada propuesta de reelección incluida en la agenda.

En lo económico, la exposición del presidente del Consejo de Ministros tuvo tres características fundamentales: fue juiciosa en lo que se refiere al rumbo y los objetivos generales; planteó la conveniencia de un ajuste gradual cuya viabilidad está aún por demostrarse; y resultó poco precisa en las metas y plazos para alcanzar un eventual y mínimo equilibrio fiscal y monetario. Asimismo, como sucedió con anteriores programas de estabilización, tanto en el Perú como en otros países, el programa aún incompleto del ministro Robles ha repetido el error de efectuar ajustes en las tasas de interés y de cambio antes de reducir el déficit fiscal.

Sin respaldo alguno de la comunidad financiera internacional, resulta discutible cuán posible es el lapso de dieciocho meses en el cual el gobierno pretende efectuar el ajuste que la economía peruana requiere para su ordenamiento. Un proceso de correcciones, para ser gradual, requiere financiamiento. Actualmente, sin embargo, no hay quién, fuera o dentro del país, esté dispuesto a prestarle un real al estado peruano.

Despertar a la realidad genera, como siempre, confusión y angustia. Cabe resaltar sí que, desintegradas e inconexas como son, las decisiones adoptadas hasta la fecha por el gobierno en materia cambiaria, crediticia y fiscal reflejan una saludable intención ordenadora que el Presidente, al margen de censurables exabruptos recientes, parece hasta ahora respetar.

El presidente, el próximo 28 de julio, tiene que tomar una de dos opciones básicas. La dañina para el Perú, que resultaría de mezclar asuntos de estado con rencillas partidarias, implicaría

improvisar nuevamente, con ligereza y apresuramiento, imposiciones figurativas y retóricas que conmocionen al país para lograr, como resultado, disponer plenamente de las voluntades en el próximo congreso aprista.

La benigna para el Perú -y ende para el APRA y Alan García en el largo plazo- pasa por reconocer la realidad; por ratificar un respaldo pleno al Primer Ministro; por presentar propuestas que precisen, enriquezcan y complementen las medidas apenas delineadas por el gabinete; por convocar la unidad nacional indispensable para superar una crisis como la actual; por afirmar con claridad los objetivos nacionales; por devolver un sentido de dignidad y mesura al debate político.

Los próximos dos años serán críticos para el futuro del Perú. Cuando un niño empieza a andar, lo que más le preocupa en la vida es guardar el equilibrio. Esto es más fácil, como todos aprendemos al crecer, en lo físico que en lo moral. El Perú se encuentra hoy en una verdadera cuerda floja. Debe, en lo físico, conservar la vertical de su centro de gravedad dentro del polígono de sustentación; pero debe, en lo moral, suspender su altura de algo superior a nosotros mismos. La tarea esencial del Presidente, en momentos como éste, es motivar a todos los peruanos a que den lo máximo de sí.

Es entendible la preocupación que se genera cuando se descubre que el estómago, el hígado y los órganos genitales tienen tanto impacto en los acontecimientos como el corazón, el alma y el cerebro. El ser humano tiene que poner en juego todas sus dotes y sobre todo la voluntad, para lograr sobrevivir tormentas sin zozobrar.

Decía Ortega que por algo la Naturaleza había colocado el cerebro humano lo más lejos posible de los genitales. No es más hombre, como algunos políticos creen, quien más alardea de macho, sino quien mejor capitán resulta en caso de tormenta o de motín. La suprema cualidad humana es el juicio, la capacidad de guardar el equilibrio en todo momento. Que en este 28 de julio, el Presidente muestre, por variar, un poco de juicio.

## Tiempo suplementario

---

En apenas tres años, el gobierno del presidente Alan García le ha agregado a los precios un cero en promedio. Esta infeliz marca de 1,000 por ciento para la inflación acumulada sólo fue alcanzada al cuarto año del gobierno anterior. Efectuar comparaciones detalladas sobre sí, por ejemplo, un tumor es o no peor que otro, no sólo constituye un consuelo de tontos sino un ejercicio inadecuado para proyectar la salud futura. Si bien el segundo gobierno del presidente Fernando Belaúnde terminó multiplicando los precios por treinta en un lustro, actualmente la economía peruana corre el riesgo de sufrir una elevación de cien o mil veces en los precios durante el quinquenio presente.

En Bolivia, para comparar, la inflación durante 1982 fue de 124 por ciento, ritmo de alza de precios similares al que se dio en el Perú durante el año pasado. En 1983, las tasas de inflación anualizadas de la economía boliviana fueron, para cada trimestre, de aproximadamente 125, 135, 590 y 826 por ciento; las correspondientes al Perú durante 1988 fueron 471 y 276 por ciento. La inflación boliviana galopó a 1,282 por ciento en 1984 y se precipitó a los cinco dígitos en 1985. Hoy, con el resultado de julio y el estimado probable de agosto, se puede concluir que la inflación del Perú en 1988 ya es más grave que la que existía en Bolivia durante 1983. ¿Se elevará necesariamente la inflación por encima de 1,000 por ciento el año entrante?

Para pretender una respuesta certera a esta pregunta uno requiere, primero, contestarse tres interrogantes previas: ¿*Entiende* el gobierno de Alan García lo que está sucediendo? Luego, ¿*Querrá* combatir la inflación el presidente García? Y, por último, ¿*Podrá* el presidente García detener la inflación si se empeñara en ello?

La primera pregunta podría sonar a agravio para quien es, tal vez, uno de los presidentes más astutos que ha tenido el Perú, aunque no ciertamente uno con una cuota mínima de sabiduría. Pero la combinación de despropósitos sucesivos, planteados por uno de los peores equipos económicos que se recuerden en la historia política del país, puede fácilmente conducir a que incluso el más avisado aspirante a doctor se autoilusione con que los síntomas de una grave peritonitis puedan corresponder, en realidad, a los de una pasajera indigestión.

Porque eso es, en materia económica, lo que pretendió hacer creer el Presidente al pueblo en su por lo demás centrado mensaje de Fiestas Patrias. ¿Entiende o no el problema inflacionario Alan García? El que en materia económica no haya tomado al toro por las astas podría implicar, en una interpretación superficial, que el Presidente tal vez no entienda bien las causas y consecuencias de esta crisis. Por lo que no dijo el 28 de julio, en cambio, podría uno suponer que sí, que el Presidente entiende ya el por qué de la inflación, pero que no pretende resolverla por ahora, ya que sabe bien que por más que inflación sea considerada como el principal problema del país, combatirla en serio -con medidas que incluirían, por ejemplo, triplicar el precio de la gasolina y eliminar el déficit cambiario- carece aún del respaldo popular que sí genera, por ejemplo, los anuncios represivos contra el terrorismo. Hasta que el Presidente no adquiera la comprensión suficiente del

problema y asuma el compromiso necesario para su solución, va a reaccionar con la misma resistencia que pondría un paciente, que sólo cree necesitar un laxante, cuando se le pretende llevar al quirófano para una operación de urgencia.

Cuando finalmente se decida a ello, ¿podrá el presidente García -o cualquier otro futuro gobernante peruano para tal caso- detener la inflación? El caso del expresidente Siles Suazo es ilustrativo. Que Siles Suazo entendía el problema inflacionario no hay ninguna duda. Lo eligieron precisamente porque en 1958, con el apoyo del FMI y sin renunciar un ápice a la plataforma revolucionaria de su partido, logró reducir a 3 por ciento anual una inflación que, durante el primer gobierno del presidente Paz Estenssoro, se había mantenido por encima de los tres dígitos anuales. Que quiso resolver el desorden monetario lo demuestran los sucesivos e infructuosos programas que aplicó: la inflación, por ejemplo, cayó a 4 y 5 por ciento mensual en junio y julio de 1984 -año en el cual se registró 1,282 por ciento-. Pero el gradualismo y la concertación, hoy invocados como panaceas por el gobierno requieren, para superar desequilibrios de una magnitud similar a los ahora existentes, de una coherencia, credibilidad y consistencia que no son fáciles de alcanzar en cualquier país latinoamericano. La trágica lección boliviana es que cuando el gobierno anterior entendió y quiso detener la inflación que había generado, ...ya no pudo. Ese punto de no retorno podría haber sido ya alcanzado por el gobierno del presidente García.

## Pirómanos y bomberos

---

Este solo mes, el índice de precios de APOYO (IPA) puede aproximarse a la marca de 100 por ciento, apenas superada una vez (febrero, 1985) en la reciente hiperinflación boliviana. Esta verdadera tragedia nacional va a hacer retroceder irremediablemente, en apenas treinta días, no menos de una década en el progreso de un pueblo que, por ocupar territorios a veces devastados por terremotos y huaycos, suele enfrentarse a la desgracia con enorme estoicismo.

Esta milenaria capacidad de asimilación y la tradicional demagogia política pueden, sin embargo, generar dos confusiones conceptuales. Si éstas no se aclaran con precisión, pueden impedir que el Perú aprenda de sus fracasos para avanzar con mayor realismo en el futuro.

La primera sería confundir la inflación como un acto de Dios y no del gobierno, como una maldición del destino y no la consecuencia de ideas erradas, como una desgracia natural y no como lo que en verdad es: una hechura del gobierno.

La segunda confusión sería culpar de este proceso a los que intentan corregirlo y detenerlo y no a los que lo indujeron y estimularon. Esta confusión es muy común, incluso en pueblos más ilustrados que el nuestro, porque detener los incendios económicos toma mucho más tiempo de lo que demora su ignición. Por ello, en política económica, los pirómanos suelen a veces quedar confundidos entre los bomberos y el líquido extinguidor con el combustible.

Pirómanos han sido los que indujeron crecimientos nominales de salarios que no se sustentaban en aumentos reales de productividad, los que congelaron el precio de la gasolina hasta convertir al Perú en un importador neto de combustibles, los que retrasaron el tipo de cambio hasta volver al país el líder del contrabando sudamericano, los que expropiaron -con tasas de interés negativas- US\$3,000 millones de los pequeños ahorristas para estimular un despilfarro absurdo de importaciones, los que promovieron subsidios indiscriminados a ser financiados por una emisión de billetes que -en medio de esta fiesta heterodoxa en que todo se malgastaba- sólo algunos, acusados de retrógrados por el gobierno, supieron calificar como inflacionaria.

Como la piromanía ha avanzado hasta el borde del abismo -la hiperinflación- se requiere ahora de políticas retrógradas -que hagan retroceder- para evitar que la sociedad peruana se desbarranque por el precipicio. Frenar una inflación como la actual, cuyo ritmo anual alcanza los cuatro dígitos, es ciertamente un proceso doloroso y difícil. Requiere de un programa económico diseñado con aptitud y coherencia, cuyos instrumentos sean idóneos y precisos, cuyos ejecutantes generen credibilidad y respeto, y cuya aplicación se haga con coraje y persistencia.

De varias de estas virtudes flaquea el programa de ajuste recientemente dictado por el gobierno. Para empezar el impromptu del presidente Alan García, cuando anunció un giro de ciento

ochenta grados en los objetivos de su política económica, precipitó los acontecimientos de manera tal que el improvisado programa que se venía diseñando fue abortado a medio hacer, sin metas claras, perdiéndose de esta manera algunos de los efectos benéficos del shock y volviendo casi imposible la obtención previa de apoyo externo, lo que hubiera permitido amortiguar en algo la dureza del ajuste.

El programa, aunque no del todo incoherente en su diseño, resulta insuficiente para cumplir los objetivos planteados e incompletos en la formulación de las medidas correspondientes. El abrirlo así, inconcluso, a las sugerencias y demandas de todos los agentes económicos resulta un arma de doble filo porque las ideas felices, que no faltarán, se mezclarán con muchas exigencias que, aunque legítimas en su justificación, se traerán abajo la validez de los objetivos enunciados. Cero pudo haber resultado siendo el déficit y la emisión con las medidas dictadas. Lo más probable ahora es que, al no contarse con objetivos claros, el gobierno pueda terminar estos próximos cuatro meses con un cero en coherencia y persistencia, para no hablar de credibilidad. Resulta paradójico, por ejemplo, que deambulen por los pasadizos oficiales algunos pirómanos hoy uniformados de bomberos. Las víctimas de esta inflación tienen justificación para sospechar, aunque no sea cierto, que los extintores que tan ortodoxamente muestran hoy, están en realidad cargados de combustible.

Sería injusto no reconocerle al ministro Abel Salinas vocación de sacrificio, compostura para defender sus propuestas y serenidad para hacer frente a una opinión pública exaltada no sin razón. El APRA y sus líderes tradicionales no se merecen este fracaso al que han sido conducidos por ideologías extrañas y asesores ajenos. Ellos requieren en verdad del apoyo de todos los peruanos para que puedan avanzar, aunque sea parcialmente, hacia los objetivos de estabilización planteados.

Sin embargo, de fallar el programa -lo que es no sólo posible sino, lamentablemente, lo más probable- el país requerirá de un esfuerzo aún no exigido a su clase política para defender el sistema democrático de eventuales aventuras golpistas. 1989 sólo podrá transcurrir democráticamente o con un proceso inflacionario en vías de control por el actual ministro o con un nuevo gabinete de consenso nacional para asegurar la supervivencia del sistema democrático hasta la transición del mando en 1990.

Y de toda esta situación tan terrible, son culpables unas pocas ideas disparatadas y unos cuantos personajes irresponsables.



## Un decálogo para el futuro

---

I. Si una crisis implica, a la vez, problemas y posibilidades, la superación de la que existe hoy en el Perú depende, fundamentalmente, de una transformación cultural de la sociedad, del aumento sustancial en la productividad y de la reinterpretación social y política de conceptos como verdad, justicia, deber y compasión.

II. Debemos aspirar a una sociedad dinámica y no estática, que sepa superar su pobreza atreviéndose al éxito, que más allá de la distribución de lo que hay, pueda apostar por innovaciones que le permitan crear lo que aún no existe.

III. La utopía, el dogmatismo y la intolerancia constituyen frenos al desarrollo político y económico de una sociedad moderna. El progreso se logra mejor basándose en la suma de una multitud de acciones realistas y en pragmatismo que reconozca la pluralidad de intereses que existe en los distintos grupos de individuos.

IV. La fuerza más dinámica de una sociedad es la capacidad innovadora de su pueblo, su actitud hacia el trabajo y el ahorro, su espíritu empresarial, su disposición a mirar el mundo y el futuro con optimismo. Avanzan mejor las sociedades cuyo ideal de éxito no es alcanzar empleos burocráticos sino crear bienes y servicios más útiles para un mercado cada vez mayor.

V. En tiempos de rápida transformación tecnológica, los individuos, las instituciones y las empresas son más creativos en un ambiente abierto y competitivo que en uno cerrado y autocrático. El mejor entorno legal, por tanto, es uno que se base en la confianza más que en el control, para alcanzar así el aprovechamiento pleno de nuestras ventajas comparativas.

VI. Los inventos recientes en los campos de información, las comunicaciones y el transporte originan que la gestión del gobierno, las instituciones y las empresas resulte más eficaz cuanto más descentrada, flexible y participatoria sea.

VII. Aunque los individuos pueden ampliar crecientemente sus aspiraciones en una sociedad que progresa, también deben ser conscientes que nada es gratuito y que, en la definición del valor monetario de los bienes y servicios, el mercado asigna precios más eficientemente que el gobierno. La disciplina de la competencia resulta más eficaz que la tiranía de la burocracia.

VIII. Ser libre es estar sujeto a la ley y no al capricho eventual de funcionarios. Las leyes, por tanto, deben ser simples, claras y estables para lograr que los individuos abandonen la condición de súbditos de un estado autoritario para convertirse en ciudadanos de una sociedad democrática.

IX. El progreso requiere de un orden y no de una maraña confusa y contradictoria de órdenes, de la promoción de acciones oportunas más que de la elaboración de planes atemporales, de un gobierno

que promueva y fortalezca la moneda sana y el fortalecimiento del tejido social y no uno que estimule la inflación y el conflicto ente individuos y grupos, de un estado integrado por verdaderos servidores públicos y no por funcionarios indolentes.

X. Para la afirmación del sistema democrático no sólo se requiere ampliar las libertades políticas sino también respetar las libertades económicas: el derecho a la propiedad y a la competencia, el flujo y la contratación abiertos de bienes y servicios. Más que reglamentar las acciones de sus súbditos, la misión esencial de un estado moderno es la liberación de la capacidad creativa de sus ciudadanos.

## El comienzo del final

---

Las cifras de producción manufacturera en el pasado mes de octubre muestran una caída de 35 por ciento respecto a las del mismo mes del año anterior. Las fábricas peruanas producen hoy menos que en julio de 1985, recesión productiva que resulta agravada por el proceso hiperinflacionario - ocasionado por la severa distorsión de precios y el enorme déficit fiscal- así como por una represión sin precedentes del sistema financiero.

En sus orígenes y consecuencias, las políticas populistas aplicadas durante los últimos años en el Perú -como también en el Brasil- se parecen como gotas de agua a los años del peronismo en Argentina y a los del gobierno de la Unidad Popular de Chile. Hay, dice Roberto de Oliveira Campos, tres tipos de países: los que aprenden de las experiencias ajenas, los que aprenden de su propia experiencia, y los que carecen de memoria colectiva. Los próximos años servirán para descubrir si el Perú puede dejar de ser un país de la tercera categoría.

1989 va a imponer sobre los peruanos un desafío que muy pocas generaciones han tenido que enfrentar en la historia: empezar casi de cero. Como el barroquismo es una expresión natural de la cultura peruana, hoy se sostienen sesudas aunque inútiles decisiones sobre cuál es la oportunidad precisa en que la economía peruana ingresa en la vorágine hiperinflacionaria. El proceso, en cualquier caso, es ya irreversible. Todo el ahorro nacional en el sistema financiero no alcanza al 5 por ciento del PBI; el déficit del sector público, en cambio, es más del doble. Por ello, una política de ajustes inconexas graduales e intermitentes, como la que el gobierno viene siguiendo, no resulta suficiente para sacar a la economía de este remolino creciente.

Las experiencias de los países europeos en los años veinte, y más recientemente la de Bolivia, muestran que la hiperinflación produce el colapso total del sistema de precios, la plena dolarización del sector moderno de la economía y una transición al trueque en el sector rural. La escasez y el racionamiento de alimentos básicos y combustible, combinado con caídas en las remuneraciones, contribuirán al descontento social y laboral, con serio riesgo para la estabilidad del sistema democrático. De no corregirse frontalmente este desorden, tanto la producción como el empleo seguirán cayendo de manera sostenida, hasta generarse un fenómeno cruel: el pleno repudio de la moneda nacional.

Nadie duda ya que superar esta hiperinflación requerirá de un programa integral de ajuste drástico en los precios y tarifas, una reducción de los subsidios, salarios en correspondencia con su productividad internacional, y una reforma tributaria integral. La situación se complica porque en el momento actual no hay reservas internacionales para defender el precio de la moneda, y un país quebrado como el Perú requiere un mínimo de caja en divisas para subsistir sin permanentes sobresaltos. Por tanto, la situación inflacionaria va a empeorar durante algunos meses, incluso con el mejor programa estabilizador, antes que pueda mejorar.

Y para que un programa de estabilidad finalmente funcione, además de un diseño apropiado, se requiere credibilidad y persistencia: credibilidad porque la velocidad de circulación se está multiplicando. La liquidez ha caído en 60 por ciento durante lo que va del año. Como el PBI va a caer en 6 o 7 por ciento, ello significa que la velocidad de circulación del dinero se ha más que duplicado. Entonces, incluso si el déficit fiscal se redujera a la mitad del existente el año pasado, no se habría logrado nada, porque el efecto inflacionario de cada inti a imprimirse hoy es más del doble del impreso hace un año. El programa también requiere de persistencia, porque la borrachera en que se encuentra actualmente la economía es de *delirium tremens* y, por lo tanto, sólo va a ser superada con varios meses de tratamiento intensivo. Incluso una simple copa de vino en la mitad del camino, que podría ser vigorizante en circunstancias más normales, resultaría contraproducente en el caso de una economía alcoholizada como es hoy la peruana.

Dicen que un mismo vaso lo describe un optimista como medio lleno y un pesimista como mitad vacío. El vaso de la economía peruana ésta hoy lleno a cuartas. Pero hay razones para creer que el cuarto lleno de hoy, a pesar de toda la crisis que se viene, resultará a la larga más beneficioso que la mitad vacía de ayer, cuando el error y la mentira indujeron una ilusa y desordenada intoxicación. Hoy, en cambio, sólo hay espacio para la verdad y para el trabajo. Y el peruano que es un pueblo viejo e intuitivo lo presiente así. Y en el proceso viene aprendiendo.

Lincoln dijo que podía engañarse a mucha gente por poco tiempo o a poca gente por mucho tiempo, pero no a mucha gente por mucho tiempo. Si se persiste con paciencia, a pesar de las enormes tribulaciones que se vienen, habrá de llegar un día en que la gente le dé finalmente la espalda a los hechiceros políticos. Y ese día, el Perú resurgirá.

## Asesoría empresarial

---

A mediados de 1988, Rudiger Dornbusch -un economista nekeynesiano profesor del MIT, que fuera contratado como consultor por el ministro Saberbein y el asesor presidencial Carbonetto- quiso salvar su prestigio académico con un artículo en el que vislumbró uno de tres desenlaces para la economía peruana: una estabilización draconiana (mayores impuestos, tasa de cambio única, alineamiento de precios relativos), una estabilización gradual (para lo que se requeriría de la obtención de recursos del exterior que permitieran sostener sus déficits), o una desintegración acelerada, similar a la que sufrió Chile con Salvador Allende. Dornbusch pronosticó certeramente esta última opción como la más probable.

En el último trimestre de 1988, la capacidad adquisitiva del peruano colapsó. Respecto de un año antes, la producción industrial cayó en 40 por ciento, superando los peores augurios de los críticos más extremos del gobierno. El Producto Bruto Interno es hoy inferior al de julio de 1985, siendo la población 10 por ciento mayor. El 70 por ciento del ajuste ya se ha dado, no de manera ordenada, como debió ser, sino arbitraria e irracionalmente. A partir de enero, los conserjes de Electroperu ganarán más que los generales del ejército, los embajadores del servicio diplomático destacado en la Cancillería, o los vocales de la Corte Suprema. Difícilmente se hubiera logrado identificar una manera mejor que descuajeringar los valores y las jerarquías de la clase media.

Reconstituir un nuevo orden social coherente tomará un largo tiempo. Por ahora, los peruanos están más preocupados por el efecto que tendrá el 30 por ciento de ajuste restante en su empresa, su empleo, su ingreso.

¿Qué tendría que hacer el gobierno en los próximos meses? Primero, unificar el dólar; segundo, corregir precios relativos; tercero, elevar impuestos para eliminar el déficit. Lo primero, devaluar el MUC, ya no genera tanta inflación como el gobierno teme, porque la dolarización de la economía ha generado una situación en la cual los precios internos resultan ajustándose por el dólar libre del mercado de Ocoña. El ajuste en los precios controlados por el gobierno, así como el inevitable aumento de impuestos, no puede postergarse, porque cada inti que se emite hoy, para el déficit del Gobierno Central o de las empresas estatales, genera más daño -por la inflación general que causa- que el alivio eventual y temporal que generan los subsidios implícitos.

En cualquier caso, el PBI durante 1989 caerá en, por lo menos, 12 por ciento, lo que constituye ya la peor depresión de las últimas décadas. A diferencia de 1983 -cuando la recesión fue causada principalmente por desastres naturales que el gobierno aprista pudo revertir dos años después estimulando la demanda interna- esta vez sólo podrá haber recuperación sobre la base de las exportaciones, para lo cual se requiere de una reinserción adecuada en la economía internacional.

Este desafío no es tan grave como el que enfrentan los empresarios para su financiamiento interno. Las empresas peruanas van a tener que generar más dólares, contando para ello con menos intis,

porque el sistema financiero interno se ha reducido a una cuarta parte de lo que fue en la anterior recesión. En el primer semestre de 1989, por ejemplo, muchas empresas van a sufrir un coletazo financiero, especialmente aquéllas que, en el bullicio de los años fáciles de la reactivación del gobierno aprista, se endeudaron para comprar activos fijos o para acumular inventarios de bienes o insumos orientados al consumo interno. Hoy el péndulo regresa vengativo con fuerza y va a arrasar a toda empresa a la que encuentre sin liquidez. La primera tarea que todo ejecutivo debe fijarse es un planeamiento financiero estricto para el primer semestre de 1989. Lo peor que le puede pasar a las empresas en dicho lapso no es registrar una pérdida o un menor patrimonio -todas a la larga van a sufrir ello- sino quedarse sin caja para pagar planilla y seguir operando. Los costos de reposición dejan de tener su sentido normal frente a una modificación abrupta de demanda y precios relativos como la que se va a dar en la economía peruana durante los próximos meses. El estrangulamiento financiero va a generar la desaparición del patrimonio de muchas empresas, especialmente de aquéllas que se quedan sin liquidez. Generar caja, incluso a pérdida, puede a la larga no ser mal negocio, porque el descuento al que se vendan las cosas hoy puede resultar inferior al que finalmente tendría mañana. El principal objetivo empresarial de estos meses resulta uno muy simple: sobrevivir.

Para contribuir a ello, el gobierno debe generar un entorno claro que permita a las empresas peruanas superar la crisis y evitar la quiebra. Ello requiere medidas como, por ejemplo, el ajuste de los estados financieros a la inflación, la flexibilización temporal de la legislación social y de trabajo, la promoción más activa del mercado de capitales a largo plazo y el otorgamiento de facilidades a la fusión y adquisición de empresas.

Los empresarios, durante los próximos seis meses, deben olvidarse de sus estados de ganancias y pérdidas y concentrarse en asegurar un flujo de caja de subsistencia. Mejor le irá a quienes mantengan la liquidez de sus empresas, incluso reconociendo pérdidas y rematando activos, que a quienes muestren utilidades en el papel que no sepan liquidar a tiempo.

## Sobre bicicletas y revoluciones

---

Una crisis tan grave como la actual induce a un esfuerzo especial de introspección trascendente. Vivir significa tener vida, durar, soportar, ajustarse a las cambiantes circunstancias, superar los difíciles problemas que este desafío genera. Uno puede definir la vida -como también, en menor escala, el gobierno de un país o la gerencia de una empresa- como el proceso cotidiano de enfrentar problemas.

Una primera necesidad en la vida de los hombres, o en el curso de los pueblos, es poder distinguir entre un problema y una condición. Quien, por ejemplo, es ciego o sordo, más sufre una restricción que enfrenta un problema. Cruzar la calle, entender una obra de teatro sí constituyen para un impedido problemas a resolver, desafíos a superar. Pero quienes caen en el absurdo de considerar como un problema una restricción invariable resultan muchas veces atrapados porque su insolubilidad puede generar una angustia autodestructiva.

Esto es más fácil de percibir en la situación de las personas que en el de las sociedades. La izquierda latinoamericana, por ejemplo, peca muchas veces de adolescente cuando interpreta que toda condición adversa del presente constituye un problema urgente a resolver. Sociedades como las nuestras, de historia compleja y desgarrada, se angustian con esta prédica, cayendo así fácilmente como víctimas de la demagogia mesiánica. Y, en el poder, muchos idealistas y revolucionarios de ayer, que en su tiempo denunciaban con abominación un "pasado vergonzante", se burocratizan y corrompen; el anunciado "futuro diferente" resulta así un "presente decadente"; no pocos se dedican a engrosar sus hasta entonces magras alforjas, mientras denuncian cínicamente a quienes en su oportunidad les señalaron la absurda inutilidad de atacar molinos de viento y la imperiosa necesidad de progresar sin prisa pero resolviendo problemas concretos. El pueblo, en la resaca de tan lastimosa embriaguez, termina aún más confundido sobre cuál es su real condición y cuáles sus verdaderos problemas.

Estos, una vez identificados con propiedad, resultan esencialmente de dos tipos. Los más fáciles de resolver son aquellos a los que E.F. Schumacher denominó convergentes, problemas precisos y cuantificables. Por ejemplo, alguien un día se pudo preguntar: ¿Cómo puedo aprovechar la energía muscular del hombre para potenciar su desplazamiento? Y, ya enunciado el problema, tomó años de ideas, opciones imaginativas, ensayos frustrados, para lograr una máquina como la bicicleta. No fue, por cierto, un problema fácil de resolver. Leonardo, por ejemplo, con todo su genio, ni siquiera se lo planteó. Tampoco el vehículo que hoy conocemos como tal fue una respuesta rápida ni única al problema enunciado. Su diseño generó una discusión extensa y agitada: ingenieros que especulaban sobre el radio óptimo de la rueda anterior (grande) y la relación que debía existir entre ésta y la posterior (chica), sin ser conscientes que el pedaleo podía aprovecharse mejor mediante un adecuado sistema de transmisión entre llantas idénticas que con una rueda anterior inmensa que requería de un equilibrista como conductor y de una escalera para subirse. Pero una

vez lograda la solución final, ésta ha resultado relativamente estable y armoniosa. Y, en el proceso, cualquier nueva información o descubrimiento sobre el tema ayudaba a interpretar mejor el problema, permitía convergir hacia una mejor solución para el mismo. Una bicicleta es hoy esencialmente la misma en Austria como en Zaire. Constituye, como las tijeras y el pantalón, un problema ya resuelto universalmente.

Quedan, por cierto, problemas convergentes hasta ahora insolubles: lograr una cura para el SIDA, determinar el origen del cáncer, pronosticar con precisión los terremotos y desastres naturales, controlar el dolor. Todos estos problemas comparten una característica: mientras más se sepa de ellos, mejor convergirán las propuestas para superarlos. Hasta que se les encuentre la vacuna, el remedio, la solución.

Existen otros problemas, en cambio, de los que incluso se sabe bastante más, pero ante los cuales este mayor conocimiento no genera necesariamente más armonía ni estabilidad. Son problemas divergentes. La educación de los hijos es un ejemplo. Algunos lo interpretan como un proceso de asimilación de conocimientos para el que se requiere esfuerzo, orden y disciplina. Otros, en cambio, lo ven como un proceso de florecimiento interior, para el cual se requiere de libertad, autonomía y paciencia. Mientras más se analice el problema, más se va a discutir sobre el mismo. Las ideas sobre el tema no convergen sino divergen. La lógica, tan útil en los problemas convergentes, sirve de poco para zanjar estas divergencias existenciales. La experiencia ayuda un poco más, especialmente si contribuye con evidencias.

Una sociedad progresa cuando, en el marco de su condición invariable en el futuro inmediato, sabe distinguir bien sus problemas; cuando facilita la búsqueda de soluciones a sus problemas convergentes; y cuando instituye reglas simples y aceptadas por todos para dirimir sobre sus problemas divergentes. En cambio, una sociedad se estanca cuando los filtros ideológicos y los sentimientos confunden la visión de una agenda concreta para su futuro, cuando los políticos (como Alan García) interfieren en la solución de sus problemas convergentes (el transporte masivo) y cuando las divergencias no se pretenden resolver mediante vías democráticas y legales sino a través de imposiciones arbitrarias y violentas.

Se le atribuye a Louis-Claude de Saint-Martin el lema Libertad, Igualdad, Fraternidad para la revolución francesa que este año cumple sus primeros dos siglos. Resulta fácil diseñar un contexto legal adecuado para una sociedad libre, pero el verdadero desafío es conciliar los principios de libertad e igualdad en un equilibrio que permite alcanzar una sociedad más fraterna. Avanzar en tal sentido le ahorraría al Perú la sangre, las lágrimas y el retraso notable que toda revolución, la opción alternativa, genera en la historia de los pueblos.



## Los errores del socialismo

---

Con este subtítulo, y al borde ya de los noventa años, Friedrich von Hayek acaba de publicar su último libro. En él ratifica su tesis respecto de los alcances y conveniencia de la cooperación *vis a vis* la competencia en el desarrollo de la humanidad. Según la autoridad más venerada del pensamiento liberal europeo, cuando los individuos pretenden objetivos comunes en grupos pequeños -como una familia, un equipo de fútbol, una empresa- el logro de los mismos depende, en gran medida, del espíritu de altruismo y solidaridad entre sus miembros. En tal dimensión microcósmica, la cooperación resulta el modo instintivo ideal para la interacción humana. En cambio, en grupos mayores, la cooperación de este tipo no sólo es poco viable sino eventualmente nociva. La competencia -entre equipos, empresas y países- resulta la mejor manera de promover que cada unidad del conjunto macrocósmico puede descubrir mejor los recursos con los que cuenta y alcanzar un uso óptimo de los mismos.

Según Hayek, los humanos, para alcanzar la prosperidad, requieren funcionar en dos planos paralelos. Uno, micro, el de su familia, su club, su empresa. donde la lealtad, la entrega y desinterés son las virtudes que permiten potenciar plenamente su realización personal y la mejor interacción con sus asociados y familiares. En el plano macro, en cambio -en el ámbito de su distrito, los mercados a los que concurre, la sociedad en su conjunto- progresan mejor el individuo y la empresa cuando defienden bien sus intereses, incluso en función de una motivación lucrativa.

Esta aparente inconsistencia -lealtad generosa hacia lo de uno, pero interés egoísta respecto a la relación con terceros- resulta, afirma Hayek, étnicamente incómoda para los humanos. Por ello, cada cierto tiempo surgen ideologías -como las socialistas del último siglo- que desean forzar la extensión de las virtudes microcósmicas del hombre a la sociedad en su conjunto. La planificación central no es sino el intento de diseñar un orden en el cual se pretende que los humanos interactúen, hacia fuera de lo que sienten como suyo, con los mismos valores y jerarquías que rigen las acciones en sus familias, equipos y empresas. La planificación socialista fracasa, según Hayek, porque estos arreglos preconcebidos no permiten generar la información que se requerirá para lograr un avance efectivo hacia lo propuesto. Así, en el plano conceptual, Hayek considera al socialismo errado en los hechos, porque no ha diagnosticado bien a la competencia (en vez de la lucha de clases) como la fuerza motora del capitalismo y el desarrollo; y errado en su lógica, porque en su diseño social traba el proceso de acumulación de información que permitiría, eventualmente, su estabilidad relativa.

Las grandes transformaciones tecnológicas recientes en las áreas de la comunicación y el procesamiento de datos vuelven esta diferencia entre los sistemas cada vez más evidente. En la actualidad, una empresa de confecciones norteamericana recoge, cada noche, la información pertinente respecto a volúmenes de talla, colores y estilos de sus productos, en 3,200 puntos de venta, para trasmitirla por satélite, convertida en órdenes de producción para el día siguiente, a sus

plantas en Hong Kong, Singapur y Sri Lanka. Algunos días después, Boeing 747 fletados transportan estos pedidos a su almacén central en Ohio, donde el inventario promedio ha sido reducido a apenas cinco días. Sus puestos de venta europeos cuentan con pantallas donde los consumidores pueden observar los diseños propuestos para la próxima temporada y hasta cambiarlos a su gusto. Por su parte, una empresa japonesa va a fabricar pronto automóviles a la medida por el mismo precio de los vehículos en serie. Los sistemas robóticos flexibles ya pueden introducir modificaciones específicas a cualquier modelo en la línea de ensamblaje. Todo ello -como los teléfonos portátiles, el fax, etc., -son consecuencia no de la cooperación centralizada sino de la competencia abierta; han sido inventadas por individuos y empresas privadas en sistemas capitalistas y no por cooperativas y empresas estatales en sistemas socialistas.

Esto es reconocido por los socialistas modernos en la URSS, China y los países europeos. España, por ejemplo, progresa hoy porque ha reconocido que la fuerza motora de su sociedad es eficiencia y la innovación de sus individuos y empresas. Hace poco, un ministro español afirmó que su gobierno debía darle tanta atención a la Unión General de Trabajadores como al Colegio de Abogados, transformación notable en un partido autodenominado Socialista y Obrero, donde se suponía tradicionalmente que el partido y los sindicatos constituían las piedras angulares hacia una sociedad “más justa y solidaria”.

Si la contratación colectiva resulta, por el contrario, injusta y poco solidaria con el trabajador moderno, innovador y creativo; si hasta al presidente Alan García -un social-demócrata con ideas viejas en la materia- le parece necesario privatizar el Seguro Social -paradigma del estado benefactor y laborista-; si los hospitales y escuelas parecen rejuvenecerse cuando compiten entre sí, resulta imprescindible, para cualquier socialista que se respete, reformular una plataforma conceptual que revalorice la *mano invisible* del mercado por encima de las *patas visibles* de la intervención estatal.

## La privatización

---

Hasta sus defensores más entusiastas reconocen que el término “privatización” resulta una palabra poco adecuada para definir el proceso que, en su esencia, debe incorporar la reinserción de mecanismos de mercado en el proceso de toma de decisiones tanto o más que el cambio en la propiedad de los medios de producción. Decía Adam Smith que “los servicios públicos nunca resultan mejor que cuando la recompensa por los mismos proviene como consecuencia de su suministro y es proporcional a la diligencia empleada en los mismos”.

La razón esencial que se proclamaba en el pasado para justificar la intervención estatal en la actividad productiva era que el mercado no registraba diversos beneficios y costos que las empresas privadas generaban a la sociedad y que, por tanto, sus decisiones resultaban sub-óptimas. La experiencia de las últimas décadas revela que el manejo público de decisiones económicas ha resultado muchas veces peor, generando tal magnitud de costos ocultos que superan, muy ampliamente, los eventuales beneficios que la intervención estatal estaba supuestamente llamada a generar.

Por lo tanto, la tendencia actual en política económica se orienta hacia la búsqueda de una mayor eficiencia global a través de una privatización, o remercadeo, de diversas actividades económicas, incluso aquéllas que en el pasado fueron materia de una intervención estatal justificada. Las razones para la misma, por ejemplo, pueden haber dejado de ser válidas con el tiempo. Los hoteles para turistas que el estado peruano construyó en diversas ciudades del interior a partir de los años cuarenta es una muestra de ello. En su tiempo, éstos fueron proyectos de infraestructura para el desarrollo. Hoy resultan empresas comunes y competitivas, cuya propiedad y gestión no tienen por qué corresponder al Estado.

La resistencia burocrática al cambio en una época como la actual de grandes transformaciones tecnológicas; las dificultades para lograr un liderazgo directivo y una gerencia moderna y estable en las empresas estatales; los recurrentes déficits en los que éstas incurren; el efecto perverso de los mismos en las cuentas del Tesoro Público y en la distribución del ingreso; todo ello ha contribuido a sustentar la validez y conveniencia de un proceso de privatización. A argumentos prácticos como los señalados se puede agregar dos planteamientos más conceptuales: primero, la eficacia económica aumenta con el estímulo de competencia y con una mayor amplitud de las opciones del consumidor; y, segundo, el sistema democrático funciona mejor cuando cada vez más ciudadanos pueden, a través de un mercado de capitales fortalecido, acceder a la propiedad de acciones, incluyendo las correspondientes a las empresas en las que trabajan.

En la evaluación de los procesos recientes de privatización, destaca la experiencia del Reino Unido bajo el gobierno de Margaret Thatcher. Este año, por ejemplo, la administración conservadora inglesa va a recaudar fondos por cinco mil millones de libras esterlinas como consecuencia de las transferencias accionarias de empresas en proceso de privatización.

Muchos analistas insisten, no sin razón, que no es lo mismo privatizar en una economía industrializada que en una sociedad atrasada como la nuestra. Sin embargo, hay experiencias en países poco desarrollados que vale la pena evaluar. Sri Lanka, por ejemplo, es un caso: una nación que logró su independencia en 1947, después de cuatro siglos de sumisión colonial, y practicó sin éxito el estatismo durante los siguientes treinta años, para desarrollar últimamente uno de los procesos más dinámicos de privatización.

Y Sri Lanka es el país que cuenta con el partido trostkista más importante del mundo. Su representación parlamentaria alcanza al 20 por ciento del total de la Asamblea Legislativa y uno de sus miembros llegó a ser ministro de Finanzas. En la primera elección después de la Independencia, más de la mitad de los parlamentarios que resultaron elegidos eran de ideología marxista. Como consecuencia de ello, cerca del 70 por ciento de las actividades económicas estaban, tres décadas después, a cargo de doscientas unidades productivas, bien sea de propiedad del estado o administradas por él.

Ante la crisis resultante, un gobierno liberal en lo económico y conservador en lo político generó un cambio significativo de orientación en 1977. En dicho año, Sri Lanka importaba el 30 por ciento de sus requerimientos de arroz; hoy es autosuficiente en dicho cultivo. Los monopolios estatales han sido disueltos. La escasez y las colas han pasado a ser pesadillas de antaño.

Hasta hace quince años, los políticos de Sri Lanka viajaban de incógnito por las carreteras del interior del país por temor a ser identificados por los sufridos viajeros que hacían largas colas en las estaciones de ómnibus estatales. Hoy, la mitad del transporte se efectúa en unidades que son propiedad de empresas privadas. En un país donde el 90 por ciento de la actividad financiera fue estatal, catorce bancos extranjeros compiten hoy con otros tantos privados y un par de bancos estatales.

Como consecuencia de este proceso de liberalización, el crecimiento anual promedio del PBI se multiplicó de 2 a 6 por ciento anual; el porcentaje del PBI destinado a inversión se duplicó; el desempleo se redujo de 26 a 12 por ciento de la fuerza laboral y, especialmente, la inflación se redujo a cero en 1985. Incluso en los últimos años, en que Sri Lanka ha tenido que invertir sumas significativas en su defensa nacional, el aumento en los precios se ha mantenido por debajo del 10 por ciento anual.

El ejemplo de Sri Lanka puede ser más representativo que el inglés para el caso peruano. Los resquemores del sector privado a un ambiente más competitivo pueden generar, aquí, las mismas resistencias que tuvieron que enfrentarse allá. La burocracia de cualquier parte va a oponerse siempre a la privatización por el poder y los inmerecidos privilegios que pierde. La prensa estuvo en Sri Lanka, como parcialmente se encuentra aquí, imbuida en una mentalidad estatista donde las noticias y los ingresos publicitarios giran alrededor de los que en ese momento detentan el poder central. Y los sindicatos, políticamente más ideologizados allá que aquí, se opusieron frontalmente al proceso con sucesivas huelgas generales.

Y, a pesar de ello, la privatización avanzó e hizo prosperar la economía. Sin precipitaciones, caso por caso, cuidando que el proceso fuese manejado por autoridades probas y eficaces, definiendo con claridad un marco regulatorio competitivo para las actividades que pasaban a ser

privatizadas. La lección está allí, como en los casos de México y Pakistán, demostrando con el ejemplo que lo aparentemente difícil de lograr es posible si se maneja con lucidez y constancia.

## Un programa para el próximo gobierno

---

A partir de 1985, el gobierno de Bolivia ha aplicado un severo plan estabilizador de ajuste económico, cuyo respaldo político resultó confirmado en las últimas elecciones. En Nueva Zelandia, en cambio, un gobierno laborista ha venido intentando, hasta ahora sin éxito, estabilizar una economía menos postrada con un programa muy similar al boliviano. La misma receta en un caso fue exitosa y en el otro fracasó. ¿Qué lecciones se pueden aprender de estos casos?

Una primera hipótesis sería, paradójicamente, que resulta más fácil, aunque no menos costoso, superar una crisis inflacionaria cuanto más grave ella es. En economías con inflaciones moderadas, como la que sufre Nueva Zelandia, los ajustes de precios se efectúan sin mucha sincronización. Y existen dos requisitos previos para detener eficazmente una hiperinflación: primero, que los precios relativos de los bienes y servicios estén alineados según lo que determinaría el mercado y, segundo, que cuando los precios nominales se ajusten, lo hagan de manera más o menos paralela. Estos requisitos no se cumplen hoy en el Perú. El kwh de energía eléctrica, por ejemplo, vale hoy una pequeña fracción de lo que en términos relativos costaba en 1985, a pesar de que nuestro país es el único donde el terrorismo derriba torres de transmisión, elevando con ello el costo de suministro. De otro lado, si bien los ajustes mensuales de precios ya se han vuelto habituales, la severa depresión y su efecto superavitario en la balanza comercial han originado que el precio de la moneda extranjera oscile significativamente. Un hecho que facilitó la solución del drama hiperinflacionario boliviano fue que todos los bienes y servicios tenían su precio de referencia en dólares libres. Estabilizando el tipo de cambio, una vez cerrado el déficit fiscal, el resto de los precios pudieron lograr rápidamente un equilibrio estable.

Es evidente que ordenar los precios constituye un requisito necesario para cualquier programa de estabilización confiable. Pero ello no es suficiente, como no lo ha sido en Nueva Zelandia, para asegurar el éxito del mismo. El gobierno que finalmente logre derrotar el cáncer de la inflación y devolver al pueblo peruano un sentido de esperanza no lo hará porque sepa reproducir bien de textos foráneos recetas ortodoxas de ajuste. Como en todo proceso que afecta a la sociedad en su conjunto, se requiere tanto de arte como de ciencia. Tan importante como definir ¿Qué hacer? Resultará pertinente preguntarse ¿Cómo? ¿En qué orden dictar las medidas? ¿Con qué rapidez?

¿Qué secuencia debería cumplir el programa económico de un próximo gobierno? Es evidente que la tarea inmediata es detener la inflación pero, en paralelo, será necesario dictar todas las modificaciones legales que se requieren para favorecer la pacificación del país, la reestructuración de la economía, la reconversión del Estado, una mejoría en el bienestar de los más pobres y una modernización cultural. Los primeros cien días del nuevo gobierno, además de mostrar un avance notable en la disminución de la inflación, deberán registrar una modificación significativa en el marco institucional para temas tan diversos como el rol de la sociedad civil en la lucha antisubversiva, la autonomía del Banco Central de Reserva, la legislación tributaria y laboral, la

privatización de empresas estatales, la renovación de la seguridad social, entre otros. Un objetivo económico fundamental de este periodo deberá ser que el sistema de precios recupere su rol como asignador de recursos para que el sector fiscal recupere su función como redistribuidor de ingreso.

A esta etapa de estabilización económica y renovación jurídica debe seguir un periodo cuyo énfasis principal se centre tanto en maximizar la eficiencia como en lograr un ajuste estructural de la economía y la sociedad. Recién para una tercera etapa, a alcanzarse tal vez en 1993, se podrá hablar de la posibilidad de alcanzar un crecimiento estable y efectivo.

Los candidatos en campañas presidenciales pueden guardar en reserva los detalles de su programa de estabilización económica, pero deberán hacer explícitas sus propuestas de renovación jurídica. Como ningún partido político en el Congreso logrará mayoría absoluta, sería conveniente que las indispensables reformas legales que el próximo presidente vaya a proponer al Parlamento cuenten con el mandato explícito de la votación popular. Ello no sólo requerirá de sendas exposiciones de motivos, que deberán integrar el programa de gobierno, sino que los asesores jurídicos correspondientes deben redactar textos finales para evitar que los primeros meses de gobierno se pierdan en un debate legislativo que resultaría infructífero

Mario Vargas Llosa tiene razón en afirmar que mal hacen los políticos en pelearse los camarotes de un barco que se hunde. Pero debate con sentido puede y debe haber. Porque no existe una carta única de salvataje para evitar el naufragio. Ello requerirá, del capitán a bordo, firmeza y sabiduría para evaluar alternativas, tomar decisiones, asignar responsabilidad y exigir resultados.

“El Perú es, desde este momento, libre e independiente..” Cuando San Martín declaró la Independencia no prometió obras públicas ni vida fácil. Intentó darle al Perú una sensación de futuro a largo plazo. Esta percepción la han perdido los peruanos varias veces en su historia pero nunca como en esta última década. Y el futuro constituye el bien público por excelencia. La tarea fundamental del próximo gobierno será lograr que los peruanos recuperen su confianza en que la tierra que alumbró a sus padres pueda hacer algún día fructíferos los esfuerzos de sus hijos.

## Volando lento y bajo

---

¿Cuáles son los objetivos del presidente Alan García para los últimos diez meses de su gobierno? Interpretando su actuar desde el último mensaje de Fiestas Patrias se podrían identificar los siguientes: cumplir constitucionalmente con la transferencia del poder, sincronizar mejor con las tendencias recientes de la opinión pública en materia económica y de enfrentamiento a la subversión, resignarse a convivir con el actual proceso hiperinflacionario e iniciar su campaña con miras a las elecciones presidenciales del 1995.

Lo primero constituye ciertamente un avance en un caudillo que abrió expectativas de reelección inmediata y que ha contado con asesores que no dejaron de tentarlo con aventuras autogolpistas. Afortunadamente para la democracia peruana, la preocupación del Presidente por su imagen se proyecta también al escenario continental. Y si bien para mejorar su aprobación interna suele recurrir a recursos poco dignos como condecorar a la imagen del Señor de los Milagros, lo cierto es que, para no caer en un desprestigio mayor al que ya tiene entre sus pares, el presidente García necesita ofrecer elecciones generales limpias y transferir el poder el próximo 28 de julio.

Ducho en el arte de interpretar los vaivenes cambiantes de la opinión pública, Alan García pretende hoy quitarle banderas electorales a Mario Vargas Llosa como antes hizo con la izquierda. El gobierno ya parcela tierras y afirma que transferirá empresas, aunque el anuncio de privatización de la Seguridad Social, que sigue incrementando burócratas e importando mercadería malograda, ya tiene tres años sin mayor avance.

La marcha de la economía en estos meses está ligada a los proyectos electorales para 1995 del presidente García. El embalse acumulado de precios está dirigido a que los candidatos municipales y regionales del APRA obtengan una votación que pueda resultar mayor a la que registraría el candidato presidencial del partido del gobierno de 1990. Y si el Presidente sigue recurriendo con éxito a gestos populistas -en lo que es un maestro consumado- puede culminar su mandato con un porcentaje de aprobación superior a la votación que obtenga finalmente Luis Alva Castro. Con ello pretendería liquidarlo como eventual contendor para la candidatura aprista de 1995.

En su último año de gestión, por tanto, Alan García va a actuar como un presidente respetuoso de las formas. Intentará recomponer su deteriorada imagen ante el Grupo de los Ocho que se reunirá próximamente en Lima. El 114 por ciento de inflación mensual registrado en setiembre de 1988 resultará sustituido por un 30 o 40 por ciento este mes, lo que permitirá al gobierno enfrentar las elecciones de noviembre con la sibilina afirmación que la inflación anual ya ha disminuido de 5,000 a 3,000 por ciento.

Lo que todos se preguntan es si la economía aguantará esa agonía oscilante o si, como en Argentina hace unos meses, la inflación explotará antes de la transferencia del poder, elevando por



los cielos la cotización del dólar en el mercado libre y jaqueando la misma supervivencia del sistema democrático.

Hay argumentos que permiten suponer que en sus últimos meses de gobierno Alan García no sufrirá el huayco que forzó al expresidente Raúl Alfonsín a adelantar la transferencia del mando. Tiene a su favor el que la producción nacional ya ha sufrido una contracción sin precedentes. Esto ha permitido una acumulación de reservas en el Banco Central de un país al cual sus acreedores aún no se interesan por cobrarle adeudos y en el que la oferta de dólares del narcotráfico pueda mantener la cotización del dólar de Ocoña bastante por debajo de la paridad teórica. Contribuye también al aguante en el precio de la divisa, y de paso a los planes políticos del presidente García, el que sea un candidato liberal y no un político controlista quien vaya adelante en las encuestas para las próximas elecciones presidenciales. En las expectativas de la población, aún en medio de una crisis tan grave, no hay miedo como para expatriar capitales. Distinto fue el caso de Argentina, donde nadie sabía qué iba a hacer Carlos Saúl Menem como presidente.

Pero hay también factores que pueden traer por los suelos las ilusiones presidenciales de llegar *con las justas* al cambio de mando. El déficit fiscal y los subsidios vigentes van a requerir continuos y crecientes maquinazos que se darán en coincidencia con una tasa de cambio libre que se encuentra en su mínimo histórico y con más de US\$700 millones en depósitos en intis en el sistema financiero nacional.

Cuentan de la madre de un aspirante a piloto, opuesta a la peligrosa vocación de su hijo, que cuando tuvo que resignarse al verlo graduado le rogó preocupada: "Prométeme que vas a volar siempre bajito y despacio". Así avanza hoy la economía peruana. Nadie puede asegurar que indefectiblemente vaya a estrellarse, pero tampoco es posible garantizar que la nave llegará a su destino el próximo julio con la tripulación a salvo.

### La anti-lección de economía

---

La primera conclusión que se puede extraer de las reuniones recientes de las NN.UU., el Banco Mundial y el FMI es que el mundo avanza hacia una *globalización* creciente de su economía. Contribuye a ello, por cierto, el desafío de 1992 para la integración europea, alimentada por el *glasnost* y la *perestroika* en la URSS y los desarrollos correspondientes en los países de Europa del Este. Contribuye también el que la pronosticada y temida recesión mundial .como consecuencia de la necesidad de reducir los desequilibrios fiscal y comercial de los EE.UU.- aún no se presenta, en parte porque el Japón sigue dispuesto a financiar el consumismo norteamericano, a cambio de una mayor participación patrimonial en dicha economía. Los japoneses vienen comprando edificios bancos, empresas y hasta universidades norteamericanas, favoreciendo así esta interdependencia mundial.

Lo bueno de esta integración económica es la eficiencia que promueve a escala global. Lo malo, para economías como la peruana, es que se viene efectuando con prescindencia de Africa y América Latina. En este último, el consenso convencional es que sólo Chile y México, hasta ahora, han cumplido con los requisitos básicos que les permitirían integrar plenamente sus economías al mundo, a la vez que ofrecer un entorno promotor de la inversión en proyectos competitivos y de rentabilidad creciente, tanto privada como social.

Una de las hazañas del presidente Alan García ha sido demostrar *urbi et orbe* cómo no debe manejarse una economía. Al punto tal que la última reunión del FMI en Washington sorprendió por el grado de consenso y fluidez con que se desarrolló. A diferencia del año pasado en Berlín, donde manifestantes callejeros protestaron por el *costo social del* ajuste, este año los resultados de la experiencia peruana han contribuido a convencer a todos -presidentes Carlos Andrés Pérez y Carlos Saúl Menem por delante- que el costo de *no ajustar* resulta bastante mayor. La experiencia ha beneficiado a la región toda, aunque a costa de la desgracia de la mayoría de los peruanos.

Pocos pueden negar hoy que a Taiwán le ha ido mejor con sus mercados abiertos que, por ejemplo, a Tanzania con sus planes cerrados. Por cierto que los mercados, en países poco desarrollados como el nuestro, distan mucho de ser perfectos. Pero sus administraciones estatales resultan siempre peor ya que *meten la pata* al tratar de corregir los efectos nocivos de la *mano invisible*. Desde los años cincuenta, los países pobres pueden dividirse en dos grupos: los que fundaron su desarrollo sobre la base de precios determinados por mercados imperfectos y los que se basaron su crecimiento sobre la base de precios determinados por mercados imperfectos. A los primeros les ha ido bastante mejor que a los segundos.

En general, los países que más han crecido fueron aquéllos que mantuvieron una inflación baja basándose en políticas fiscales y monetarias prudentes, que promovieron las exportaciones sin

pretender una discriminación entre sus exportadores; que mantuvieron abiertas sus economías a la competencia externa para estimular la eficiencia interna; que en su mayor parte intervinieron en sus sistemas internos de precios; que permitieron a sus instituciones financieras otorgar rentabilidades competitivas a sus ahorristas; y que indujeron al sector privado para que cumpliera un rol importante en la decisión de qué hacer con ese excedente.

El sector público tiene funciones vitales que cumplir y escasos recursos para gastarlos en cosas ajenas a ellas. Un sistema jurídico efectivo es un servicio público fundamental y lo que en él se invierta estará bien gastado. Ello implica no sólo contar con reglas que definan los derechos de propiedad, el valor de los contratos, la responsabilidad limitada, los causales de quiebra, etc., sino que la aplicación de estos principios sea global e imparcial. También el estado debe invertir en infraestructura, salud, educación y proyectos destinados a aliviar la miseria, aunque la evaluación de los mismos debe ser más estricta

que en el pasado y sin monopolizar dichos servicios. En lo que al resto de la economía se refiere, mientras menos haga el gobierno, el resultado será mejor o menos malo.

Si estas viejas ideas, que vuelven a ser nuevas, se afirman en la cultura empresarial y política, el Perú podrá prosperar en las próximas décadas. A ello contribuiría, por cierto, la renegociación adecuada de la deuda externa pero, sobre todo, mercados abiertos en los países industrializados y un crecimiento económico mundial que será más fácil de lograr con una creciente globalización. Pero la tarea esencial corresponde a los peruanos y, por cierto, a su próximo gobierno. Tal vez algún día en el siglo XXI, la historia le reconocerá al presidente Alan García el rol de haber distorsionado la economía peruana a un punto tal que la reversión natural del proceso marcó el inicio de la recuperación nacional.

## La esencia del pensamiento liberal

---

Si la política es el arte de lo posible y la economía la ciencia de lo útil, la cultura es un darse cuenta de lo que vale la pena. Madariaga decía que los ingleses la definen con una precisión singular (“the sense of the worth while”). Para acceder a ella, el ser humano no sólo debe conocerse a sí mismo - el mandamiento intelectual de la civilización griega- sino también ser consciente del mundo que lo rodea.

En la cultura europea este conocimiento se ha asentado, fundamentalmente, en tres facultades humanas: el orden de la inteligencia, la fuerza de la voluntad y la entrega de la pasión; todas ellas cualidades eminentemente individuales. Otras culturas, incluso la andina nuestra, han priorizado otros atributos -como los instintos telúricos o la mística religiosa- que florecen por encima o penetran por debajo del tronco de civilización que en parte heredamos de Europa.

Fundamentos básicos de esta cultura son el intelecto socrático y el espíritu cristiano. Sócrates fue el símbolo de una actitud intelectual pura para con la vida: la de abordar las cosas sin prejuicios, con humildad, abierto el intelecto a lo que el mundo tenía que decirle. La disciplina socrática otorga al individuo un par de ojos limpios, abiertos y sanos, aptos para registrar con serenidad todo lo que le traiga la luz. La esencia del cristianismo, por su parte, más que intelectual es vivencial. Al morir Cristo en la cruz estableció un carácter sagrado para el individuo. Si Sócrates disciplinó la inteligencia. Cristo ordenó la voluntad y la pasión. Siglos después, y a costa de muchos errores, esfuerzos y sacrificios, se establecieron las bases para una eventual fusión: Tomás de Aquino empezó a intelectualizar la fe y el socratismo resultó reconociendo que los derechos del intelecto a conocerlo todo tienen por límite la índole sagrada de la persona humana.

La libertad-la del intelecto, la de la voluntad, la del corazón- está presente en lo que dice y piensa Sócrates y es también elemento esencial del Evangelio. Cómo definir la libertad? Como el derecho y el poder de decidir cada cual por sí, y ante sí, en todo aquello que importe a su propio destino.

La libertad abriga en su seno una semillas que ha permitido un desarrollo y mejoramiento individual y social considerable. En la civilización occidental, la libertad ha abierto anchura, hondura y largura al ámbito creador de cada cual. Cuando una sociedad sustituye la libertad por otro principio rector cualquiera, el paternalismo por ejemplo, se afirma un caudillo, un grupo, una casta, una profesión, una institución que se arroga la facultad de distribuir ámbitos de acción a cada cual, como si supiera lo que piensa, siento o adivina, cada quien, de sus propias facultades.

En el debate político sobre los valores, discusión antigua si la hay, liberal resulta quien sostiene que la mejor manera de promover las funciones sociales de una comunidad es confiándoselas al individuo. En última instancia, cualquiera sea el sistema de organización social, a

alguien habrá que confiárselas siempre, sea éste un burócrata, un militar, un sacerdote o un político. Liberal es quien prefiere que, en la medida de lo posible, ese individuo se llame ciudadano.

El derecho, entendido como una construcción intelectual para ordenar voluntades, resulta así esencial para el pensamiento liberal. Y la noción de derecho lleva intrínseco el respeto a la forma es, en efecto, un elemento fundamental de cualquier civilización.

El derecho, entendido como una construcción intelectual para ordenar voluntades, resulta así esencial para el pensamiento liberal. Y la noción de derecho lleva intrínseco el respeto a la forma, lo que a veces se confunde con la defensa de los privilegios. Porque la forma es, en efecto, un elemento fundamental de cualquier civilización.

El pensamiento liberal se origina en el convencimiento de que la libertad, por si sola, permitirá producir un orden social mejor que el que se logra como consecuencia de imponer la coacción desde un poder político, económico o religioso. Hay, contrariamente, quienes creen que el orden social exige la autoridad de un tercero, supuestamente más calificado, que diga lo que un individuo puede pensar, decir y hacer. El pensamiento liberal no acepta a priori defensores, censores ni salvadores mesiánicos para una sociedad. Cree, más bien, que son los propios individuos los que deben crear mecanismos de promoción para su defensa y bienestar social.

La sociedad liberal debe respetar el derecho de todos y sólo debe reprimir a quien los lesione. Todos deben ser iguales ante la ley. Esto no quiere decir que todos los hombres sean iguales entre sí. Somos todos desiguales, pero iguales ante la ley, es decir, con los mismos derechos. Si mediante la ley se pretendiera hacernos iguales, tendríamos necesariamente derechos desiguales. El pensamiento liberal considera que la igualdad es ante la ley no mediante ella. Asimismo, la igualdad ante la ley no implica necesariamente, igualdad de oportunidades. Si todos somos desiguales, también tenemos oportunidades desiguales. El liberal considera que la igualdad ante la ley -el respeto por el derecho- permite mayores oportunidades, aunque no necesariamente iguales, para los ciudadanos menos favorecidos.

El pensamiento liberal no deja de reconocer los límites de toda libertad, determinados por la libertad ajena y por la libertad del ser colectivo. Lo que el pensamiento liberal proclama es que no es la libertad la que requiere justificación sino los límites que se le impongan. No niega sino reconoce que hay límites, pero afirma que son éstos los que tienen que justificarse no así la libertad.

A partir del siglo XVIII, muchos pensadores europeos empezaron a sentirse crecientemente confiados de su propio poder, de su capacidad para dar respuesta a todos los misterios de la humanidad. Los años de la ilustración abrieron nuevos horizontes a la cultura humana. De entonces viene mucho de nuestra filosofía, novelas que transformaron la literatura, páginas musicales de una belleza sin par, un avance científico que sirvió de base después para los avances tecnológicos de la era moderna. Muchos creyeron que no habría límite alguno a lo que una mente racional podría lograr.

En algunos, esta autosuficiencia devino en arrogancia, Karl Marx, por ejemplo, dijo algunas cosas sensatas sobre la revolución industrial. Marx fue un buen observador, un censor penetrante e implacable. Como científico, no sería justo negarle el mérito de haber dado cuerpo y sustancia a la historia del pasado. No logró, sin embargo, formular conclusiones apropiadas sobre el futuro. En su faceta de profeta, Marx fue un fracaso. Pero ello poco ha importado en el proceso político. Un

profeta no requiere acertar en sus vaticinios. Ni siquiera necesita ser comprendido. Basta con que tenga seguidores. Y las masas, que no leyeron siguieron a los militantes, que lo leyeron poco, para abjurar del pensamiento liberal al que debían su emancipación.

Contra lo que pensaba Marx, a los pobres no los emanciparon los obreros por medios revolucionarios, sino los burgueses liberales por medios parlamentarios. Los países que intentaron emancipar a la clase obrera por medio de la revolución los esclavizaron y ellos mismos perdieron su libertad. Los que emanciparon su clase obrera por el voto, como hoy empieza a hacer Polonia por ejemplo, hicieron libres a sus obreros y como naciones salvaron su libertad.

El marxismo -el de Marx, más que el de sus seguidores- era en el fondo una especie de herejía del liberalismo. Para Marx era monstruoso y aborrecible el sacrificio de hombres para producir cosas, tal y como se hacía en el capitalismo de entonces, y tal como se hizo en el capitalismo estatal de los países comunistas hasta hace poco.

En lo que Marx sí engañó a la gente fue en hacerles creer que la política era una nueva ciencia. Quienes la aprendieron según sus instrucciones, así lo creyeron, podrían después contestar cualquier interrogante. Esta soberbia, para no hablar sino de la Unión Soviética, sentó la base para el sistema unipartidario de Lenin, lo que degeneró en el totalitarismo asesino de Stalin y el burocratismo mediocre de Brezhnev. Les ha tomado largas décadas a los comunistas más inteligente de hoy descubrir los absurdos de un sistema que diseñaron con tan supuesta racionalidad.

Lo cual, con ser hoy evidente, no impide que muchos líderes comunistas -Castro y Ceausescu entre los más representativos- pretenden todavía seguir a Marx, cuando en realidad lo niegan y repudian varias veces: porque supeditan la satisfacción de los hombres a la producción de cosas; porque declaran a los obreros incapaces de emanciparse a sí mismos, arrogándose la atribución de hacerlo ellos como minoría de mando; y porque suprimen todas las libertades espirituales. Y así resulta que buena parte de la izquierda, incluyendo por cierto su mayoría en el Perú, se orienta contra el liberalismo en nombre de Marx, a pesar de que, en estos tres importantes aspectos, Marx estaba más cerca de los liberales que de la izquierda actual.

El pensamiento liberal suele confundirse con el sistema capitalista y éste a su vez con una viva-quié-venza para arrasar, en toda ocasión, con los máximos beneficios sin escrúpulos ni inhibiciones. Hay quienes le cuelgan el pensamiento liberal crímenes sociales como la explotación de hombres, mujeres y niños en las fábricas y minas de los comienzos de la revolución industrial, así como el abuso de los pueblos coloniales por los rentistas metropolitanos. No se reconoce que si bien el liberalismo, al dar rienda suelta a las fuerzas financieras y técnica, permitieron este abuso, también liberó simultáneamente las fuerzas intelectuales y espirituales que, tarde o temprano, iban a moderar primero y a reprimir después tales excesos.

La comprensión y asimilación en el Perú del pensamiento liberal permitiría una etapa fértil para la sociedad en su conjunto. A veces se alude a la eficiencia de las políticas liberales, pero al recurrir a esta expresión puede interpretarse que el objetivo de un liberal se circunscribe a lograr una mayor producción material, lo cual restringe gravemente lo esencial de su pensamiento. El concepto de fertilidad excede más claramente lo material e ilustra, con mayor precisión, cómo el respeto al prójimo, inherente a la postura ética de un liberal, permite que cada uno actúe como lo considere pertinente, lo cual, a su vez, hace posible un mayor bienestar. De este modo, el

pensamiento liberal abre las puertas a un proceso de constante descubrimiento que facilite la evolución cultural, a la vez que pone de relieve que no hay fronteras ni límites para el conocimiento y el autoperfeccionamiento, lo cual, a su turno, refuerza la actitud prudente y el recato del liberal en abierto contraste con la arrogancia y la soberbia del espíritu totalitario, que todo lo pretende diseñar basándose en su también pretendida omnipotencia.

El jacobinismo no es solamente la designación de un partido que ha dejado impreso su carácter demagógico y violento en la historia. El jacobinismo es una forma de espíritu cuya idea central es el absolutismo dogmático de su concepto de verdad, con todas las irradiaciones que de este absolutismo parten para la teoría y la conducta. Semejante idea implica forzosamente, una intolerancia para comprender otra posición que no sea la propia. El jacobinismo, de todas las épocas y tendencias -también hay jacobinos de derecha- resulta incapaz de percibir la parte de verdad que suele mezclarse en toda la convicción sincera y el elemento generoso de idealismo y belleza moral que puede haber incluso en algunas manifestaciones de la ilusión y el error. Y falta también en el jacobinismo el sentido humano de la realidad que permite superar los procedimientos abstractos de la lógica cuando uno trata de orientarse en el campo infinitamente complejo de los sentimientos individuales y sociales.

Una buena parte de la mejor obra creativa de Occidente se ha basado en la tolerancia. No solo en la tolerancia material, la que protege la inmunidad de las personas, la que se refiere a los derechos y libertades consignables en constituciones y leyes; sino también, y principalmente, en la tolerancia espiritual, la que atañe a las relaciones de las ideas entre ellas mismas, la que las hace comunicarse y cambiar influencias y estímulo, y comprenderse y ampliarse recíprocamente; la tolerancia afirmativa y activa, que es la gran escuela de amplitud para el pensamiento, de sutileza para la sensibilidad, de perfectibilidad para el carácter.

Ser liberal implica, en tal sentido, estar dispuesto a entenderse con el que piensa de otro modo. Por ello, el pensamiento liberal es más una actitud ética que una plataforma partidaria o un recetario de política económica o comercial. La esencia del pensamiento liberal -actitudes como negarse a admitir que el fin justifica los medios, sino que, por el contrario, son los medios los que justifican el fin- no debiera ser patrimonio partidario. Puede y debe estar presente en muchas agrupaciones y partidos. Y es conveniente que así sea, puesto que constituye la reserva y la brújula que marca la dirección hacia la meta política por excelencia, que es el respeto creciente por el prójimo. Este objetivo no es algo que se obtiene de una vez y para siempre: es un camino de esfuerzo constante con no pocos retrocesos. El óptimo sería que todos los partidos políticos estén imbuidos de una filosofía liberal. Ese resulta, en realidad, el ideal de una sociedad libre.

En poco más de cien meses va a concluir un siglo que ha estado marcado por grandezas y miserias sin precedentes. Los avances tecnológicos han ocasionado un enorme aunque desigual aumento en el bienestar material de la humanidad. El hombre pisó la Luna, el Voyager II ya está en Neptuno. De otro lado, ideologías intolerantes- el imperialismo, el racismo, el mercantilismo, el estatismo, el comunismo- devinieron en diversas acciones políticas aberrantes que han cobrado -en dos guerras mundiales, enfrentamientos bélicos continuos y una sucesión de conflictos civiles- cien millones de víctimas, un millón por año. Las ideologías que produjeron estas catástrofes no constituyeron errores de los pueblos. Fueron hazañas pseudoeruditos e intelectuales, propagadas desde las cátedras universitarias y a veces del púlpito, diseminadas en libros y revistas.

Comparados con Hitler y Stalin, los atilas de siglos pasados resultan una pandilla de pastores belicosos. Europa, el jardín donde floreció el pensamiento liberal, resultó destrozada hace medio siglo para vencer al nazismo; el comunismo recién empieza a aprender de sus errores; algunos países arrasados en el pasado por guerras fratricidas, como España por ejemplo se han recuperado y se muestran hoy en el procesos de avance hacia una economía más próspera y una sociedad más libre.

El siglo XX llega a su última década con un renacimiento del pensamiento liberal, con un resurgimiento de antiguos valores, con una afirmación de verdades eternas: las utopías políticas son peligrosas. Siempre habrá misterios. La certeza absoluta sobre cualquier cosa puede ser dañina para uno mismo y para los demás. Dudar es bueno. El mundo puede, no sin esfuerzo convertirse gradualmente en un lugar más amable para vivir, pero los que pretendan a la fuerza convertirlo en un supuesto paraíso , diseñado sobre la base de su propia soberbia, terminarán incendiándolo en un infierno.

Este es un siglo en que han surgido y desaparecido naciones enteras. En su última década, el Perú se juega los descuentos de su supervivencia como nación, amenazado en los años recientes, como nunca antes en su historia, por la arrogancia inconsecuente de un político carismático y por el fanatismo cruel de un revolucionario medieval.



## Después del 1'000,000% de inflación

---

Este mes la hiperinflación peruana ha superado en duración a las húngaras, austríacas, griega y polaca de hace cuatro y seis décadas. El próximo enero superará a la alemana, la más famosa de este siglo. Para las elecciones nacionales de abril, habrá superado a la boliviana reciente. Y si el próximo gobierno tarda más de cien días en estabilizar el índice de precios, la hiperinflación peruana será la más larga de todas las registradas en la historia económica mundial. Si entre ahora y el 28 de julio de 1990 la inflación resultara 25 por ciento mensual, los libros escolares de historia del Perú del siglo XXI recordarán a Alan García y al gobierno aprista como el presidente y el régimen del millón por ciento de inflación acumulada. Las cosas van a costar, el próximo julio, lo que costaban en 1985...con cuatro ceros a la derecha.

La primera tarea del próximo gobierno será estabilizar. Un programa eficaz de estabilización, cualesquiera sean sus costos implícitos, resulta más conveniente que el *mare magnum* actualmente existente. En la resaca de una estabilización, para que ésta sea efectiva y duradera, la tasa de interés tendrá que reconocer el costo implícito del riesgo país en la reconstitución del ahorro nacional. De otro lado, el Estado necesita triplicar sus actuales ingresos fiscales para asegurar el normal funcionamiento del sector público. Un ajuste de esta magnitud genera inevitablemente una contracción en la demanda interna, por lo que resulta muy difícil que la economía en su conjunto crezca durante los primeros dos años posteriores a la estabilización.

En paralelo, el próximo gobierno tendrá que avanzar en tres frentes: en la pacificación del país, en la reinserción del Perú en el sistema financieros internacional y en cambios estructurales en el sistema de incentivos. Estos últimos implican, esencialmente, una reforma tributaria integral, una liberalización comercial, la desregulación de los sectores productivos y financieros, y la privatización de aquellas funciones que la sociedad civil puede cumplir mejor que el Estado.

Todo ello resulta imprescindible para alcanzar una situación en la cual los peruanos vuelvan a invertir en nuevos proyectos productivos que no deban su rentabilidad a la injerencia mañosa del Estado, sino a la creatividad y eficiencia de sus promotores y empresarios. Asumiendo que la subversión terrorista sea controlada y que el Perú vuelva a ser sujeto de crédito externo, condiciones de no fácil cumplimiento antes de 1992, la pregunta en boca de todos sería entonces: ¿Cuánto va a durar esto? ¿Quién va a ser elegido gobierno y presidente en 1995? ¿Darán ellos marcha atrás en todo lo logrado? De las respuestas que se hagan los peruanos, en esa oportunidad, va a depender que 1994 y 1995 muestren un crecimiento significativo que pueda volcarse en mayores empleos y remuneraciones y que demuestre a toda la población los frutos de la austeridad y el esfuerzo que tendrá que ejercitarse en los próximos años.

Para ello, el próximo gobernante necesita llegar a las elecciones de abril con programas listos y un equipo integrado. Requiere también de una enorme intuición para, entre la multitud de problemas, saber escoger los temas críticos y, entre los miembros de la orquesta, aquéllos cuyo

buen desempeño resultará imprescindible para que la bulla pueda convertirse en música. Aunque los esfuerzos de estabilización y reformas estructurales puedan parecer dramáticos, no es difícil identificar sus principales componentes. Aunque la reinsertión del Perú en el sistema financiero internacional resulte compleja, es razonable suponer que, mal que bien, ésta es posible de lograr en el tiempo. El problema económico principal del próximo gobierno será político en su esencia: cómo asegurar que, en 1992, la amenaza de la subversión terrorista no desaliente la inversión local en proyectos que sean convenientes tanto para las empresas que las promuevan como para la sociedad en su conjunto. Lo que el próximo gobierno deberá procurar es que el temor al terrorismo, o a que el siguiente gobierno desande lo que va a costar tanto esfuerzo lograr, no debilite la confianza que se requiere para aumentar la inversión, la producción y el empleo.

## El desafío de la nueva década

---

El año pasado bien merece un lugar meritorio en la historia universal, aunque fuese sólo porque las instituciones del comunismo leninista -uno de los más grandes errores del siglo XX- se derrumbaron, al menos como idea. André Gorz, a quien *Le Monde* considera uno de los más importantes pensadores políticos de nuestro tiempo, reconoce hoy que “sólo hay una manera de gerenciar racionalmente una empresa: utilizando los parámetros del sistema capitalista”. Provieniendo de un iconoclasta que se lamenta de llegar a tal conclusión, es evidente que, en el mundo de las ideas, la década que se inicia resultará muy distinta a las últimas. Un crítico tan agudo del capitalismo como Gorz no tiene hoy reparo en reconocer que “el socialismo no funciona, especialmente en sociedades que no han experimentado la competencia del mercado, ni la búsqueda de utilidades. Sólo después que el mercado haya disciplinado a una sociedad en la aplicación de una racionalidad económica mínima, el socialismo resultaría deseable o incluso posible”.

Dicha racionalidad económica recién empezó a utilizarse en el mundo hace unos doscientos años, cuando las demás restricciones -sociales, culturales, religiosas- resultaron avasalladas por la fuerza arrolladora de la competencia del mercado. Antes del capitalismo, en la Edad Media por ejemplo, los artesanos estaban prohibidos de competir entre sí, porque se temía que la tensión que ello generaría iba a afectar el orden estadístico existente y la cohesión misma de la sociedad.

Cómo definir límites a esta racionalidad económica ha constituido un tema de debate y conflicto intelectual y político en el curso de los dos últimos siglos. Cómo regular las relaciones de mercado -la competencia y la compra y venta- para que no se extienda a áreas donde podrían estar en riesgo la libertad, la dignidad y el sentido de la vida humana. Cómo lograr, si fuera posible, no la máxima eficiencia sino una eficiencia óptima.

Porque ¿qué fue en sus inicios el socialismo? Una reacción contra la lógica irrestricta del mercado. Un intento ambicioso soberbio por diseñar mecanismos para que la racionalidad económica no interviniera en cosas que eran consideradas invalorable o indispensables para la calidad de vida.

Pero, en tal intento, se creó un mito que resultó funesto: el de la propiedad colectiva de los medios de producción. Ella iba a permitir, según sus defensores, la racionalidad planificada y total de las relaciones sociales y productivas. En lo que finalmente devino fue en el control dictatorial por parte de la burocracia estatal, un control que no permitía oposición ni debate democrático que sólo aceptaba una verdad, una manera de ver las cosas, un poder.

El comunismo resultó mucho más alienante que las peores manifestaciones del sistema capitalista, en parte porque a los trabajadores -a quienes pretendía beneficiar- se les exigió una identificación abstracta con lo que se volvió un aparato inmenso y corrupto, al cual debían considerar como suyo sin serlo. Las sociedades comunistas se empacharon de planes quinquenales

que, a su vez, se desdoblaron en programas anuales y órdenes mensuales, semanales y diarias, sin la menor preocupación por las verdaderas necesidades humanas, cualitativas y existenciales de sus poblaciones. El alcoholismo se generalizó en las fábricas. El entretenimiento se volvió inexistente. Cuando hace poco le preguntaron al actual campeón de ajedrez por qué la Unión Soviética concentraba a los mejores jugadores del mundo, contestó que era porque en dicha sociedad no había otra cosa mejor que hacer.

El socialismo se convirtió así en un sistema en que el estado era todo y la sociedad nada. El Partido Comunista exigió de todos un reconocimiento absoluto de su rol protagónico autoritario en el proceso mediante el cual, según la interpretación marxista de la historia, el proletariado iba a asumir con el tiempo el mando del universo. 1989 marcó el final agónico de esta utopía.

Derrotados en la práctica los planteamientos marxistas -en un año en que lo improbable ocurrió a diario y lo imposible cada semana-, el pensamiento liberal puede concentrarse en su mayor desafío hacia el año 2000: cómo lograr que la sociedad -no necesariamente a través del estado- alcance un equilibrio entre los espacios para la conducta económica racional y los que corresponden al plano existencial, religioso o éticos: cómo permitir que sus individuos descubran, finalmente, que más ingresos y más consumo no van a generar por sí solos, una vida mejor.

El drama de la modernidad se debe, en parte, a que la racionalidad económica suele considerarse como la única conducta válida. Ello ha generado desajustes en la relación entre el individuo y la sociedad, en el hábitat urbano del hombre, en sus relaciones con la naturaleza, las futuras generaciones y la historia. La creciente incertidumbre que genera la modernidad, los riesgos del colapso ecológico, el cambiante sentido del tiempo, la materia y el dinero generados por el cambio tecnológico, todo ello provoca en cada individuo un sentimiento de amenaza que alimenta su egoísmo, ante el temor de un supuesto naufragio futuro en el cual asume que sólo habrá salvavidas para pocos. Se requiere de imaginación y creatividad para superar esta creciente sensación de desesperanza. Esa es la tarea más importante de la década actual.

### Un programa que no debe fracasar

---

De ahora a fin de año, el gobierno del presidente Alberto Fujimori enfrenta tres desafíos principales primero, mantener el proceso de estabilizaciones en los precios; segundo, modificar la imagen externa de las posibilidades de la economía peruana; y, tercero, afirmar una base política que le permita hacer del Perú un país gobernable en el próximo lustro.

Con un talento innegable para la improvisación, un equipo insuficiente y heterogéneo, atrasos y errores obvios en la toma de decisiones, un manejo poco feliz de la difusión de su programa, el gobierno avanzó corajudamente en el sentido correcto para estabilizar los precios. Al 400 por ciento de inflación en agosto -la tasa más alta jamás registrada en América Latina y que pudo ser menor- puede seguir, si el gobierno mantiene invariable lo fundamental de su programa, una inflación nula de un solo dígito a partir de setiembre.

Como afirmó el premier Juan Carlos Hurtado Miller en su exposición televisada del 8 de agosto, para detener el alza acelerada de los precios se requieren tres condiciones básicas: eliminar el financiamiento interno al gobierno, modificar las expectativas inflacionarias de la población, y restablecer una relación en los precios relativos que a la vez fomente la producción y pueda sostenerse en el tiempo.

Más que la eficiencia del ajuste, fue su magnitud lo que ha servido, hasta ahora, para cumplir con los dos primeros requisitos para la estabilidad. El gobierno, después de recurrir al Banco Central por una vez para pagar la bonificación extraordinaria otorgada, viene cumpliendo hasta ahora con su compromiso de mantener en cero el déficit de caja. Para ello ha desfasado algunas obligaciones en el tiempo. En este mes, de mantenerse firmes los criterios de disciplina fiscal y monetaria, se logrará quebrar la causa fundamental de una inflación que ha mantenido postrada a la economía peruana durante los últimos quince años.

La caída que se ha registrado en los indicadores de precios durante la segunda quincena de agosto ha cambiado las expectativas de la población respecto de que es posible romper la inercia inflacionaria. Los precios ya se han estabilizado. Los dólares están saliendo del colchón para convertirse en intis, que se depositan a elevadas y decrecientes pero aún atractivas tasas de interés.

La reforma arancelaria -que no debe admitir más demoras ni contrabandos- podría contribuir a que los precios internos no aumenten en este mes.

Si bien el esfuerzo ha valido la pena, es justo reconocer que el costo de esta desintoxicación ha sido innecesariamente elevado. En parte ello se debe a que la cantidad acumulada de dólares en la economía es tal que impide que el tipo de cambio se pueda equilibrar, en los próximos meses, a un valor que promueva con dinamismo al sector exportador. La recesión es muy dura. Sin embargo, la demanda interna debe recuperarse gradualmente de lo postrada que se encuentra actualmente. Si la recuperación de la liquidez en el sistema financiero constituye un índice, posiblemente el gasto

alcanzará en noviembre los niveles que se registraron el pasado mes de mayo. El Perú no es hoy más pobre que hace cuatro semanas. El producto Bruto Interno caerá 5 o 7 por ciento en 1990, pero el año entrante la producción aumentará, y lo hará sin subsidios ni desperdicios, sobre la base de una mayor productividad y eficiencia, con costos reales y precios que puedan sostenerse en el tiempo.

El segundo desafío que enfrenta el gobierno este mes se refiere a la necesidad de mejorar la imagen externa del Perú. Hitos relevantes en tal sentido serán los discursos que deberá pronunciar el presidente Alberto Fujimori en las NN. UU y el ministro Hurtado en la asamblea anual de los organismos multilaterales de crédito. La opinión pública internacional aún no tiene una opinión formada sobre el primer mes de gestión del nuevo gobierno peruano. La visita durante los próximos días del vicepresidente del Banco Mundial constituye una buena señal de la favorable disposición que puede generar el programa del nuevo gobierno en la comunidad internacional.

En los próximos dos meses, el gobierno tendrá también que perfilar mejor sus proyectos a mediano plazo para negociar con los organismos multilaterales un programa de reformas estructurales que pueda servir de base para el otorgamiento de nuevos créditos, así como de marco para promover inversión extranjera directa. En noviembre, el presidente Fujimori podría utilizar su viaje al Japón como la mejor oportunidad para publicitar los logros de los primeros cien días de gestión de su gobierno.

Si todo saliera bien, y es de desear que así sea, el respaldo del que podría gozar el gobierno por entonces, a pesar de los costos excesivos del ajuste, será notable. A comienzos de julio, el Presidente contaba con un respaldo del 55 por ciento de la población: 15 por ciento en el nivel alto y 65 por ciento entre los más pobres. Hoy cuenta con el mismo índice de aprobación general, pero distribuido de manera pareja en todos los estratos. Si la inflación en setiembre y octubre resulta de apenas un dígito, el Presidente deberá aprovechar el respaldo de político que ello le pueda generar para precisar mejor las prioridades, acciones futuras y sustento político que le permitan programar un futuro más democrático, estable y próspero para el Perú en el próximo lustro.

## El peligro de bajar la guardia

---

Este mes, la inflación puede resultar similar a la registrada en setiembre, la más baja desde 1986. El gobierno no debe celebrar este éxito como permanente por varias razones. Listemos algunas: en primer lugar, la recaudación fiscal es en la actualidad muy baja -debería cuando menos duplicarse- y se obtiene de tributos ineficientes -porque castigan actividades que deberían promoverse- como los impuestos a las exportaciones y el movimiento bancario. Segundo, el Estado gasta mal lo poco que recauda, por lo que no puede garantizar la seguridad de sus ciudadanos, ni ofrecerle servicios adecuados, ni atender las demandas mínimas de los más pobres. Tercero, el sector exportador peruano -que debería comandar la reactivación productiva- enfrenta hoy tres obstáculos simultáneos: una economía mundial reprimida, amenazada por el proteccionismo y el conflicto bélico; una tasa de cambio inferior a la paridad histórica de la última década; y costos por servicios -energía, puertos, financiamiento comunicaciones, etc.- superiores a los estándares internacionales. Cuarto, el grado de intermediación financiera -la realización entre la liquidez y el Producto Bruto Interno (PBI)-, la flexibilidad en el mercado laboral y la vocación innovadora y tecnológica son insuficientes para alcanzar rápidamente una asignación más eficaz de los escasos recursos. Quinto, si bien todas las empresas peruanas se encuentran afectadas por estas limitaciones, las estatales ven complicada su situación como consecuencia de la injerencia política, la mala gerencia, el burocratismo y la corrupción. Por último, el prestigio del país se ha debilitado tanto que su reinserción en el sistema financiero internacional tomará mucho tiempo y esfuerzo antes de rendir frutos.

El costo pagado por los peruanos ha sido muy alto como para que el gobierno se dé ahora el lujo de bajar la guardia. Son más los ejemplos de fracasos que de triunfos en la larga historia de los programas de estabilización en América Latina. En Bolivia, el presidente Siles Suazo instrumentó hasta tres planes de impecable diseño que se estrellaron contra la falta de credibilidad de los agentes económicos respecto de la firmeza con la que el gobierno los iba a ejecutar. La historia reciente de Argentina y Brasil es suficientemente ilustrativa como para no cantar victoria antes de tiempo.

Angustiado por el drama de presidir una nación en guerra civil, Lincoln pedía a Dios tres cualidades: coraje para cambiar lo que era posible cambiar, paciencia para aceptar lo que resultaba imposible de modificar en el corto plazo, y sabiduría para distinguir lo uno de lo otro. Para impedir el rebrote inflacionario y ampliar la producción, mejorar la inversión y generar más empleos, se van a requerir altas dosis de estas virtudes. Hasta ahora lo que hay es coraje, mucho coraje, y un mínimo de sentido común.

La economía peruana no puede prosperar con déficit fiscal -porque entonces rebrota la inflación- ni con una presión tributaria de 7 por ciento del PBI, porque ello imposibilita una reconstitución eficaz del Estado, requisito imprescindible para recrear un clima de confianza

mínimo. Para elevar la recaudación al doble se requiere disminuir las tasas, simplificar los impuestos, eliminar las exoneraciones y combatir la evasión. El éxito de la política económica en los próximos seis meses, más que del presidente Alberto Fujimori o del primer ministro Juan Carlos Hurtado, dependerá de quien se encargue de cobrar los impuestos. El gobierno aún muestra poca preocupación por obtener, más allá de las facultades legislativas y de los consejos de expertos en tributación, los cuadros gerenciales que le permitan al Estado revertir su prolongada decadencia financiera.

De otro lado, los individuos y las empresas no van a aceptar esa mayor contribución si no viene acompañada, por lo menos, de la expectativa de un cambio en el aparato estatal que permita generar la ilusión de que, en un futuro próximo, la seguridad interna va a aumentar, los servicios públicos van a mejorar, la pobreza extrema va a ser atendida. Algunos nombramientos gubernamentales -en sectores como el deporte y la seguridad social- constituyen un pequeño avance en este sentido, pero son aún insuficientes no sólo para lavarle la cara sino para purgarle las tripas a un Estado desmoralizado, burócrata y corrupto.

El grado de compromiso del gobierno, respecto de las reformas que anunció el Primer Ministro en su exposición en Washington va a manifestarse pronto en el tema de la descentralización y liberalización de puertos. Poco es lo que el gobierno puede hacer en materia cambiaria para asistir al sector exportador, pero si ataca frontalmente la ineficiencia portuaria no sólo contribuiría a reducir sus costos sino que daría una muestra de decisión que mejoraría mucho el clima para la inversión privada. En este sentido, la estabilidad laboral resulta, tal vez, el tema neurálgico. La imprescindible flexibilización del mercado de trabajo requiere de un esfuerzo de divulgación mínimo para que los trabajadores entiendan que con ella se lograrían mayores oportunidades de empleo y mejores remuneraciones para todos. Estas tareas, así como la profundización del sistema financiero y el avance en el desarrollo tecnológico, requieren equipos aún inexistentes en un gobierno que ni siquiera ha formalizado el nombramiento de embajadores en países cuya colaboración es necesaria para la tarea de reinserción.

El peruano es, por naturaleza, un buen improvisador. La creatividad y la imaginación son elementos valiosos de nuestra cultura criolla. No lo son, lamentablemente, la paciencia, el rigor ni el tesón. Para que podamos afirmar que la hiperinflación es parte de nuestra historia se requiere aún largos meses de vigilia en que el Estado, sometido a crecientes presiones, necesita resistirse a la droga de la emisión como fuente de financiamiento. Lo que durante ese tiempo se haga, o deje de hacer, definirá las posibilidades de que la economía pueda crecer en el futuro sobre la base de la inversión de los propios peruanos en proyectos socialmente rentables y con un marco institucional que permita reconstituir la confianza.



## La empresa moderna y sus retos

---

Por extraña paradoja, la característica más significativa del mundo moderno, una era de información creciente y continua, resulta la incertidumbre. El abanico cada vez más grande de opciones ofrecido por la ciencia y la tecnología, los avances en las comunicaciones y el transporte, vuelven cada vez más difícil la tarea de proyectar el futuro. Las personas y las empresas, para llamarse modernas, tienen que aceptar el cambio sorpresivo como consustancial a su quehacer diario.

¿Cuál será -por ejemplo- el precio internacional del petróleo durante 1991? Ni Saddam Hussein lo sabe bien. ¿Cuánto durará Mijaíl Gorbachov al mando de URSS?... ¿Habrá una URSS dentro de doce meses? Respuestas a preguntas como éstas afectarán nuestro futuro, incluso de maneras que actualmente no sospechamos. Y es imposible dar respuestas precisas para ellas. Los analfabetos del futuro -como afirma Alvin Toffler- no van a ser sólo los que no puedan leer o escribir, sino aquéllos que, después de aprender, no sepan desaprender y reaprender. El equipamiento intelectual que crecientemente se demandará en la próxima década será la capacidad para definir problemas complejos, asimilar con rapidez información que sea relevante, conceptualizar y reorganizar la misma, cuestionar con solvencia, deducir e inducir con soltura, trabajar eficientemente en equipo y persuadir a terceros sobre las propuestas de solución a problemas.

En la próxima década, la única ventaja comparativa de la que podrá jactarse una empresa es el ritmo al cual sea capaz de aprender, desaprender y reaprender. Shell, por ejemplo, era, a comienzos de 1970, la cenicienta entre las siete principales empresas petroleras. Hoy, junto con Exxon, comandan al grupo en tamaño y salud financiera. Los expertos en organizaciones atribuyen gran parte del mérito a Arie de Geus, quien fuera su director de planeamiento hace veinte años. Ya en esa fecha, muchos analistas empezaban a prever los dramáticos e impredecibles cambios que finalmente se dieron en los mercados mundiales del petróleo. Pero resultaba por entonces imposible persuadir a los gerentes petroleros que la era de estabilidad de los años cincuenta y sesenta estaba por concluir. De Geus, humildemente, no se planteó su tarea como la de preparar una visión documentada del futuro, en informes sesudos que, en el caso de las demás empresas, resultaron archivados en bibliotecas. Se propuso en cambio modificar el modelo mental de sus gerentes, para que aprendieran a reaccionar frente a la crisis que se venía. Recurrió para ello, sin solicitar mayor credibilidad para sus propuestas, al análisis comparativo de escenarios. Pero fue el mayor oficio en este aparente juego lo que en 1973 le permitió a Shell actuar con una gran rapidez frente al cartel del petróleo. Fue la única empresa que respondió de inmediato, otorgando más responsabilidades a sus gerencias locales, acumulando inventarios y acelerando el desarrollo de reservas en países que no eran miembros de la OPEP. En una década, la cenicienta se convirtió en líder.

La era moderna ha extendido la vida útil de las personas pero curiosamente ha reducido la de las empresas. En un estudio reciente del MIT se lee: "un tercio de las 500 empresas industriales

listadas por Fortune en 1970 habían desaparecido para 1983". Líderes en su tiempo, no supieron adaptarse al cambio. La industria del automóvil es pródiga en estos ejemplos de elefantes que no aprendieron a bailar al nuevo ritmo de los tiempos. Las empresas norteamericanas, por ejemplo, muy superiores a las europeas y japonesas en los años cincuenta, quedaron entrampadas en una premisa que con el tiempo dejó de ser cierta: el suponer que el automóvil era, por sobre todo, un símbolo de status y que, por tanto, el estilo era más importante que la calidad. Tan pronto las empresas europeas y japonesas igualaron por emulación la calidad del automóvil norteamericano, les fue muy fácil superarlo, porque en Detroit seguían rindiendo culto a la moda, mientras que en la Mercedes Benz o en la Toyota la preocupación se centraba simplemente en producir un mejor carro.

Las empresas que triunfen en los años noventa serán capaces de desarrollar una cultura de rapidez y flexibilidad para responder al entorno y de mayor compromiso y capacidad de su personal para atender las demandas focalizadas de consumidores cada vez más sofisticados.

En el esfuerzo de creación de esta cultura empresarial, se requiere avanzar hacia una empresa con menos fronteras. No hay más el tiempo para saltar las barreras interfuncionales (como producción y *marketing*) o interpersonales (gerentes, asesores, supervisores, empleados, etc.). Las fronteras al interior de la empresa -entre ésta y sus clientes asociados y suministradores de información o insumos- deben disolverse en un proceso fluido, donde los objetivos principales deben ser la satisfacción creciente del cliente y la ampliación del mercado.

Ello sólo lo podrán lograr aquellas organizaciones con una elevada autoconfianza en sí mismas, valor que sólo pueda generarse como resultado de un proceso en el cual se dé al personal oportunidades crecientes para ponerse a prueba.

Ello implica también una capacitación creciente. Sólo con un proceso de educación continua podrá una empresa lograr que cada uno de los individuos que en ella labora pueda encontrar, cada día, una mejor manera de hacer las cosas, la única ventaja comparativa que tendrá vigencia en el futuro.

### Atonía de una economía en trance

---

Curarse del alcoholismo -como estabilizar una economía en hiperinflación- es un proceso prolongado en el cual resulta imprescindible mantener la guardia, especialmente ante un momento crítico como el actual ya que, producida la primera desintoxicación, la química del cuerpo aún no encuentra un nuevo equilibrio y el desasosiego que esto causa induce a pensar que, tal vez, uno se sentía mejor cuando estaba bajo la influencia de la droga.

Todo programa de estabilización tiene dos objetivos fundamentales: primero, el más importante, detener la inflación; y segundo, restablecer un sistema de precios relativos -dólar, salarios, tarifas, valor del dinero, etc.,- que promueva la producción, el ahorro y la inversión en proyectos rentables cuyas ventajas competitivas se puedan sostener en el tiempo.

En sus primeros seis meses, el programa de estabilización aplicado por el gobierno peruano ha mostrado algunos avances significativos en el primer objetivo y resultados hasta ahora decepcionantes en el alineamiento de los precios.

Así, en los cinco meses anteriores al ajuste de precios decretado por el gobierno el 8 de agosto pasado, la inflación mensual promedio fue de 41 por ciento. En cambio, en el mismo lapso posterior, entre setiembre y enero últimos, el promedio se redujo a 14 por ciento. Si la hiperinflación era el primer problema a resolver por el nuevo gobierno, un programa que ha disminuido la tasa anual equivalente de 6,000 a 380 por ciento -y que puede disminuirla a menos de 100 por ciento para 1991- no debe, a pesar de sus vacíos y limitaciones, ser descartado superficialmente como un fracaso.

No es este el único logro del programa hasta la fecha. Las reservas internacionales netas del Banco Central de Reserva se han recuperado hasta representar hoy una proporción razonable del comercio internacional. Aunque frágil, porque se basa en ingresos insuficientes y gastos y sueldos reprimidos, el equilibrio fiscal es hoy una realidad y el déficit cuasi fiscal del Banco Central ha disminuido notablemente. Hay un avance, aunque insuficiente, en la liberalización del comercio exterior, y la producción del primer trimestre de 1991, con superávit en la balanza comercial, sería sólo 10 por ciento inferior a la del primer trimestre de 1990, cuando se perdieron US\$500 millones en reservas internacionales. Estos logros han inducido a que el Director Ejecutivo del FMI haya aprobado, en principio, el programa económico del gobierno para el lapso 1991-1992.

Este respaldo, aunque necesario, resulta insuficiente para su éxito. Actualmente se respira una atmosfera de creciente inquietud entre los agentes económicos. Las actividades exportadoras se encuentran estranguladas por un dólar bajo, la demanda interna se ve contraída por ingresos deprimidos, las tarifas y precios del sector público resultan excesivas si se les compara internacionalmente, y el gasto y la inversión se ven frenados por un costo del dinero muy elevado.

Para diseñar una política eficaz y viable, resulta necesario, en las actuales circunstancias, definir cuáles de estos factores -dólares y salarios bajos, intereses y tarifas altas- constituyen condiciones difíciles de alterar en el corto plazo y cuáles problemas solubles en el tiempo. Asimismo, se debe reconocer que un mejor alineamiento de los precios constituye un objetivo subsidiario a la estabilización y, por tanto, a una disciplina fiscal muy estricta.

En el Perú los salarios están y se mantendrán bajos en el futuro inmediato porque el país, además de sufrir un crecimiento poblacional, se ha empobrecido y descapitalizado en las últimas décadas. Asumir que el promedio salarial puede aumentar más de 15 por ciento durante el próximo bienio constituye una premisa que no se pueda sostener y una invitación hacia el desastre.

Las tarifas y precios del sector público arrastran décadas de una estatificación inconveniente, exacerbada el último quinquenio por un manejo irracional. Asumir que en el próximo bienio las empresas estatales pueden sobrevivir sin déficits cobrando precios internacionales resulta también iluso. Hay que privatizar y racionalizar. Mientras el gobierno actúe medrosamente en este sentido, los precios necesitan cubrir los costos, incluyendo lamentablemente los de la ineficiencia estatal. La alternativa sería ampliar brechas financieras que un estado insolvente sólo puede financiar con más inflación.

Las tasas de interés son elevadas por una crisis de confianza, porque el inti carece de valor intrínseco, porque la demanda por moneda nacional y la correspondiente liquidez son una fracción de los que una vez fueron, porque no son mayoría los peruanos que creen en el programa, en el gobierno ni en el país. Recuperar un mínimo de confianza permitiría reducir, por lo menos a la mitad, el costo real del dinero.

El dólar está bajo en parte por todo lo anterior pero principalmente porque dos décadas de inflación han generado un stock de dólares que fluye al inti, y de regreso, no discrecionalmente sino por oleadas. Actualmente, la tasa de cambio se encuentra en el límite inferior y, en caso de una corrida podría saltar abruptamente.

El gobierno no parece entender que, en el fondo, su problema se reduce a generar confianza. Por el contrario, en el difícil trance actual, surge la continua tentación de patear el tablero de lo logrado, de sustituir la disciplina fiscal por controles, de reemplazar las fuerzas reconstituyentes del mercado por el dedo y la venalidad de funcionarios arrogantes, de engañar con la ilusión de que es posible aumentar, a la vez, la tasa de cambio y las remuneraciones; de preferir recaer en las cadenas a veces cómodas de la droga, antes de avanzar, en el esfuerzo por una cura real, aunque sea dolorosa y lenta.

## A mitad de camino

---

Agradezco sinceramente las palabras tan sentidas de José Tagle y este honor que valoro en la plenitud de su significado y que compromete aún más el afecto que le tengo a IPAE, institución con la que he estado vinculado, de una manera u otra, a lo largo de casi toda mi actividad profesional, desde los días aquéllos en que ocupaba unas pocas oficinas en su antiguo local de la Av. Camino Real en San Isidro y yo trabajaba junto a Pepe Valdez y Walter Piazza en P. y V. Ingenieros S.A.

Tan de cerca he crecido con IPAE que las fechas de sus eventos las he usado continuamente como referencia mental de mi propio desarrollo personal. ¿En qué año hice esto o lo otro? Me ha sido siempre fácil recordar los avances de mi quehacer profesional con hitos que tomaba prestados de la historia de IPAE: antes o después de tal o cual CADE en Ica o Arequipa; cuando el local central de la institución aún quedaba en San Isidro o Miraflores; después de la inauguración del local de San Miguel o Monterrico. A estos hitos referenciales de IPAE, comunes a todos, acaban Uds. de agregar uno tan significativo como es este premio.

El que me honren a mitad de camino, cuando cronológicamente me falta por hacer tanto o más que lo logrado, me compromete especialmente con ustedes. Se han atrevido a premiar en mí a una empresa que aún refleja, junto a expresiones maduras de capacidad de innovación y calidad, los idealismos, la pluralidad de incitaciones y los desconciertos propios de sus apenas catorce años. Cuando proyectamos objetivos en APOYO, es común que soñemos más allá de lo que efectivamente podemos lograr; nuestro sistema de costos es aún uno que no nos permite precisar bien cuántos recursos invertimos en qué proyectos; carecemos de una consolidación patrimonial que nos permita atenuar el impacto de las crisis pasajeras del crecimiento. Por todo ello, nuestro desarrollo es aún frágil. Pero sí hemos logrado, en cambio, hacer florecer la semilla del vínculo, el compromiso por los objetivos comunes y los valores compartidos, sin el cual cualquier empresa carece de sentido; contamos con un ambiente de trabajo abierto y alegre, donde la búsqueda de la excelencia no tiene por qué venir acompañada de una excesiva solemnidad, ni del cumplimiento a ultranza de reglamentos que no se pueden actualizar al ritmo del cambio de nuestro tiempo. Carecemos de manuales para la multiplicidad de funciones que desarrollamos, pero sí contamos con una visión común de nuestra tarea y con un Código de Ética que nos sirve de guía en el quehacer diario.

Bertrand Russell afirmó, en una frase feliz, que la educación tenía como objetivo no la sola acumulación de conocimientos, ni la falsa erudición, sino la preparación para defenderse de la seducción de la elocuencia. En tal sentido, la tarea de APOYO, como la de otros importantes grupos de profesionales que se han constituido para prestar servicios similares a los ofrecidos por nosotros, contribuye parcialmente a la educación de sus lectores, clientes y la opinión pública en general. Yo, en lo personal, pocas veces quedé más sorprendido del brillo de la elocuencia como en el CADE 1986 en Huaraz, cuando el notable don de la palabra del político hizo creer a muchos que la magia podía triunfar contra restricciones que a la luz de la razón resultaban ya insuperables.

APOYO se encuentra en el proceso de superar la adolescencia para asumir su juventud a plenitud. Veo mi rol, en este proceso ya iniciado, más como el de un facilitador que el de un actor, me siento más entrenador que jugador. Me he propuesto 1997 como límite máximo -antes que la empresa cumpla veinte años y yo cincuenta- para transferir las funciones ejecutivas que en ella aún hoy realizo. Por muchos motivos, no es siempre fácil el proceso de sucesión en una institución que presta servicios profesionales. Por ejemplo, son pocos los estudios de abogados que han tenido vigencia en el Perú por más de medio siglo. Ello suele suceder porque no le es fácil reconocer a la primera generación cuando el grueso del trabajo ya lo realiza la segunda. Yo no quiero cometer ese error. Me siento orgulloso del equipo humano que hemos atraído y formado en APOYO y soy el primero en reconocer que, desde hace algún tiempo, los logros de la empresa se deben más a ellos que a mí.

El premio IPAE lleva, como las botellas de vino, la marca del año. Con la escasa perspectiva a la que nos condenó la hiperinflación del gobierno anterior, cuando considerábamos mediano plazo el próximo viernes, 1990 parece un año seco y sin aroma, áspero y duro, durante el cual nuestras empresas tuvieron que hacer esfuerzos extraordinarios, muchas veces frustrantes, para ajustarse e intentar sobrevivir; un año, en fin, poco propicio para imaginar y proyectar, incluso para premiar y ser premiado. Sin embargo, cuando distingamos la luz entre las sombras, descubriremos que 1990 fue un año crucial, porque con él se inicia, adelantadamente, el siglo XXI.

La idea de clasificar la historia en paquetes de cien años surgió recién con la toma de conciencia por la humanidad de la posibilidad del progreso continuo. Hasta entonces, el sentido del tiempo era más circular que lineal y uno se refería a épocas, como la de Carlos V o los Reyes Católicos. De otro lado, el curso de los eventos se ha resistido a una división tan arbitraria y homogénea del tiempo. Así, resulta válido afirmar que el siglo XVIII, para significar algo, se inicia tan temprano como 1680, con la revolución industrial, y se prolonga hasta la derrota de Napoleón que ratificó el predominio de Inglaterra en el mundo. El siglo XIX, que comprendió la época victoriana, duró sí casi cien años: los transcurridos entre Waterloo y el inicio de la Gran Guerra. El siglo XX, en cambio, ha sido el más corto de todos; apenas han transcurrido setenta y cinco años entre 1914 y 1989, cuando el derrumbe del Muro de Berlín ratificó el fracaso del estatismo como ideología y generó el reacomodo de fuerzas e ideas con las cuales se ha iniciado el siglo XXI.

El actual desencanto con el socialismo y otras formas de colectivismo no es sino un aspecto de la gran crisis de fe en la posibilidad del estado como agente benefactor. El estado fue un gran actor del siglo XX y su peor fracaso. Hasta 1914, el sector público no superaba en ningún país más del 10 por ciento de la economía. En la actualidad, incluso en economías denominadas liberales, suele corresponderle al sector público más del 40 por ciento del PBI. La demanda por una mayor intervención del estado resultó la marca característica del siglo XX. En 1914, en el discurso de apertura del año universitario, Víctor Andrés Belaunde advertía: "el Estado vive una perpetua crisis financiera. En los últimos quince años se han triplicado los gastos fiscales, sin que se haya triplicado el número de habitantes y sin que las exigencias de la población hayan aumentado en proporciones tan exorbitantes." Ese año, la recaudación fiscal total fue de 40 millones de soles, contra 53 millones del año anterior. El año siguiente bajaría incluso a 33 millones de soles. A pesar de esta crisis, la opinión mayoritaria en el Perú, como en el resto del mundo, era que un estado más grande contribuiría a aumentar la suma total de la felicidad humana. Muy pocos piensan así hoy. El experimento del intervencionismo estatal ha sido probado en innumerables formas y ha fallado en

casi todas. El estado ha demostrado ser un gastador insaciable, un desperdiciador sin igual. En el siglo XX demostró también ser un gran asesino. Paul Johnson en su libro *Tiempos Modernos* afirma que, en estos setenta y cinco años, la acción de los estados ha sido responsable de la muerte violenta o no natural de más de cien millones de personas, más que las vidas perdidas por acción de los gobiernos en todo el mundo desde el inicio de la humanidad hasta 1914.

Si el hecho más relevante del siglo XX fue el desarrollo y fracaso del estado, el no-hecho más significativo fue la continuidad y fortalecimiento de la religión. El ateísmo militante, frecuente a fines del siglo pasado, ya no existe. Lo que resulta ridículo hoy no es la religión, sino los pronósticos deterministas de Marx y una larga lista de intelectuales que anunciaron y promovieron su desaparición. Hoy es evidente que, en su tiempo, Lenin fue más un sobreviviente del pasado que un precursor del futuro. Proporcionalmente más gente cree hoy en Dios que la que creía en Él a inicios del siglo XX. Es que en los siglos XVIII y XIX, las élites de Occidente confiaron crecientemente en una evolución de la humanidad regida por la razón y no por el azar o el dogma. Un primer descubrimiento del siglo XXI es que la lógica cartesiana no es suficiente para comprender la evolución del mundo. En 1914, Einstein destruyó el universo newtoniano y sólo propuso a cambio a una cosmología especulativa. Como afirma Karl Popper, a partir de entonces, “el progreso consiste en un movimiento hacia teorías que nos dicen más y más, teorías de contenido cada vez mayor. Pero cuanto más dice una teoría, tanto más excluye o prohíbe, y mayores son las oportunidades de que sea falsa. Así, una teoría con un contenido mayor es una teoría que puede ser más severamente contrastada. El progreso ya no consiste, por tanto, en la acumulación de observaciones y conocimientos, sino en el derrocamiento continuo de teorías menos buenas y su reemplazo por otras mejores, en particular por teorías de mayor contenido, pero siempre tentativas”. Einstein fue el primer científico que, al proponer una nueva visión del mundo, se atrevió a plantearse y responder a las preguntas ¿bajo qué condiciones admitiría que mi teoría no se puede sostener? ¿Qué hechos concebibles aceptaría como refutaciones o falsificaciones de mi teoría? Cualquier historiador del siglo XX estaría tentado a concluir que, a partir de Einstein, el progreso científico consiste en la continua destrucción de la certidumbre, que los instrumentos del progreso son muchas veces agentes destructores del conocimiento previo.

Por eso es que el hombre educado de hoy está menos equipado de certidumbre, se encuentra en una intemperie espiritual mayor, que la que podía sentir un egipcio de la cultura que floreció 2,500 años AC. Esta es la primera característica del siglo XXI. La información creciente y continua no genera certidumbre. Las personas y las empresas, para llamarse propiamente modernas, tienen que aceptar el cambio sorpresivo -en sus mercados, en sus recursos, en sus vidas- como consustancial a su quehacer cotidiano.

Junto al fracaso del estado, a la continuidad de la religión, a la enorme expansión del conocimiento en las ciencias exactas y la creciente incertidumbre para proyectar y legislar sobre el futuro, el siglo XX tiene para mostrar supuestos milagros en el desarrollo económico de algunas sociedades: primero, Japón y Alemania después de la Segunda Guerra Mundial; luego, los *cuatro tigres* del Sudeste Asiático. Las recetas, sin embargo, fueron las mismas que Adam Smith identificara en el siglo XVIII: un ahorro elevado, eficientemente canalizado, a través del sistema financiero y un mercado de capitales dinámico a sectores productivos cuyas empresas compitan entre sí; una elevada formación bruta de capital, sólo posible cuando la productividad crece a un ritmo más acelerado que los salarios; una presión tributaria moderada y un gasto fiscal austero y bajo en su

componente militar; la importación apropiada de tecnología extranjera y una mano de obra educada para el trabajo práctico y no en la erudición formal sobre las ciencias sociales. Estos milagros económicos no fueron procesos fáciles ni rápidos, dependieron más del esfuerzo interno que de la ayuda externa y constituyeron aventuras colmadas de riesgos, en las cuales los resultados no se podían anticipar ni garantizar. Pero la historia del siglo XX demuestra que es posible un avance significativo del desarrollo en el curso de una generación.

A lo largo del siglo XVIII, el Perú declinó como consecuencia de que dejó de monopolizar el comercio exterior en América del Sur. Durante el siglo XIX, el país experimentó un esfuerzo discontinuo y frustrado de consolidación nacional. Es posible que la desgraciada Guerra del Pacífico sirviera incluso como elemento catalizador para permitir el desarrollo de la República Aristocrática durante la cual, en comparación con países hermanos, el país funcionó en el marco de una democracia, poco representativa es cierto, pero con instituciones solventes y un pragmatismo eficaz. El siglo XX, con su vorágine ideológica, nos perjudicó más que a nuestros vecinos, porque el Perú es un país que siempre ha contado con pensadores de gabinete brillantes -Mariátegui, Haya de la Torre- y donde han faltado hombres de acción, entre ellos empresarios, que con constancia y esfuerzo puedan hacer posible el progreso. Iniciamos por ello el siglo XXI envueltos en la más grave crisis de nuestra historia republicana.

Sin embargo, en este país donde la angustia debilita muchas veces la esperanza, yo no pierdo el optimismo. Creo que el potencial del Perú se multiplicará cuando los políticos -cuyo aumento en número y poder creció proporcionalmente con el estado en el siglo XX- descubran que su tarea no es envolverse en la retórica populista ni vanagloriarse en la figuración, sino procurar remedios limitados para resolver problemas concretos. Creo que cuando, además de su crisis política, el Perú supere conceptualmente su antiguo autocentrismo y se atreva a integrarse a un mundo globalizado, cuando los peruanos superen la nostalgia por un pasado que nunca fue, cuando la apertura comercial venga acompañada de una verdadera apertura mental, vamos a ser capaces de competir con mucho éxito en el mundo. Basadre decía que nuestra historia no estaba escrita del todo, que nuestra cultura se configuraba aún en el tiempo. Y ese proceso inconcluso le da al peruano, junto a su innata agilidad mental, una enorme capacidad de asimilación, una curiosidad amplia y cosmopolita, el gusto por las ideas nuevas. Somos capaces de improvisar admirablemente y de absorber cualquier nueva corriente cultural con facilidad sin dejar de ser nosotros mismos. Y a todo esto le sabemos dar un aire de elegancia y, en cierto sentido, hasta de originalidad, por la mezcla de elementos que en otras culturas podrían parecer contradictorios.

Obnubilados por la frase de Raimondi, no hemos sido conscientes que nuestro principal recurso, como postulara Vidaurre, es el humano. Nos lo demuestra hoy Julio Granda encabezando un torneo de ajedrez en Buenos Aires, superando a un excampeón mundial y al principal asesor técnico del actual campeón. En este juego -que se basa en el raciocinio, la lógica y la imaginación y que en el Perú se practica en plazas públicas- superamos sin discusión a todos nuestros países vecinos. Sólo Cuba y Argentina, con una larga tradición ajedrecística, podrían disputar nuestro liderazgo en América Latina. Y esto se ha logrado sin recursos. Los mejores jugadores peruanos no pertenecen a familias acomodadas que podrían facilitar y apoyar a su afición, sino son diamantes en bruto que no cuentan ni con los recursos mínimos para optimizar su talento.



Me siento optimista, también porque considero a las élites de las siguientes generaciones peruanas mejor preparadas para los problemas de la vida real. Pueden hablar y escribir menos bien que sus mayores pero piensan mejor y, tal vez por haber vivido siempre en una crisis permanente, poseen un pragmatismo envidiable. No es que la educación haya mejorado por cierto. Por ejemplo, el curso de Economía Política de quinto año de Secundaria tiene una estructura con tales resabios marxistas que hoy harían sonrojarse a un ministro de Educación checo o polaco. Pero las actitudes de las nuevas generaciones son más prácticas que las nuestras. Reconocen con naturalidad el valor de la libertad, la eficacia del mercado. Les falta, tal vez, algo más de sensibilidad para percibir que, aunque instrumento eficiente, el mercado no tiene conciencia ni misericordia; que la máxima dignidad no la alcanza la persona humana con la sola libertad, con todo lo valiosa que ésta es, sino mediante la aceptación voluntaria de un deber; y que la virtud suprema en el hombre es saber dar más de lo que recibe.

Amigos todos, el premio que me han otorgado constituye un verdadero estímulo al espíritu. Espero que en esta oportunidad resulte también un factor terapéutico que me permita superar la tifoidea que me tiene postrado hace dos semanas, como expresión simbólica de los obstáculos del siglo XIX que los peruanos del siglo XX debemos aún superar para enfrentar con éxito los desafíos del siglo XXI.

Gracias, nuevamente, muchas gracias.

## La privatización por hacer

---

La subasta en bolsa de las acciones de Sogewiese que fueron propiedad de Cofide marcó un inicio exitoso en un proceso que estará presente en la agenda del sector público a lo largo de toda la próxima década.

Peter F. Drucker fue el primero -en su libro *La Era de la Discontinuidad*- en diagnosticar que, como consecuencia de la revolución tecnológica de los ordenadores, la eficiencia de los estados y sus instituciones tradicionales se había rezagado notablemente respecto de la que lograban las empresas privadas competitivas. Acuñó el término *privatización* -término que provoca no poca confusión- para designar el proceso por el cual la mayor parte de estas organizaciones, especialmente las empresas estatales, deberían volver a funcionar “como si fuesen privadas”.

En el debate político suele restringirse el significado de privatización a la transferencia de activos y empresas del estado a manos privadas. Sin embargo, transferir una empresa monopólica puede implicar menos privatización que, por ejemplo, establecer un sistema de cupones para permitir que los padres de familia eduquen a sus hijos en la escuela pública que deseen, a pesar de que en este caso las carpetas y las pizarras sigan siendo propiedad del estado. La privatización tiene más que ver con el funcionamiento que con la propiedad. Implica, en última instancia, ampliar las opciones del consumidor en un entorno crecientemente competitivo.

La privatización, por tanto, requiere ser antecedida o acompañada de otros procesos: la desregulación, para eliminar los controles y los monopolios; la estabilización, para recuperar confianza en la moneda local y en el futuro; y la liberalización, para abrir el flujo internacional de bienes de capital. El gobierno del presidente Alberto Fujimori ha avanzado en estos tres frentes, aunque de manera dispareja y con algunos retrocesos. El flujo de capitales es hoy libre. La reforma comercial dictada es de las más completas del continente, aunque grupos de poder han logrado que se decreten algunas excepciones a la regla general. Respecto de hace un año, la inflación mensual es cinco veces menor, aunque cinco veces superior a lo conveniente. Por último, la economía está mucho menos regulada que antes, con tasas para el dólar y los intereses dictadas por el mercado libre.

El primer objetivo general de la privatización es aumentar la eficiencia de la economía en su conjunto. Al reducir la injerencia del gobierno en una actividad empresarial, la privatización posibilita que se tomen decisiones más rápidas y transparentes, lo que permite una mayor adaptación de las empresas productivas al cambio acelerado que se experimenta en el mundo de hoy.

Un segundo objetivo es que permite reforzar la competencia o introducirla en sectores y actividades que no están en la actualidad sujetas a ella. Las actividades productivas resultan, por ello, expuestas

a las disciplinas y oportunidades que generan los mercados, beneficiando así al consumidor con bienes y servicios de mejor calidad o menor precio.

Un tercer objetivo es generar recursos que puedan destinarse a fines más prioritarios del estado, como son la seguridad pública, la administración de justicia, los servicios básicos de salud, educación e infraestructura. No tiene lógica que el estado peruano sea propietario de barcos y aviones, cuando a la vez carece de recursos para parchar carreteras.

Este objetivo se vuelve perentorio cuando, como en la actualidad, se carece de crédito externo. Como todo grupo empresarial que ha crecido demasiado, el Estado requiere liquidar algunos de sus activos y empresas para contar con los recursos que le permitan sostener los programas de inversión en actividades como el suministro de agua potable, la electrificación de pueblos jóvenes, la modernización de los sistemas de transporte, etc.

Un último objetivo, no por ello menos importante, es ampliar las posibilidades de los peruanos para acceder a la propiedad y alcanzar así un accionariado cada vez más difundido que fortalezca el sistema democrático.

En las empresas donde sea factible, la privatización puede lograrse a través de la venta de sus acciones o activos. Un objetivo razonable en tal sentido, teniendo en cuenta la experiencia en Gran Bretaña o Chile, sería privatizar uno por ciento del PBI al año -es decir, el equivalente de la venta de acciones de Sogewiese por día útil-. De lograrse este ritmo, al cabo de cinco años se privatizaría un monto equivalente a la quinta parte de lo que valen actualmente los activos de las empresas estatales. Por ello, este proceso no debe limitarse sólo a lograr el máximo de transferencias sino que resulta necesario también modificar las estructuras organizativas o, incluso, los modos de operación de las empresas que todavía permanezcan en el ámbito estatal. Se puede desintegrar conglomerados en unidades autónomas, suscribir contratos de gerencia e, incluso, relacionar la política salarial al aumento en la productividad. Estas empresas requieren, además, precisar una lista corta de objetivos claros, así como acordar con el Estado el compromiso de que no se recurrirá a la garantía estatal para nuevas inversiones. Por último, el gobierno debe modificar el sistema de control operativo para que éste se convierta en un medio para mejorar la eficacia de su actividad empresarial y deje de ser, lo que es ahora, una traba para la eficiencia en la toma de decisiones.

## La nueva gerencia

---

La teoría de la administración de empresas se desarrolló en el mundo cuando éstas constituían entidades autónomas que se ordenaban en función a una jerarquía estable y que pretendían maximizar su rentabilidad atendiendo, mayoritariamente a un mercado local. Premisas como éstas no serán válidas por mucho tiempo más. La gerencia -y el conocimiento sobre la misma- se encuentra en un proceso de transición como el que se dio cuando Galileo le refutó a Copérnico su visión del mundo, o cuando Darwin revolucionó la biología, o cuando la mecánica de Newton tuvo que asimilar el principio de la relatividad de Einstein.

Tom Peters afirma que el proceso proveedores-productor-consumidores va a darse en el futuro en lapsos cada vez más cortos, lo que obligará a las empresas a replantear las relaciones con sus proveedores y la velocidad con la que trabajan. Mejor les irá a aquellas empresas que sepan conformar una alianza con los fabricantes de sus insumos y con los consumidores de sus productos en un proceso donde los límites de la propia empresa quedarán bastante diluidos. Peter Drucker ha previsto que, más que a la del ejército, prototipo que sirvió de base para el organigrama tradicional, la organización de las empresas del futuro se parecerá a la de un hospital, una universidad, o una orquesta sinfónica, en el sentido de que deberá integrar el esfuerzo profesional de especialistas múltiples y autodisciplinarios sin mucha gerencia intermedia.

De otro lado, el mundo viene transitando de economías manejadas por gobiernos individuales a una economía global casi sin gobierno. La globalización genera, a la vez, una escala sin precedentes y posibilidades crecientes de especialización. Los 256 hospitales públicos del Japón, son gerenciados por una empresa que opera... desde Chicago. La mayoría de los edificios de oficinas en Manhattan son mantenidos por una empresa cuya central... queda en Dinamarca. Los mercados se han vuelto, a la vez, globales y fragmentados. Una división de Mc Graw Hill está por lanzar al mercado textos escolares que, siguiendo un programa común para cada disciplina y en cada idioma, puedan llevar personalizados los nombres del alumno y del profesor, el ritmo de avance específico recomendado para el estudio, la carga variable de ejercicios para la casa... ¡todo ello disponible en 48 horas!

La información y su tecnología están generando una revolución sin precedentes. Japón produce este año dos veces y media lo que producía hace un cuarto de siglo con la misma energía y menos materia prima. Cualquier automóvil de lujo que sale hoy a la venta cuenta con más potencia de computadoras que el Apollo que llegó a la Luna en 1969.

La importancia de la innovación en la empresa moderna obliga a repensar la función del gerente. En 3M, por ejemplo, un objetivo continuo es que el 25 por ciento de los ingresos de la empresa debe provenir de productos con menos de cinco años de vida. Toda innovación obliga a la "destrucción creativa" de la que hablaba Schumpeter como característica esencial de la actividad empresarial. Dejar de innovar ocasiona, como nunca antes, una obsolescencia progresiva. El sistema

de contenedores, por ejemplo, multiplicó por cuatro la productividad del transporte marítimo masivo. Quién no se adaptó al sistema quedó fuera de la competencia.

En la era en que vivimos, con la posibilidad de un contacto electrónico e inmediato, ¿qué es una organización empresarial? ¿En qué consiste, por ejemplo, una empresa hotelera moderna? Casi ninguna, para empezar, posee hoteles. Estos son propiedad de las compañías de seguros. Lo que Ritz, Carlton o Sheraton poseen es una visión de servicio que pretenden prestar, un tipo de consumidores que suponen poder atender con ventaja, un equipo humano que retroalimenta su cultura empresarial, y una red que potencia sus sistemas de operación.

¿Qué caracterizaría entonces a una aerolínea de hoy? Las más dinámicas entre ellas ya no poseen aviones. Subcontratan todo, mejor dicho, casi todo. “Lo único que no se puede subcontratar es el alma”, afirma el actual presidente de Federal Express. Si un grupo humano capaz con una visión creativa de un negocio se pone al frente de una red de servicios y subcontrata todos los insumos requeridos ¿a la organización que conforma se le puede calificar de grande o pequeña? ¿Qué implica gerenciar en este contexto?

Una última reflexión pertinente es la que se refiere a la naturaleza de la ventaja comparativa de las empresas y países. La contribución teórica de Michael Porter ha sido, en tal sentido, esencial para entender que ella no depende sólo de la calidad de los recursos naturales o del costo de la mano de obra. ¿Por qué es bueno el equipo minero sueco? ¿Por qué las empresas inglesas dominan el negocio de las casas de remate? ¿Por qué Holanda es el país que comanda al mundo en la exportación de flores, si el clima allí es tan frío y húmedo como en Inglaterra? En este caso, por ejemplo, lo que sucedió es que la limitación del clima obligó a los holandeses a cultivar flores en invernaderos, lo que permitió aprovechar los avances de la biogenética y el gas natural, recurso del que sí disponen en abundancia. La desventaja se volvió ventaja. Hoy, en vez de gas, Holanda exporta flores. ¿Cuáles serán, en este contexto, las ventajas comparativas del Perú?

## La agenda de 1992

---

Karl Marx escribió miles de páginas sobre cómo volver comunista una sociedad capitalista. Nada dijo sobre la transición inversa: la dura ruta que Rusia y sus antiguas satélites han emprendido finalmente con resultados aún imprevisibles. Hitler y Tojo no se atrevieron, entre sus numerosos crímenes, a la disolución del capitalismo en sus sociedades. Después de la Segunda Guerra Mundial, la reconstrucción de Alemania y Japón requirió de nuevas constituciones políticas, pero sus ciudadanos conocían del funcionamiento de un sistema de precios y de un mercado de trabajo; entendían lo que era una empresa privada y un banco comercial; reconocían la importancia de la actividad gestora de los empresarios y de la eficiencia operativa de sus gerentes.

El comunismo resultó una perversión centenaria originada a partir de una pregunta noble que ha preocupado a muchos no marxistas tanto como en su tiempo a Marx: Cómo reconciliar un sistema eficiente de producción con una sociedad que se valore bien a sí misma. El comunismo no produjo lo uno ni lo otro. El dilema, sin embargo, subsiste y la pregunta debe debatirse, en el futuro, dentro de los límites de donde nunca debió salir: entre variaciones de una democracia liberal y una economía de mercado. El colapso del comunismo no agota el debate sobre los límites más adecuados para la interacción entre el estado y el mercado; por el contrario, permite que éste pueda efectuarse sin las deformaciones grotescas del comunismo totalitario que engeguenció por tanto tiempo a los intelectuales de América Latina.

Después de sus procesos de transición a la democracia, España y Chile mantuvieron la ruta del progreso económico debido, en gran medida, a que sus líderes izquierdistas -que se habían exiliado al paraíso que supuestamente existía en el otro lado del muro- ya conocían al monstruo totalitario por dentro. Tal vez la principal limitación que obstaculiza el progreso del Perú hoy es que aún persisten en nuestra sociedad teorías retrógradas sobre cómo organizar la producción e, incluso la sociedad misma. La subversión terrorista tiene una, basada en la destrucción de todo cuando existe. El ex presidente Alan García, por su parte, persiste, sin el menor asomo de autocrítica, en la que intentó aplicar durante el último lustro: una extraña y peligrosa mezcla de ideas románticas llevadas a la acción con un enorme cinismo.

Una tarea fundamental de este gobierno es reducir al mínimo las probabilidades de que se dé en el futuro tanto la hecatombe que postula Abimael Guzmán como el retorno al paraíso de opio que Alan García predica. En tal sentido, su avance en estos primeros dieciocho meses puede calificarse de satisfactorio. El 41 por ciento de la población afirma que, a pesar de todo, el Perú está progresando. Hace dieciocho meses, un 73 por ciento afirmaba que el país se encontraba en decadencia. El gobierno del presidente Alberto Fujimori le ha devuelto a una proporción importante de peruanos, aún no mayoritaria, una sensación de futuro que hasta hace poco no tenía.

No será fácil mejorar este resultado durante el presente año. La reducción alcanzada en la inflación y las trascendentales reformas dictadas para mejorar la eficiencia en la asignación de

recursos son hechos cuya espectacularidad ha cubierto parcialmente varias insuficiencias de gestión. Hasta la fecha, los avances logrados son consecuencia de un coraje y visión singulares, virtudes reconocidas en el presidente Fujimori le ha devuelto a una proporción importante de peruanos, aún no mayoritaria, una sensación de futuro que hasta hace poco no tenía.

No será fácil mejorar este resultado durante el presente año. La reducción alcanzada en la inflación y las trascendentales reformas dictadas para mejorar la eficiencia en la asignación de recursos son hechos cuya espectacularidad ha cubierto parcialmente varias ineficiencias de gestión. Hasta la fecha, los avances logrados son consecuencia de un coraje y visión singulares, virtudes reconocidas en el presidente Fujimori. La agenda del futuro inmediato requiere más de equipos de trabajo y eficiencia operativa, que el gobierno en su conjunto no muestra en demasía.

La deficiente gestión se ha sentido en tareas tan importantes como el combate contra la epidemia del cólera, o los esfuerzos por la planificación familiar y los programas para combatir los efectos de la pobreza extrema, objetivos que el Presidente acaba de marcar como prioritarios para la agenda del gobierno durante el presente año y que, de llevarse a cabo con resultados crecientemente favorables, permitirían reforzar la esperanza entre aquellos sectores a los que la política económica va a demorarse en favorecer. Pocas discrepancias pueden generar estas acciones de bien social, siempre que se administren con honestidad y solvencia profesional.

En la política económica, como siempre, donde pueden surgir algunas divergencias al interior del gobierno. ¿Cual debiera ser, en esta área, el objetivo principal? Lograr que en 1994 el crecimiento anual de la producción supere el 6 por ciento con una inflación menor a la del Grupo Andino en promedio. Un resultado así cancelaría toda posibilidad de retroceso en las reformas emprendidas y daría pie para un siguiente gobierno basado también en el realismo económico.

El logro de este objetivo requiere, durante los próximos dos años, de un importante esfuerzo de inversión privada, tanto para la reconversión de las empresas productivas existentes como para el desarrollo de nuevos proyectos de inversión. Para el flujo de capital extranjero, el principal obstáculo es la mala imagen del país en el exterior. El presidente Fujimori es consciente de esta restricción y se ha convertido en un propagandista de su modelo económico en foros internacionales. En el plan interno, más allá de la lucha contra la subversión, una reconversión eficiente requiere de un mercado de capitales más dinámico que induzca a tasas de interés más competitivas internacionalmente y, en el sector público, de un programa de privatizaciones que genere ingresos por no menos de US\$200 millones en el año.

1992 debe ser un año de avance en el campo de avance en el campo social y en la lucha contra la subversión. Si la imagen externa mejora y el mercado interno de capitales se amplía, la producción rebotará sola para 1994.

## Población, economía y ecología

---

La proyección del crecimiento demográfico apunta a una población mundial superior a 9,000 millones para el año 2040, fecha antes de la cual será necesario que el planeta Tierra alcance un equilibrio ecológico mínimo. Ello implica una duplicación en la población de naciones como la India, que encuentran actualmente dificultades para atender las demandas mínimas de su pueblo. Cuarenta millones de peruanos resultan, por ejemplo, una población que no sería fácil de alimentar y ocupar adecuadamente. Es por ello que la primera condición para alcanzar un desarrollo sostenido es reducir la tasa de crecimiento poblacional para que ésta sea nula en el año 2040. La población mundial no debería superar entonces los 8,000 millones, ni la peruana un total de 32 millones de personas.

En el año 2040, la reducción de los desechos y su reciclaje deberán haber reemplazado demasiado carbono y genera demasiada contaminación. La mayor parte de los materiales que se actualizan actualmente: dos tercios del aluminio, tres cuartos del acero y el papel, más aún del plástico, son desechados después de su primer uso.

Reciclar aluminio requiere apenas del 5 por ciento de la energía que se necesita para obtenerlo de la bauxita. El papel periódico reciclado consume la mitad de energía cuando es fabricado de pulpa. El ahorro es aún mayor con las botellas de vidrio. El reciclaje también es fundamental para reducir la contaminación del agua, aire y tierra. Elaborar acero utilizando chatarra reduce la contaminación del aire y el agua en 85 por ciento, además de eliminar el problema de los relaves mineros.

¿Qué criterios deberían regir en el futuro para el uso de materiales? Primero, evitar en lo posible los productos no esenciales. Luego, reutilizar los productos en cuanto sea posible: las botellas de cerveza, por ejemplo. Tercero, reciclar los materiales para configurar nuevos productos. Cuarto, extraer la energía de los desechos, si esto puede hacerse sin mayor perjuicio. Sólo al final cabe la última opción, que es la primera ahora, tirar el producto a la basura.

El reciclaje recibió un impulso en los años setenta con el alto precio del petróleo y otro en los años ochenta con el agotamiento de los depósitos naturales de basura. En los años noventa la tendencia se verá reforzada por la necesidad de reducir las emisiones de carbono, la contaminación ambiental y la basura tóxica.

En el año 2040, la principal materia prima de la industria deberá ser los propios productos reciclados. Se deberá limitar el sobreempaque y el exceso de bolsas de papel o plástico. Hoy se paga, en muchos casos, más por el empaquetamiento de los alimentos que lo que reciben los productores de los mismos. Los jugos, la cerveza, la leche y las gaseosas deberán regresar a las botellas reusables de vidrio.



Así como será necesario reciclar materiales, un desarrollo sostenido requerirá del procesamiento de nutrientes. En la naturaleza, la basura de alguien es el alimento de otro. En las sociedades urbanas, los desagües se convierten en la fuente principal de contaminación para ríos y mares. Los nutrientes de los desperdicios humanos pueden reusarse sin problemas, siempre que se prevenga el riesgo de transmisión de enfermedades.

En el Asia, los desechos humanos permiten sostener parques en los alrededores de las ciudades. De igual manera, se pueden aprovechar éstos para acuicultura. En Calcuta, se cosechan 20 toneladas de pescado al día de esta manera. La basura se vuelve alimento.

En el mundo se requiere de cambios sustantivos en el manejo de la energía, la agricultura y otros sistemas. Ello no será posible sin un cambio correspondiente en los criterios económicos, sociales y éticos de nuestras sociedades.

El Producto Bruto Interno, por ejemplo, debe ser modificado como indicador de progreso. Al medir el flujo de bienes y servicios, el PBI subestima características esenciales de un desarrollo sostenido, como la durabilidad y protección de los recursos, y sobrevalúa valores falsos como la obsolescencia planificada y basura. Un mal par de zapatos construye más al PBI que uno que dure veinte años, siendo éste mucho más valioso. Se requiere de un medidor de cuánto exprime bien sus recursos una sociedad, más que uno que mida cuánto los mal usa. Mientras se mida el bienestar por el PBI, los obstáculos mentales al desarrollo sostenido serán significativos.

El desarrollo sostenido tampoco podrá lograrse sin una transferencia masiva del gasto militar para fines tales como el mejoramiento de la eficiencia energética, la conservación de la tierra, la siembra de árboles, la planificación familiar. Una de las paradojas del futuro será que al mismo tiempo que los estados busquen descentralizar regionalmente su poder, deberán establecer un grado sin precedentes de cooperación y coordinación internacional. Un desarrollo sustentable debe convertirse en una causa común de las naciones y debe constituirse en un valor universal como la democracia, la libertad para innovar empresarialmente, la aceptación de la diversidad y el respeto por los derechos humanos.

### Sobre el 5 de abril

---

Con anterioridad al 5 de abril, el Perú enfrentaba una situación sumamente grave. El Estado de Derecho hasta entonces vigente resultaba afectado negativamente por un Congreso ineficiente, un Poder Judicial lento y corrupto, una Contraloría General de la República y un Tribunal de Garantías Constitucionales (TGC) sometidos a mandatos partidarios subalternos y una salvaje subversión terrorista.

A pesar de estas limitaciones, el gobierno del presidente Alberto Fujimori había logrado éxitos relevantes en su programa de estabilización, en la reinserción del Perú en el sistema financiero internacional y en dictar las reformas normativas requeridas para asegurar una mejor asignación de recursos. La opinión pública había respaldado estos logros y recuperado la confianza en un futuro mejor.

Fue evidente entonces la intención de fuerzas opositoras al régimen por bloquear estos avances por motivos partidarios. Pero la reacción del gobierno demuestra, en la mejor de las hipótesis, una falta de experiencia de gobierno al haber convertido una crisis política en una crisis constitucional.

La quiebra del Estado de Derecho -o el manejo extraconstitucional de la crisis política, en la mejor hipótesis para el gobierno de Alberto Fujimori- ha devenido en la superposición de dos regímenes de facto, permite a Alan García mostrarse como un perseguido defensor de la ley y puede favorecer el accionar de los grupos subversivos terroristas.

¿Puede una quiebra del Estado de Derecho aumentar la eficiencia y reducir la corrupción del aparato estatal? Los filipinos creyeron que sí, cuando en 1972 apoyaron masivamente la dación de la ley marcial por el hasta entonces presidente Marcos. La experiencia demostró finalmente que los costos ocultos de una dictadura son mucho mayores que sus beneficios aparentes. Pocos esfuerzos, como el de Marcos, fueron más ambiciosos en el proceso de modernizar una sociedad tradicional para hacerla avanzar en la senda de la economía de mercado y la iniciativa individual. El Departamento de Estado de los EE.UU. que respaldó en su inicio este proceso, se terminó de convencer, en Filipinas como en Irán, que el progreso económico no puede venir de la mano del retroceso político.

¿Tiene viabilidad el actual programa económico bajo una dictadura? La respuesta, en el largo plazo, es que ninguna. Tal vez, el manejo de la caja fiscal durante el próximo mes sea más fácil de lidiar sin tener que recurrir a cansadoras sesiones ante comisiones parlamentarias para la aprobación de nuevos ingresos o el debate sobre la priorización de los gastos. Pero, en el largo plazo, lo que se requiere es confianza, inversión productiva, nuevas fuentes de trabajo, así como el respaldo internacional a una reestructuración efectiva de la deuda externa. Si bien el comportamiento irresponsable del Congreso y los fallos absurdos del TGC deshacían parte de la

confianza que el Poder Ejecutivo había construido lentamente y con no poco esfuerzo, la suspensión de la ayuda por parte de los EE.UU., lo que ello significa en las relaciones del Perú con los organismos multilaterales y el desconcierto institucional interno resultan incluso menos favorables para este posible futuro crecimiento.

La magnitud de la crisis política y la disposición del Poder Ejecutivo de enfrentarla directa, aunque en nuestra opinión, erradamente, ha generado un significativo respaldo de la opinión pública para este Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional, como él mismo se ha venido a llamar. Este apoyo popular, que es frágil y voluble, y el cronograma anunciado, que debe ser preciso y cumplirse a cabalidad, son las únicas bases de sustento para que, internacionalmente, el Perú no sea relegado al ostracismo que hoy sufre Haití.

De esta crisis tiene la culpa la oposición pero también el gobierno. Ha sido provocada por la falta de un mínimo de comunicación y sólo puede ser superada mediante el diálogo y la concertación. La dictablanda hoy vigente tiene muy poco tiempo para transformarse en un nuevo Estado de Derecho mejor al que previamente existía. Si no, la tendencia natural es que, como pasó en Filipinas, se convierta en dictadura y, frente a una subversión salvaje, el conflicto civil resultará difícil de contener.

En concordancia con su Código de Ética, APOYO se solidariza con todas las personas injustamente detenidas en estos días, solicita su inmediata liberación y se ratifica en que el respeto a la libertad de información resulta indispensable para alcanzar una pronta normalidad democrática y el progreso futuro de nuestra sociedad.

## En busca del derecho perdido

---

El Perú vive hoy una situación política inédita. La lamentable crisis constitucional originada por el cierre innecesario del Congreso y el cese de jueces supremos ha elevado la aprobación en la opinión pública a la gestión del presidente Alberto Fujimori de aproximadamente 60 a cerca de 80 por ciento. Este respaldo implícito permitió la ejecución de un golpe incruento y posibilita la vigencia de un grado relativo de respeto a la libertad individual, lo que origina que más de la mitad de la población afirme que el gobierno es aún democrático y no, como resulta de los hechos, dictatorial.

Cuando se pregunta a la población ¿Cuál sería su opinión sobre el gobierno de Alberto Fujimori si éste incumpliera con su ofrecimiento de retornar en doce meses a un régimen constitucional? Todavía 20 por ciento mantendría su aprobación. De otro lado, el respaldo al actuar de aquellos que desconocen la legitimidad del gobierno de Fujimori por haber violado la Constitución no alcanza, en el mejor de los casos, al 20 por ciento del total. Es decir, de cada cinco peruanos, hay uno que seguiría respaldando a Alberto Fujimori al margen de que restablezca o no un régimen constitucional; hay otro que está en contra de él o lo desconoce como presidente; y hay tres que le otorgan un apoyo relativo sujeto al cumplimiento de un cronograma para la vuelta a un Estado de Derecho.

La historia del mundo revela que -así como constituye una ley física el que los objetos sigan cayendo por la fuerza de la gravedad, a menos que una fuerza mayor la soporte- las dictaduras, como la que hoy gobierna al Perú, devienen en dictaduras a menos que exista una fuerza que las resista, revierta y reencauce hacia el restablecimiento de un Estado de Derecho. Por ello, la principal tarea de la hora actual es darle curso, sentido y expresión a una demanda social que, en el fondo, desea una democracia más eficaz, reformas que permitan combatir con eficacia la subversión y la corrupción.

Juzgando exclusivamente por la ética de los principios, el gobierno ha cometido una falta grave que, siguiendo la letra de la Constitución, merecería su desconocimiento. Evaluado por la ética de la responsabilidad, sin embargo, propiciar tal medida, en contra de la opinión mayoritaria de la población y ante la grave crisis social que vive hoy el Perú, constituye una opción utópica. La política es, finalmente, el arte de lo posible.

¿Por qué se preguntan muchos, Alberto Fujimori aumenta en 20 puntos porcentuales la aprobación de su gestión cuando patea el tablero de la institucionalidad democrática formal? ¿Será el Perú una sociedad con escasa vocación democrática? Resulta injusto plantear esta hipótesis. Tres de cada cuatro peruanos considera la democracia constitucional el mejor-o, como dijo Churchill, el menos malo- de los sistemas de gobierno. Pero el diagnóstico planteado por el gobierno en los considerandos de su decisión de quebrara el orden constitucional sí resultaba válido. La crisis

peruana se refleja en que sólo hay tres instituciones nacionales que cuentan hoy con la confianza mayoritaria de la población: la Iglesia, 80 por ciento; las Fuerzas Armadas, 55 por ciento; y la prensa, 50 por ciento. En los últimos doce meses, el grado de credibilidad del Congreso había caído a 19 por ciento, el del Poder Judicial a 16 por ciento, el de los partidos políticos a 13 por ciento.

Sin la gravedad registrada en el Perú, este fenómeno constituye un síntoma común a varias sociedades. La posibilidad de una comunicación instantánea gracias al desarrollo de la tecnología ha reducido la importancia de los Parlamentos y los partidos políticos, incluso en naciones desarrolladas. En Gran Bretaña y Alemania, ellos mantienen una credibilidad de 50 a 60 por ciento; en Francia de 45 por ciento; en Italia y España de 30 por ciento. En los EE.UU., la recepción popular a la candidatura de Ross Perot refleja, de por sí, una crisis de los partidos políticos tradicionales. En vísperas del 5 de abril, el porcentaje de los peruanos que simpatizaban con algún partido político apenas alcanzaba el 14 por ciento. Este desgaste le ha permitido al gobierno mantener las elecciones municipales en su cronograma político futuro.

La inviabilidad de una solución constitucional obliga a un diálogo que permita superar esta crisis política con una fórmula cuyas consecuencias finales resulten similares o mejores a la salida constitucional imposible. Tomando como base el cronograma propuesto por el gobierno, la solución final debe ofrecer a la comunidad de naciones señales tanto de una apertura con vocación consensual como de una estricta seriedad en el cumplimiento final de sus etapas.

¿Por qué un presidente con 80 por ciento de aprobación a su gestión debería conceder en un acuerdo de este tipo? La respuesta es: por su propia conveniencia. El riesgo de un ostracismo y de una creciente oposición interna resultarían muy peligrosos en un momento como el actual de creciente interdependencia global en el mundo y cuando se requiere de comprensión externa y solidaridad para resolver los agudos problemas económicos y sociales que sufre el Perú.

## Diferencias culturales

---

Francis Fukuyama escribió en 1989 un artículo denominado: “El fin de la historia? , que desencadenó un verdadero revuelto en la comunidad internacional. El término lo tomó prestado de Hegel, quien ya en 1806 la había declarado como concluida. “Nos encontramos -escribe Fukuyama- no sólo ante el fin de la Guerra Fría... sino ante el fin de la historia como tal; es decir, el punto final de la evolución ideológica y la aceptación universal de la democracia liberal occidental como la forma concluyente de gobierno humano”.

El rechazo masivo y contundente que recibió el golpe del 5 de abril en el exterior se debe, en buena medida, a esta generalizada percepción entre la comunidad internacional sobre algunos criterios básicos que deben regir la organización política de una sociedad.

Fukuyama aclaró que su análisis se restringía a los países industrializados y excluía la realidad de países-problema como el Perú, donde muchos aún no gozan de los beneficios de participar en una democracia plena, ni de las oportunidades de mercados verdaderamente libres, y donde existe todavía la amenaza del narcotráfico y el riesgo de una subversión comunista.

Fukuyama provocó a los intelectuales y políticos al afirmar que el “fin de la historia” marcaba el inicio de una era triste y aburrida. La lucha por las ideas, contra el comunismo o el fascismo - afirma el autor-, movilizó la inteligencia, el coraje, la imaginación y el idealismo de miles de individuos. En cambio, los problemas principales del mundo desarrollados en el futuro-económicos, tecnológicos, ambientales- parecen aburridos en comparación. La preocupación principal futura en la vida cotidiana de un ciudadano promedio en la sociedad post-industrial pasaría a ser que película escoger en su video-club para ver en la noche.

Los países problemas como el Perú, por cierto, no son en nada aburridos. Las tareas difíciles que tienen por delante, a fin de lograr superar su atraso y combatir la pobreza existente, demandarán igual o más energía física y espiritual que la que fue requerida para lograr los avances “históricos” de la civilización industrial.

Pero una razón adicional por la cual el futuro no será tan aburrida como teme Fukuyama, incluso en los países desarrollados, es que la tesis que plantea asume una premisa false: que Norteamérica, Europa y Japón (con los países del Sudeste Asiático) constituyen ya un conjunto homogéneo, que comparten una cultura de democracia, capitalismo y sociedad de consumo.

La verdad es bastante más compleja. Derrotado el comunismo en la URSS -sistema que sí difería sustantivamente de los existentes en los países industrializados- las diferencias entre Norteamérica, Europa y Japón empiezan a delinearse de manera más nítida. Y es indudable que constituyen sistemas distintos de organización social que, al competir entre sí, reclaman una primicia para sus respectivas escalas de valores.

El sistema anglo-americano tiene sus raíces culturales en Adam Smith y la revolución industrial inglesa. El énfasis de su base filosófica está en asegurar la máxima libertad individual, la mínima intervención del gobierno en la actividad privada, el comercio internacional sin trabas, mercados totalmente libres, y una ética empresarial que promueve el riesgo entre sus individuos, a cambio de una elevada retribución para los vencedores. El sistema filosófico anglo-americano rechaza el planeamiento estatal por considerarlo limitante de la libertad individual y del mercado libre.

El sistema japonés, por su parte, el cual ha influido también en los países del Sudeste Asiático, se alimenta de otras raíces, las enseñanzas de Confucio, los rezagos del feudalismo y la revolución Meiji, el industrialismo que el Gral. Mac Arthur puso en práctica en el Japón de la Post-Guerra. La libertad individual y de mercado son, en este caso, subsidiarios de otras metas colectivas de más largo plazo. El gobierno promueve con criterio mercantilista las exportaciones y se practica un despotismo benevolente, político y económico, que afirma el desarrollo de unidades colectivas - grandes corporaciones y la nación misma- aún a costa de sacrificar libertad y los intereses inmediatos de sus individuos. Posiblemente el presidente Fujimori se sentiría más a gusto con este modelo de organización política para el Perú.

Europa, por su parte, es heredera de la racionalidad griega, la ley romana y el espíritu cristiano. Su organización política futura -sacudida por el reciente rechazo del pueblo danés al tratado de Maastricht- se irá perfilando en función del liderazgo que sobre ella asume Alemania, nación marcada por la evolución histórica de la social democracia y la dirección centralizada de su esfuerzo de reconstrucción. El sistema europeo posiblemente resulte uno intermedio entre los dos descritos previamente. Aunque la libertad individual y de mercado resulta amplia en muchas áreas, el modelo alemán, como el francés incluyen también dosis importantes de gerencia macroeconómica e intervención estatal planteadas en función y objetivos a largo plazo. Menos colectivistas que el sistema japonés, se distinguen del sistema anglo-norteamericano en que favorece una ética de menor desigualdad, propensa a ofrecer una defensa ante el riesgo para sus individuos y empresarios.

¿Algunos de estos modelos potenciarían mejor que los otros la idiosincrasia del peruano? Esta constituyente una buena pregunta para la agenda del próximo Congreso constituyente.

## La afirmación democrática en este siglo

---

A comienzos del siglo XX, no era la democracia un concepto que las mayorías entendieran bien. Muchos pueblos, por ello, se mostraban indiferentes ante ella. Más aún, el sistema no era deseado por algunos que sí entendían su significado cabal. Y pocos creían probable que el ejercicio de la democracia pudiera generalizarse en sociedades de culturas y tradiciones muy diversas y que se encontraban en estados de desarrollo tan disímiles.

El siglo está por cerrarse en el almanaque de la historia -en el campo de las ideas puede haber concluido ya- y una característica del momento actual es que los componentes básicos de la democracia son ya entendidos por una gran mayoría. Y son pocos los que no la desean como sistema político, o los que creen que resulta inconveniente para el funcionamiento eficaz de sus respectivas sociedades.

Si bien la idea de la democracia como sistema de gobierno es antigua, su evolución ha sido discontinua en el tiempo. Los primeros gobiernos democráticos fueron ensayados en Grecia, durante los siglos VI y V antes de Cristo. Duraron poco. Fueron golpeados por enemigos externos o, más frecuentemente, por revoluciones de oligarcas que reclamaron para sí un derecho natural a gobernar como aristócratas. En época de Aristóteles, siglo IV antes de Cristo, la democracia era recordada como un experimento iluso y frustrado.

Roma no fue una democracia en el sentido griego del término. En ella se gozó de relativa libertad política, pero no era el pueblo el que elegía al gobierno. Posteriormente, en los siglos XI y XII, las oligarquías de algunas comunas italianas flirtearon con ideas democráticas en un marco de una amplia libertad económica. Pero recién fue durante los siglos VXII y XVIII que sucesivamente revoluciones políticas dieron paso al sistema que ahora conocemos como democracia.

¿Cuáles son los elementos esenciales de este sistema de gobierno? Al derrocar en 1689 al Rey Jacobo II y reemplazarlo por un monarca que sí aceptó responder de sus acciones ante un Parlamento, asamblea donde estaban representados los gobernados, los ingleses establecieron una primera y fundamental característica: el respeto a la ley por encima de la voluntad del monarca.

La siguiente pregunta resulta evidente: ¿Quiénes pueden hacer la ley? ¿los nobles, los terratenientes, los que pagan sus impuestos, sólo ellos? En el proceso de este debate, Thomas Jefferson inició uno de los escritos que sirvieron de base a la independencia de los EE.UU. con la frase: "Todos los hombres han sido creados iguales...". Puede ser que, en la Virginia de 1776, se entendiera por "hombres" a los "caballeros sureños". Pero el "Todos" inicial quedó impreso en el papel, y en futuro cada quien interpretaría el término a su mejor entender. Así, años después, el preámbulo de la Constitución de los EE.UU. empezaba afirmando "Nosotros, el Pueblo de los Estados Unidos,..." No eran entonces los estados, ni sus clases dirigentes, los que se integraban como tales. El mandato venía finalmente del Pueblo, con mayúscula.



En el mismo EE.UU., una guerra civil estalló tres cuartos de siglo más tarde, originada en parte como consecuencia de diferentes interpretaciones sobre el significado real del concepto “Pueblo”. En 1863, el presidente Abraham Lincoln pronunció un discurso de apenas tres minutos en la dedicatoria de un cementerio militar en Gettysburg, Pennsylvania, donde pocos meses antes había tenido lugar una de las batallas más sangrientas de esta guerra.

Nuestros antepasados -dijo Lincoln en esa oportunidad- crearon en este continente una nueva nación, fundada bajo la premisa de que todos los hombres han sido creados iguales. Ahora -continuó- estamos envueltos en una guerra civil que constituye una dura prueba respecto de que si una nación, así constituida, puede durar por algo más que un corto tiempo. En el pasado, naciones basadas en esta premisa fueron destruidas, ya sea por un conflicto externo o interno. No debemos permitir que eso suceda con nuestro país.

En vez de ello -concluyó- en honor de los valientes que pelearon en esta tierra, y especialmente de aquéllos que aquí murieron, debemos dedicar nuestros esfuerzos a la tarea que ellos dejaron inconclusa con su muerte. Esta tarea implica el garantizar la sobrevivencia de la Tierra de “un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”.

No hay frase más rotunda ni famosa en la historia de las ideas en los EE.UU. Un “gobierno del pueblo” implica uno que incluya en sus alcances a toda la población, sin exclusión de grupo alguno. Gobierno por el pueblo implica la potestad de éste para escoger mandatarios y representantes que dicten y hagan cumplir las leyes. Gobierno para el pueblo quiere decir que uno que se preocupe del bienestar en general y no que esté al servicio de unos cuantos privilegiados, menos aún de aquéllos que gobiernan en su nombre.

Puede afirmarse que la esencia de la democracia moderna se basa en estos tres conceptos: un gobierno que se base en leyes antes que en la voluntad de personas; luego, el principio -hoy recogido en todas las constituciones del mundo- por el cual se reconoce que todos los hombres han sido creados iguales; y, por último, los elementos que precisa Lincoln como calificadores de cuan democrático es un sistema de gobierno, principios que son más fáciles de cumplir en comunidades de pequeña escala.

Las democracias, como las entendemos hoy, recién se afirman como sistema de gobierno en el siglo XX. En los EE.UU. incluso, considerada la nación que más avanzó en este proceso durante el siglo XIX, más de la mitad de su población adulta no podía votar en 1901. Las mujeres, los negros, y no pocos entre los norteamericanos más pobres, seguían siendo patrocinados por otros, “para su propio bien”.

Mas allá de los anarquistas, que se resisten a cualquier poder, y de los que la consideran un proyecto imposible, la democracia ha enfrentado, durante el presente siglo, amenazas provenientes de varios frentes: el comunismo, el totalitarismo la teocracia, la excesiva desigualdad y el racismo.

La idea comunista resultó por un tiempo estimulante para muchos. El proletariado estaba entonces conformado por los más desposeídos de la sociedad preindustrial. Se argumentaba que si dicha clase lograba controlar el poder económico del estado, la distribución social de los beneficios podría mejorar significativamente. Si bien se reconocía que el poder requeriría ser tiránico por un tiempo, se consideraba que ello era un costo pasajero y necesario para el beneficio final de todos. En su oportunidad, la tiranía se disolvería en una utopía ilusa del paraíso terrenal.

Cuando los kulaks procuraron mantener la propiedad de sus pequeñas tierras, a fin de vender lo que producían en el mercado, Stalin ordenó “liquidarlos como clase”. Entre 1929 y 1934, más de 20 millones de campesinos rusos fueron asesinados. Una cantidad similar marchó al exilio en Siberia. En las décadas siguientes, muchos soviéticos pasaron hambre porque el proceso de colectivización estatal destruyó la inventiva y la productividad en la agricultura rusa.

Si el comunismo implicaba en teoría una dictadura temporal del proletariado que daría paso, después, a una utopía cuasi anárquica; en la práctica ha resultado en tiranías brutales de minorías burocráticas que después se resisten a someter sus decisiones a un debate más abierto y libre.

Entre 1989 y 1991, el comunismo colapsó en la URSS y Europa del Este. El mundo observó con asombro como estados que no sólo dominaban a su ejército y policía, a sus sistemas judiciales y censores de opinión, sino también todos los demás aspectos de la vida económica de sus sociedades, terminaron derritiéndose, como muñecos de nieve, ante el calor proveniente de una mayor demanda por libertad en sus pueblos. Aunque haya gobiernos y grupos políticos que aún los reivindican, el comunismo ha dejado de ser ya una opción válida en el debate contemporáneo de las ideas.

A diferencia del comunismo que, al menos en teoría, perseguía un ideal de justicia; el totalitarismo basó su atracción en una acumulación de poder que permitía convalidar un mal llamado “honor nacional”.

La honra, en el fondo, tiene poco que ver con el poder. Una nación, como una persona, se llena de honor cuando es justa y se deshonor cuando es injusta. Por su parte, una nación poderosa puede ser temida, y tal vez envidiada, por naciones más débiles. Pero el honor no es lo mismo que el miedo o la envidia.

Esta diferencia, sin embargo, a veces se confunde y en otras es olvidada. A la falta de un sistema legal internacional eficaz, que vuelva civilizado el manejo de las discrepancias entre los estados, el poder puede disfrazarse muchas veces de justicia. En la jungla natural que constituye con frecuencia la relación entre naciones, el poder y la riqueza pueden contribuir a la fama, la que constituye, muchas veces, una imitación barata del honor.

A través de los siglos, muchas naciones han estado dispuestas a comprar fama. Una manera ha sido a través del poder militar y la disposición a conquistar o dominar naciones más débiles.

Cuando el gobierno de una nación poderosa es democrático, sus individuos pueden no estar todos dispuestos a aceptar la prepotencia que su gobierno pueda querer ejercer eventualmente en su relación con otras naciones. En el siglo XX, los EE.UU. han actuado muchas veces contra otras naciones más débiles con una ostentación y abuso que posiblemente no permitirían en el trato interno que algunos de sus ciudadanos poderosos podrían querer tener con algunos de entre los más débiles. Cuando este maltrato internacional alcanza un límite y el sistema de gobierno en la nación poderosa es democrático, suficientes ciudadanos pueden objetar la acción de su gobierno, obligándolo a una revisión en su actuar. Este mecanismo de autocontrol no existe en los países con gobiernos totalitarios.

Fue el control absoluto por el estado de la sociedad y sus instituciones lo que generó el totalitarismo en Europa, primero en Italia y luego en Alemania. En el caso de este país, ello en parte

se debió al desastre, tanto social como económico, generado por la derrota de 1918. Los países triunfantes de la Primera Guerra Mundial exigieron y lograron reparaciones excesivas. Como consecuencia de ello, la economía alemana colapsó a fines de los años veinte. Ello generó el caldo de cultivo para que un personaje como Hitler pudiera apoderar de su nación, con el argumento de recuperar el “honor nacional”.

Hitler exigió una condición a Alemania para devolverla a la tierra prometida: que el estado tuviera control total sobre sus individuos y organizaciones. Nuestra situación -planteó Hitler- es terrible, obliga a medidas extraordinarias. Que cada alemán, que cada empresa, club, organización o sociedad, trabaje junto al estado para salvar a Alemania. No puede haber una sola excepción. Caso contrario, fracasaremos. Juntos, nadie nos podrá detener Triunfaremos.

Alemania, que había funcionado como un estado democrático después de 1918, se le rindió. Hitler acusó a la democracia de ineficiente. Bajo la etiqueta confusa de nacional-socialismo, Hitler galvanizó toda la energía germana en un solo esfuerzo, convirtió a la nación en una espada. Como antes Robespierre y Napoleón, que no fueron tan locos como él, Hitler empezó a hablar y actuar “en nombre de Alemania”.

El ataque de Alemania a la URSS en junio de 1941 le dio a Stalin la última razón para consolidar el totalitarismo en la Unión Soviética. Aunque es cierto que la Segunda Guerra Mundial convirtió a todos los estados europeos en una especie de máquinas totalitarias, a su término la mayoría de los países revirtió a sistemas democráticos. En la URSS de Stalin se mantuvo la maquinaria estatal opresora.

Una acusación antigua de los totalitarios contra la democracia plantea que un sistema ineficiente. Que el despotismo, aunque resulta menos justo o libre, es más eficaz. Esta acusación ha demostrado con el tiempo ser falsa. La mayoría de los miembros de un estado no democrático no tiene, salvo en momentos de emergencia extrema, cuando sus vidas pueden estar en peligro si el estado se derrumba, un interés de largo plazo en el éxito del totalitarismo. Este sistema encubre el error, mientras que la democracia permite aprender de la experiencia acumulada.

Por su parte, la teocracia -el gobierno de Dios- fue un experimento probado en la Europa medieval. Resultó un fracaso, como después en otros lugares, porque la voluntad de Dios tiene que ser finalmente interpretada por hombres mortales y falibles. La teocracia, en última instancia, no resulta mejor que los hombres que asumen el gobierno en nombre de Dios. En la práctica, estos gobernantes resultan iguales que otros, cuando no peores.

A diferencia del Cristianismo, el Islam no ha renunciado al idea teocrático. Todas las naciones cristianas tienen hoy constituciones que establecen los linderos entre la religión y el estado. El mandato divino puede ser considerado como una guía para el comportamiento individual, pero sus intérpretes no intervienen en los asuntos del estado. Algunas naciones islámicas, no todas, se han resistido a esta separación de roles y buscan el concurso de representantes de Dios que sean intérpretes legítimos de su voluntad.

Un gobernante como Jomeini resultó un déspota absoluto en Irán. En su guerra contra Irak envió más de un millón de soldados, muchos de ellos adolescentes, a una muerte suicida. Estos jóvenes morían por Dios, decía el Ayatolah, y la gente creía.

Para la teocracia, la democracia constituye un verdadero anatema. Un tirano religioso no puede permitir que sus súbditos sean tentados por las ideas democráticas. Tiene que afirmar, por tanto, que ellas son el invento de Satán. El diálogo libre disuelve indefectiblemente cualquier teocracia. Jomeini pudo imponer una tiranía absoluta sobre sus seguidores porque cualquiera que se hubiera permitido hacer la menor referencia de la libertad en el manejo del estado era ejecutado en el nombre de Dios. Pero históricamente resulta casi imposible el sostenimiento continuo de una teocracia, salvo en condiciones como las que se dieron en Irán durante 1979. No parecería, por tanto, que la teocracia pueda constituir en el futuro una amenaza significativa a la democracia como sistema de gobierno.

Más preocupante resulta, en cambio, la creciente desigualdad entre los ciudadanos de algunas sociedades pobres. Una igualdad política formal no satisface plenamente las demandas de justicia del ser humano. Si bien la igualdad utópica del comunismo es una quimera, la igualdad de oportunidades, o lo que por ella se interprete, puede constituir en el futuro un ideal por el cual muchos podrían estar dispuestos a luchar y morir. Muchas sociedades, entre ellas el Perú, no ofrece aún un mínimo de bienestar a sus mayorías, lo que constituye una causa de una creciente tensión política y de amenaza a la democracia.

El otro peligro lo constituye el racismo, una de las enfermedades más graves de la especie humana, a la que es incluso inmune la mayoría de las especies del reino animal. Hasta el presente siglo, la gran mayoría de las personas consideraba que la raza humana no era una sola comunidad de almas y seres iguales en esencia, sino una multitud dividida entre buenos y malos, seres superiores e inferiores, razas escogidas y malditas. Nadie menos que Aristóteles llegó a postular la noción de que algunos seres han nacido para mandar y otros -"esclavos naturales" los llamó- para obedecer. Uno de los más grandes avances del siglo XX lo constituye el hecho que hoy día muy pocos se atreverían a repetir enunciado tan poco democrático, aunque puede ser, como se deduce de acontecimientos recientes en Europa, que muchos lo sientan. En cualquier caso, el progreso moral de la humanidad se expresa en que el siglo termina con un consenso amplio respecto a la frase de Jefferson: Todos los seres humanos han sido creados iguales y en posesión de ciertos derechos inalienables. De allí han sido creados igual y en posesión de ciertos derechos inalienables. De allí se deduce que puedan gobernarse a sí mismos, en democracia, aunque unas sociedades hayan aprendido a hacerlo mejor que otras.

¿Sobrevivirá la democracia en el siglo XXI? ¿Qué pasará cuando -como pronostica Charles van Doren en Una Historia del Conocimiento- las computadoras inteligentes puedan un día asociarse como una minoría oprimida y demanden, por ejemplo, que los seres humanos no tengan el derecho arbitrario a apagarlas cada vez que quieran? ¿Qué sucederá si, por ejemplo, la ciencia le otorga a algunos la manera de que sus hijos nazcan biológicamente superiores a los demás? ¿Qué ocurriría si la genética termina convirtiendo en superhombres a sólo una parte de la raza humana? ¿Volverá la amenaza del totalitarismo? Nadie lo sabe. Aunque como en el caso de las ciudades griegas, el principal peligro para la democracia en el futuro provendrá probablemente de un resurgimiento de las ideas oligárquicas, que justifiquen el gobierno por unos pocos basados en el argumento de que, por ser los mejores, tienen el derecho a gobernar en beneficio incluso de los demás. El avance logrado por la democracia en este siglo no constituye una garantía de que el sistema vaya a ampliarse y profundizarse en el siglo XXI. Habrá que estar siempre alertas para su defensa y modernización.